

Este libro propone un recorrido por la historia de la Argentina a partir de un núcleo de problemas que se imbrican tanto en el campo de la política como en el de las experiencias sociales. Se trata de echar luz sobre algunos de los acontecimientos más relevantes del siglo XX para conocerlos pero, fundamentalmente, para desarrollar un análisis crítico sobre ellos que enriquezca y complejice la mirada sobre el presente. Por eso, el relato histórico que aquí se presenta no pretende ser ni total ni totalizante, no busca dar cuenta ni de todos los procesos ni de todos los acontecimientos. Tampoco aspira a que las explicaciones ofrecidas funcionen como respuestas únicas o absolutas a las preguntas planteadas. Por el contrario, y aún reconociendo omisiones y simplificaciones, se ha optado por un tipo de análisis que, focalizando en algunas cuestiones, permita luego discutirlos y revisarlos para formular nuevas preguntas y nuevas reflexiones. En ese sentido, el relato propuesto y la selección de temas y problemas considerados pretenden ser estímulos para el análisis, la discusión y la crítica.

PROBLEMAS DE HISTORIA ARGENTINA 1912-2011

■ Carolina González Velasco COORDINADORA



UNIVERSIDAD NACIONAL ARTURO JAURETCHE

ISBN 978-987-3679-04-9



9 789873 1679049

**PROBLEMAS DE HISTORIA ARGENTINA
1912-2011**

Problemas de historia argentina 1912-2011 /

Juan Fernández ... [et.al.] ; con colaboración de Mariela Marini ... [et.al.] ;
coordinado por Carolina González Velasco. - 2a ed. - Florencio Varela : Universidad
Nacional Arturo Jauretche, 2014.

266 p. ; 24x17 cm.

ISBN 978-987-3679-04-9

1. Manual. 2. Historia Argentina. I. Fernández, Juan II. Marini, Mariela, colab. III.
González Velasco, Carolina, coord.

Fecha de catalogación: 26/02/2014

Universidad Nacional Arturo Jauretche

Rector: **Lic. Ernesto Villanueva**

Director Editorial: Lic. Alejandro Mezzadri

Directora del Instituto de Estudios Iniciales: Dra. Carolina González Velasco

Problemas de Historia Argentina 1912-2011

Diseño interior: Cristina Amado - Diego M. Fulloni - María Sofía Guilera - Noelia Romero
Mendoza

Diseño de tapa: Noelia Romero Mendoza

Realización Editorial:

Universidad Nacional Arturo Jauretche

Av. Calchaquí 6200 - Florencio Varela

Tel.: 011 4275 6175

Impreso en la Argentina

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su almacenamiento
en un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio
electrónico, mecánico, fotocopias u otro medio, sin la previa autorización del editor.

PROBLEMAS DE HISTORIA ARGENTINA 1912-2011

INSTITUTO DE ESTUDIOS INICIALES

UNIVERSIDAD NACIONAL ARTURO JAURETCHE

Coordinadora: Carolina González Velasco

Equipo docente para la elaboración del libro

Juan Fernández, Gabriela Gómez, Carolina González Velasco, Karin Grammatico,
Mariana Robles, Mauricio Schuttenberg

Agradecemos los aportes realizados para la edición 2014 de los docentes de
la materia PHA: Mariela Marini, Jorge Levoratti, Laura Prado Acosta, Karin
Grammatico, Daniel Sazbón, Osvaldo Rodríguez, Diego Nemece, Juliana Cedro

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	11
---------------------------	----

CAPÍTULO 1: La experiencia democrática: participación, movilidad y conflicto social. (1912-1930)

I. El orden conservador	15
II. Las presidencias radicales: Yrigoyen- Alvear- Yrigoyen.....	22
III. La economía y la sociedad entre la primera posguerra y la crisis del 30.....	33
IV. El mundo de la cultura	38
Selección de fuentes y actividades sugeridas	41
Bibliografía	45

CAPÍTULO 2: Incertidumbre política y redefinición del Estado: entre la crisis institucional y las transformaciones sociales. (1930-1943)

I. Golpe o revolución: una nueva etapa política.....	49
II. La crisis económica y el nuevo rol del Estado	57
III. La sociedad de los años 30: migraciones y urbanización.....	64
IV. El mundo de la cultura en los años 30	68
V. Contexto internacional	73
Selección de fuentes y actividades sugeridas.....	75
Bibliografía.....	83

CAPÍTULO 3: Los años peronistas: entre los conflictos políticos y la construcción de un estado de bienestar social.

I. La emergencia del peronismo: 1943-1946	87
II. La primera presidencia de Perón: 1946-1952	93
III. La segunda presidencia de Perón: 1952-1955	104
IV. El bienestar social.....	109
Selección de fuentes y actividades sugeridas	114
Bibliografía	119

CAPÍTULO 4: Golpes militares y salidas democráticas: movilización y resistencia frente al autoritarismo. (1955-1976)

I. 1955-1966: Bajo el signo de la Revolución “Libertadora”: represión, resistencia y las fallidas democracias de Frondizi e Illia.....	123
II. 1966-1973: de la Revolución Argentina al regreso del peronismo al gobierno.....	138
III. 1973-1976: el tercer gobierno peronista.....	146
Selección de fuentes y actividades sugeridas	155
Bibliografía.....	164

CAPÍTULO 5: Dictadura y terrorismo de Estado. (1976-1983)

I. Crisis y golpe de Estado.....	167
II. El plan económico	171
III. Las resistencias de la sociedad	182
IV. El gobierno de Galtieri, Malvinas y el final de la dictadura.....	185
Selección de fuentes y actividades sugeridas	190
Bibliografía	193

CAPÍTULO 6: De la recuperación de la democracia, al imperio del neoliberalismo y la crisis del 2001 (1983-2001)

I. De ilusiones y desencantos: el gobierno de Alfonsín, 1983-1989	196
II. El neoliberalismo ataca de nuevo: el gobierno de Menem, 1989-1999	206

III. Convertibilidad, debilidad política y estallido social:

la presidencia de Fernando De la Rúa, 1999-2001	216
IV. Argentina en retazos, 2001-2003	220
Selección de fuentes y actividades sugeridas	222
Bibliografía	225

CAPÍTULO 7: La Argentina reciente. transformaciones políticas, económicas y sociales en el período 2003-2011.

I. De la crisis de 2001 a la presidencia de Kirchner.....	228
II. La presidencia de Kirchner. La recuperación del rol de Estado	230
III. La presidencia de Cristina Fernández de Kirchner	240
IV. Sobre el contexto internacional: la búsqueda de autonomía.....	246
V. A manera de reflexión final	248
Selección de fuentes y actividades.....	249
Bibliografía.....	255

PRESENTACIÓN

Este libro propone un recorrido por la historia de la Argentina a partir de un núcleo de problemas que se imbrican tanto en el campo de la política como en el de las experiencias sociales. Se trata de echar luz sobre algunos de los acontecimientos más relevantes del siglo XX para conocerlos pero, fundamentalmente, para desarrollar un análisis crítico sobre ellos que enriquezca y complejice la mirada sobre el presente.

Cada capítulo focaliza en un período particular, desarrolla un relato general sobre la etapa en cuestión y analiza algunos de los problemas más relevantes. A su vez, busca plantear el proceso histórico en relación a las experiencias de los diversos actores sociales, resaltando los conflictos y las tensiones que marcan la dinámica del cambio. Los cortes que organizan cada período remiten a ciertos acontecimientos políticos y/o sociales cuya relevancia justifica considerarlos como puntos de llegada y de partida. No obstante, en cada capítulo también se retoman los problemas planteados en el apartado anterior para mostrar así cómo operan y se articulan las continuidades y las rupturas durante el devenir de la historia. En el último capítulo, referido al período 2003-2011, se ofrecen algunos ejes para el análisis de la realidad contemporánea.

El relato de la historia argentina del siglo XX que aquí se presenta no pretende ser ni total ni totalizante, no busca dar cuenta ni de todos los procesos ni de todos los acontecimientos. Tampoco aspira a que las explicaciones ofrecidas funcionen como respuestas únicas o absolutas a las preguntas planteadas. Por el contrario, y aun reconociendo omisiones y simplificaciones, se ha optado por organizar un texto que, focalizando en algunas cuestiones, permita luego discutir las y revisarlas para formular nuevas preguntas y nuevos análisis. En ese sentido, el relato propuesto y la selección de temas y problemas considerados pretenden ser estímulos para la reflexión, la discusión y la crítica.

Sobre este libro:

El presente libro ha sido realizado especialmente para el curso de Problemas de Historia Argentina, del Ciclo Inicial de la Universidad Arturo Jauretche. En ese sentido, es la herramienta principal, aunque no la única, con la que se trabajará en las clases. Cada capítulo está integrado por un texto que focaliza en un período en particular y analiza uno o varios problemas fundamentales de la etapa en cuestión, una selección de fuentes del período con actividades sugeridas y un listado de bibliografía general. La presente edición 2014 contiene modificaciones en relación a las anteriores ediciones.

CAPÍTULO 1: *La experiencia democrática: participación, movilidad y conflicto social. 1912-1930*

El período considerado en este capítulo se inicia con la sanción de la Ley Sáenz Peña y cierra con su suspensión a partir de la intervención militar en 1930. La implementación de esta ley electoral significó la reorganización de la vida política nacional: nuevas reglas de participación política, de organización institucional, de significados vinculados a la representación, la legitimidad y el ejercicio del poder. No obstante, también implicó reacciones en contra y cuestionamientos por parte de diversos sectores sociales: en algunos casos eran resistencias ideológicas; en otros, impugnaciones prácticas en tanto las nuevas reglas no los favorecían.

En 1916, bajo la vigencia de la nueva ley electoral, la Unión Cívica Radical llegó a la presidencia de la Nación: Hipólito Yrigoyen gobernó entre 1916 y 1922; en ese año fue sucedido por Marcelo T. de Alvear, quien estuvo en la presidencia hasta 1928 cuando Yrigoyen ganó nuevamente las elecciones e inició un segundo mandato que concluyó abruptamente a causa del golpe militar de 1930. Entre 1916 y 1930, los gobiernos radicales debieron afrontar varios desafíos: dejar de ser un partido de oposición para asumir la gestión de gobierno y a su vez continuar ganando elecciones. A su vez, la vida política siguió cruzada por conflictos y tensiones que provocaron divisiones y reagrupamiento de los partidos.

Por otro lado, y más allá de los acontecimientos vinculados a la gestión y la vida partidaria, toda la cultura política de la sociedad, es decir, las diversas prácticas y sentidos que componen la cultura, se vio transformada: las elecciones, la organización y funcionamiento de los partidos, sus discursos y sus prácticas para conseguir afiliados y simpatizantes, la relación entre los representantes elegidos y quienes eran los ciudadanos electores, los debates públicos que se daban en los periódicos y tantos otros ámbitos de sociabilidad, etcétera.

Si bien se trató de una etapa relativamente positiva desde lo económico, también fue un período cruzado por ciclos ascendentes y descendentes que provocaron conflictos sociales de magnitud. La situación internacional, marcada por la Primera

Guerra Mundial, la Revolución Rusa, el posicionamiento de Estados Unidos como rector de las naciones y la reorganización de las relaciones entre las naciones, también condicionó los ciclos económicos y de conflicto social.

A su vez, esta dinámica política y económica se desplegaba en un contexto de transformaciones sociales diversas: los procesos de inmigración, que habían caracterizado a las décadas anteriores, adquirieron un ritmo más lento y modificaron el perfil de la sociedad; fueron años en los que la tendencia a la movilidad se combinó con la emergencia del conflicto social. En el espacio de las ciudades se configuró una cultura urbana particular en la cual diversas experiencias y expresiones dieron cuenta de esos procesos de cambio y tensión que se vivían.

El capítulo analiza los procesos políticos más destacados del período y busca ponerlos en relación con las transformaciones de la sociedad y la economía. Se organiza en cuatro apartados: los dos primeros dan cuenta del escenario político; luego se revisan algunas cuestiones económicas y sociales y finalmente se pone foco en el mundo de la cultura.



Hipólito Yrigoyen

I- EL ORDEN CONSERVADOR

La política del 80 al Centenario

A comienzos de 1910, la Argentina se aprestaba a festejar el Primer Centenario: visitas ilustres, exposiciones, concursos, desfiles y homenajes se multiplicaban en las calles de las principales ciudades del país. En las escuelas, los rituales patrios se ocupaban de repetir una y otra vez las grandezas de los “héroes de mayo”. En Buenos Aires se arreglaban paseos y calles, se inauguraban edificios y monumentos y se realizaban funciones de gala en los principales teatros. En medio de esa lujosa agenda, sin embargo, las huelgas obreras y las movilizaciones se multiplicaron. Se decretó el estado de sitio y se reprimieron algunas manifestaciones, con el argumento de ofrecer condiciones de seguridad en los eventos festivos.

Con matices, las pinceladas anteriores reconstruyen parte de las imágenes que sobre la Argentina de 1910 podrían evocarse. Como fuere, lo cierto es que hacia 1910 el país experimentaba ambas situaciones: la fastuosidad y al mismo tiempo la conflictividad social y política. En verdad, lo segundo era consecuencia también de lo primero.

Al menos desde la sanción de la Constitución en 1853 y a medida que el estado nacional se iba construyendo, el sistema político también definía sus particulares modos de funcionamiento. Por un lado, las leyes pautaban una serie de derechos civiles pero, al mismo tiempo, limitaban bastante el otorgamiento y ejercicio de los derechos políticos, ya sea a través de restricciones específicas, explícitas en las propias leyes, como a través de la práctica misma. Por ejemplo, las autoridades de todas las jurisdicciones eran elegidas a través del voto y en muchos casos, incluso, la ley no hablaba de una calificación especial para poder votar. Pero, en general, en todas las elecciones el voto no era obligatorio y era público, y los padrones y la fiscalización de la elección estaban a cargo de las propias autoridades que serían “elegidas”. Esto implicaba la existencia de amplios márgenes de arbitrariedad: el resultado dependía, en definitiva, de quien manejara los padrones, quien pudiera movilizar a más ciudadanos y quien tuviera mayor poder de presión y coerción sobre los votantes.

Hacia 1880, cuando Julio Argentino Roca llegó a la presidencia, esos modos de funcionamiento de la política cuajaron en la organización de una alianza entre distintos gobernadores provinciales, que dio lugar al Partido Autonomista Nacional (PAN). El PAN pasó así a controlar la política en las provincias y también a nivel nacional: establecía candidaturas y sucesiones que luego eran ratificadas en esas elec-

ciones que ellos mismos organizaban. Suele hablarse del “orden conservador”, y por ende de que quienes participaban y se beneficiaban de esta situación eran “conservadores”, para dar cuenta del particular modo de organización y funcionamiento del sistema político durante las décadas finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX.

Julio Argentino Roca, nació en Tucumán en 1843; en 1858 ingresó a la carrera militar. En las décadas de 1860 y 1870 participó en diversos acontecimientos de la vida política y militar del país: en la Batalla de Pavón, luego bajo las órdenes de Mitre en las campañas en contra de caudillos provinciales, en la Guerra de la Triple Alianza en contra de Paraguay. En 1879, comandó las fuerzas que desalojaron y exterminaron a los indígenas en la Patagonia. Las tierras obtenidas fueron vendidas y repartidas entre quienes habían participado y apoyado la llamada “Campaña al Desierto”. Fue presidente de la nación entre 1880 y 1886. Pero su influencia continuó por muchos años más, al ser el principal dirigente del PAN. Volvió a ser presidente entre 1898 y 1904.



Los años del Centenario.



La infanta Isabel visitó la Argentina con motivo de las celebraciones del Centenario.

La Revolución del 90

Ya en 1890 el sistema controlado por el PAN comenzó a recibir críticas. En ese año, un movimiento cívico-militar, la llamada Revolución del Parque, presentó una serie de cuestionamientos no solo a quien era en ese momento presidente –Miguel Juárez Celman–, sino a todo el funcionamiento de la política. Uno de sus reclamos era justamente el establecimiento del sufragio libre. Si bien el movimiento fue derrotado, el acontecimiento dejó dos consecuencias importantes: por un lado, el presidente tuvo que renunciar; por otro, fue el punto de partida para la emergencia de la agrupación que terminaría desplazando al PAN del poder. Según la propia historia partidaria, la Unión Cívica Radical nació en el clima de tensión e impugnación dado por los acontecimientos de la Revolución del Parque, luchando por sanear el sistema y establecer la libertad del sufragio.

En el contexto de crisis del gobierno de Juárez Celman y al calor de la Revolución del Parque nació la Unión Cívica Nacional. Desde un comienzo, contó con la participación de muchas y diversas personalidades políticas. Entre ellas, sobresalieron dos: Leandro Nicéforo Alem y Bartolomé Mitre. El partido tuvo luego una escisión, cuando los partidarios de Alem se negaron a negociar con el gobierno y decidieron conformar un partido político, la Unión Cívica Radical.

No obstante, y pese a los vínculos entre la Revolución del 90 y el radicalismo, lo cierto es que quienes presentaban los reclamos eran miembros, de una u otra manera, del sector que ejercía el Gobierno, aunque en posiciones secundarias, marginales y con poco acceso a las instancias en las cuales se dirimían las candidaturas. En ese sentido, el reclamo era más bien un pedido de apertura del sistema y un reclamo por un manejo menos discrecional de ciertos resortes de la política. De allí también que otra consecuencia del 90 fue el inicio de una corriente reformista dentro del propio PAN y, por ende, una serie de tensiones y enfrentamientos entre quienes consideraban que todo debía seguir igual y quienes promovían algunos cambios.

Hacia el Centenario

Pese al férreo control que los principales dirigentes del PAN seguían teniendo, las fracturas y los resquebrajamientos del orden conservador eran visibles. Por un lado, la Unión Cívica Radical, que desde el 90 tenía presencia en el escenario público, se había convertido en un actor clave que impugnaba constantemente –incluso a través de las armas– el funcionamiento de la política. También el socialismo, organizado como partido y con presencia en algunas organizaciones gremiales protestaba y levantaba sus críticas al sistema político. A su vez, durante la primera década del siglo XX una serie de conflictos obreros potenciaron la emergencia y difusión de organizaciones anarquistas y anarcosindicalistas. Por otro lado, también se había consolidado una corriente reformista dentro de la propia alianza conservadora del PAN que presionaba a favor de algunas transformaciones.

Hacia 1910, la conflictividad y movilización social y política alcanzaban así puntos álgidos, y el gobierno parecía no contar con herramientas suficientes –más allá de la represión– para controlar la situación. Así, la impugnación política comenzaba a retroalimentarse del conflicto social. Y si bien no había una relación directa entre las huelgas y las movilizaciones que rodearon a los festejos del Centenario y el reclamo de una reforma política, parte de la dirigencia política entendía que si se conseguía sanear el sistema, abrirlo de una manera más o menos controlada, podría retomarse el control y fundar una nueva legitimidad.

Éstos eran algunos de los razonamientos y argumentos que llevaron a Roque Sáenz Peña, presidente de la Nación desde 1910, a presentar un proyecto para la modificación de la ley electoral.



Urnas en el Congreso.



Roque Sáenz Peña.

La Ley Sáenz Peña

Pese a las resistencias de muchos dirigentes, diputados y senadores, en febrero de 1912 el Congreso sancionó la Ley 8.871, conocida como Ley Sáenz Peña: esta Ley establecía nuevas condiciones para la realización de las elecciones y, en consecuencia, daba nuevas coordenadas para el funcionamiento del sistema político.

Básicamente, la Ley establecía que el voto sería obligatorio y secreto para todos los varones, nativos o naturalizados, mayores de 18 años. La obligatoriedad buscaba asegurar la mayor participación posible, en tanto hacía del voto no solo un derecho, sino también una obligación. Por otra parte, la condición de que fuera secreto apuntaba a crear mejores condiciones para que cada ciudadano emitiera su voto, sin presiones y con total libertad. A su vez, si bien suele hablarse de la Ley Sáenz Peña como aquella que estableció el sufragio universal, esa afirmación debe ser matizada: en primer lugar, porque las leyes anteriores no eran necesariamente restrictivas, desde el punto de vista de la calificación del ciudadano, más bien se volvían restrictivas en los hechos. Luego, pese a declarar un carácter universal, había aún muchas personas que no podían participar de las elecciones: las mujeres, los habitantes de territorios nacionales y los menores de 18 años, por ejemplo.

La Ley indicaba además que el padrón sería confeccionado por el Ejército y establecía una nueva proporcionalidad para establecer mayorías y minorías en los cuerpos legislativos. Esto último cobraba especial relevancia ya que permitía poner fin al sistema de lista completa, vigente durante los años del orden conservador, por el cual quien ganaba la elección ocupaba todos los cargos en disputa, y asegurar al menos un tercio de la representación para las minorías.

Éxito o fracaso

La Ley Sáenz Peña rigió plenamente entre 1912 y 1930. Durante esos años, y pese a ser los impulsores del proyecto, los conservadores consiguieron solo algunas victorias electorales locales o provinciales; en 1916, perdieron las elecciones nacionales. Durante esos años también, la Unión Cívica Radical ganó no solo la presidencia, sino que se proyectó como un partido en el ámbito nacional y creció en número de votantes en cada elección que se presentó.

Visto desde la perspectiva de los conservadores, cabe la pregunta de por qué se embarcaron en una reforma que ponía en juego su propia situación de poder: ¿se trató de una decisión estratégica o más bien de una apuesta incierta presionada por el contexto?

La respuesta requiere poner en consideración diversos ángulos del análisis: en primer lugar, el grupo reformista venía impulsando distintos cambios desde comienzos del siglo XX, con lo cual la reforma de la ley era parte de una mirada estratégica que suponía que poco a poco, y con ayuda de las herramientas legislativas, la política podría ir mejorando su funcionamiento sin poner en juego la posición de poder del grupo conservador. Era, por cierto, una mirada bastante optimista y confiada en el poder de las leyes y en la propia situación y legitimidad de los conservadores.

En segundo lugar, también desde comienzos de siglo existía cierta predisposición en la opinión pública (en diarios, documentos, declaraciones, etc.) a cuestionar las prácticas de violencia y coerción que caracterizaban al escenario político. En este sentido, y tomando en consideración algunos cambios que también se daban en otros países, se entendía que un sinceramiento de las elecciones, por ejemplo, era necesario. Por otro lado, es evidente que los conservadores no preveían perder, por el contrario, suponían que se lograría implementar una apertura controlada que sin correrlos del centro de la escena permitiría la incorporación de otros actores y la recuperación de cierta legitimidad.

Las primeras elecciones, realizadas bajo la vigencia de la nueva Ley, durante ese año de 1912 comenzaron a mostrar que los resultados no eran en absoluto los esperados por la coalición conservadora: en Santa Fe, la Unión Cívica Radical ganó las elecciones para diputados. En el corto plazo, esos primeros triunfos radicales se ampliaron y consolidaron. En 1916, el candidato de la UCR, Hipólito Yrigoyen, consiguió un 46% de los votos frente a un 25% obtenido por los conservadores.

Hipólito Yrigoyen nació en 1852 y era sobrino de Leandro N. Alem, uno de los principales referentes de la Revolución del Parque, de 1890. Desde joven, Yrigoyen trabajó en diversos empleos vinculados a la administración; también desde temprano participó en espacios y acontecimientos políticos, incluida la mencionada revolución de 1890. A partir de ese momento, y de la posterior creación de la Unión Cívica Radical, fue convirtiéndose en el principal líder de la oposición al gobierno conservador: encabezó varias revueltas armadas y se negó a aceptar cualquier candidatura o participación del radicalismo en las elecciones hasta tanto no se reformara la ley electoral y se sanearan las prácticas comiciales.

II- LAS PRESIDENCIAS RADICALES: YRIGOYEN-ALVEAR-YRIGOYEN

La primera presidencia de Yrigoyen

La gestión y las elecciones

Yrigoyen asumió la presidencia de la Nación en octubre de 1916. Los desafíos por delante corrían en varios sentidos: la UCR había sido siempre un partido de oposición y de denuncia, pero ahora debía gobernar y hacerse cargo de la gestión. A su vez, debía seguir participando del juego político de las elecciones para consolidar su posición: no alcanzaba con ganar una vez, sino que había que seguir compitiendo en cada comicio. Más aún cuando los representantes en el Poder Legislativo también llegaban allí por medio de elecciones regidas por la Ley Sáenz Peña: en tanto el presidente necesitara del Congreso para gobernar, debería ocuparse también de ganar las elecciones en las provincias.

Dado que no poseía ni cuadros de gestión ni muchos dirigentes formados en la administración pública, gran parte de los funcionarios y encargados de llevar adelante las tareas estatales siguieron siendo los mismos que en el período anterior. No obstante, por debajo de esas líneas de la administración, el radicalismo permitió la incorporación de muchos nuevos empleados. Esto, si bien significaba una erogación cada vez más grande para el Estado y el inicio de prácticas clientelistas a partir de los recursos del Estado, implicó también la creación de más empleo y una cierta transformación en el perfil de quienes estaban en la administración estatal.

Un tema central del primer gobierno radical fue el fomento de la explotación petrolera. Se combinan en ese tema diversas cuestiones: una preocupación por la defensa nacional, presiones militares, un interés por el abastecimiento energético. El Congreso Nacional rechazó varios proyectos presentados por Yrigoyen que proponían la nacionalización de los hidrocarburos. Así es que, finalmente en 1922, se creó por decreto Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), un organismo destinado a realizar la exploración y la explotación petrolera. Enrique Mosconi quedó a cargo de su administración.

Por otro lado la Unión Cívica Radical siguió creciendo electoralmente: se organizó como un partido en el ámbito nacional y contó con herramientas para tener un desempeño electoral positivo al menos hasta 1930. La mayor dificultad estaba en la competencia en las provincias: allí los conservadores seguían controlando gran parte

del escenario político. Por eso, aquellas jurisdicciones que se mantenían críticas al gobierno nacional, fueron intervenidas por Yrigoyen. Así también, la relación con el Congreso fue compleja y conflictiva. Allí estaban quienes eran representantes por las provincias, con lo cual el peso de los conservadores era importante.



Hipólito Yrigoyen.

Los conflictos políticos

Pese a los triunfos electorales y a la vigencia de la nueva ley electoral, los años radicales no estuvieron exentos de conflictos políticos. Por el contrario, pareciera que esas dos condiciones (el éxito electoral y la nueva ley) estimulaban la formación de nuevas agrupaciones, algunas novedosas y otras como desprendimiento de las existentes, que entraban rápidamente en colisión con el resto de los partidos. El propio radicalismo sufrió varias particiones, a veces vinculadas con conflictos personales y a veces articuladas a partir de cuestiones locales o provinciales. Pero también los socialistas y los conservadores se fracturaron en diversos partidos y agrupaciones.

Por otro lado, la confrontación entre los partidos también se volvió virulenta y si bien la ley buscaba justamente hacer del acto electoral una práctica pacífica, la violencia no desapareció totalmente. Las campañas, los comicios y a veces las rutinas políticas posteriores a las elecciones, sobre todo en algunas jurisdicciones, eran momentos de tensión y agresión.

Gran parte de los conflictos políticos se estructuraron alrededor del enfrentamiento entre radicales y opositores al radicalismo: ese enfrentamiento se libró no solo en términos partidarios y electorales sino también en el registro de las representaciones. Por un lado, la Unión Cívica Radical se presentaba a sí misma como la expresión entera de la Nación y por eso sostenía que su programa político era la

Constitución. Según su modo de explicar el sentido de su existencia y actuación, su batalla era en contra del “régimen”, es decir, en contra de toda la política que la había precedido y en contra de quienes seguían sosteniendo esas banderas. Estas ideas, en algún sentido, venían a impugnar el sentido mismo de un “partido”: en tanto el radicalismo negaba ser una parte de algo, negaba también la posibilidad de que existan otras partes, con otras ideas pero tan legítimas como el radicalismo mismo.

Por su parte, los conservadores acusaban a los radicales de “advenedizos” y, a medida que los problemas de gestión se agudizaban, también de “incapaces”. Esto a su vez, por extensión, llevaba a una crítica a la democracia representativa ya que sostenían que habían sido las prácticas de la democracia las que habían llevado al gobierno a un grupo de advenedizos e incapaces.

Estos modos de definirse a sí mismo y al adversario circularon ampliamente en los diarios y revistas, y con efectos a veces positivos y a veces negativos, colaboraron a dar sentidos al conflicto político. A su vez, generaron consecuencias de mediano plazo para radicales, conservadores y para toda la cultura política argentina.

El conflicto social

Los vaivenes del ciclo económico —a los que se hará referencias más adelante— combinados con las tensiones sociales y políticas que se arrastraban desde la época de Centenario dieron por resultado la emergencia de diversos conflictos sociales de magnitud. Frente a ellos, la actitud de Yrigoyen fue cambiando: al comienzo de su gobierno, buscó actuar como mediador e interlocutor entre los obreros y sus patrones. En 1916, por ejemplo, buscó interceder en la huelga declarada por los gremios portuarios y ferroviarios (dos áreas clave de la economía agroexportadora), recibió a delegados de ambas organizaciones y se negó a reprimir, tal como reclamaban las asociaciones patronales. Esta posición le valió fuertes críticas por parte de todo el arco conservador.

Pero otra fue la actitud algunos años después, en 1919, frente a la huelga declarada en los Talleres Metalúrgicos Vasena de Buenos Aires y los acontecimientos conocidos como la Semana Trágica. Los obreros reclamaban por aumento salarial, mejores condiciones de trabajo y la reincorporación de trabajadores despedidos; a comienzos de enero de 1919, los huelguistas chocaron con otros obreros que seguían trabajando, lo cual provocó la intervención policial, la represión y el saldo de muertos y heridos. Las organizaciones obreras convocaron entonces a una huelga general, en un contexto en el cual —por otras razones particulares en cada caso— en otras

fábricas y en otros ámbitos laborales también comenzaban a multiplicarse las huelgas. La policía se vio desbordada y se convocó al Ejército para reprimir y controlar al movimiento obrero. Durante al menos una semana, la ciudad se vio jaqueada por los enfrentamientos entre obreros, policías y el Ejército. A ellos se sumó la flamante Liga Patriótica, una agrupación de derecha que, denunciando que los conflictos que se vivían eran el inicio de una revolución comunista, salieron también a las calles a enfrentar a los huelguistas. Si bien Yrigoyen buscó mantener negociaciones diversas con los delegados, no impidió el accionar de la policía y del Ejército. Su posición frente al movimiento obrero y el conflicto social ya había cambiado.

La Liga Patriótica fue fundada en enero de 1919 con el principal objetivo de reprimir las protestas de obreros. Su lema fue “Patria y Orden” y sus ideas incluían cierto tono xenófobo. En medio de la represión generada durante la Semana Trágica, los miembros de la Liga se ocuparon no sólo de atacar a trabajadores y dirigentes sindicales sino que también organizaron el primer acto violento en contra de inmigrantes rusos, en su mayoría judíos, en la ciudad de Buenos Aires. La Liga actuaba en muchos casos en complicidad con la policía y con la colaboración de los miembros de la elite. Su presidente fue Javier Carlés; el poeta Leopoldo Lugones, figuró entre sus adherentes.

En noviembre de 1920, en la actual provincia de Santa Cruz, se desató una importante protesta de trabajadores, que reclamaban por mejores condiciones de trabajo y un aumento salarial. El presidente envió entonces al Teniente Coronel Héctor Varela a mediar. En lo inmediato se logró un acuerdo con los trabajadores, pero al poco tiempo los patrones se negaron a cumplir lo pactado, así fue que la protesta se reanudó. La Sociedad Rural del lugar, dispuesta a no ceder a ningún reclamo, comenzó a presionar al gobierno para que reprimiera a los trabajadores. En noviembre de 1921, Varela volvió a la Patagonia y dio curso a los pedidos de los terratenientes y empresarios rurales: instauró la pena de muerte y durante todo enero de 1922 persiguió, detuvo y asesinó a los obreros en huelga. En esta masacre Varela contó con la ayuda de algunos miembros de la Liga Patriótica, que viajaron al sur para participar de la represión. Finalmente Varela fue también asesinado por un obrero simpatizante de quienes habían sido reprimidos, un año después en enero de 1923.

Los conflictos también estuvieron presentes en la región del litoral. En 1921, luego de varios años de conflictos diversos, la policía terminó reprimiendo a los trabajadores de La Forestal, una compañía inglesa que se dedicaba a la explotación del quebracho en Santa Fe. Un año antes, en 1920, los obreros habían organizado

un sindicato, habían fundado un periódico y se lanzaban a la huelga en reclamo de aumento salarial y de mejores condiciones de trabajo. Luego de varias negociaciones y enfrentamientos, finalmente se dio intervención a la policía: varios trabajadores murieron y otros tantos fueron despedidos y detenidos.



La Semana Trágica.



Conflictos en la Patagonia. Estancieros armados 1922-1923.



Conflictos en la Patagonia. La policía custodia a los peones prisioneros.



Tropas en Santa Cruz (1922-1923).

El contexto internacional: aún la Guerra

El contexto internacional en el que se iniciaba el gobierno radical era por demás complicado: Europa seguía en guerra y esto incidía no sólo en las relaciones diplomáticas, sino también en el funcionamiento de la economía. Desde el comienzo del conflicto, en 1914, la Argentina se había mantenido neutral. No obstante, habiendo ya transcurrido dos años, gran parte de la opinión pública y política reclamaba una declaración a favor de Francia, Inglaterra, Italia y Rusia. Y esta presión se volvió más fuerte luego de que en 1917 Estados Unidos también se sumara a la contienda. Sin embargo, Yrigoyen mantuvo la neutralidad del país.

Por otro lado, el problema económico generado por la guerra no era menor: durante varias décadas la economía argentina había funcionado a partir de la fluidez del comercio, el desarrollo de los transportes, la llegada de inversiones extranjeras e incluso el constante arribo de inmigrantes. La guerra trababa todo ese movimiento y provocaba, como se explicará luego, reajustes no siempre positivos para la economía argentina.

A su vez, en 1917 estalló una revolución comunista en Rusia que acabó con el poder zarista. Eso alentó la movilización de agrupaciones de izquierda en todo el mundo y por cierto, también en Argentina.

¿Un nuevo gobierno?: la presidencia de Alvear

Hacia 1921, comenzó a discutirse la sucesión de Yrigoyen: la decisión finalmente recayó en la figura de Marcelo T. de Alvear, un dirigente con trayectoria partidaria y cierta experiencia política, aunque con una participación irregular en las rutinas de la vida política.

Alvear era miembro de una de las familias más tradicionales de la Argentina. Desde muy joven había participado de los espacios políticos vinculados al radicalismo: había estado en la Revolución del Parque en 1890 y luego en otro levantamiento radical en 1893. En 1912, ya sancionada la Ley Sáenz Peña fue uno de los primeros diputados radicales en llegar al Congreso. Pese a esa trayectoria, Alvear solía pasar largas temporadas fuera del país y alejado de los temas de la política nacional.



Marcelo T. de Alvear.



Alvear acompañado de autoridades civiles, militares y religiosas, en 1922.

En abril de 1922, la Unión Cívica Radical logró nuevamente un triunfo sobre el resto de las fuerzas políticas. En ese momento, Alvear –el candidato elegido– se encontraba en París.

La emergencia del antipersonalismo y la gestión de Alvear

Pese a que entre Yrigoyen y Alvear existía una buena relación, desde el momento mismo de asumir quedó claro que Alvear organizaría un gobierno con perfil propio, alejado del yrigoyenismo: tanto los nombres de quienes integraron su gabinete como por algunas de las primeras decisiones tomadas indicaban una toma de distancia del nuevo presidente de su antecesor. Ese distanciamiento poco a poco se fue profundizando, provocó un quiebre en el bloque parlamentario, sumó a otros tantos disconformes con la política y la figura misma de Yrigoyen y concluyó en la organización de una nueva agrupación: la Unión Cívica Radical Antipersonalista. En efecto, la razón que permitía aglutinar a ese sector era precisamente la oposición a Yrigoyen, a lo cual se sumaban luego otros argumentos.

Esta partición del radicalismo pronto se convirtió en uno de los principales ejes del conflicto político: personalistas y antipersonalistas disputaron elecciones en provincias y municipios, en el Congreso y, en general, en la escena pública.

Alvear impulsó diversas iniciativas legislativas vinculadas con cuestiones laborales, tales como la reglamentación para el trabajo de mujeres y niños en la Capital Federal y la implementación de un sistema de jubilaciones. También un proyecto para la creación de un impuesto a los bienes personales. No obstante, dado que no contaba con mayoría en el Congreso, gran parte de los proyectos presentados fueron rechazados. Por decreto, sancionó un proyecto que establecía el 1° de mayo como feriado. Por otro lado, siguió dando impulso a la política petrolera iniciada durante el gobierno de Yrigoyen y dando respuestas a las preocupaciones militares sobre el problema de la defensa nacional. En relación con esto, en 1927 creó Fabricaciones Militares.

Los años del gobierno de Alvear fueron una etapa de bonanza económica apoyada fundamentalmente en la recuperación de las exportaciones y el buen funcionamiento del comercio internacional. Esto permitió mantener los salarios relativamente altos y los precios estables y, si bien hubo huelgas, su número y magnitud fueron mucho menor que en los años anteriores. Esta situación combinada con algunas medidas laborales, como la Ley de Descanso Dominical, creó mejores condiciones de vida –siempre relativas y distintas según cada sector social– para los trabajadores.

Segunda presidencia de Yrigoyen

Al momento del nuevo recambio presidencial, el radicalismo seguía dividido: personalistas y antipersonalistas terminaron siendo los principales contendientes. La campaña de 1928 fue intensa y disputada, y las elecciones fueron mucho más concurrecidas que en los años anteriores. Los antipersonalistas habían forjado una alianza con ciertos sectores conservadores, pero no lograron imponerse. El triunfo de Yrigoyen fue absoluto: para sus seguidores era la clara ratificación de que el yrigoyenismo era la Nación y el propio Yrigoyen el verdadero líder. Para los derrotados, comenzaba a quedar claro que sería difícil desplazarlos por la vía electoral. Esta opinión, por otro lado, empezaba a combinarse con argumentos que denunciaban la falta de cultura cívica en la población y la necesidad de anular la reforma de 1912 en tanto otorgaba el voto a una masa de ciudadanos sin preparación ni responsabilidad.

Esta línea de argumentación delineaba el espacio de oposición al yrigoyenismo, el cual incluía a diversos sectores de derecha, a algunos conservadores y a otros claramente nacionalistas, preocupados por la supuesta perversión a la que la Nación estaba expuesta en tanto siguieran gobernando los radicales.

El inicio del fin del gobierno de Yrigoyen

Si bien el apoyo electoral había sido masivo, a poco de iniciar su segundo mandato Yrigoyen debió enfrentar una serie de dificultades que se agravarían con el correr de los meses.

Por un lado, los conflictos políticos se intensificaron, sobre todo en las provincias y en el Congreso. Las intervenciones provinciales se multiplicaron y esto, a su vez, condicionó el funcionamiento del Parlamento. Algunos hechos de violencia, como el asesinato de Carlos Lencinas, un dirigente y exgobernador de Mendoza del antipersonalismo, y un atentado al propio Yrigoyen, enrarecieron más aún el clima político. También, la Liga Patriótica comenzó a tener cada vez más visibilidad y organizó grupos de choque que se enfrentaron con grupos radicales en las calles.

Por otro lado, la oposición a Yrigoyen contaba entre sus filas no solo a ciertos partidos políticos, sino también a otros sectores de la sociedad, a veces organizados, como la Liga Patriótica, y a veces como simples grupos de opinión. El diario *Crítica*, uno de los principales periódicos de la ciudad de Buenos Aires, inició una campaña constante en contra del gobierno radical. El propio gabinete de Yrigoyen se encontraba también en crisis, cruzado por disputas internas que desgastaban al propio presidente y debilitaban a la gestión. Los apoyos eran cada vez más tibios.

En ese contexto, además, sobrevino la crisis económica. La caída de la Bolsa en Estados Unidos afectó al comercio internacional y, por ende, condicionó las finanzas del estado argentino: el gobierno debió bajar el gasto estatal, reducir salarios y personal.

Este es el clima en el cual muchos actores políticos y gran parte de la sociedad vieron con buenos ojos la intervención militar como un modo de recuperar un supuesto orden perdido y pervertido por el gobierno radical.

A manera de balance

La sanción y vigencia de la Ley Sáenz Peña transformó el escenario, las prácticas y el sentido de la política. No obstante, mucho de lo que se esperaba que la ley impulsara no se consiguió y terminó siendo una de las principales debilidades del sistema político en el período radical y también en las etapas sucesivas.

Por un lado, quienes impulsaban la reforma esperaban que la existencia misma de la ley estimulara la formación de partidos políticos, orgánicos, con estructuras nacionales, programas, dirigentes, etc., y que, a su vez, esos partidos compitieran en elecciones libres y periódicas. Pero esto sucedió solo en parte: en verdad, el único partido que logró estructurarse de una manera más o menos parecida a lo esperado fue la Unión

Cívica Radical. Los conservadores nunca lograron articular una fórmula partidaria estable y los socialistas, si bien declamaban una estructura nacional, solo tenían presencia efectiva en la ciudad de Buenos Aires y en algunas otras localidades. El resultado fue que la esperada competencia entre partidos terminó siendo una confrontación entre los radicales y todos los que se oponían a ellos, en principio los conservadores, más tarde los antipersonalistas y luego otras agrupaciones también opositoras. Por otro lado, las prácticas electorales en sí mismas nunca funcionaron como se esperaba y continuaron los episodios de violencia, denuncias de fraude y coerción.

Sin embargo, y pese a las dificultades mencionadas, los partidos debieron al menos intentar su organización, establecer una estructura, elegir a sus candidatos y prepararse y participar de las elecciones. Esto mismo impulsó la actividad partidaria, la cual poco a poco dejó de limitarse a la preparación electoral e incluyó la realización de charlas, cursos, reuniones, el funcionamiento de locales partidarios y la edición de documentos y publicaciones diversas. Eso también da cuenta de que de una u otra manera la participación política se amplió, tanto en un sentido cuantitativo como cualitativo.

En la elección presidencial de 1910 votaron 199.000 personas, un 2.8% del total de la población; en la elección que consagró a Yrigoyen presidente votaron 724.000 ciudadanos, un 8.8% de la población.

III- LA ECONOMÍA Y LA SOCIEDAD ENTRE LA PRIMERA POSGUERRA Y LA CRISIS DEL 30

Una economía en transformación

Desde el siglo XIX, la Argentina participaba del mercado mundial como proveedora de materias primas para los países industrializados. El modelo agroexportador, pese a las crisis a las que se vio arrastrado, funcionó con éxito por varias décadas y consolidó la economía del país. El estallido de la Primera Guerra Mundial comenzó a mostrar los límites y la vulnerabilidad que ese tipo de inserción implicaba.

Por un lado, la guerra impuso restricciones a los intercambios internacionales, con lo cual los niveles de exportación –pilar de la economía argentina– y de importación de productos industriales sufrieron modificaciones negativas. Por otro lado, se produjo una retirada de capitales extranjeros, ya que quienes habían sido los principales inversores del país se encontraban en ese momento comprometidos en el conflicto. Estos cimbronazos se hicieron sentir en la economía interna del país:

inflación, desocupación, deterioro de la situación de trabajadores, chacareros y jornaleros rurales.

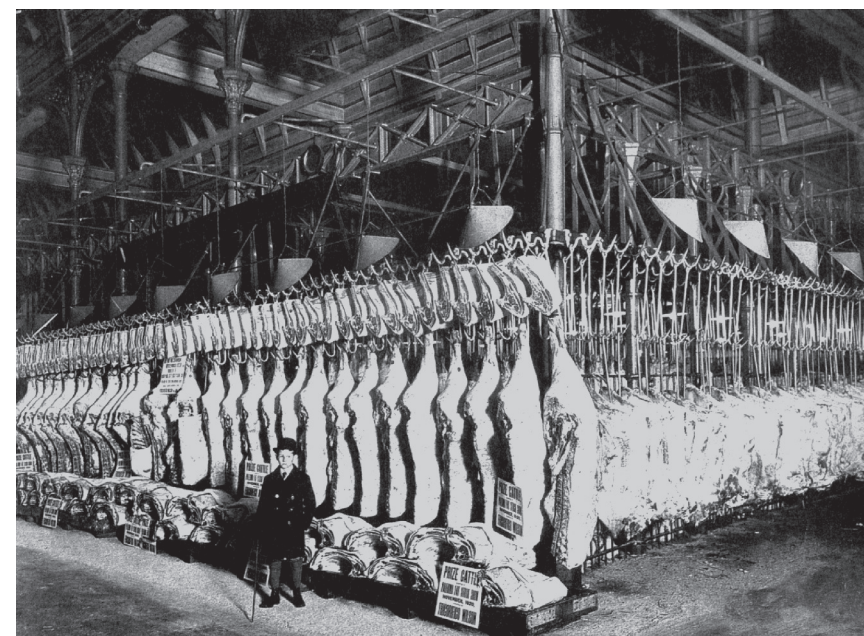
La Primera Guerra Mundial concluyó en 1918. En los años inmediatamente posteriores se notaron ciertas mejoras, aunque las tensiones y desajustes en la economía continuaron hasta el inicio de la década del 20. Así como a partir de 1914 la Argentina tuvo que adecuarse a un mercado mundial colapsado por el problema de la guerra, la posguerra también requirió de nuevas adaptaciones: los países europeos comenzaron a reconstruir sus economías y en muchos casos optaron por el proteccionismo, lo cual era evidentemente negativo para la economía argentina. Asimismo, Estados Unidos se consolidaba como la principal potencia económica y desplazaba a quien había sido el tradicional socio argentino, el Reino Unido. Este cambio de eje traía consigo un funcionamiento distinto del comercio exterior ya que Estados Unidos no estaba interesado en comprar productos argentinos, pero sí en vender e invertir en nuestro país.

Estos cambios económicos de comienzos de los 20 generaron un altísimo nivel de movilización y conflictividad obrera. Como se ha indicado más arriba, en particular entre 1919 y 1921 –y al calor también de los ecos de la Revolución Rusa y las movilizaciones obreras ocurridas en todo el mundo–, cientos de sindicatos y gremios entraron en huelga en reclamo de mejoras salariales. En la Argentina impactaron en particular las huelgas ocurridas en el ramo de los transportes: ferrocarriles y puertos eran piezas claves del engranaje económico y reunían a los más poderosos gremios de la época. Pero también se plegaron obreros industriales, rurales, trabajadores de comercios y del estado; incluso los actores y autores del teatro nacional se declararon en huelga en 1919 y luego en 1921.

Pasados esos años, la economía argentina retomó la curva del crecimiento apoyada en la reapertura de las exportaciones hacia Europa y la llegada de nuevas inversiones internacionales. De igual manera, la interrupción comercial que había significado la guerra había dejado como consecuencia la emergencia de una base industrial, acotada, precaria y vinculada al mercado interno. Pero esa base comenzó a tomar más desarrollo en los años 20: algunas empresas extranjeras se radicaron en el país para fabricar localmente los productos que antes enviaban desde sus propios países. Así, productos químicos, farmacéuticos y eléctricos, por ejemplo, comenzaron a ser fabricados en la Argentina.



Mercado de Abasto, en la ciudad de Buenos Aires, en plena actividad.



Carnes para la exportación.

La sociedad: crecimiento, diversificación y movilidad

Hasta la década del 30 la llegada de inmigrantes a nuestro país fue constante, con una interrupción durante la guerra. Sin embargo, hacia los años 20 hay una disminución en el ritmo de arribos y puede registrarse una cierta estabilización de la población. Es difícil tener cifras exactas sobre habitantes, porque así como el fenómeno más relevante es la llegada masiva de inmigrantes también la estadia temporaria en el país, fenómeno conocido como inmigración golondrina, constituye una cuestión central de los cambios demográficos. No obstante, hacia los años 20 puede constatare una estabilidad mayor en los movimientos de población, es decir, menos gente que retorna a sus naciones de origen y más familias cuyos hijos son nacidos en este país. En algún sentido, esto daba cuenta de que esas generaciones que migraron en los años anteriores ya planeaban su vida en el país.

Según cifras tomadas de los censos, en 1869 vivían en el país 1.737.000 personas, de las cuales solo un 12% eran extranjeros. Para 1895, la población llegaba a 3.955.000 y el porcentaje de extranjeros al 25%. En 1914, los datos indican una población de 7.885.000 con un porcentaje de extranjeros que rondaba el 30 %. Y si bien para la década del 20 no hay cifras oficiales –porque no hubo censos–, puede estimarse que la población ya llegaba a casi 9 millones de habitantes en toda la Argentina. El porcentaje de extranjeros seguía siendo muy alto.

Durante las décadas del 10 y del 20 se acentuó el proceso de urbanización y concentración de la población en las ciudades. Si bien la mayoría de los inmigrantes llegaba con la idea de dirigirse al campo, por diversas razones muchos terminaron quedándose en las ciudades. Tanto Buenos Aires como Rosario y otras ciudades de las provincias crecieron de manera significativa en esas dos décadas.

En particular la ciudad de Buenos Aires vio modificada su estructura y materialidad, en parte como consecuencia del crecimiento demográfico y de diversos procesos sociales. Entre 1910 y 1920, el casco histórico de la ciudad –lugar que concentraba la mayor parte de la población urbana– comenzó a desbordar y poco a poco otras zonas de la ciudad empezaron a ser habitadas: a veces con apoyo del Estado y a veces por propia iniciativa de las familias, se hicieron loteos, se abrieron calles y se dotó de una mínima infraestructura para la vida cotidiana. Emergieron así los barrios.

Si bien los conflictos sociales fueron de magnitud al menos hasta los años 20, lo cierto es también que en las ciudades comenzaron a perfilarse nuevos grupos sociales, ocupados en oficios y profesiones muy diversas: empleados estatales y de

comercio, maestros, pequeños comerciantes, trabajadores cuentapropistas, etcétera. En parte, esta diversidad ocupacional era también resultado del crecimiento de la ciudad, en tanto cada vez más habitantes requerían más servicios y productos para su vida cotidiana. La variedad y densidad de este conjunto de nuevas ocupaciones fueron la base de la formación de los llamados “sectores medios”, es decir, grupos que sin reconocerse como obreros tampoco eran parte de la elite ni de las familias más acomodadas de la ciudad. Asimismo, esa diversidad ocupacional, sobre todo en los años 20, se desarrollaba en un contexto económico favorable, con lo cual en el término de algunos años muchas de estas familias de sectores medios vieron concretada su expectativa de cierta movilidad social: accedieron a una vivienda, sus hijos recibieron educación secundaria y, en algunos casos, universitaria; las mujeres pudieron dejar de trabajar y dedicarse a un rol doméstico, etcétera.



Los tranvías circulaban ampliamente por la ciudad.



Tránsito en la zona de Plaza de Mayo.

IV- EL MUNDO DE LA CULTURA

Durante los años que van entre la Primera Guerra Mundial y la década del 30, el mundo de la cultura argentina experimentó diversas transformaciones, tanto por el impacto de algunos sucesos internacionales como por la emergencia de vanguardias estéticas locales, grupos culturales con nuevos perfiles y una renovada agenda de discusión política y cultural.

Por un lado, tanto la Primera Guerra Mundial como la Revolución Rusa estimularon la formación de revistas y espacios culturales específicos. Por ejemplo, la revista *Inicial. Revista de la nueva generación* se abrió con una dedicatoria a los jóvenes caídos en la guerra. Por otro lado, los cambios sociales y políticos que experimentaba el país crearon un clima propicio para el surgimiento también de vanguardias estéticas e intelectuales. En algunos casos, estos nuevos grupos asumieron una postura militante, en la que buscaban articular sus ideas estéticas con un posicionamiento político.

Es en este período en el que se fundan revistas como *Martín Fierro* y *Proa*. Otras como *Los Pensadores*, *Renovación*, *Claridad*, *Extrema Izquierda* hacían explícita su preocupación por las cuestiones políticas y sociales.

A su vez muchas de estas revistas eran parte de proyectos culturales más amplios que incluían la creación de editoriales, la apertura de ateneos, la organización de conferencias y cursos, etcétera.

En este contexto, la oferta cultural era variada y recogía las más diversas tendencias: desde grupos que a través de sus revistas y ateneos cuestionaban fuertemente a la democracia y al sistema de representación, pasando por las actividades organizadas por la Iglesia, en las cuales la cuestión religiosa era central, hasta otros espacios y grupos cuyo eje articulador era la denuncia del imperialismo norteamericano. Un tema común a muchos de estos grupos era la preocupación por la definición de la Nación y lo nacional.

Durante los años 20, la Iglesia puso en marcha una serie de iniciativas que le dieron mayor visibilidad y presencia en la escena pública. El trabajo en las parroquias se intensificó, se organizaron conferencias, cursos y se editaron periódicos.

Del conjunto de expresiones culturales sobresalen dos espacios: Boedo y Florida. Ambos reunían a artistas e intelectuales y realizaban actividades diversas. Los diferenciaba la definición que cada uno sostenía sobre el rol de los intelectuales y la tarea artística. Para los de Boedo, el fundamento de su actividad era el compromiso y la denuncia social. Para los de Florida, su principal preocupación era la experimentación y creación estética. Ambos grupos fueron la referencia para toda una generación de pensadores y artistas.

La Reforma Universitaria

Un acontecimiento clave, que articula en parte los cambios culturales y políticos que atravesaba el país en las dos primeras décadas del siglo XX, fue la Reforma Universitaria.

Para la época del Centenario, existían tres universidades nacionales: la de Córdoba, la de Buenos Aires y la de La Plata, y una universidad provincial en Santa Fe. Si bien se contaba con una ley que regulaba el funcionamiento de estas casas de altos estudios, el sistema universitario era en sí muy pequeño, elitista y con un funcionamiento muy discrecional. Esta situación ya había sido en algún sentido cuestionada por los estudiantes a comienzos de siglo y tanto en la Universidad de Buenos Aires como en la de La Plata hubo diversas movilizaciones que reclamaban cambios en el funcionamiento de las clases, la modalidad de los exámenes y el ingreso, la arbitra-

riedad de las corporaciones profesionales que manejaban algunas cátedras, etcétera.

En 1918, se inició un nuevo conflicto en la Universidad de Córdoba, institución en la cual tanto la Iglesia católica como diversas corporaciones tenían un peso decisivo. Los estudiantes comenzaron a organizarse y a presentar sus demandas: cambios en los cursos, en el régimen de asistencia y la necesidad de renovación del cuerpo de profesores. En marzo de 1918, lanzaron una huelga, pero las autoridades respondieron con la clausura de la universidad. El conflicto se profundizaba y se extendía, lo cual motivó, finalmente, la intervención del propio Yrigoyen: la universidad fue intervenida y gran parte de los reclamos estudiantiles comenzaron a seguir su curso.

El movimiento de la Reforma había obtenido gran parte de lo que se había propuesto: nuevos reglamentos y estatutos que sentaban las bases para un funcionamiento menos discrecional, acceso menos restrictivo, e, incluso, participación de los estudiantes en el gobierno de la universidad. Igualmente, el proceso de la Reforma iniciado en Córdoba encontró rápidamente positivas repercusiones en el resto de América Latina: otras universidades del continente y diversos grupos políticos tomaron algunas de las ideas enunciadas en Córdoba.

Un mercado de productos culturales

Las transformaciones sociales y culturales mencionadas –relacionadas con los procesos de crecimiento demográfico, urbanización, emergencia de sectores medios, etc.–, combinadas con el contexto económico relativamente favorable de esos años, crearon las condiciones para la constitución de una variada oferta cultural que interpelaba a sectores cada más amplios de la población.

En primer lugar, es en los años 20 cuando se consolida un mercado editorial compuesto de muy diversas revistas, magazines, diarios y libros. Más allá de la cantidad de empresas editoriales y publicaciones en sí, lo novedoso es que ese conjunto de producciones apunta a un público amplio y variado: hay revistas para mujeres, para niños, para aficionados al deporte, al teatro, a la literatura y la poesía, revistas de actualidad, etc. En segundo lugar, el económico costo de esas publicaciones también da cuenta de que se dirigían a un público popular. Muchas editoriales, por ejemplo, pusieron en marcha la impresión de colecciones de obras consagradas a un precio accesible. Si bien no podría establecerse una relación directa entre el crecimiento del mercado editorial y el aumento de los niveles de alfabetización –resultado fundamentalmente de la existencia de la escuela pública desde fines del siglo XIX–, lo cierto es que la posibilidad de acceder a los textos escritos condicionó positivamente la demanda de revistas, diarios, libros, etcétera.

A su vez los periódicos también se transformaron y adquirieron una fisonomía más moderna. En parte abandonaron ese perfil de tribuna de debate político y se ocuparon de muchos otros temas vinculados con la vida cotidiana de las ciudades: desde los hechos policiales hasta los eventos deportivos o artísticos, incluyendo las notas de interés general, y, por supuesto, los acontecimientos políticos. En ciudades que crecían a ritmo acelerado, que se extendían y diversificaban, los diarios pasaron a ocupar un rol fundamental en tanto mostraban y enseñaban, en algún sentido, de qué se trataba la ciudad y la vida urbana.

En el mismo sentido, es en los años 20 cuando, además de los medios gráficos, el cine y el teatro pasaron a tener un lugar central en el repertorio de entretenimientos urbanos. Fue en estos años cuando en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la calle Corrientes y su zona cercana se convirtieron en un paisaje urbano asociado al ocio y la diversión: allí funcionaba la mayoría de los teatros y salas de cine de la ciudad, junto con decenas de cafés, restaurantes y algunos cabarets. Como repique de esta concentración de espacios recreativos en el centro, en los flamantes barrios también los teatros, cines y cafés comenzaron a tener mayor visibilidad y atractivo. También los deportes se convirtieron en espectáculos que convocaban a multitudinarios públicos, lo cual dio como resultado la construcción de estadios, canchas, clubes deportivos. Poco a poco, además, la radio y los discos se sumaron como una alternativa para el entretenimiento doméstico. E insuflando a este repertorio de productos para el entretenimiento, la prensa y diversas publicaciones se dedicaron a comentar con detalles los pormenores de cada actividad, amplificando sus repercusiones y estimulando su consumo.

Selección de fuentes y actividades sugeridas

1- Sobre la nueva ley electoral: discursos y representaciones

a- Discurso de Roque Sáenz Peña, 28 de febrero de 1912

“El momento político que me cabe la hora de presidir, lo reputo trascendente para el porvenir de las instituciones, por cuanto la reforma electoral anuncia una evolución en el gobierno representativo y en el ambiente como en las costumbres en que va a desenvolverse la democracia argentina”.

“(..) La nueva ley aporta a nuestro derecho positivo, dos innovaciones sustanciales: la lista incompleta y el voto obligatorio. A raíz de los debates, consideraría superfluo explicar sus objetivos. Diré sólo que el sistema, rompiendo la unanimidad

y el monopolio, consagra las minorías, dando razón y existencia a los partidos permanentes. De hoy en más habrá, naturalmente, vencedores pero ya no habrá vencidos, porque los más y los menos serán parte en la función gubernativa. El sufragio obligatorio es un reactivo contra la abstención. El voto secreto mata la venalidad, y al desaparecer el mercenario, los ciudadanos llegarán a posiciones por el concurso de las voluntades libres. Los candidatos se harán tales por sus títulos y méritos, y no por concesión de nadie, sino por resolución de todos. Y habrá sanciones políticas, porque en lugar del favor del gobernante, será la opinión pública la requerida, lisonja esta última que no deprime porque se traduce en servicios y en virtudes” (...).

“No nos equivoquemos, sin embargo. Ni la ley ni el sistema que ella crea es una finalidad: es apenas un medio que ha de realizar obra viviente por el calor y el aliento de los ciudadanos” (...).

“En el orden político, no cabe suprimir fuerzas sin crear inmediatamente las sustitutivas. La reforma de la ley electoral, previniendo ese vacío, obliga el voto, y la abstención de los Ejecutivos invita y hace posible la disciplina partidaria. Sea la posibilidad un anticipo de los hechos consumados. Sean los comicios próximos y todos los comicios argentinos, escenarios de luchas francas y libres, de ideales y de partidos. Sean anacronismo de imposible reproducción tanto la indiferencia individual como las agrupaciones eventuales, vinculadas por pactos transitorios. Sean, por fin, las elecciones la instrumentación de las ideas”.

“He dicho a mi país todo mi pensamiento, mis convicciones y mis esperanzas. Quiera mi país escuchar la palabra y el consejo de su primer mandatario. Quiera votar”.

b- Extracto de la obra teatral Elecciones en la Puna, de Roberto Gache, estrenada en el Teatro Apolo de Buenos Aires el 1º de agosto de 1919

Nota: la obra contaba la historia de amor entre la hija de un gobernador de provincia (Quintín) y su primo, un joven político porteño (Rodolfo) que llegaba a la provincia para ayudar a su tío en las elecciones. A poco de llegar, el joven se entera de que su colaboración consistirá en ser precisamente el candidato. Entrecruzado con el desarrollo de la historia romántica, diversos diálogos y escenas daban cuenta de la discusión política acerca de las elecciones y el sentido de la representación. En uno de los primeros diálogos entre el joven político, Rodolfo, y su tío Quintín, este le dice:

“Quintín: Venís bien, muchacho. Acabamos de elegirte diputado...”

Rodolfo: Oh, es mucho anticipar. Esperemos lo que diga el pueblo...”

Quintín: Te callás, zonzo. El pueblo soy yo”.

Y luego, en otra discusión entre Quintín, Rodolfo y dos colaboradores (Carolqui y Borja), sostienen:

“Rodolfo: Quién sabe lo que este triunfo puede costar...”

Quintín: ¿Por qué lo decís?

Rodolfo: Ya ve la campaña que se hace desde Buenos Aires... Aquí mismo en la Puna hay muchos que quieren verlo fuera del gobierno.

Quintín: ¡Desagradecidos! ¡Yo, que los he manejado como hijos!

Rodolfo: Pero no eran hijos suyos.

Quintín: Todo lo que he hecho, es por el bien de la provincia, desde los puentes hasta el fraude (...) Ciudadanos... ¡qué ciudadanos ni mil demonios! La soberanía popular de esta provincia cabe adentro de una botella de chicha.

Carolqui: Si es así, hay que sacarla de ahí señor gobernador (...) Desde el fondo de mis principios le hago esta profecía: no nos mantenemos en el poder si no cambiamos de camino. (...) La legislatura está descontenta.

Quintín: Que siga descontenta... cualquier día la cierro ¡Qué vayan a deliberar a sus casas!

Carolqui: Ese recurso es un delito para la constitución de la provincia...

Quintín: ¡La constitución dice lo que yo quiero que diga! (...) –mirando a su alrededor–. Por aquí había una... ¿dónde la habré puesto? Ahí debajo de la mesa. La tengo ahí para asegurar la mesa. (...) ¿Dónde está el artículo que me prohíbe cerrar la legislatura cuando se me antoje?

Rodolfo: Pero, tío, no puede haber ninguna disposición que autorice semejante atentado.

Quintín: (Furioso) ¡Qué atentado ni qué niño muerto! ¿Cuántos artículos tiene? ¿Ciento veinte? Le falta el ciento veintiuno: “El gobernador cierra la legislatura cuando se le da la gana, la abre cuando se le antoje y hace con el gobierno lo que se le ocurre”... En qué país vivimos, que uno no pueda hacer lo que quiera de lo suyo. ¡Librito de porquería! ¡El trabajo que me das sin conocerte!”.

Actividades:

Comparar y contrastar lo indicado por la Ley Sáenz Peña, por el propio Roque Sáenz Peña y el sentido que el personaje de la obra le da a la Constitución y a las leyes electorales.

2- La Reforma Universitaria

“La juventud argentina de Córdoba a los hombres libres de Sud América

Hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que, en pleno, siglo XX, nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Creemos no equivocarnos, las resonancias del corazón nos lo advierten: estamos pisando sobre una revolución, estamos viviendo una hora americana.

La rebeldía estalla ahora en Córdoba y es violenta porque aquí los tiranos se habían ensoberbecido y era necesario borrar para siempre el recuerdo de los contrarrevolucionarios de Mayo. Las universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos y – lo que es peor aún– el lugar en donde todas las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que las dictara.

(...)

Nuestro régimen universitario –aún el más reciente– es anacrónico. Está fundado sobre una especie de derecho divino: el derecho divino del profesorado universitario. Se crea a sí mismo. En el nace y en el muere. Mantiene un alejamiento olímpico. La Federación Universitaria de Córdoba se alza para luchar contra este régimen y entiende que en ello le va la vida. Reclama un gobierno estrictamente democrático y sostiene que el *demos* universitario, la soberanía, el derecho a darse el gobierno propio radica principalmente en los estudiantes. El concepto de autoridad que corresponde y acompaña a un director a un maestro en un hogar de estudiantes universitarios no puede apoyarse en la fuerza de disciplinas extrañas a la sustancia misma de los estudios. La autoridad, en un hogar de estudiantes, no se ejercita mandando, sino sugiriendo y amando: *enseñando* (...).

(...)

Al confesar los ideales y principios que mueven a la juventud en esta hora única de su vida, quiere referir a los aspectos locales del conflicto y levantar bien alta la llama que está quemando el viejo reducto de la presión clerical. En la Universidad Nacional de Córdoba y en esta ciudad no se han presentado desórdenes; se ha contemplado y se contempla el nacimiento de una verdadera revolución que ha de agrupar bien pronto bajo su bandera a todos los hombres libres del continente (...)

La juventud ya no pide. Exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar ese

pensamiento propio en los cuerpos universitarios por medio de sus representantes. Está cansada de soportar a los tiranos. Si ha sido capaz de realizar una revolución en las conciencias, no puede desconocerle la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa.

La juventud universitaria de Córdoba, por intermedio de su Federación, saluda a los compañeros de la América Latina toda y les incita a colaborar en la obra de libertad que inicia”.

Actividades:

-¿De qué se trata el conflicto político planteado en este documento?, ¿quiénes son los actores en pugna?

-¿Cuáles son las causas que movilizan a los estudiantes cordobeses?

-¿Qué tipo de organización proponen para el gobierno de la Universidad?

-¿Cuál es el rol que se le asigna a la juventud?

-¿Qué relación podría establecerse entre este movimiento de Reforma Universitario y las transformaciones políticas y sociales que vivía la sociedad por esos años?

-¿Cuáles fueron los límites de dicho proceso de Reforma?

BIBLIOGRAFÍA

- Ansaldi Waldo, Alfredo Pucciarelli y José Villarroel (comp.), *Argentina en la paz de dos guerras (1914-1945)*, Buenos Aires, Biblos, 1993.
- Armus, Diego (comp.), *Mundo urbano y cultura popular. Estudios de historia social argentina*, Buenos Aires, Sudamericana, 1990.
- Camarero, Hernán, *A la conquista de la clase obrera. Los comunistas y el mundo del trabajo en Argentina. 1920-1935*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2007.
- Cattaruzza, Alejandro, *Historia de la Argentina. 1916-1955*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2009.
- De Privitellio, Luciano, *Vecinos y ciudadanos. Política y sociedad en la Buenos Aires de entreguerras*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2003.
- Falcón, Ricardo (Dir.), *Democracia, conflicto social y renovación de ideas (1916-1930). Tomo VI*, Buenos Aires, Sudamericana, 2000. .
- Gerchunoff, Pablo, *El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un siglo de políticas económicas argentinas*, Buenos Aires, Emecé, 2007.
- González Velasco, Carolina, *Gente de Teatro. Ocio y espectáculos en la Buenos Aires de los años veinte*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2012.
- Gutiérrez, Leandro y Romero, Luis Alberto, *Sectores populares y cultura política. Buenos Aires en la entreguerras*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2007.
- Rocchi, Fernando, “Consumir es un placer. La industria y la expansión de la demanda en Buenos Aires a la vuelta del siglo pasado”, en *Desarrollo Económico*. Vol. 37, N° 148, 1998.
- Rock, David. *El radicalismo, 1890-1930*, Buenos Aires, Amorrortu, 1992.
- Romero, José Luis y Romero Luis Alberto, *Buenos Aires. Historia de cuatro siglos*, Buenos Aires, 2° ed., Altamira, 2000.
- Romero, Luis Alberto, *Breve historia contemporánea de la Argentina*, Buenos Aires, 2° ed., Fondo de Cultura Económica, 2001.

CAPÍTULO 2: *Incertidumbre política y redefinición del Estado: entre la crisis institucional y las transformaciones sociales. 1930-1943*



Villa Desocupación.

El período comenzó signado por una doble crisis: por un lado, la crisis de la economía mundial, que impactó fuertemente en el modelo agroexportador en el que se basaba la economía nacional. Por otro lado, un golpe de Estado puso fin al segundo gobierno de Yrigoyen y trajo consigo una crisis de los mecanismos y sentidos de la representación y del sistema político en su conjunto. Esa doble

coyuntura de crisis atravesó toda la década y modificó el perfil de la sociedad, de la economía y del Estado mismo.

Hacia el final del período considerado en este capítulo, existía una economía que seguía siendo agroexportadora pero que contaba con una base de industrias livianas más extendida y consolidada. En este cambio, el Estado había tenido un rol importante y también distinto que en la etapa anterior: frente a la crisis, intervino de distintas maneras en la economía y se convirtió él mismo en un actor económico.

Al compás de este cambio –promovido por la emergencia de la crisis–, el perfil de la sociedad, en términos generales, también se modificó: la inmigración de ultramar continuó menguando, pero las principales ciudades se vieron nuevamente desbordadas como consecuencia del intenso proceso de migración interna. Estos migrantes, en definitiva, se convirtieron en la mano de obra industrial que trabajaba en esas nuevas fábricas que se multiplicaban en las ciudades y en los cordones suburbanos de Buenos Aires, Rosario, Córdoba.

Consecuentemente, una vez pasado el punto más álgido de la crisis, el crecimiento del número de obreros estimuló, también, el incremento de las organizaciones obreras, sus reclamos y negociaciones con empresarios y con el Estado y conflictos diversos. Asimismo, el crecimiento de la población urbana trajo consigo, también, cambios en las pautas de vida y el consumo.

Desde el punto de vista político, el golpe de Estado no solo interrumpió la continuidad institucional iniciada en 1912, sino que abrió un escenario político distinto, con nuevos actores –en relación a quienes habían sido protagonistas en los años 20– y nuevos sentidos para la representación y las prácticas políticas. Si bien se mantuvo un sistema electoral y representativo como mecanismo para designar autoridades, se practicó abiertamente el fraude, la violencia y la represión. El período se cierra en 1943 con un nuevo golpe de Estado: si bien también fue encabezado por militares que contaron con apoyos civiles, esta vez el Ejército participó autónoma e institucionalmente bajo el comando de sus más altas jerarquías. Finalmente abandonaba su rol de árbitro o sostén de una actividad civil, para ocupar un lugar como protagonista principal.

Este capítulo analiza los principales acontecimientos históricos del período en cuestión a partir de cinco ejes: la política, la economía, la sociedad, la cultura y el contexto internacional.



El general José Félix Uriburu.

I- GOLPE O REVOLUCIÓN: UNA NUEVA ETAPA POLÍTICA

El 6 de septiembre de 1930 un golpe militar encabezado por el general del Ejército José Félix Uriburu, puso fin al gobierno de Yrigoyen. Se abrió, a partir de ese momento, un nuevo escenario político en varios sentidos: por un lado, el golpe significó el quiebre de una continuidad institucional que, con aciertos y flaquezas, venía funcionando desde 1912. Por otro lado, permitió la entrada a escena de nuevos actores políticos, entre ellos el Ejército, la Iglesia y los grupos nacionalistas al tiempo que dejaba en evidencia la debilidad de los partidos políticos. En tercer lugar, el golpe reavivó la discusión sobre las reglas y las prácticas de la vida política: en qué consistía la democracia, cuál era el sentido de la representación política, quiénes podían y debían votar, qué sentido tenían los partidos políticos, etcétera.

Los acontecimientos del 6 de septiembre fueron protagonizados no solo por grupos militares, sino que también contaron con el apoyo de diversos sectores de la sociedad civil. En algún sentido, el golpe venía anunciándose desde hacía meses a través de la prensa y en distintos espacios políticos en los cuales las críticas al gobierno radical proliferaban explícitamente. No obstante, las coincidencias en el diagnóstico sobre la necesidad de intervenir en la escena política en contra de Yrigoyen acababan en ese punto: civiles y militares tenían distintas ideas sobre las fórmulas que debían sucederse, incluso dentro de los propios militares había proyectos contrapuestos.

Por un lado, el propio Uriburu, a tono con la crisis que atravesaba la democracia en todo el mundo, proponía un ordenamiento de la sociedad basado en la representación de intereses corporativos (y no individuales como prevé la democracia liberal) y con un fuerte apoyo en las estructuras militares. Dado que había reservado para sí la presidencia de la Nación, desde ese lugar intentó promover una reforma de la Constitución en ese sentido.

Pero su proyecto rápidamente encontró límites. Algunos de los partidos políticos que, de manera más o menos explícita habían participado del golpe, ya se habían organizado en una Federación Nacional Democrática y se oponían de plano a las formas corporativas. Una vez corrido Yrigoyen de la escena política, reclamaban una vuelta al sistema de representación de partidos. E incluso, pese al lugar destacado que Uriburu había asignado al Ejército, en las filas militares no todos aprobaban el proyecto corporativo. Por el contrario, un grupo de oficiales liderados por el general Agustín P. Justo mantenía diálogos con diversas fuerzas políticas y también buscaba una salida electoral.

En ese contexto, la figura de Uriburu y su proyecto corporativo perdieron poder: debió convocar a elecciones presidenciales y correrse de la candidatura. En un agitado clima político, finalmente Justo logró encabezar una coalición de partidos, llamada la Concordancia, y ganar las elecciones en noviembre de 1931. En segundo lugar quedó otra alianza política, integrada por el partido Demócrata Progresista y el Partido Socialista. El radicalismo se abstuvo de participar en los comicios.

Justo fue presidente entre 1932 y 1938. Ese año se convocó a nuevas elecciones presidenciales en las que el candidato oficial Roberto Ortiz triunfó. En 1940 debió alejarse del poder por una grave enfermedad y fue sucedido por su vicepresidente Castillo que, en 1943, sufrió un golpe de Estado encabezado por los militares Rawson, Ramírez y Farrell. Por detrás de ese breve relato cronológico se entretajan algunos de los problemas mencionados anteriormente en relación con la crisis política.



Agustín P. Justo.

Sobre las prácticas políticas y la crisis de la democracia liberal

La llegada de Justo a la presidencia terminó con el proyecto corporativo impulsado por Uriburu y pareció sentar las bases para volver a un sistema electoral de partidos. Pero esto no logró estabilizar en absoluto la situación y más bien generó un escenario más conflictivo y falaz. Por un lado, los propios partidos y agrupaciones que participaron en la elección (conservadores, socialistas, demócrata progresistas) entraron en crisis y disputas internas. Por otro lado, el radicalismo que se había abstenido en la elección de 1931 pasó a impugnar la legitimidad de Justo al que acusaban de haber hecho fraude para ganar. Incluso, algunos grupos radicales protagonizaron levantamientos armados que tensionaban aún más el panorama político.

Por su parte, Justo no contaba con alianzas sólidas y más bien dependía de constantes arreglos y negociaciones con cada uno de esos actores políticos que lo habían apoyado. Sabía además que, si bien los radicales oscilaban entre la abstención y el levantamiento armado, en cuanto se reorganizaran y volvieran a presentarse a una elección sería difícil ganarles. En este incierto panorama, si el objetivo era quedarse en el poder, se trataba entonces, para el gobierno, de controlar el desarrollo y el resultado electoral de todos los comicios que se sucedieran en adelante: la utilización de documentos de personas ya fallecidas, la expulsión de fiscales de partidos de oposición en las elecciones, el secuestro de libretas de enrolamiento, el cambio de boletas, la aplicación directa de la violencia sobre dirigentes, militantes y electores, etc., pasaron a ser prácticas cada vez más corrientes. En este sentido, el fraude y la violencia eliminaron todo rastro de unas reglas de juego comunes y todo el sistema político perdió legitimidad.

La elección de 1937, en la que se eligió al sucesor de Justo, fue la expresión más acabada de la puesta en práctica de estos mecanismos de fraude. Justo no podía ser reelecto y los radicales finalmente habían cerrado filas detrás de Marcelo T. de Alvear como candidato a la presidencia, con lo cual la elección se presentaba reñida. Justo había atado alianzas con diversos sectores (partidos conservadores, nacionalistas y con la Iglesia) pero nada le aseguraba que su candidato pudiera ganar, así es que el fraude se presentaba como la herramienta más firme para conservar el poder. En estas condiciones, la fórmula promovida por el gobierno nacional se impuso a la de los radicales, en medio de denuncias y escándalos.



Elecciones en la Capital Federal, 1937. Mesa de votación.

La “Década Infame”

Si la aplicación del fraude daba cuenta de la crisis de la democracia liberal, otro tanto se expresó en una serie de hechos de corrupción que se convirtieron en verdaderos escándalos políticos.

En 1935, Lisandro de la Torre denunció el tratamiento preferencial que el gobierno les concedía a algunas empresas y frigoríficos extranjeros a diferencia de la exigencia con que supervisaba a los establecimientos más pequeños y propuso la creación de una comisión para investigar las posibles irregularidades cometidas por las grandes empresas exportadoras de carne (Swift, Armour, Anglo). Su denuncia, por otra parte, tenía que ver con las cláusulas preferenciales, y las irregularidades, que las empresas británicas habían conseguido a partir de la firma del Pacto Roca-Runciman que se explicará luego. La comisión absolvió a las compañías pero el senador de la Torre presentó un informe en disidencia. Allí mostraba cómo los frigoríficos extranjeros evadían impuestos y responsabilizó a miembros del gobierno como cómplices de estas irregularidades. En medio de ese debate se produjo un atentado dirigido a de la Torre que hirió mortalmente al senador demócrata progresista Enzo Bordabehere, representante de Santa Fe.

Por otro lado, en la ciudad de Buenos Aires, las denuncias de corrupción

rodearon toda la negociación entre la empresa proveedora de electricidad, la CADE, y el gobierno municipal. También alrededor de la compra de terrenos en El Palomar, en la zona oeste del conurbano bonaerense, destinados a las fuerzas militares. Y luego, en 1942, se descubrieron muchas y diversas irregularidades en el manejo de los sorteos de la Lotería Nacional. Todos estos hechos, sumados a los del fraude y la violencia política, son la razón por la cual se ha hablado de los años 30 como los de la “Década Infame”.

Otros actores políticos: Ejército e Iglesia

El escenario político cambió, no solo por los acontecimientos mencionados, sino también porque aparecieron nuevos actores políticos y nuevas formas de representación que cobraron relevancia.

En primer lugar, la debilidad de la representación política partidaria fue profundizada en tanto otros modos de representación se hacían más contundentes, entre ellos, el de las corporaciones. Más allá de que el proyecto uriburista hubiera fracasado, lo cierto es que diversas corporaciones comenzaron a tener mayor peso en la discusión política: diversas organizaciones que representaban intereses económicos, como la Sociedad Rural Argentina, pasaron a convertirse en interlocutoras directas del Estado y a presionar a favor de sus intereses. Por otra parte, también en la medida en que los partidos que sostenían intereses de clase, como el socialista o el comunista, atravesaban una etapa de crisis, el movimiento obrero en sí comenzó a tener mucha mayor incidencia a través de sus organizaciones gremiales y sindicales.

Otro actor que poco a poco se convirtió en protagonista de la política fue el Ejército. Si bien entre sus integrantes era posible entrever distintas adscripciones políticas (uriburistas, justistas, radicales, nacionalistas, liberales, etc.), a partir de 1930 el Ejército pasa a constituir un foco de poder y legitimidad. Justo había logrado consolidar su propio liderazgo entre los oficiales y, apelando al profesionalismo militar, intentó colocar al Ejército por fuera de las disputas políticas. Esto colaboraba, a su vez, a enlazar los valores militares con los de la Nación misma, dotando de legitimidad a toda la corporación militar.

Junto con esto, Justo apoyó concretamente el desarrollo de la institución: mejoró su capacitación, amplió el reclutamiento, impulsó proyectos que los colocaban como protagonistas, construyó edificios e infraestructuras especiales destinadas a las actividades militares. En algún sentido, fue esta mejor situación

material, junto con el reconocimiento de sus valores, lo que proyectó al Ejército como uno de los principales actores políticos. Pese a diversos desafíos, Justo logró controlar a la mayor parte de la oficialidad. La situación cambió al asumir Ortiz, y esto mismo provocó un realineamiento y un accionar distinto del Ejército en los años siguientes.

Por otro lado, el Ejército mantuvo estrechos vínculos con la Iglesia: esto potenció el rol que ambos se otorgaban de custodios de los valores nacionales. A fines del siglo XIX, la religión, bajo la hegemonía del liberalismo, se vivía de manera intimista, como devoción tradicional, y no era una fuente de inspiración de la vida pública. En los años 30, la situación había cambiado: la Iglesia había iniciado una radical contraofensiva católica a partir de las orientaciones impartidas desde Roma por los papas Pío XI y Pío XII y su actividad se reorientó mayoritariamente hacia el área social. Aunque esto no representara en sí mismo una novedad, dado que las iniciativas eclesíásticas en este terreno habían sido numerosas desde principios de siglo, este proceso asumió formas y contenidos diversos de los del pasado. No se trataba de arrancar alguna reforma, sino que era parte fundamental de su proyecto de recristianización integral de la sociedad argentina.

Contando con el apoyo del Estado, se crearon nuevos arzobispados, nuevas parroquias, seminarios y colegios religiosos, se reforzó la disciplina sacerdotal y se promovió un rígido encuadramiento para el laicado católico a través de la promoción de la Acción Católica. Desde el punto de vista ideológico, esta especie de cruzada católica buscaba combatir los males producidos por la modernidad y el liberalismo: se condenaba el individualismo, el socialismo y el comunismo, las costumbres licenciosas, el cambio de rol de la mujer, la educación laica, etcétera. Junto con esto, quedaba claro que el objetivo político central era la cristianización del Estado, es decir, la aceptación de que el catolicismo era la doctrina vertebradora de la sociedad y de la política argentina.



Cierre del Congreso Eucarístico Internacional, realizado en el cruce de las calles Alvear y Dorrego, en el barrio de Palermo de Buenos Aires, en 1934.

Los principales partidos

Pese al avance de nuevos actores políticos, a la crisis del sentido de representación partidaria frente a la representación corporativa, y a las propias crisis que cada agrupación debió atravesar, a lo largo de toda la década los partidos políticos, con mayor o menor grado de institucionalidad, cambiando los nombres y las alianzas, siguieron funcionando.

Diversas agrupaciones se unieron en 1931 y crearon la Concordancia, una alianza electoral entre los conservadores, los radicales antipersonalistas –es decir contrarios a la figura del expresidente Yrigoyen– y el Partido Socialista Independiente. Esta alianza conservadora asumió el poder político durante toda la década. Apoyados por el Ejército y los terratenientes, eran defensores del modelo agroexportador y propiciaron en 1940 el Plan Pinedo, al que se hará referencia luego.

En este contexto, el radicalismo pasó de una actitud de abstencionismo e impugnación al fraude a participar en elecciones asumiendo así una posición más conciliadora con el gobierno conservador. Fue hacia 1935 cuando, luego de que Marcelo T. de Alvear se pusiera al frente del partido, el radicalismo se propuso volver a la batalla electoral. Esta decisión provocó divisiones en el seno de la agrupación.

Uno de esos grupos enfrentados a Alvear fue la llamada Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina (FORJA).

FORJA se fue definiendo a través de una práctica político-intelectual que afirmaba la tradición yrigoyenista para marcar los contrastes entre la dirección del partido y su historia. Arturo Jauretche y Raúl Scalabrini Ortiz fueron sus principales dirigentes: ambos escribieron libros y artículos en los que denunciaban a la oligarquía y el imperialismo, pugnaban por la democracia y la unidad latinoamericana. Hacia 1945, con el surgimiento del peronismo, muchos de sus integrantes se incorporaron a este nuevo movimiento y se apartaron de la UCR.



Mesa directiva de Forja: Raúl Scalabrini Ortiz en tercer lugar desde la izquierda; Arturo Jauretche, en cuarto lugar.

Los demócratas progresistas fueron, junto con los socialistas, uno de los partidos más importantes de la oposición en el Congreso. Debido a la política abstencionista de la UCR, recibieron un importante número de bancas en el Congreso. Su figura saliente fue el senador Lisandro de la Torre, que alcanzó notoriedad durante el debate de las carnes. A su muerte el partido entró en un período de decadencia.

Por su parte, el socialismo cumplió el papel de oposición democrática en un régimen fraudulento. Lograron un importante apoyo electoral en los centros urbanos y fueron considerados precursores de un conjunto de medidas de reforma social por sus propuestas parlamentarias: el divorcio, ciertos derechos para las mujeres y derechos para los trabajadores, entre otros.

II- LA CRISIS ECONÓMICA Y EL NUEVO ROL DEL ESTADO

La relativa bonanza económica, que durante los años 20 había caracterizado a la economía norteamericana, se agotó bruscamente a partir de 1929: la caída de la Bolsa de Nueva York –centro de la actividad bursátil internacional– arrastró consigo a las principales economías del mundo. El sistema financiero internacional quedó quebrado, los intercambios comerciales se retrajeron y en la mayoría de los países se propagó el cierre de empresas y de fábricas, la desocupación y, consecuentemente, la caída del consumo. Todas esas situaciones combinadas caracterizaron a estos años, llamados entonces como los de la Gran Depresión.

Esta crisis tuvo un fuerte impacto en la economía nacional y más específicamente en el modelo agroexportador en el que se basaba la economía. Los países centrales, para salir de la crisis, disminuyeron sus compras de materias primas a los países periféricos y aplicaron distintas políticas proteccionistas para resguardar sus producciones y sus divisas. A su vez, los acuerdos bilaterales comerciales reemplazaron el comercio abierto y multilateral, lo cual significaba relaciones preferenciales solo entre dos países en materia comercial.

Por décadas, la Argentina había estructurado su comercio internacional a partir del vínculo con Gran Bretaña: nuestro país exportaba carnes y granos, y recibía manufacturas, bienes de capital e inversiones. Si bien ese tipo de relación ya se había comenzado a modificar en los años 20, a partir de la incorporación y consolidación de la economía norteamericana, lo cierto es que fue a partir de los años 30 cuando el modelo agroexportador entró en crisis.



La crisis económica y las consecuencias sociales.

La intervención del Estado en materia comercial

En efecto, como consecuencia de la crisis internacional, Gran Bretaña decidió en la Conferencia Internacional de Ottawa (Canadá) dar preferencia en la compra de materias primas a los países que integraban la Comunidad Británica de Naciones (Commonwealth) en desmedro de los intercambios realizados con otros países agroexportadores. La reducción de las compras británicas provocó entonces una alteración de toda la economía argentina y evidenció los límites del modelo agroexportador y el carácter dependiente de la economía.

El nuevo contexto perjudicaba no solo a los grandes productores agropecuarios, principales beneficiarios de las exportaciones, sino también al mismo Estado, en tanto gran parte de sus recursos provenían de los aranceles cobrados por los intercambios comerciales. El gobierno de Justo encargó entonces al vicepresidente Julio A. Roca (hijo) la misión de negociar un acuerdo comercial. En mayo de 1933 se firmó el Pacto Roca-Runciman: se trataba de un acuerdo por el cual se establecía que la Argentina recibiría el mismo trato comercial que recibían las excolonias inglesas. El argumento de Roca, para sostener esta propuesta, era que la Argentina, desde la perspectiva económica, era parte casi integrante del Imperio Británico.

Esta actitud, así como las cláusulas del acuerdo, generaron controversias en la prensa y en la dirigencia política. Tanto los socialistas como los demócratas progresistas denunciaron el tratado y alertaron sobre los efectos que su aplicación podría tener entre los consumidores del mercado interno.

Las cláusulas del acuerdo más importantes apuntaban a asegurar para la Argentina una cuota de exportación de toneladas de carne enfiada: el 85% de la exportación de carnes debía realizarse a través de frigoríficos extranjeros. Por otro lado, se liberaba de impuestos a la importación de carbón y a otros productos de origen inglés. La Argentina se comprometía a no reducir las tarifas de los ferrocarriles ingleses.

Otras formas de intervención en la economía

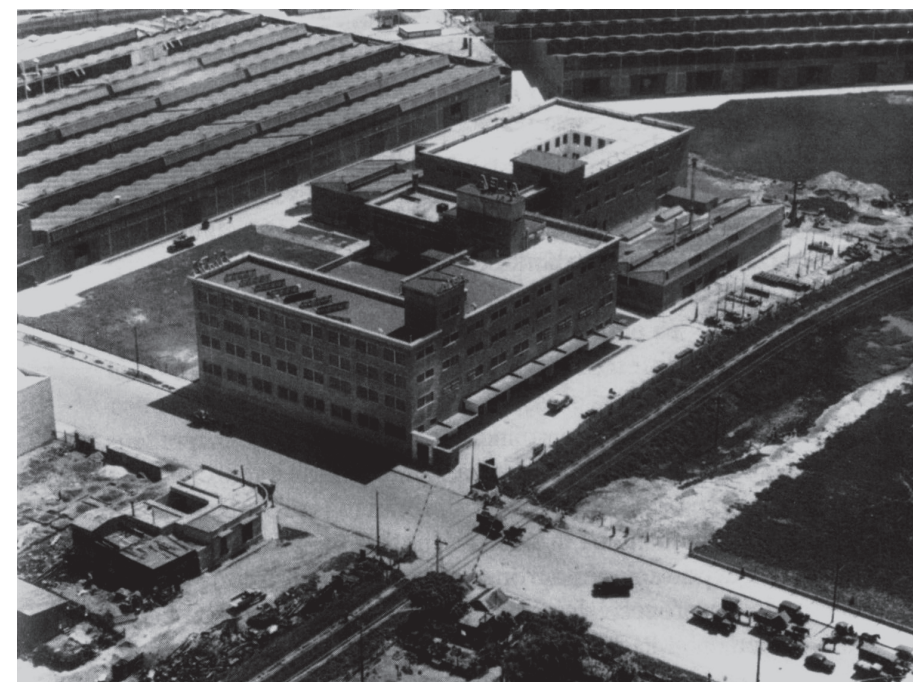
De igual modo, la decisión del Estado de intervenir para reactivar la economía se evidenció también en otras medidas como la creación de organismos reguladores de la producción agrícola y ganadera y de entes oficiales de comercialización como la Junta Reguladora de Granos, Junta Nacional de Carnes, Junta Reguladora de Vinos, de la Industria Lechera, de la Yerba Mate y del Algodón. Estas juntas tendían a controlar la producción y equilibrar la oferta y la demanda. También, en 1935 se creó el

Banco Central con el objetivo de regular el crédito y el dinero circulante, controlar la actividad bancaria y actuar como agente financiero.

Otro modo de intervenir en la economía fue la promoción y puesta en marcha de diversos proyectos de obra pública. En 1932 creó la Dirección Nacional de Vialidad, organismo encargado de realizar la pavimentación de caminos y la construcción de rutas. Estas obras, además de permitir dinamizar el sistema de transporte, generaron importantes fuentes de trabajo. La red caminera desplazó al ferrocarril como sistema de comunicaciones nacionales. A su vez, el mejoramiento de los caminos fue un estímulo para la promoción también del turismo y esto, a su vez, llevó a que el Estado invirtiera en la construcción de infraestructura turística, tal el caso de la construcción del balneario de Playa Grande, el Casino y el Hotel Provincial en Mar del Plata. También en estos años se construyó el Hotel Llao Llao y el Centro Cívico en Bariloche.



Fábrica de neumáticos Firestone, 1940.



Fábrica de pinturas ALBA, en el barrio de Nueva Pompeya, Buenos Aires.

Igualmente, en el área metropolitana, y también como parte de los proyectos de obra pública, se entubó el arroyo Maldonado y se trazó la Avenida General Paz, se construyó el Obelisco y el Ministerio de Obras Públicas en 1936.

Proceso de industrialización por sustitución de importaciones (ISI)

La crisis desatada a partir de los años 30 también fue un poderoso estímulo para el proceso de industrialización. Hasta los años 30 el crecimiento de la industria argentina se había realizado bajo el impulso de la economía agroexportadora (frigoríficos, ingenios, derivados de la actividad agrícola-ganadera). Con la coyuntura de las guerras mundiales y la crisis abierta en 1929 se produjo un desabastecimiento de productos industriales y una baja en los precios de los productos primarios lo cual, en definitiva, significaba menos divisas para poder comprar manufacturas europeas.

Esta coyuntura creó las condiciones necesarias para que, poco a poco, se fueran sustituyendo los productos comprados afuera por otros ahora fabricados en el país. A este proceso se lo denomina de “industrialización por sustitución de importaciones”. Las industrias que se desarrollaron en esta etapa fueron la textil, la alimenta-

ria, además de las de maquinarias, artefactos eléctricos y derivados del caucho.

Parte del crecimiento industrial se debió, además, a la llegada de empresas norteamericanas que para sortear la política bilateral que privilegiaba las compras al Reino Unido, decidieron instalar las fábricas en el país.

Entre las empresas de capital norteamericano radicadas en país podemos encontrar a Goodyear (1930), Toddy (1930), Royal (1935), Quaker y Adams (1936), Ducilo (1937), Philco (1931), Eveready (1937), Firestone (1931), Johnson & Johnson (1931), Pond's (1939), Kolynos (1941). También se instalaron empresas europeas como Nestlé (1930) y Suchard (1933), de Suiza; Ginebra Bols (1933) y Philips (1935), de Holanda; Pirelli (1930) y Olivetti (1932), de Italia; Hierromat (1933) y Elaboradora General de Plomo (1934), de Francia; y Duperial (1935) y Electroclor (1936), de Gran Bretaña.

Este proceso de industrialización tuvo sus límites ya que afectó centralmente a las ramas livianas, como la industria alimentaria y textil. Además, contó con pocos capitales nacionales. Junto con esto, la idea que predominaba, tanto en el gobierno como en muchos sectores de la economía, era que la industria seguía siendo una actividad subsidiaria de la economía agroexportadora y que el impulso de los últimos años solo apuntaba a sortear la escasez de manufacturas importadas.

Durante toda la década las medidas económicas impulsadas se presentaban como coyunturales, a la espera de que todo el mercado mundial se normalizara y la Argentina pudiera seguir haciendo lo que siempre hizo: exportar materias primas, comprar manufacturas. No obstante, algo de todo el impulso industrializador sedimentaba y creaba nuevas bases para la economía.

Recién en noviembre de 1940, bajo la presidencia de Castillo, el ministro de Hacienda, Federico Pinedo, presentó un plan económico que buscaba dar coordenadas más firmes (y no ya respuestas puntuales) sobre el rumbo económico a seguir. En la presentación ante el Senado Nacional del Plan de Reactivación Económica de 1940 sostuvo: “La vida económica de un país gira alrededor de una gran rueda maestra que es el comercio agroexportador. Nosotros no estamos en condiciones de reemplazar esa gran rueda, pero estamos en condiciones de crear, al lado de ese mecanismo, algunas ruedas menores que permitan el desarrollo de la economía del país”.

El llamado “Plan Pinedo” se basaba en tres objetivos: insistir en la compra de las cosechas por parte del Estado, para sostener su precio; estimular la construcción pública y privada, por su efecto multiplicador sobre la economía; e incentivar la producción industrial. En este sentido, la propuesta de reactivación económica incluía

medidas consideradas “keynesianas”, destinadas a fortalecer la balanza de pagos y fomentar una expansión del ingreso y de la producción nacional. Para ello era necesario realizar una reforma financiera y otorgar créditos al sector industrial y para la construcción de viviendas populares.

Al hablar de “medidas keynesianas”, se hace alusión a aquellas que responden a la corriente de pensamiento económico vinculada a las ideas del economista inglés John Keynes (1883-1946), quien sostenía que para asegurar el pleno empleo, y con ello el aumento de la propensión al consumo, era necesaria la intervención del estado para fortalecer la actividad de los empresarios.

El plan, además, proponía mejorar las relaciones comerciales con Estados Unidos a través del establecimiento de un cambio favorable para las compras de productos norteamericanos. También indicaba la solicitud de préstamos a ese país para financiar el plan y mejorar la vinculación comercial con los países sudamericanos.

Pese a todas estas ideas y propuestas, Pinedo seguía apoyando el punto de que la base de la economía argentina se encontraba en la producción agropecuaria y que las industrias venían a complementar a esa base. Por eso, también, Pinedo apostaba principalmente a la promoción de las industrias que elaboraban las materias primas locales, con ventajas comparativas naturales por oposición a aquellas “artificiales”, que necesitan protección aduanera y, por lo tanto, resultarían antieconómicas en períodos de paz.

Sin embargo, por diversas razones políticas, el plan de Pinedo no fue aprobado. Radicales y conservadores no lograron avanzar en la discusión legislativa así es que el plan económico terminó archivado. Cabe recordar, en este punto, que en los meses en que se discutía el Plan, ocurrieron diversos hechos de violencia política y fraude en comicios realizados en Santa Fe y Mendoza. Por esos motivos, los legisladores radicales se opusieron una y otra vez al tratamiento del plan y sostuvieron que no lo considerarían hasta que no sean intervenidas ambas provincias.

Un mercado interno

Más allá de los clivajes, para mediados de los años 30 lo peor de la crisis había pasado. Y, en algún sentido, las medidas de intervención económica y de promoción del proceso de industrialización por sustitución de importaciones habían dado resultados relativamente positivos. Desde otra perspectiva, esas situaciones fueron la

base en la que se asentó y acrecentó el mercado interno. Para que una industria –sobre todo las consideradas “livianas” – pueda desarrollarse, necesita de un mercado interno, es decir, de consumidores. Y para que existan consumidores debe existir trabajo que provea de salarios para comprar lo que se ofrece en el mercado. Ese circuito ya existía, por cierto, en los años 20; pero es a partir de los años 30, con el avance de la industrialización, que se consolida.

En este sentido, las transformaciones de la sociedad vinculadas con la llegada de migrantes internos y la extensión de los procesos de urbanización, constituyen el otro elemento fundamental para explicar el funcionamiento del mercado interno.

III- LA SOCIEDAD DE LOS AÑOS 30: MIGRACIONES Y URBANIZACIÓN

El proceso de industrialización trajo consigo la transformación de la sociedad: la crisis de la producción agraria impactó en diversas regiones del país y provocó la migración de muchos trabajadores rurales hacia las ciudades. Esto, a su vez, era estimulado por el hecho mismo del crecimiento industrial que se registraba en las ciudades y en sus alrededores. De ahí que las grandes urbes fueron un polo atractivo para los migrantes internos que veían en ellas las posibilidades de trabajo.

Signo de los nuevos tiempos, de la crisis y sus contrastes, en 1932 se levantó en Retiro Villa Desocupación o Villa Esperanza: allí se instalaron, al igual que en otras zonas de la capital y de otras grandes ciudades, ollas populares. Era la contracara de la remodelación del centro de la ciudad de Buenos Aires, donde a mediados de la década del 30 se levantaron construcciones como el Kavanagh, un edificio de 120 metros de altura, considerado en primer rascacielos del país y el Obelisco.

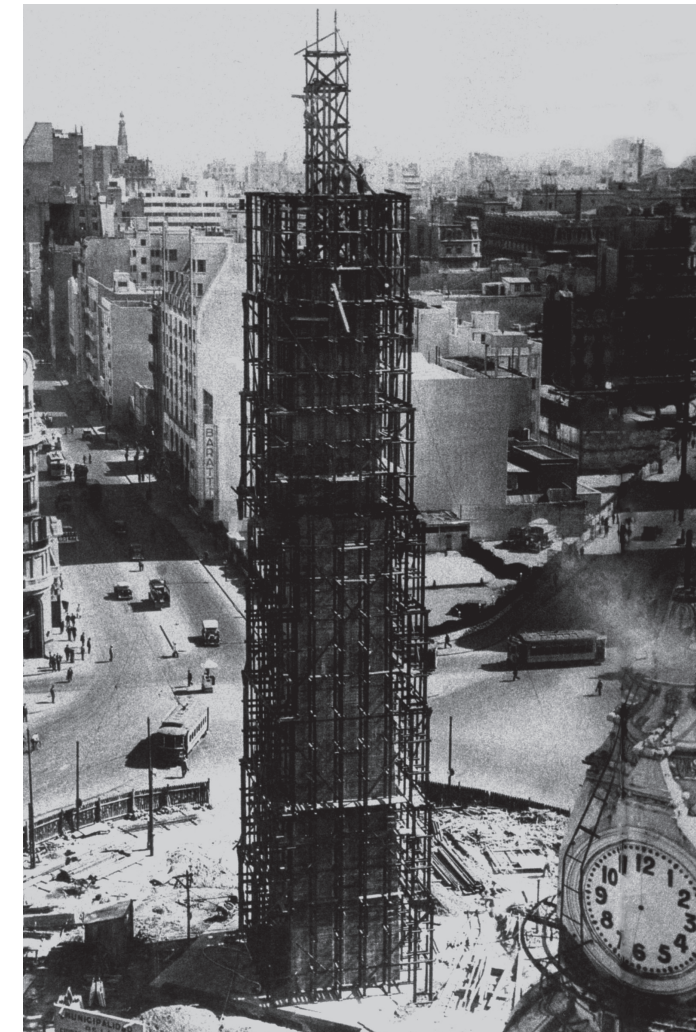
Por su parte, el crecimiento de industrias relacionadas al proceso de sustitución de importaciones trajo consigo el desarrollo urbanístico de algunas zonas. La participación de YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) en el mercado de combustibles, en expansión por el inicio de la red caminera, aumentó entre 1931 y 1934. Este florecimiento de YPF estimuló la construcción de barrios obreros cerca de la destilería de La Plata y la construcción de estaciones de servicio, lanzada en 1936. Las estaciones funcionaban como una suerte de comandos de vanguardia tecnológica, sinónimos de progreso y modernización. La arquitectura se basaba en un modernismo estilizado, con claros motivos icónicos (formas náuticas, pilotes, superficies lisas y blancas).

Una de las mejores obras del período resultó el edificio de los laboratorios de la empresa en Florencio Varela, fundado en 1940.

El fenómeno de las migraciones internas y el avance de la urbanización tuvieron

consecuencias decisivas para Buenos Aires y toda la región circundante: los barrios que se habían delineado en los años 20 se repoblaron con la llegada de los nuevos migrantes y, algunos en particular, transformaron totalmente su perfil. Los partidos aledaños a la ciudad de Buenos Aires también sintieron el impacto y crecieron notablemente, en tanto muchos de los nuevos núcleos industriales se instalaron en esas zonas.

El éxodo desde las provincias hacia la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana adquirió gran trascendencia y es comparable con el producido por las inmigraciones a comienzos de siglo.



Construcción del Obelisco, en Buenos Aires, 1936.

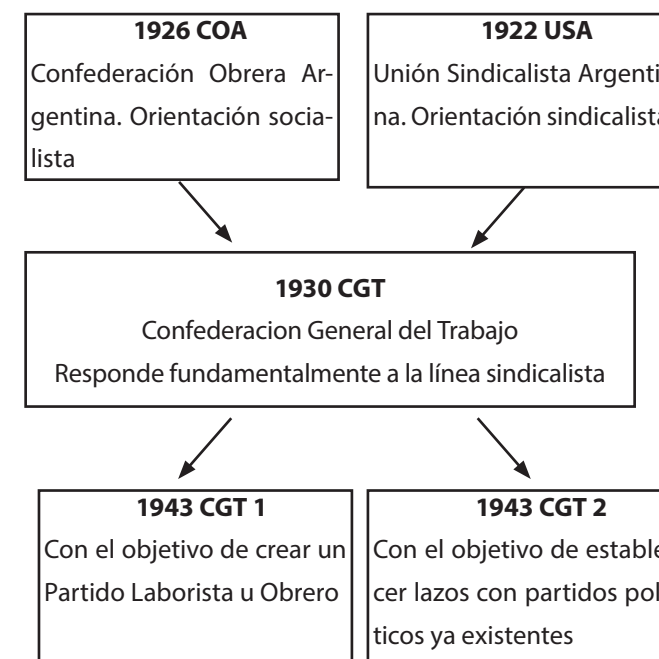
El movimiento obrero

En tanto el proceso de industrialización avanzaba y las migraciones continuaban, también crecía el número de obreros y se modificaba su perfil: a diferencia de los que llegaron a comienzos del siglo, los nuevos trabajadores eran argentinos y llegaban a la ciudad con experiencias diversas que pronto entraron en confrontación con las de los obreros más antiguos. No obstante, lo común para ambos –para los nuevos y los viejos obreros– eran las deficientes condiciones en que se encontraban: durante los primeros años de la década, la crisis fue profunda y afectó no solo a los salarios y el trabajo, sino que también repercutió en el costo de vida, el consumo y la infraestructura habitacional. Fueron estas situaciones de exclusión y explotación las que motivaron, también, la reorganización del movimiento obrero.

En 1930 se había fundado la Confederación General del Trabajo como resultado de la unión de las dos centrales obreras que existían en ese momento: una de tendencia sindicalista (USA) y otra de inclinación socialista (COA).

Ambas habían convivido, de manera conflictiva por cierto, durante años: mientras una basaba su acción en la lucha sindical y no creía en la eficacia de los partidos políticos obreros –tal el caso de la FORA de inclinación anarquista y la USA de tendencia sindicalista revolucionaria–, la otra fomentaba la organización de partidos obreros –entre ellos estaban los socialistas de la COA y los comunistas agrupados en la CUSA–. Esta última tendió a monopolizar la representación de los obreros hasta 1935 cuando comienzan los conflictos dentro de la Central de los trabajadores.

En 1943, la puja entre sindicalistas y políticos tensionó al movimiento obrero y finalmente la CGT se dividió nuevamente: de un lado (CGT 1), quedaron los ferroviarios, tranviarios, cerveceros, y del otro (CGT 2) los obreros de la construcción, gráficos, comercio, metalúrgicos, madereros, y los ferroviarios enrolados en otro gremio, La Fraternidad. La diferencia sustancial entre unos y otros radicaba en el modo de acercamiento a la vida política: los primeros aspiraban a construir un partido laborista u obrero prescindiendo de los partidos existentes. Los segundos buscaban establecer lazos más estrechos entre los partidos políticos de izquierda que ya funcionaban.



Breve esquema de las divisiones y tendencias del movimiento sindical en el período de entreguerras.

Resulta importante destacar que hacia mediados de la década de 1930 se produjo un cambio profundo en la naturaleza del movimiento obrero. La existencia de fábricas más grandes y de oportunidades para conseguir mejores empleos abrió la posibilidad para que los trabajadores se mostraran más agresivos. Las huelgas dejaron de ser un mecanismo solo defensivo y su número creció. Los trabajadores comenzaron a realizar demandas más audaces y sus huelgas se transformaron en herramientas para intentar organizar amplios sectores de obreros industriales. Así se creó la Federación Obrera Nacional de la Construcción, originada por un paro desatado por un trágico accidente de trabajo en 1935 que mantuvo la conflictividad hasta 1936.

La violencia fue intensa y generó solidaridad de otros trabajadores como taxistas y colectiveros. En esta organización predominaban los grupos comunistas. También de esa orientación era la Unión Obrera Textil que protagonizó una dura huelga de 1940-1941 contra Ducilo (Berazategui), una gran fábrica de rayón. Además los sindicatos madereros y metalúrgicos sostuvieron medidas de fuerza en 1942.

El rol del Estado frente a los conflictos sociales

La actitud del gobierno ante los problemas sociales osciló entre la represión y la indiferencia. Por un lado, y como parte de las políticas represivas y autoritarias que caracterizaron a los gobiernos de toda la década, se aplicó la Ley de Residencia, que implicó la deportación de obreros extranjeros e incluso la ley marcial para algunos anarquistas, considerados “expropiadores”. Se encarceló y se torturó a gran cantidad de trabajadores, de diversas filiaciones políticas: comunistas, anarquistas, etcétera.

Pero a partir de 1935, a medida que la crisis cedía y las huelgas, entonces, tenían más repercusiones, se buscó una nueva salida a la conflictividad. El Departamento Nacional del Trabajo, que había sido creado en 1908, comenzó a intervenir como árbitro ante las reivindicaciones obreras. Junto con esto, se generaron algunas políticas laborales como por ejemplo la Ley 11.640 (1932), que establecía el sábado inglés, es decir el descanso obligatorio en la tarde del sábado, y la Ley 11.729 (1936), que establecía la obligatoriedad para los patrones del comercio y la industria de pagar indemnización, vacaciones y enfermedad.

IV- EL MUNDO CULTURAL DE LOS AÑOS 30

Los años 30 constituyeron una rica etapa del desarrollo cultural, tanto por el fortísimo debate de ideas como por la discusión sobre el rol de los intelectuales y la relación con la política. Dichas cuestiones, de igual manera, se fueron transformando también en relación con los debates y desarrollos que llegaban de otros países. En ese sentido, tanto la Guerra Civil Española como el avance del nazismo y la formación de frentes populares (para pelear en contra del avance del fascismo) incidieron en las posiciones de los intelectuales y del campo cultural en general. Asimismo es también en los años 30 cuando se consolidan determinados productos culturales de consumo masivo, como el cine y la radio. En este caso su desarrollo también fue al compás de cómo se transformaban las industrias culturales, sobre todo la norteamericana, en el resto del mundo.

Intelectuales, política y nacionalismo

Una de las cuestiones que generó amplios debates fue el rol de los intelectuales ante la vida política, lo cual implicó una relación directa entre los intelectuales y los partidos o agrupaciones políticas. Así muchos intelectuales adscribían abiertamente

a una opción partidaria. Ricardo Rojas adhirió al radicalismo, Aníbal Ponce estuvo vinculado con el Partido Comunista (PC) lo mismo que el poeta Córdova Iturburu y que los escritores Héctor Agosti, Álvaro Yunque, María Rosa Oliver y Raúl González Tuñón.

Una vertiente del debate de ideas encuentra su jalón más importante en el desarrollo del pensamiento nacionalista: sus temas, ejes de debate y posiciones políticas involucraron de una u otra manera a todos los protagonistas del campo cultural. A su vez, las ideas nacionalistas encontraban distintas variantes dentro del pensamiento político de derecha, algunas bastante extremas por cierto. El uriburismo, por ejemplo, vinculado con la figura de Uriburu, sostenía tres principios: Nación, tradición y catolicismo, lo cual venía a recrear una determinada idea de orden, autoridad y jerarquía. En consonancia con los movimientos internacionales, en algunos casos el nacionalismo autoritario estuvo ligado al pensamiento católico, y en ciertos ejemplos, también al antisemitismo.

Distinta postura tenían otros nacionalistas que, en realidad, denunciaban a la “oligarquía” conservadora como “agente del imperialismo” y ponían en cuestión su legitimidad en tanto habían llegado y se mantenían en el poder a través de la violencia y el fraude. Estos nacionalistas reclamaban: democracia, autonomía económica y solidaridad latinoamericana. En este espacio de ideas, FORJA ocupaba un lugar central: se consideraba como la célula nuclear de un movimiento que conectaba la lucha nacional contra la dominación extranjera con las exigencias populares de mejoras socioeconómicas y participación política. Afirmaban reiteradamente que la fuente de legitimidad del poder solo se encontraba en la soberanía del pueblo. De esta manera se diferenciaba fuertemente de un movimiento fascista ratificando su “fe en la democracia”. También eran partidarios de un auténtico federalismo. Existía para ellos una estrecha conexión entre emancipación económica y justicia social, pero para lo segundo se hacía necesario lo primero, de ahí el acento puesto en la prioridad de una política económica nacional de corte industrializador. Esto también abriría el camino hacia una comunidad supranacional de los pueblos latinoamericanos.

Quienes militaban en este campo de ideas, no eran solo quienes pertenecían a FORJA, (Dellepiane, Jauretche, Scalabrini Ortiz), sino también otras personalidades como el escritor socialista Manuel Ugarte, Ortiz Pereyra del radicalismo yrigoyenista, A. Baldrich, un general ingeniero que había formado parte del grupo de Mosconi, S. Taborda, del movimiento universitario del 18, J. L. Torres un periodista de extracción tradicional, entre otros.

En un arco ideológico con algunos puntos en común, el “revisionismo histórico” también logró cierta circulación de su visión del pasado nacional. Se trataba de una corriente historiográfica que cuestionaba la mirada liberal sobre la historia nacional, instalada además como “historia oficial”, especialmente en la versión de Bartolomé Mitre. Durante los años 30 los revisionistas se agruparon en el Instituto Juan Manuel de Rosas y produjeron una historiografía que apuntaba a rescatar a figuras “olvidadas o malditas”, entre ellos, justamente, a Juan Manuel de Rosas. Los hermanos Julio y Rodolfo Irazusta y Ernesto Palacio procuraron denunciar el imperialismo inglés en la Argentina, por ejemplo en su libro de 1934, *Argentina y el imperialismo británico*, dando inicio a una corriente nacionalista antiimperialista.

Más allá de estos grupos y los debates, la preocupación por el nacionalismo fue parte de la agenda del Estado y se tradujo en una serie de acciones homogeneizadoras, impartidas desde el propio Estado hacia la sociedad, y desplegadas fundamentalmente en las escuelas y en el Ejército. Diversas medidas tendían a definir y consolidar aquellos que eran considerados los valores y símbolos nacionales. A diferencia de lo ocurrido a fines del siglo XIX, por ejemplo, la figura del gaucho quedó ligada a ciertos valores que lo terminaron convirtiendo en el máximo exponente del ser nacional. La Legislatura de la provincia de Buenos Aires estableció por Ley N° 4.756/1939 que el 10 de noviembre, aniversario del nacimiento de José Hernández, debía conmemorarse el Día de la Tradición.

El intenso debate que atravesaba al campo cultural dio como resultado, también, la multiplicación de formas de intervención intelectual que por su parte implicaron nuevos espacios de encuentro, sociabilidad y circulación de ideas. A los proyectos editoriales, que incluían la edición de libros, revistas y diarios, se sumó la creación de ateneos y centros en los cuales se multiplicaban las conferencias, los debates, las presentaciones, etcétera.

Entre los emprendimientos editoriales, pueden mencionarse a los del PC, que publicó *Soviet y Actualidad*. Los nacionalistas católicos se expresaban en las revistas *Criterio* y *Sol y Luna*. La izquierda se expresaba en la editorial y revista *Claridad*, en *Metrópolis*, *Nervio*, *Contra*. Y los radicales a través de la revista *Hechos e Ideas* y el proyecto FORJA. El nacionalismo contó también con sus órganos específicos: *Crisol*, *Bandera Argentina*, *El Pampero* y las revistas *Clarínada* y *Combate*; algunas de esas publicaciones sostenían posiciones antisemitas. Otra publicación de gran relevancia fue la revista *Sur*, fundada por Victoria Ocampo en 1931. Mallea, Silvina Ocampo, Bianco, Bioy Casares, Oliverio Girondo, Borges y Arlt fueron sus escrito-

res más importantes. Cosmopolita, pluralista pero también elitista, *Sur* se convirtió en una de las más prestigiosas revistas de la Argentina y quizá de América Latina.

Entre las publicaciones populares apareció la revista *Patoruzú*, dirigida por Dante Quinterro en 1937. En esta historieta el eje eran las aventuras del cacique tehuelche acompañado de su padrino Isidoro Cañones, su hermano Upa y su capataz Ñancul.

Medios y consumos culturales

En los años 30, la radio y el cine se consolidan como medios de comunicación masiva y como los productos culturales más consumidos. La Argentina era líder mundial en materia de radiodifusión, y ya desde los años 20 contaba con varias frecuencias en funcionamiento. Entre los géneros radiales prevalecía el musical, en general con números en vivo, incluyendo orquestas, sobre todo de tango. Los radioteatros se convirtieron, en los años 30, en fenómenos de consumo masivo. De igual modo, a medida que los espectáculos deportivos, fundamentalmente el fútbol y el boxeo, se hacían más populares, también comenzaron a ser transmitidos por la radio.

Por otro lado, las salas de cine y la cantidad de funciones se multiplicaron geométricamente. A los films norteamericanos, ya en circulación durante los años 20, se sumaron los films nacionales, ahora también con sonido. Muchas de estas películas nacionales tomaron como tema el contexto político y social de la época, así como también las que comenzaban a presentarse como las grandes pasiones populares como el tango, “los burros” y el fútbol.

Los espectáculos deportivos alcanzaron gran envergadura: el fútbol y el boxeo se popularizaron en las ciudades más importantes del país, se organizaron nuevas ligas y torneos y, en 1931, se profesionalizó el fútbol. Asimismo, en esta década y también como consecuencia de la popularidad que estos deportes adquirían, se construyeron el Luna Park (1934), la cancha de River (1938) y de Boca (1940). El automovilismo también se convirtió en un popular deporte, a medida que avanzaba la construcción de caminos y se difundían los automóviles.

El tango alcanzó su apogeo en estos años y Carlos Gardel se convirtió en la figura más emblemática. Apoyado por una industria discográfica en plena expansión, que incluía no solo la edición de los discos sino también la multiplicación de las ventas de aparatos para reproducir los discos y de aparatos de radio, *el zorzal criollo*, como llamaban a Gardel, logró también convertirse en figura del cine.

También se destacaron diversas orquestas y cantantes y los letristas de tango adquirieron reconocimiento público.

Entre las orquestas más importantes encontramos las de Cobián, De Caro, Láurenz, Fresedo, Di Sarli, Canaro, Firpo. Entre los letristas de tango se destacan Discépolo y Homero Manzi. El tango “Cambalache” de Discépolo se estrenó en 1935.

El cine sonoro llegó rápidamente a la Argentina, el primer largometraje íntegramente sonoro es *Tango*, de Luis Moglia Barth. En él trabajaron actores y cantantes, entre ellos Tita Merello, Libertad Lamarque, Azucena Maizani, Luis Sandrini, Pepe Arias, Alberto Gómez, etcétera.

Muchos actores y directores de cine provienen del teatro y capitalizan esa experiencia realizando un cine que utiliza mucho diálogo. Entre los directores más importantes se destacan Manuel Romero, Eduardo Morera, Luis César Amadori, Mario Soffici, José Ferreira, Alberto de Zavallía, Francisco Mugica, Daniel Tinayre y Lucas Demare.

En algún sentido, la expansión de este mercado de productos culturales responde también al desarrollo de ciertas condiciones favorables, a partir de mediados de los años 30, vinculadas con el mercado de consumo.



De izquierda a derecha: Osvaldo Fresedo, José Razzano, Francisco Canaro, Enrique Discépolo, con el bandoneón Aníbal Troilo, 1944.

V- CONTEXTO INTERNACIONAL

El contexto de crisis que caracterizó a los años 30 en la Argentina estaba en consonancia con las crisis política y económica que, en general, se experimentaba también en otros países. A poco de terminada la Primera Guerra Mundial, los sistemas democráticos comenzaban a manifestar quiebres diversos. Esa tendencia se acentuó en la década del 30 y se profundizó con los efectos de la crisis económica.

Por un lado, el cuestionamiento al liberalismo y a la democracia devino en la emergencia, en distintos países, de sistemas políticos basados en otras ideologías y valores. El comunismo en Rusia y el fascismo en Italia, ambos en el poder desde los años 20, mostraban otros modos de organizar a la sociedad, de ejercer el poder, de intervenir en la economía. En España, la crisis significó el estallido de una guerra civil que, entre 1936 y 1939, enfrentó a sectores de tendencia fascista, denominados nacionalistas en contra de otro sector, los republicanos, en el cual se encontraban socialistas, liberales y comunistas. El triunfo de los nacionalistas generó el ascenso del general Franco al poder en España, quien instauró una dictadura militar hasta 1975. La llegada de Hitler, en Alemania en 1933, mostró un escenario aún más complejo en relación con la crisis política de Occidente que desembocó en el inicio de la Segunda Guerra Mundial a partir de 1939.

Por otro lado, incluso en las naciones en las que no hubo gobiernos totalitarios, existió una crisis que redefinió a la política y la relación con la sociedad y la economía. Un aspecto clave de esta redefinición fue el nuevo rol que asumió el Estado.

Un régimen totalitario puede reconocerse por la eliminación de los partidos políticos y el Parlamento, la existencia de un solo partido de masas conducido por un solo hombre y organizado en forma jerárquica, una ideología oficial de carácter excluyente, el monopolio del uso de las armas por parte del partido, escasa diferenciación entre burocracia y partido, importancia de las corporaciones como mecanismo de representación política, el control de los medios de comunicación masiva y de la dirección de la economía y un sistema de terror físico o psicológico.

La caída de la Bolsa en Estados Unidos provocó una crisis que en principio fue financiera, pero que terminó impactando en toda la economía del mundo. Una vez que la economía entró en crisis, quedó claro que la regulación del mercado no alcanzaba para solucionar los problemas y que, por lo tanto, era necesario otro tipo de intervención del Estado que permitiera paliar, al menos, algunas de las dificultades que afectaban a la economía y consecuentemente a la sociedad. Los Estados comenza-

ron entonces a intervenir más directamente en la economía, por ejemplo, aplicando el proteccionismo, esto es, políticas de protección a determinados productos nacionales mediante el cobro de altos impuestos a la importación. También estimulando mediante subsidios estatales la producción local y enfrentando el problema de la desocupación a partir de planes de obras públicas y de seguros contra el desempleo. Éstas implicaban, consecuentemente, una reactivación. De este modo el Estado no solo regulaba la vida económica, sino que se convirtió en un agente económico protagonista. Estas acciones estatales dieron origen a la expresión “Estado Benefactor o de Bienestar”. Esta hace referencia a un Estado que se propone resolver los problemas sociales con el objetivo de garantizar un mejor funcionamiento del capitalismo.

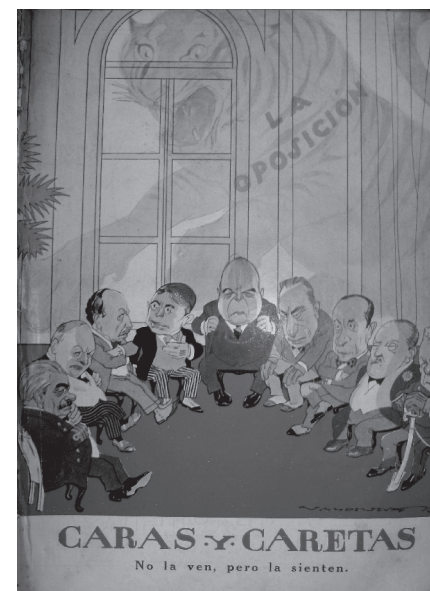
Si bien en la mayoría de los países la intervención del Estado logró una cierta recuperación de la economía, el verdadero impulso llegó a partir del estallido de la Segunda Guerra Mundial, en 1939. En verdad, la guerra acentuó la tendencia intervencionista del Estado, ya que se requería una economía planificada, con fuertes inversiones en el complejo militar (vinculado con la industria pesada), lo cual a su vez demandaba mano de obra y recursos. Las grandes potencias industriales competían fuertemente para conseguir materias primas, mano de obra barata y mercados en donde colocar su producción. Esta competencia estalló en 1914 a partir de la Primera Guerra Mundial. Los acuerdos políticos logrados a la salida de esta guerra eran muy frágiles y las tensiones seguían vigentes. Ante el fracaso de estos tratados se desencadenó la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). En ella se enfrentaron dos grupos de países. Por un lado, estaba el Eje, integrado por Alemania, Italia y Japón. Por otro lado, estaba el grupo de los aliados formado por Estados Unidos, Inglaterra, la Unión Soviética (URSS) y Francia, vencedores de la guerra. Al finalizar la misma quedaron fortalecidos Estados Unidos y la URSS, repartiéndose las zonas de influencia y conformando dos bloques enfrentados: uno occidental capitalista y otro oriental socialista.

A partir de las guerras mundiales también se modificó el rol de la mujer. Su inserción en el mundo laboral, reemplazando a los varones que se encontraban en el campo de batalla, implicó un desplazamiento del hogar hacia el ámbito público. También se hicieron presentes en espacios sociales, culturales y políticos lo que abrió la posibilidad para el creciente planteo de reivindicaciones femeninas. Los jóvenes se constituyeron en protagonistas de la vida política y cultural. Eran los desempleados, los soldados, los revolucionarios, los activistas políticos y culturales, etc. Fueron los desempleados durante los comienzos de los 30, soldados durante las guerras mundiales, durante la guerra civil española, etc.

Selección de fuentes y actividades sugeridas

1- Prensa y política

Caricaturas de Yrigoyen y sobre la situación política en el magazine Caras y Caretas, entre 1929 y 1930



Tapas de la revista *Caras y Caretas*.

Actividades:

-Analizar y discutir, a partir de esas imágenes, en ese momento, el clima político que se construía a partir de la prensa.

2- Tango y sociedad

Selección de productos culturales de la época: tango y poema.

Tangos

“Yira, yira” (E. Santos Discépolo, 1930)

Cuando la suerte qu’ es grela,
fayando y fayando
te largue parao;
cuando estés bien en la vía,
sin rumbo, desesperao;
cuando no tengas ni fe,
ni yerba de ayer
secándose al sol;
cuando rajés los tamangos
buscando ese mango
que te haga morfar...
la indiferencia del mundo
–que es sordo y es mudo–
recién sentirás.

Verás que todo es mentira,
verás que nada es amor,
que al mundo nada le importa...
¡Yira!... ¡Yira!...
Aunque te quiebre la vida,
aunque te muerda un dolor,
no esperes nunca una ayuda,
ni una mano, ni un favor.

Cuando estén secas las pilas
de todos los timbres
que vos apretás,
buscando un pecho fraterno
para morir abrazao...
Cuando te dejen tirao
después de cinchar
lo mismo que a mí.
Cuando manyés que a tu lado
se prueban la ropa
que vas a dejar...
Te acordarás de este otario
que un día, cansado,
¡se puso a ladrar!

“Al mundo le falta un tornillo. Enrique Cadícamo”, 1932.

Todo el mundo está en la estufa,
Triste, amargao y sin garufa,
neurasténico y cortao...
Se acabaron los robustos,
si hasta yo, que daba gusto,
¡cuatro kilos he bajao!
Hoy no hay guita ni de asalto
y el puchero está tan alto
que hay que usar el trampolín.
Si habrá crisis, bronca y hambre,
que el que compra diez de fiambre
hoy se morfa hasta el piolín.

Hoy se vive de prepo
y se duerme apurao.

Y la chiva hasta a Cristo
se la han afeitao...
Hoy se lleva a empeñar
al amigo más fiel,
nadie invita a morfar...
todo el mundo en el riel.
Al mundo le falta un tornillo
que venga un mecánico...
¿Pa' qué, che viejo?
Pa' ver si lo puede arreglar.

¿Qué sucede?... ¡mamma mía!
Se cayó la estantería
o San Pedro abrió el portón.
La creación anda a las piñas
y de pura arrebatina
apoliya sin colchón.
El ladrón es hoy decente
a la fuerza se ha hecho gente,
ya no encuentra a quién robar.
Y el honrao se ha vuelto chorro
porque en su fiebre de ahorro
él se “afana” por guardar.

Al mundo le falta un tornillo,
que venga un mecánico.
pa' ver si lo puede arreglar.

“Cambalache”. E. Santos Discépolo. 1935.

Que el mundo fue y será una porquería
ya lo sé...
(¡En el quinientos seis
y en el dos mil también!).

Que siempre ha habido chorros,
maquiavelos y estafaos,
contentos y amargaos,
varones y dublé...
Pero que el siglo veinte
es un despliegue
de maldá insolente,
ya no hay quien lo niegue.
Vivimos revolcaos
en un merengue
y en un mismo lodo
todos manoseaos...

¡Hoy resulta que es lo mismo
ser derecho que traidor!...
¡Ignorante, sabio o chorro,
generoso o estafador!
¡Todo es igual!
¡Nada es mejor!
¡Lo mismo un burro
que un gran profesor!
No hay aplazaos
ni escalafón,
los inmorales
nos han igualao.
Si uno vive en la impostura
y otro roba en su ambición,
¡da lo mismo que sea cura,
colchonero, rey de bastos,
caradura o polizón!...

¡Qué falta de respeto, qué atropello
a la razón!
¡Cualquiera es un señor!
¡Cualquiera es un ladrón!

Mezclao con Stavisky va Don Bosco
y “La Mignon”
Don Chicho y Napoleón,
Carnera y San Martín...
Igual que en la vidriera irrespetuosa
de los cambalaches
se ha mezclao la vida,
y herida por un sable sin remaches
ves llorar la Biblia
contra un calefón...

¡Siglo veinte, cambalache
problemático y febril!...
El que no llora no mama
y el que no afana es un gil!
¡Dale nomás!
¡Dale que va!
¡Que allá en el horno
nos vamo’ a encontrar!
¡No pienses más,
sentate a un lao,
que a nadie importa
si naciste honrao!
Es lo mismo el que labura
noche y día como un buey,
que el que vive de los otros,
que el que mata, que el que cura
o está fuera de la ley...

Poema

“Epitafio para la tumba de un obrero” (Raúl González Tuñón, 1934)

“Una mancha de sangre quedó en la calle y tres cigarrillos populares al lado.

Y un folleto que había rodado desde su saco buscando tierra para florecer, como una planta.

Detrás del parque las polleras transparentes del verano. Las chiquilinas iban delante de los hombres.

Lo enterraron los policías, como a un ahorcado.

Nadie lo reclamó para hacer un experimento.

Podrían haberlo reclamado para hacer una Revolución.

Fue más grande el recogimiento del pueblo, agachado en las casa de los suburbios.

Colgado de los edificios en construcción, ladrillo sobre ladrillo, alrededor de la jaula de hierro.

Sudando con medio cuerpo desnudo al borde de los altos hornos, en las usinas, en la estridencia de las fábricas.

Fue más grande el dolor de la hermana y de la madre y de la compañera.

Fue más grande que mi dolor.

Porque yo pertenezco a un organismo podrido y estoy aún plantado en la burguesía.

(...)

Estaba pensando cuando recordé a mis poetas queridos, que habían cantado para ellos, para los obreros, a Whitman y a Heine, por ejemplo.

Porque los obreros han construido el mundo.

Estaba pensando y me dieron asco los políticos-espiroqueta, gonococo, piojo, que están echando a perder una cosa posiblemente maravillosa, que es el mundo...”.

Actividades:

- A partir del análisis de estas letras de tango y del poema de González Tuñón, retomar y discutir los aspectos sociales de la década y la importancia de los productos culturales como registro histórico.

3-La desocupación

a- Imágenes de “Villa Desocupación”, de la página 47: ¿cuál es el contexto social, político y económico de esa imagen?

4- La película: *Asesinato en el Senado de la Nación*

Director: Juan José Jusid

Año: 1984

Duración: 105 minutos

Actividades:

- ¿Qué conflictos se observan en la película? ¿Cuál de ellos les parece central?
- Describir cómo aparece caracterizada la vida política y social de los años 30 en la película. Utilizar escenas de ésta para ejemplificarlo.
- ¿Cómo aparece el contexto internacional en la película?
- Reflexionar acerca del título de la película (relacionar este con los materiales estudiados, con la envergadura de los acontecimientos que se están narrando, si cambiarías el nombre de la película, etcétera).

BIBLIOGRAFÍA

- Buchrucker, Cristian, *Nacionalismo y peronismo. La Argentina en la crisis ideológica mundial (1927 - 1955)*, Buenos Aires, Sudamericana, 1987.
- Cattaruzza, Alejandro (dir.), *Crisis económica, avance del estado e incertidumbre política. Nueva historia argentina. Tomo 7*. Buenos Aires, Sudamericana, 2001.
- Del Campo, Hugo, *Sindicalismo y peronismo: los comienzos de un vínculo perdurable*, Buenos Aires, CLACSO, 1983.
- Fodor, Jorge y O'Connell, Arturo, "La Argentina y la economía atlántica en la primera mitad del siglo XX", en *Desarrollo Económico*, N° 49, Buenos Aires, 1973.
- Lobato, Mirta Zaida y Suriano, Juan, *Atlas Histórico*, Buenos Aires, Sudamericana, 2000.
- Llach, Juan José, "El Plan Pinedo de 1940, su significado histórico y los orígenes de la economía política del peronismo", en *Desarrollo Económico*, N° 92, Buenos Aires, 1984.
- Matsushita, Hiroshi, *El movimiento obrero argentino (1930 - 1945)*, Buenos Aires, Siglo XXI, 1987.
- Nielsen, Jorge, *Espectaculares sucesos argentinos 1931-1940*, Buenos Aires, Del Jilguero, 2009.
- O'Connell, Arturo, "La Argentina en la depresión: los problemas de una economía abierta", en *Desarrollo Económico*, Buenos Aires, 23, 92, 1984.
- Rouquié, Alain, *Poder militar y sociedad política en la Argentina*, Buenos Aires, Emecé, 1981.
- Zanatta, Loris, *Del estado liberal a la nación católica. Iglesia y Ejército en los orígenes del peronismo. 1930-1943*, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, 1996.

CAPÍTULO 3: *Los años peronistas: entre los conflictos políticos y la construcción de un Estado de bienestar social*

El período considerado en este capítulo se inicia en 1943 con la irrupción de un golpe de Estado y se cierra en 1955 con una nueva intervención militar. Durante los años que corren entre una y otra fecha la sociedad, la economía y la política se transformaron profunda y decisivamente a partir de la emergencia del peronismo.

En 1943, en un clima político atravesado por conflictos e incertidumbre, la intervención militar puso fin al gobierno conservador de Ramón Castillo y nombró a generales del Ejército a cargo del Ejecutivo Nacional. Los partidos políticos habían recibido con expectativa favorable el golpe y esperaban que el nuevo gobierno militar convocara prontamente a elecciones; sin embargo, eso ocurrió recién dos años después.

La realización de esas elecciones, no obstante, era resultado de los procesos vinculados a la emergencia de un movimiento social y político de trabajadores y a la consolidación de la figura de Juan Domingo Perón. Entre 1943 y 1946 Perón, que era miembro del gobierno asumido luego del golpe, construyó un vínculo clave con los sindicatos: abandonó la estrategia represiva aplicada hasta ese momento para con los obreros y, por el contrario, promovió una serie de leyes y acuerdos que mejoraban las condiciones sociales y laborales de los trabajadores. Ese vínculo se fue consolidando y fue la base para la organización de un movimiento social y político que hizo de Perón su líder y de las ideas impulsadas por él, su ideología y su proyecto político. Por eso, cuando a mediados de 1945 Perón fue desplazado del gobierno y luego detenido, decenas de miles de trabajadores se movilizaron hasta la Plaza de Mayo para pedir su liberación. Ese acontecimiento ocurrió el 17 de octubre de 1945: la plaza clamaba por Perón como un modo de manifestar la defensa de las medidas y derechos que este había impulsado.

Esa multitudinaria manifestación, sumada a las críticas que ya recibía el gobierno militar por parte de los partidos políticos, obligaron a establecer el llamado a

elecciones: la campaña se organizó rápidamente y, en febrero de 1946, la fórmula Perón-Quijano se impuso a la de la Unión Democrática, una agrupación de todas las expresiones partidarias que se oponían a Perón y a su política. Perón gobernó entre 1946 y 1952. La reforma constitucional de 1949 habilitó su reelección, y en noviembre de 1951 ganó las elecciones con el 62% de los votos. Fue presidente de la Nación hasta 1955 cuando otro golpe de Estado interrumpió su mandato.

Aun siendo poco más que una década, la experiencia social y política de los años que van desde 1943 hasta 1955 constituye un hito de la historia argentina en varios sentidos: el escenario político se articuló a partir de nuevos actores y nuevos conflictos, ya no se trataba de la oposición entre radicales y conservadores, sino entre peronistas y antiperonistas. Esta oposición, además, se construía a partir de ideas y principios distintos, pero también apelaba a identidades de clase opuestas.

De igual modo, fue durante estos años que el movimiento obrero tuvo un papel fundamental como un actor político a través de sus sindicatos. Como respuesta a las demandas de estas organizaciones y por propia iniciativa del Estado, muchas y diversas medidas permitieron una mejora en las condiciones de vida de los trabajadores que permiten hablar de un “Estado de bienestar”. La intervención de Eva Perón fue sustancial en el logro de las conquistas obreras y en la protección de mujeres y niños desvalidos a través del quehacer de la Fundación Eva Perón.

Durante los años en que Perón gobernó la Argentina, los conflictos políticos siguieron estando y se volvieron cada vez más virulentos hacia el final del período. El gobierno intentaba controlar a las voces disidentes y evitar todo tipo de críticas, frente a lo cual se fue configurando todo un arco opositor –que incluía a actores tan distintos como el Partido Comunista y la Iglesia, por ejemplo– que en nombre de la democracia y la libertad se oponían a las políticas sociales y económicas impulsadas por el peronismo. Estas tensiones desembocaron en el golpe de Estado de 1955.

El derrocamiento del gobierno peronista no fue sino el inicio de una nueva etapa en que esa misma experiencia se convertiría en bandera y motor de la resistencia y la oposición a los gobiernos militares y democráticos que se sucedieron a partir de ese momento.

Este capítulo recorre los años que van desde 1943 hasta 1955 y pone foco en algunos de los aspectos sociales, políticos y económicos de la experiencia peronista. La organización del capítulo retoma la cronología del período y diferencia tres etapas: la intervención y constitución de un gobierno militar entre 1943-1946; la primera presidencia de Perón entre 1946 y 1952 y la segunda presidencia de Perón entre 1952

y 1955. Incluye luego un último apartado en el que se focalizan algunas de las políticas del peronismo vinculadas a la democratización del bienestar, desarrolladas a lo largo de todo el período.



17 de octubre de 1945.

I- LA EMERGENCIA DEL PERONISMO: 1943-1946

Nuevo golpe militar, nuevo gobierno militar

El 4 de junio de 1943 una intervención militar derrocó al gobierno conservador de Castillo. Desde hacía meses se vivía un clima de extrema tensión e incertidumbre: las críticas al gobierno eran cada vez más fuertes en tanto la manipulación, el fraude electoral y la violencia política se extendían. De cara a la realización de las próximas elecciones, por otro lado, se sabía que el candidato oficialista sería Robustiano Patrón Costas, un dirigente conservador, abierto partidario del fraude y del abandono de la neutralidad.

Robustiano Patrón Costas era un productor azucarero perteneciente a una aristocrática familia provinciana. Su posición en relación a la Guerra, a favor de los Aliados, y la posibilidad de que abandonase la neutralidad generaba malestar entre sectores militares favorables al Eje.

En ese contexto, los partidos opositores al gobierno, no conseguían articular una posición conjunta ni una salida legítima que permitiera cambiar la situación y eso mismo los fue acercando, de manera más o menos explícita a los sectores militares. Por eso, para muchos dirigentes, el único modo de encauzar la vida política del país hacia un sistema electoral transparente era apostando por una intervención militar que terminara con el gobierno de Castillo. Por otro lado, el propio presidente estaba enfrentado con parte de los oficiales, así es que cuando –por razones diversas– decidió echar a quien era su ministro de Guerra, el general Pedro Ramírez, el Ejército rápidamente se posicionó en contra del presidente.

Las razones del golpe, entonces, se entremezclan: el rechazo al fraude, el reclamo de un cambio político, el problema del neutralismo, el enfrentamiento de Castillo con Ramírez y la importancia que, como árbitro de las disputas políticas, había adquirido el sector militar. Como fuere, una vez producido el golpe, quedó claro que el Ejército había participado institucionalmente, como cuerpo y aludiendo a un poder que iba más allá que el de ser mediador de conflictos políticos.

No obstante, pese a esa afirmación, el grupo de militares que tomó el poder estaba atravesado por disputas internas que prontamente se hicieron visibles. El general Arturo Rawson había sido designado como sucesor de Castillo, pero a los pocos días fue reemplazado por Pedro Ramírez. Este tampoco logró consolidar demasiado su posición y en marzo de 1944, a meses de producido el golpe, fue desplazado a favor de otro general, Edelmiro Farrell.

El GOU y la figura de Perón

En medio de las disputas y enfrentamientos entre diversos agrupamientos militares, el Grupo de Oficiales Unidos (GOU) –una logia militar que empezó siendo secreta y luego adquirió visibilidad– se proyectaba como el sector más efectivo: su papel fue clave en el rumbo que tomó el nuevo gobierno militar. Entre los militares del GOU, se destacó prontamente la figura del coronel Juan Domingo Perón.

El GOU nucleaba a oficiales de rango medio o bajo. Defendían ideas nacionalistas vinculadas a la necesidad de la autonomía industrial del país.

Perón había sido profesor en la Escuela Superior de Guerra y agregado militar en Chile y había realizado cursos diversos en la Italia fascista de Mussolini. Durante la década del 30 participó de distintos espacios políticos y militares.

En noviembre de 1943, Perón se hizo cargo del Departamento Nacional del Trabajo, que un mes más tarde pasó a ser la Secretaría de Trabajo y Previsión, una repartición del Estado que, hasta ese momento, se ocupaba centralmente de datos estadísticos. Desde este organismo, Perón comenzó a construir un vínculo estrecho con los distintos sindicatos, que se tradujo en la promoción y sanción de diversos proyectos referidos a las relaciones laborales. A partir de 1944, y a instancias de la gestión de Perón, el gobierno puso en marcha una serie de disposiciones legales que modificarían sustancialmente el mundo del trabajo: si entre 1941 y 1943 se habían firmado cerca de 400 convenios colectivos de trabajo, entre 1944 y 1945 se firmaron cerca de 700. En estos acuerdos entre las empresas y los trabajadores, el Estado tenía un rol fundamental: era el que los impulsaba, el que actuaba como mediador y el que se encargaba de que se cumplieran a través de la creación de los Tribunales de Trabajo. Junto con esto, se extendió el régimen jubilatorio y las vacaciones pagas y se sancionó el Estatuto del Peón.

El Estatuto del Peón, en 1944, sancionó por primera vez derechos para los trabajadores rurales: pautó salarios, condiciones de trabajo tan básicas como la obligatoriedad del descanso, la higiene y el abrigo en los lugares de alojamiento del trabajador, las vacaciones pagas, la asistencia médica a cargo de los patrones, entre otras.



Perón en su caballo pinto.

La implementación de algunos de estos proyectos pronto dejó su huella en la experiencia de miles de trabajadores: por un lado veían cómo se modificaba, positivamente, su situación laboral; por otro, adjudicaban –de manera más o menos voluntaria y visible– esas mejoras a la política impulsada por Perón.

Hacia el 17 de octubre

La figura y el poder de Perón crecían en el gobierno: en 1944 fue designado ministro de Guerra y luego vicepresidente de la Nación. Este mismo crecimiento y el vínculo cada vez más estrecho que tenía con los sindicatos y con los trabajadores comenzaron a generar reacciones por parte de la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural Argentina y cierto sector militar. A su vez, el tipo de políticas laborales y sociales impulsadas y el activo rol que se le asignaba al Estado reacomodó a la oposición, que comenzó a acusar a Perón de fascista. Esa denuncia, por otro lado, caía justo en el momento en el que en Europa los países aliados avanzaban con sus triunfos frente a los países del Eje. En ese sentido, la oposición comenzó a plantear el conflicto con Perón como si se tratara de una más de las batallas que se libraban entre las llamadas “democracias” y los “totalitarismos”

En septiembre de 1945, los partidos políticos opositores a Perón y al gobierno militar realizaron una marcha que reunió a casi 250 mil personas. La movilización reclamaba que el gobierno militar, considerado ilegítimo, entregara el poder a la Corte Suprema de Justicia. Estas presiones se combinaron entonces con las críticas de aquellos militares contrarios a las reformas laborales que se estaban impulsando. A principios de octubre de 1945, en un clima de tensión *in crescendo*, Farrell, ante las presiones de los oficiales de Campo de Mayo, pidió la renuncia de Perón y ordenó su detención y posterior traslado a la isla Martín García.

Esa decisión activó y multiplicó la agitación en las fábricas: Perón era el garante de los derechos conseguidos, su salida del gobierno, impulsada por sectores contrarios a esas reformas, ponía en cuestión que esos derechos se mantuvieran. La CGT convocó un paro para el día 18 de octubre, no obstante el 17 de octubre decenas de miles de trabajadores, provenientes de los barrios obreros de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, marcharon desde temprano hacia la Plaza de Mayo. La policía intentó levantar el Puente Alsina, para impedir el avance de los obreros que venían desde el sur. Pero fue en vano. Las calles de Buenos Aires se poblaron de trabajadores y trabajadoras y poco a poco la simbólica Plaza de Mayo quedó repleta por una multitud que clamaba por la libertad de Perón y por la defensa de los derechos ya conseguidos.

Algunos obreros, cansados por la larga caminata, se sentaron en el borde de la fuente de Plaza de Mayo a refrescarse los pies. Este hecho se convertiría en una imagen que condensaría muchos de los sentidos del 17 de octubre. Para los peronistas, fue el modo más claro de manifestar el protagonismo de las clases populares en el escenario político. Para los antiperonistas, fue la expresión de la “barbarie” que agravaba a la histórica Plaza de Mayo.

Frente a la multitudinaria movilización, el gobierno militar debió ceder y traer a Perón a la Casa Rosada. Pasadas las 23 h., Perón habló desde el balcón: reivindicó lo realizado, agradeció la lealtad de los trabajadores y pidió que se desconcentraran en orden. Ante esa situación, Farrell no tuvo otra opción más que llamar a elecciones para febrero de 1946.

Los acontecimientos del 17 de octubre de 1945 marcaron concreta y simbólicamente el futuro político del país: evidenciaron el apoyo y la legitimidad que tenía Perón entre los trabajadores y la capacidad de movilización de los sindicatos. La gente en las calles y la plaza no era en sí misma una imagen novedosa: sí lo era quienes daban vida a esa imagen, es decir, miles de trabajadores y trabajadoras movilizados desde los barrios porteños y desde todo el cordón metropolitano. Ellos eran los nuevos actores sociales y políticos que protagonizaron la nueva etapa histórica.

Las elecciones de febrero de 1946

La convocatoria a elecciones planteó un nuevo escenario político e impuso una nueva dinámica: definió actores y alianzas y transparentó, en algún sentido, las disputas. De un lado, la figura de Perón aglutinó a los sindicatos, a los Centros Cívicos que se creaban en apoyo de Perón, al recientemente creado Partido Laborista y a la línea Junta Renovadora de la Unión Cívica Radical. Del otro, se reunieron todos los que estaban en contra de Perón: la Unión Democrática, tal el nombre elegido, incluyó a radicales, socialistas, demócrata-progresistas e incluso a los comunistas. Contaron, además, con el apoyo de diversas entidades patronales y corporativas –como la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural, la Bolsa de Comercio– movilizadas fundamentalmente en contra de la política laboral de Perón, y de algunos diarios de circulación nacional, como *La Prensa*, que, a diferencia de lo que había sido siempre su línea editorial, llamó abiertamente a votar por la Unión Democrática.

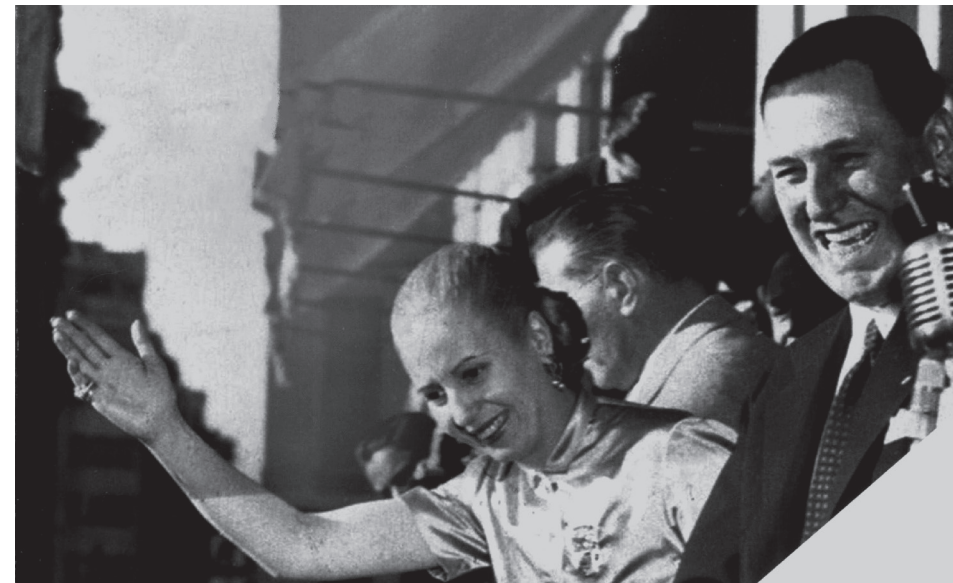
En medio de la campaña electoral, el exembajador de Estados Unidos, Spruille Braden, impulsó la publicación de un libro, llamado Libro Azul, en el que se acusaba abiertamente a Perón y al gobierno militar de colaborar con los nazis. A los pocos días, el peronismo publicó otro libro, el Libro Azul y Blanco, en el que en respuesta a esas acusaciones, denunciaba la constante intromisión del Departamento de Estado Norteamericano en los asuntos argentinos. Este enfrentamiento, quedó resumido también de manera polarizada en la frase “Braden o Perón”

Las elecciones se realizaron el 24 de febrero de 1946. La fórmula Perón-Quijano se impuso a la de la Unión Democrática, integrada por José Tamborini-Enrique Mosca. En todas las provincias, a excepción de Corrientes, ganó el peronismo.

La campaña, la elección y el resultado evidenciaron los cambios que venían ocurriendo. En primer lugar, la disputa política se planteó de manera polarizada: de un lado, los sindicatos; del otro, las entidades patronales; de un lado, Perón; del otro, quienes se oponían a Perón; para unos, se trataba de la lucha entre el “totalitarismo” y la libertad; para otros, de la pelea entre la justicia social y los privilegios. En este sentido, se trataba de un conflicto nuevo que oponía a actores nuevos antes excluidos y no dejaba grises entre el peronismo y el antiperonismo. Y aunque de uno y otro lado los apoyos concretos eran heterogéneos, la disputa solo se podía presentar de forma excluyente: o unos u otros. Por eso, también el triunfo de Perón fue algo más que una victoria electoral e incluso se vio como algo más que el triunfo del Laborismo como partido: eran Perón, los trabajadores y las ideas de justicia social quienes habían ganado. Y junto a ellos aparecía Evita, figura clave tanto en el vínculo de Perón con los sindicatos, como en la incorporación de la mujer a la vida política.

María Eva Duarte de Perón, conocida popularmente como “Evita”, provenía de una humilde familia. Nació en Los Toldos el 7 de Mayo de 1919 y vivió su infancia en Junín. Siendo muy joven se trasladó a la ciudad de Buenos Aires donde intentó hacerse un lugar en la radiodifusión y en los espectáculos artísticos. En 1944, conoció a Juan Domingo Perón durante el festival de solidaridad con los damnificados por el terremoto que azotó a la ciudad de San Juan. De allí en más su vocación militante y política se acrecentó y ya no se separó de Perón.

La Unión Democrática se agotó con la derrota, por un lado por las tensiones internas de un agrupamiento político que reunía a actores tan disímiles y hasta contradictorios. Por otro, porque cada uno de los partidos que participó de la Unión Democrática también entró en crisis.



Evita, junto con Perón, durante la campaña de 1946.

II- LA PRIMERA PRESIDENCIA DE PERÓN: 1946-1952

El escenario político: nuevos ciudadanos y ciudadanas y una nueva Constitución

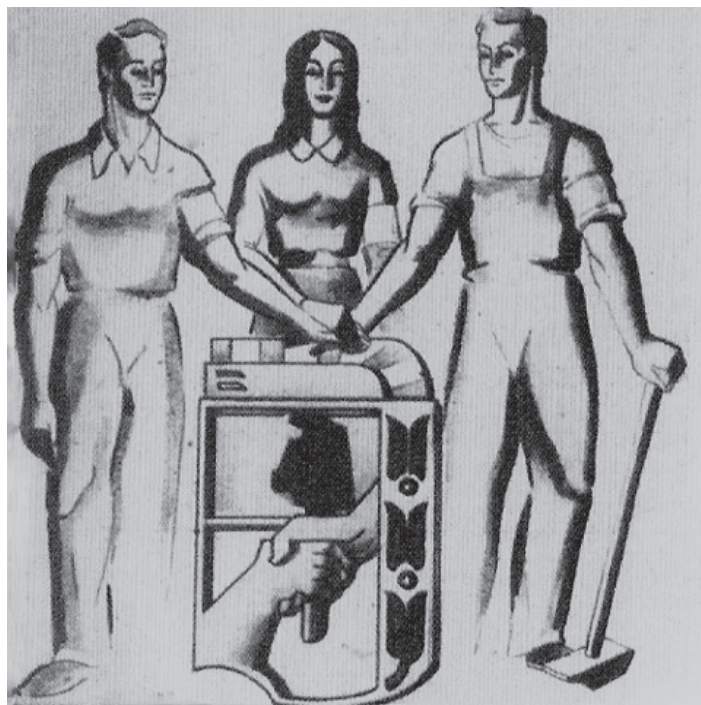
La primera presidencia de Perón transcurrió entre 1946 y 1952. Al asumir, Perón contaba con el importante caudal de votos obtenidos en la elección de febrero; este apoyo electoral se mantendría a lo largo de todo su gobierno. Por otro lado, durante todos esos años los partidos de la oposición, si bien en algunos casos cosecharon muchos votos, nunca lograron construir una alternativa con posibilidades reales de ganarle en las urnas al peronismo.

Luego de asumir la presidencia, Perón decidió la disolución del Partido Laborista y la unificación de todas las agrupaciones políticas que lo habían apoyado. Se creó así, en primer lugar, el Partido Único de la Revolución Nacional; luego, en 1947 ese partido se convirtió en el Par-

|| tido Peronista, organizado en dos ramas: la masculina y la sindical. En 1949 –luego de la sanción de la Ley 13.01. de 1947– Eva Perón organizó el Partido Peronista Femenino (PPF).

Por otro lado, más allá de los apoyos electorales y partidarios, el principal bastión de apoyo a Perón estuvo en la organización sindical y en las movilizaciones, marchas y concentraciones que poco a poco se convirtieron en parte de un ritual tanto o más importante que las elecciones. Algunas fechas, como el 17 de octubre o el 1° de mayo, pasaron a ser jornadas de celebración en las cuales se expresaba, una vez más, el apoyo de los trabajadores a Perón y, a su vez, el protagonismo que aquellos tenían en la etapa histórica que se vivía.

Desde el punto de vista más institucional, durante el primer gobierno de Perón ocurrieron algunos hechos por demás destacados que implicaron, básicamente, una ampliación de la ciudadanía política: la ley de voto femenino, la ley de voto para los habitantes de los territorios nacionales, y, finalmente, la reforma de la Constitución Nacional.



Afiche de la época que reflejaba las tres ramas del partido.

La ampliación de los derechos políticos

Impulsada por socialistas y por grupos de mujeres organizadas, por algunos intelectuales y algunos dirigentes, la lucha por la participación de las mujeres en tanto “ciudadanas con derechos políticos” figuraba desde tiempo atrás en la agenda de la discusión pública (en la prensa, por ejemplo) y política. No obstante, el resultado siempre había sido negativo: en general, predominaba un discurso que, con distintos argumentos –desde debilidades mentales, hasta físicas y pasando por suponer una minoridad legal al estar casadas y depender del marido o del padre si fueran solteras– colocaba a las mujeres siempre en situación de subordinación con respecto a los varones, lo cual llevaba, en definitiva, a negar su participación política electoral.

Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, Perón había prestado particular atención a la situación de las mujeres trabajadoras. Por otro lado, la militancia de Evita había interpelado directamente a las mujeres y las había convocado a la participación política. Esto se tradujo, poco después y a instancias también de Evita, en la presentación por parte del Poder Ejecutivo de un proyecto que concedía el voto a las mujeres. Luego del correspondiente debate parlamentario, en septiembre de 1947, se votó la Ley de Sufragio Femenino: las mujeres argentinas pasaban a tener los mismos derechos y obligaciones políticas –excepto el servicio militar– que tenían los varones. En 1949 se creó el Partido Peronista Femenino (PPF) y en las elecciones de 1951 las mujeres votaron por primera vez. Por otro lado, el Poder Ejecutivo envió al Congreso otro proyecto que otorgaba el voto a los habitantes de los territorios nacionales, los cuales habían sido transformados en provincia.

|| Los territorios nacionales adquirieron el rango de provincia en distintos momentos del gobierno peronista: en 1951 La Pampa y Chaco; luego en 1953 fue el turno de Misiones. Y finalmente, en 1955, los territorios de Neuquén, Río Negro, Formosa, Chubut y Santa Cruz también se convirtieron en provincias argentinas.

La ley de voto femenino y la del voto a los habitantes de las flamantes provincias significó una clara ampliación de la ciudadanía política, en tanto el número de quienes podían votar pasó de 3.800.000 en 1948, a 8.630.000 en 1951.

El rol de las mujeres: entre cambios y continuidades

Durante los años peronistas existía una división de roles entre la mujer que se dedicaba al cuidado de la casa y los niños y el hombre que con su trabajo demostraba la capacidad de mantener por sí mismo su hogar. En este contexto una sombra de inmoralidad caía sobre las mujeres que trabajaban fuera de su casa. Por eso, para responder a las acusaciones que podían caer sobre las mujeres que se dedicaran a la política, desde el PPF se fue elaborando un discurso según el cual existía continuidad entre las tareas consideradas propias de las mujeres y el mundo político.

En las Unidades Básicas, creadas por el PPF, se llevaban a cabo tareas que les servían a las mujeres para reafirmarse en su condición de amas de casa. Esto era así para impedir que las mujeres fueran tachadas de “livianas” al estar perdiendo el tiempo fuera de sus casas en tareas improductivas e impropias. Otra de las funciones de las Unidades Básicas en particular, y del PPF en general, era el desarrollo de la acción social. Se sostenía que la acción social no era política y se la concebía como una actividad que poseía continuidad con las tareas realizadas dentro del hogar: era una manera de ampliar el instinto maternal, intentando ayudar y solucionar problemas del prójimo como si fueran problemas hogareños. Tanto a través de la implementación de la capacitación, como de la ayuda social, se intentaba remarcar que la acción política no significaba cambiar sino, al contrario, reafirmar las actitudes, sentimientos y valores considerados propios de las mujeres. Sin embargo, lo que sí cambió fue el papel asignado a las mujeres en el nuevo perfil de sociedad que pretendía crear el peronismo. El hecho de ser convocadas a tener una participación activa en la esfera pública, aunque invocando una continuidad que suponía en el accionar político una prolongación con los deberes femeninos al interior del hogar, implicaba de alguna manera una ruptura con su rol tradicional.

Prueba de esto es que los mandatos de género no siempre prevalecieron sobre los intereses de partido. Durante la campaña electoral de 1951, las mujeres fueron agentes de propaganda contraviniendo sus propias obligaciones como mujeres-madre. La cantidad de horas destinada a la actividad política (en época de elecciones las sedes partidarias estaban abiertas hasta las 22 h, incluso los días domingo y un mes antes hasta las 24 h) o los viajes para participar en manifestaciones en Buenos Aires o el interior de las provincias, las alejaba de sus hogares.

La actividad política era considerada elogiada en un hombre pero peligrosa para una mujer. Las mujeres que hacían política eran por lo tanto vistas con sospecha y para este tipo de prejuicios la participación de los hombres estaba prohibida en el PPF. En las Unidades Básicas no podían entrar ni maridos, ni novios, ni amigos, ni médicos, ni policías. Asimismo, luego de que en las elecciones de 1951 fueran elegidas representantes mujeres peronistas, Eva Perón les pedía moderación al vestirse: “ni escotes, ni colorinches, nada raro”; les sugería que utilizaran trajes sastre y les prohibía nombrar secretarios o colaboradores hombres para preservarlas de “habladurías”. El Congreso tampoco fue el mismo: los hombres debían cuidar su vocabulario y cuando decían alguna cosa que pudiera molestar la sensibilidad femenina aclaraban “con perdón de la señora tal...”.



Evita votando.



Las mujeres votaron en la Argentina en 1951 por primera vez.

La reforma constitucional

El otro gran acontecimiento institucional del primer gobierno de Perón fue la reforma de la Constitución Nacional. Si bien la oposición acusó a Perón de instrumentar esta reforma con el único objetivo de lograr su reelección, lo cierto es que el nuevo texto constitucional plasmó, con fuerza de ley, ciertos principios políticos fundamentales: la voluntad de tener una nación socialmente justa económicamente libre y políticamente soberana. Junto a esas declaraciones, se establecía la propiedad estatal de los recursos mineros y energéticos, de los servicios públicos y una serie de derechos para el trabajador, la niñez y la ancianidad (derecho a una retribución justa, a condiciones de trabajo y vivienda dignas, al esparcimiento, la seguridad social y la salud).



Portada de la Nueva Constitución de 1949.

La reelección

La reforma constitucional habilitaba una segunda presidencia de Perón. Durante 1951 se discutió sobre quién sería su vicepresidente; la CGT había decidido que ese lugar le correspondía a Evita y así lo proclamó en el Cabildo Abierto del Justicialismo, realizado el 22 de agosto de 1951. Pero otros sectores políticos, e incluso los militares que apoyaban a Perón, se oponían totalmente y terminaron ganando la pulseada. Pese a la multitudinaria movilización de ese Cabildo, las pancartas que la reclamaban como vicepresidenta y la presión misma de la CGT, a fines de agosto Evita renunció a la candidatura. Perón sería acompañado por Quijano.

Las elecciones de noviembre de 1951 dieron una nueva victoria al peronismo, con más del 60% de los votos frente a la fórmula de Ricardo Balbín y Arturo Frondizi. Perón asumió su segundo mandato el 4 de junio de 1952.



Evita y Perón durante el Cabildo de agosto de 1951.

La economía: el Primer Plan Quinquenal

El fin de la Segunda Guerra Mundial planteó un escenario nuevo para la Argentina, condicionado en parte por los cambios de la economía pero también por las redefiniciones en cuanto al rol que debía jugar el Estado.

Por un lado, las políticas de intervención estatal que la mayoría de los Estados de Occidente habían implementado durante la década 30, a consecuencia de la crisis desatada en esos años, fueron reforzadas durante la época de la guerra. Más allá de las inversiones que los propios Estados hicieron para rearmarse, también comenzó a evidenciarse una participación estatal mucho más activa en el terreno de las políticas sociales. Frente a la polarización política que quedaba planteada, la opción de un estado que interviniera dando respuesta a las demandas sociales era un modo de contrarrestar el avance de los movimientos vinculados con el comunismo. Por otro lado, si bien la Argentina no abandonaba su modelo agroexportador, la experiencia del proceso de sustitución de importaciones de los años 30 había dejado un sector industrial ampliado y cuyo crecimiento iba de la mano de la extensión, también, de un mercado interno.

Esas claves constituyen, en algún sentido, las bases a partir de las cuales el peronismo delineó su política económica, presentada en 1947 a través del Primer

Plan Quinquenal. Ya la idea de “planificación” era síntoma de los nuevos aires políticos y económicos que corrían en el mundo; a su vez, el plazo de cinco años daba cuenta, también, de que se aspiraba a proyectar la economía por un período relativamente importante. En sí mismo el plan contenía una serie de instrumentos legales que le permitirían a Perón desarrollar y alcanzar determinadas metas: nacionalizar los servicios públicos, las fuentes de energía, fomentar la industria liviana y el mercado interno a partir de la redistribución de la riqueza a favor de los trabajadores.

Si bien desde mediados de la década del 30 el motor del crecimiento económico se centraba cada más en las incipientes industrias y el mercado interno, todavía el sector primario tenía un rol fundamental y era considerado por muchos como el eje de la economía del país. De hecho, hasta el momento, no se había aplicado ninguna política gubernamental sistemática destinada a promover la expansión del mercado interno y acelerar la industrialización. Allí radica una de las principales innovaciones del peronismo en materia económica: en la voluntad del Estado de participar activamente en la planificación económica a favor del desarrollo industrial y el mercado interno.

El plan venía a dar continuidad a algunas de las políticas ya planteadas en el período 1943-1946. Antes de asumir, Perón había conseguido, por ejemplo, la nacionalización del Banco Central y del sistema financiero y la creación del Instituto Argentino de Promoción e Intercambio (IAPI), un organismo nacional que intervenía en el comercio exterior. Esto significaba que era el Estado el que compraba la totalidad de las cosechas a los productores –grandes o pequeños– y las vendía al exterior. La diferencia que podía obtener era reinvertida en la industria, en otras palabras, era un modo de producir una transferencia de recursos del agro a la industria. Otras reformas institucionales llevadas a cabo por el gobierno militar fueron la sanción del primer régimen de promoción industrial del país (mediante el decreto 14.630/44), la organización del Banco de Crédito Industrial y de la Secretaría de Industria y Comercio. Estas medidas estaban pensadas para promover las inversiones industriales, e incluso permitían declarar una industria de interés nacional por un período de dos a cinco años.

Una vez ungido democráticamente en el cargo presidencial, Perón retomó estas políticas económicas y amplió su alcance. El Banco de Crédito Industrial implementó nuevos planes de crédito, por ejemplo, y la Secretaría se convirtió en Ministerio de Industria, adquiriendo así mayores poderes, e incluso haciéndose cargo de varias empresas estatales.

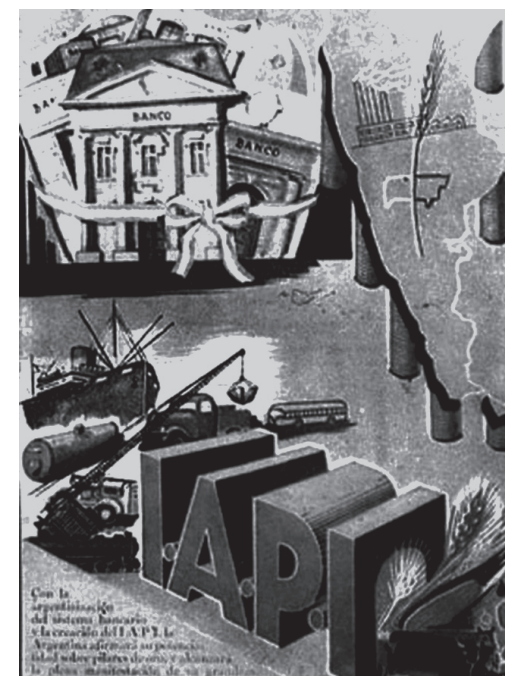
Como parte de las medidas impulsadas por el Plan Quinquenal, se nacionalizaron varias empresas de servicios que estaban en manos del capital privado, como la Unión Telefónica, las empresas de gas y los ferrocarriles. Los recursos del subsuelo fueron declarados patrimonio del Estado y se dio un nuevo impulso a Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) la empresa estatal de petróleo. La expansión de la Flota Mercante del Estado permitió transportar los productos que se exportaban en barcos argentinos, lo que significó también un importante beneficio económico al reducir el costo de los fletes y seguros.

En esencia, el Plan Quinquenal apuntó a dos tipos de industria. Por un lado, buscó la protección de las industrias manufactureras existentes, en particular las ramas metalúrgicas y textiles. En segunda instancia, favoreció el desarrollo de nuevas industrias, como la de la producción de laminados, acero, y algunos productos químicos. Si bien el mayor énfasis se puso en la industria liviana, también poco a poco se empezó a invertir en otros proyectos industriales de mayor complejidad, como la fabricación de autos, aviones, herramientas. En Zapla, Jujuy, se inició la construcción de un alto horno para la producción de acero.

Por otro lado, los salarios de los trabajadores fueron en aumento, por un lado, porque hubo una política concreta para incrementarlos y, por otro, como resultado de otras políticas de control de precios y de los costos de los alquileres. Entre 1945 y 1948 el incremento de los salarios fue de un 50%. Esto, a su vez, permitía seguir alentando la demanda de determinados bienes y sostener el crecimiento del mercado interno.



En 1952 la Industria Aeronáutica y Mecánica del Estado produjo un vehículo de fabricación nacional.



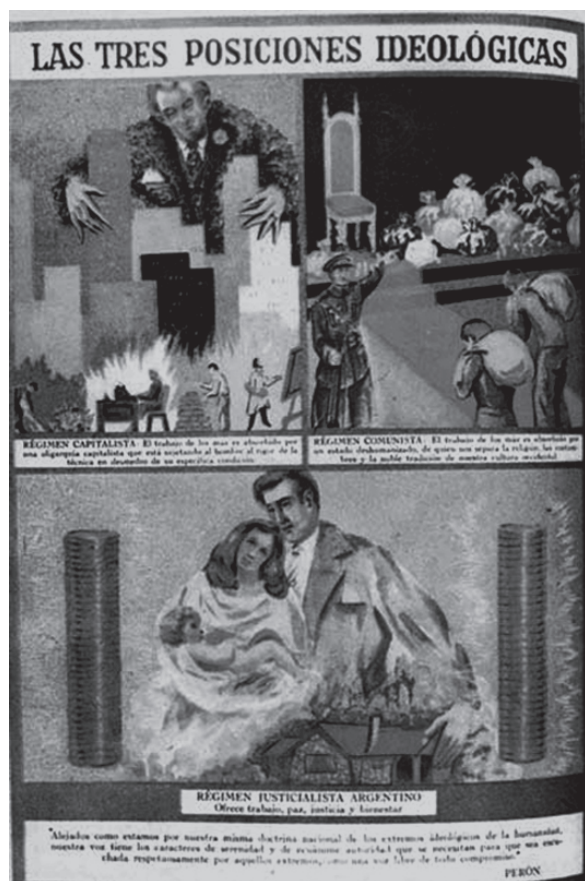
Propaganda oficial sobre el IAPI

La política exterior del peronismo

El peronismo asumió su gobierno en un contexto mundial marcado por la finalización de la Segunda Guerra Mundial y el inicio del conflicto entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ese conflicto dividió al mundo en dos bloques antagónicos que se disputaban el poder mundial: de un lado estaba el bloque capitalista con el liderazgo de los Estados Unidos y teniendo como aliados a los países de Europa occidental; del otro lado, estaba el bloque comunista, con la Unión Soviética a la cabeza junto con los países de Europa oriental. Cada bloque representaba un modelo de organización política, social y económicamente distinto que pugnaba por imponerse al otro: esa disputa, que se prolongó por décadas, se conoció como Guerra Fría.

Frente a este contexto, el peronismo buscó sentar su posición internacional en lo que llamó la "Tercera Posición", equidistante en principio tanto de la política de Estados Unidos como también de la Unión Soviética. No obstante, la Argentina mantuvo relaciones con todos los países del mundo, dentro de un marco de respeto mutuo. Incluso, a partir de 1947 estableció relaciones diplomáticas con la Unión Soviética inexistentes hasta entonces. La Argentina, también, fue uno de los primeros países en reconocer al Estado de Israel, fundado en 1948. Por otro

lado, el peronismo desplegó también estrechos vínculos diplomáticos con los países de Latinoamérica a través de la firma de diversos tratados de integración con Brasil, Chile y Paraguay.



La “tercera posición” planteaba la independencia en relación tanto al capitalismo como con el comunismo.

III- LA SEGUNDA PRESIDENCIA DE PERÓN

Contramarchas económicas y políticas

El año 1952 constituye un momento de quiebre en los años peronistas: se inicia la segunda presidencia de Perón y junto con ella comienza una crisis económica que se combinó con una mayor tensión en la vida política, agravada sin dudas por la muerte de Evita el 26 de julio de ese año.

Nueva coyuntura y Segundo Plan Quinquenal

Ya desde 1951 la economía había comenzado a mostrar algunos síntomas de crisis: las exportaciones comenzaron a caer, en parte a causa de un cambio en la coyuntura internacional y en parte debido a que los grandes productores afectados en sus ganancias por las políticas del IAPI redujeron la superficie sembrada, por ende la producción y por ende los saldos exportables. A su vez, en la medida en que los salarios se mantenían altos, el mercado interno también seguía presionando y demandando productos agrarios para su consumo interno. Una fuerte sequía terminó de complicar la situación de la producción agraria. Este retraimiento de las exportaciones afectaba consecuentemente la capacidad de importación de determinados bienes que se utilizaban para la producción industrial (por ejemplo, algunos combustibles), con lo cual las consecuencias pronto se comenzaron a sentir también en la industria.

A fines de 1952 Perón presentó el Segundo Plan Quinquenal: un nuevo programa que, al tiempo que trataba de corregir los problemas apuntaba además a promover el desarrollo de la industria pesada, la siderurgia, la maquinaria y la petroquímica. Además, el Plan preveía una serie de acuerdos con sectores del capital extranjero, entre ellos, la firma de un contrato con Standard Oil, para la explotación petrolera y negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Estas últimas medidas fueron algunos de los puntos que comenzaron a ser más duramente criticados por la oposición.



Afiche sobre el Segundo Plan Quinquenal.

Aún con matices y contradicciones, la aplicación de algunas de las medidas del Segundo Plan Quinquenal buscaba dar respuesta a las dificultades que venía experimentando la economía: mayores inversiones, sobre todo en la industria pesada, para lograr un autoabastecimiento completo. No obstante, el Plan tenía un límite difícil de superar, en tanto para promover ese tipo de industrias el Estado debía reorientar esfuerzos y recursos desde la industria liviana a la pesada, a su vez sin comprometer al mercado interno que se mantenía en expansión en tanto los salarios también continuaban una curva relativamente ascendente.

Como fuere, la economía se mantuvo con un ritmo de relativo crecimiento hasta 1955. Y pese a las denuncias de la oposición y cierto malestar general, ese año del golpe terminaría con un crecimiento de la economía del 7%. En ese sentido, la tormenta política que terminó con el gobierno de Perón tenía pocas causas económicas.

Hacia 1954, si bien la crisis económica comenzaba a superarse, la crisis política se intensificó. Entre los sectores de la oposición se encontraban los grupos de poder económico que se oponían a la política social y económica que desarrollaba el peronismo, los partidos políticos que no coincidían con algunas políticas del peronismo y un arco variopinto que acusaba a Perón de autoritario y antidemocrático.

El escenario político: entre la muerte de Evita y el agravamiento del conflicto entre peronismo y antiperonismo

A poco de iniciarse la segunda presidencia, la muerte de Evita conmocionó al escenario político y social: su figura era clave por el contacto directo y constante que tenía con los sindicatos y, más aún, por la política social desplegada desde la Fundación Eva Perón. Ella era, además, quien seguía encarnando el activismo y la militancia propios de los primeros años del gobierno peronista. Perón perdía no a su compañera sino a una figura clave de su entorno político. Por otra parte, las manifestaciones de dolor llenaron las calles por varios días, dando cuenta del enorme cariño y apoyo que los trabajadores sentían por Perón y por Evita.

Evita murió el 26 de julio de 1952, cuando tenía solo 33 años, a consecuencia de un cáncer. Aun enferma, no dejó de atender sus tareas en la Fundación que dirigía ni de acompañar a Perón en su gobierno. Su figura y su legado se convirtieron en uno de los símbolos más poderosos del peronismo y en el modelo de militancia para las generaciones siguientes.



Multitudinaria movilización durante el funeral de Evita.

Por otro lado, hubo por parte del gobierno un avance cada vez más decidido para “peronizar” las estructuras estatales: los principios del peronismo fueron declarados por el Congreso doctrina nacional, diversos libros que contenían menciones específicas sobre Perón y Evita se convirtieron en lectura obligatoria en las escuelas y fue también obligatorio que para el ingreso a la universidad se realizara un curso de formación política. Junto con estas medidas, también se expropiaron diarios y otros medios de comunicación y se practicó la censura.

La oposición seguía denunciando y reaccionando frente a cada embestida del gobierno, pero no encontraba ningún eje aglutinante que la organizara. El motivo llegó finalmente a partir de 1954, cuando se desató un fuerte enfrentamiento entre la Iglesia y el gobierno. Una sucesión de conflictos tensaron las relaciones: el gobierno retiró los subsidios estatales a los colegios religiosos, cerró publicaciones católicas y suprimió la educación religiosa en las escuelas públicas. Mientras tanto, el Congreso sancionaba la Ley de Divorcio y se preparaba una nueva reforma constitucional que establecía una clara separación entre la Iglesia y el Estado.

El resto de los actores de la oposición se fue sumando, con mayor o menor convicción y coincidencia, a la posición de la Iglesia. Más aún cuando, a principios de diciembre, una procesión en ocasión del Día de la Virgen, pese a haber sido prohibida por el gobierno se convirtió en una movilización masiva. En junio de 1955, la procesión de *Corpus Christi* reunió finalmente a todos los opositores a Perón: junto a los católicos marcharon los socialistas y los comunistas (partidos con poca o nula relación con la Iglesia), radicales, conservadores, nacionalistas católicos, etcétera.

El golpe de septiembre de 1955: el fin del gobierno peronista

Ese cuadro fue el trasfondo del intento de golpe de Estado ocurrido el 16 de junio de 1955. Ese día, la aviación naval y parte de la Fuerza Aérea bombardearon la Plaza de Mayo con la intención de asesinar a Perón. El movimiento contaba con apoyos diversos, civiles, militares y también religiosos. Los objetivos del golpe no se cumplieron, pero el bombardeo dejó como resultado la muerte de más de 300 personas y muchos más heridos. En medio de esa tragedia, la respuesta no se hizo esperar y grupos armados que apoyaban al gobierno quemaron las principales iglesias de la Capital y el conflicto se profundizó aún más.



Bombardeo a la Plaza de Mayo, en junio de 1955. La imagen corresponde al cruce entre Paseo Colón y Alsina, en la ciudad de Buenos Aires.

Los posteriores intentos del gobierno por apaciguar los enfrentamientos se frustraron uno tras otro. Finalmente, el 16 de septiembre de 1955 estalló una rebelión militar en Córdoba, que luego se extendió a otras bases militares y que contó también con el apoyo de la Marina. Parte de las fuerzas militares seguían siendo leales a Perón y se organizaron para reprimir el levantamiento, pero la amenaza de un nuevo bombardeo a Buenos Aires, e incluso a los depósitos de gas de Mar del Plata, obligó a una retirada: Perón sabía que si decidía resistir la guerra civil era inevitable, por lo cual presentó su renuncia. No obstante, ya nadie pudo evitar la violencia posterior. Un nuevo golpe de Estado quedaba consumado: el gobierno democráticamente elegido era derrocado por la fuerza militar.

IV- EL BIENESTAR SOCIAL

Más allá de los acontecimientos políticos –marcados por los conflictos, la tensión y en gran parte la violencia– y las marchas y contramarchas de la economía, los años del gobierno peronista están marcados por una experiencia clave: la extensión del bienestar social. A través de la iniciativa del Estado y a partir de la acción de la Fundación Eva Perón, las condiciones de vida y de trabajo de los sectores populares se transformaron de manera decisiva. A continuación se detallan algunas de esas políticas, las cuales se desplegaron tanto en la primera como en la segunda presidencia.

Nuevos consumidores

En primer lugar, la mejora en los salarios reales implicó una redistribución general de la riqueza, de acuerdo, por cierto, a la situación previa de cada uno de los sectores trabajadores. Y esto, a su vez, proyectó hacia el mercado la posibilidad de más consumidores. En efecto, el aumento de salarios, combinado con las mejores condiciones laborales, significó que cada vez más familias tuvieran acceso a bienes antes restringidos solo a determinado sector: más y mejores alimentos, vestimenta, electrodomésticos e, incluso, el acceso a un mercado de espectáculos y entretenimientos.

Esta situación más holgada de los trabajadores también repercutió en el acceso a la vivienda. Por un lado, el congelamiento de los alquileres permitió también mejorar los salarios reales (en tanto el gasto del alquiler se mantenía fijo); por otro lado, la oferta de créditos a baja tasa y las nuevas construcciones encaradas por el propio Estado crearon una oferta accesible de viviendas para los trabajadores.

Políticas públicas: salud y educación

La escolarización primaria creció estimulada por el Estado y apoyada en la construcción de nuevos edificios. Este crecimiento significó, consecuentemente, una disminución de las tasas de analfabetismo. Por otro lado, la educación pública secundaria –a la que en general solo accedían los hijos de la clase media pues estaba arancelada– comenzó a partir de 1950 a ser gratuita, lo cual motivó un notable incremento de la matrícula, al incorporarse estudiantes provenientes de familias trabajadoras. También aumentó el número de estudiantes universitarios en las seis universidades nacionales existentes, a partir de un decreto de 1950, que estableció la gratuidad de la enseñanza universitaria, hasta entonces también arancelada. En 1952 se creó la Universidad Obrera Nacional, una institución que buscaba no solo abrir más espacios de formación para los sectores populares sino además formar técnicos y profesionales que pudieran trabajar en las industrias que se querían promover.

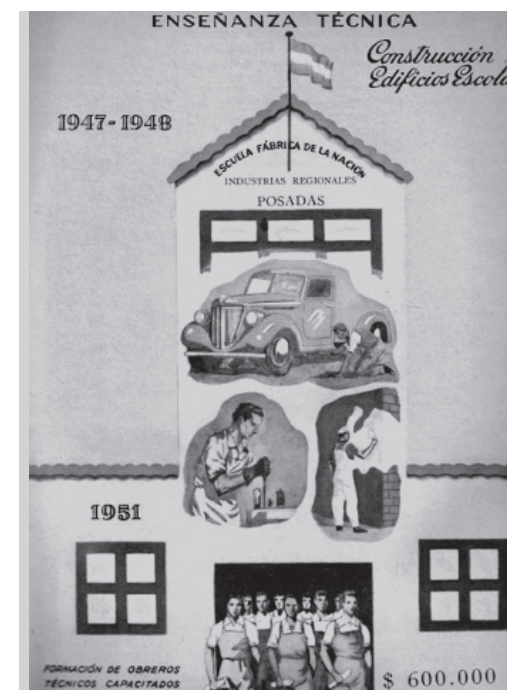
Después del golpe de 1955, la Universidad Obrera Nacional se convirtió en la Universidad Tecnológica Nacional.

En 1949 se creó el Ministerio de Educación y se aumentaron cada año las partidas presupuestarias destinadas a esta área.

La salud también recibió una particular atención por parte del Estado peronista. En 1949 la Secretaría de Salud se transformó en Ministerio. Desde allí, el doctor Ramón Carrillo impulsó campañas nacionales de vacunación y de prevención y lucha contra diversas enfermedades. Junto con estas acciones, también se aumentaron los presupuestos destinados a la salud pública: se construyeron nuevos hospitales, se mejoraron instalaciones, se aumentó la cantidad de camas y salas para atender pacientes, etcétera. La Fundación Eva Perón construyó policlínicos en el Gran Buenos Aires (Avellaneda, Ezeiza, Lanús y San Martín) y proyectó otros en ciudades del interior del país.



Afiche de la época sobre la supresión de aranceles en las universidades públicas.



Afiche de la época sobre promoción de la educación técnica.

Turismo social

También en este caso la mejora de los salarios combinada con las mejores condiciones laborales (vacaciones pagas) estimularon el crecimiento del turismo para los trabajadores, una actividad que ya venía en alza desde los años 30. Para responder y estimular a este movimiento turístico, el gobierno construyó hoteles y colonias de vacaciones en determinados centros turísticos como en el Embalse de Córdoba, en Chapadmalal, en cercanías de Mar del Plata.

Según diversos estudios, en el verano de 1930 habían arribado a Mar del Plata unos 65 mil turistas; en 1940 llegaron 380 mil y en 1955 los veraneantes fueron de cerca de un millón y medio.



El turismo social en la Argentina.
Dibujo realizado para el Calendario Alpargatas de 1947.

La obra pública

Las obras públicas tuvieron un papel muy importante también en el período peronista. Durante la primera presidencia de Perón, fue designado ministro de Obras Públicas, el general e ingeniero civil Juan Pistarini, quien realizó, a través de su Ministerio de Obras Públicas, una importante cantidad de obras, entre ellas el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Fue también el ministerio de Pistarini el que se ocupó de la construcción de los barrios, las escuelas, los hogares-escuela, los hogares de ancianos, los hospitales y los complejos de turismo.

Políticas culturales

Tanto desde las diversas reparticiones del Estado vinculadas con el mundo de la cultura como a través de nuevos proyectos, el gobierno peronista buscó delinear una política cultural con perfil propio. Básicamente se trataba, como en los otros casos, de poner a disposición de públicos cada vez más amplios los productos y prácticas culturales antes restringidos solo a determinados sectores. Se organizaron viajes por el interior, para difundir las producciones culturales y paisajísticas de las provincias; se estipuló que la mitad de la música difundida por las radios debía ser de producción nacional; se crearon orquestas sinfónicas, una de jurisdicción nacional, otra en la ciudad de Buenos Aires, otra dependiente de Radio del Estado y otra de carácter juvenil. El Teatro Colón organizó funciones gratuitas de música clásica para los sindicatos y para el público convocado por la Fundación Eva Perón. La Comisión de Bibliotecas Populares se ocupó de llevar adelante diversos programas de prácticas de arte para niños de hogares populares.

Por otro lado, a partir de 1950 el campo de la cultura y el de los medios de comunicación quedaron cada vez más tensionados y polarizados, a medida que los conflictos entre peronistas y antiperonistas se profundizaban. En ese contexto, el gobierno, a través de la Subsecretaría de Informaciones –creada por el gobierno militar de 1943– ejerció un férreo control y censura sobre intelectuales, artistas y medios opositores.

La Fundación Eva Perón

Durante la primera presidencia de Perón, Eva creó una Fundación que llevaría su nombre. Su objetivo era claro: una intervención y una ayuda directa para los sectores más pobres. La Fundación se ocupaba de actividades muy distintas, pero todas vinculadas a la ayuda: desde distribución de ropa, alimentos, libros, hasta máquinas de coser y juguetes. Pero también llevó adelante la construcción de policlínicos, hogares de ancianos, hogares- escuela, hogares de tránsito para mujeres, escuelas, etcétera. Si bien se cuestionaba que recibía cuantiosos fondos del Estado, el trabajo realizado por la Fundación fue clave en términos del desarrollo de la política social.



Dormitorios de hogares para niños, creados por la Fundación Eva Perón.

Selección de fuentes y actividades sugeridas

1- Selección de documentos del peronismo.

a- Juan Perón: extracto del discurso pronunciado el 17 de octubre de 1945

“Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción: pero desde hoy, sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de trabajadores, que es lo único que puede hacer grande e inmortal a la Patria. Hace dos años pedí confianza. Muchas veces me dijeron que ese pueblo a quien yo sacrificara mis horas de día y de noche, habría de traicionarme. Que sepan hoy los indignos far-santes que este pueblo no engaña a quien lo ayuda. Por eso, señores, quiero en esta oportunidad, como simple ciudadano, mezclarme en esta masa sudorosa, estrecharla profundamente en mi corazón, como lo podría hacer con mi madre. (En ese instante, alguien cerca del balcón le gritó: ¡un abrazo para la vieja!) Perón le respondió: que sea esta unidad indestructible e infinita, para que nuestro pueblo no solamente posea una unidad, sino para que también sepa dignamente defenderla. ¿Preguntan ustedes dónde estuve? ¡Estuve realizando un sacrificio que lo haría mil veces por ustedes! No quiero terminar sin lanzar mi recuerdo cariñoso y fraternal a nuestros hermanos del interior, que se mueven y palpitan al unísono con nuestros corazones desde

todas las extensiones de la Patria. Y ahora llega la hora, como siempre para vuestro secretario de Trabajo y Previsión, que fue y seguirá luchando al lado vuestro para ver coronada esa era que es la ambición de mi vida: que todos los trabajadores sean un poquito más felices”.

Actividades:

–¿Qué tipo de relación se plantea entre Perón y los trabajadores?

b- Discurso pronunciado por Evita en el año 1946, previo a la sanción de la Ley N° 13.010 de 1947.

“La mujer debe afirmar su acción, la mujer debe votar. La mujer, resorte moral de un hogar, debe ocupar su sitio en el complejo engranaje social de un pueblo. Lo pide una necesidad nueva de organizarse en grupos más extendidos y remozados. Lo exige, en suma, la transformación del concepto de la mujer, que ha ido aumentando sacrificadamente el número de sus deberes sin pedir el mínimo de sus derechos. El voto femenino será el arma que hará de nuestros hogares el recaudo supremo e inviolable de una conducta pública. El voto femenino será la primera apelación y la última. No es sólo necesario elegir, sino también determinar el alcance de esa elección”.

“En los hogares argentinos del mañana, la mujer, con su agudo sentido intuitivo, estará velando por su país al velar por su familia”.

“Su voto será el escudo de su fe. Su voto será el testimonio vivo de una esperanza, de un futuro mejor”.

Actividades

–¿Qué rol político se le asigna a la mujer?

–¿Cuál es el argumento para justificar su derecho al sufragio?

c- Selección de artículos de la Constitución de 1949.

Artículo N° 37

“El derecho de trabajar debe ser protegido por toda la sociedad, considerándolo con la dignidad que merece y proveyendo ocupación a quien lo necesite”.

Artículo N° 40

“La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del

pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social.

Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, los de carbón y de gas y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto, que se convendrá con las provincias. Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado, y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se hallaren en poder de particulares serán transferidos al Estado, mediante compra o expropiación con indemnización previa, cuando una ley nacional lo determine”.

Actividades:

–¿Qué reflexión general te sugieren estos dos artículos de la Constitución de 1949?

–¿Qué posicionamiento del Estado implican?

–¿Qué tipo de derechos se sancionan?

2- El peronismo en los medios de comunicación.

MORDISQUITO. DISCÉPOLO, ENRIQUE SANTOS, MONÓLOGOS EN LA RADIO EN 1951.

“Resulta que antes no te importaba nada y ahora te importa todo. Sobre todo lo chiquito. Pasaste de náufrago a financista sin bajarte del bote. Vos, sí, vos, que ya estabas acostumbrado a saber que tu patria era la factoría de alguien y te encontraste con que te hacían el regalo de una patria nueva, y entonces, en vez de dar las gracias por el sobretodo de vicuña, dijiste que había una pelusa en la manga y que vos no lo querías derecho sino cruzado. ¡Pero con el sobretodo te quedaste! Entonces, ¿qué me vas a contar a mí? ¿A quién le llevás la contra? Antes no te importaba nada y ahora te importa todo. Y protestás.

¿Y por qué protestás? ¡Ah, no hay té de Ceilán! Eso es tremendo. Mirá qué problema. Leche hay, leche sobra; tus hijos, que alguna vez miraban la nata por turno, ahora pueden irse a la escuela con la vaca puesta. ¡Pero no hay té de Ceilán! Y, según vos, no se puede vivir sin té de Ceilán. Te pasaste la vida tomando mate cocido, pero ahora me planteás un problema de Estado porque no hay té de Ceilán.

Claro, ahora la flota es tuya, ahora los teléfonos son tuyos, ahora los ferrocarriles son tuyos, ahora el gas es tuyo, pero... ¡no hay té de Ceilán! Para entrar en un movimiento de recuperación como éste al que estamos asistiendo, han tenido que cambiar de sitio muchas cosas y muchas ideas; algunas, monumentales; otras, llenas de amor o de ingenio; ¡todas asombrosas!

El país empezó a caminar de otra manera, sin que lo metieran en el andador o lo llevaran atado de una cuerda; el país se estructuró durante la marcha misma; ¡el país remueve sus cimientos y rehace su historia! Pero, claro, vos estás preocupado, y yo lo comprendo: porque no hay té de Ceilán. ¡Ah... ni queso! ¡No hay queso! ¡Mirá qué problema! ¿Me vas a decir a mí que no es un problema? Antes no había nada de nada, ni dinero, ni indemnización, ni amparo a la vejez, y vos no decías ni medio; vos no protestabas nunca, vos te conformabas con una vida de araña. Ahora ganás bien; ahora están protegidos vos y tus hijos y tus padres.

Sí; pero tenés razón: ¡no hay queso! Hay miles de escuelas nuevas, hogares de tránsito, millones y millones para comprar la sonrisa de los pobres; sí, pero, claro, ¡no hay queso! Tenés el aeropuerto, pero no tenés queso. Sería un problema para que se preocupase la vaca y no vos, pero te preocupás vos. Mirá, la tuya es la preocupación del resentido que no puede perdonarle la patriada a los salvadores. Para alcanzar lo que se está alcanzando hubo que resistir y que vencer las más crueles penitencias del extranjero y los más ingratos sabotajes a este momento de lucha y de felicidad. Porque vos estás ganando una guerra. Y la estás ganando mientras vas al cine, comés cuatro veces al día y sentís el ruido alegre y rendidor que hace el metabolismo de todos los tuyos. Porque es la primera vez que la guerra la hacen cincuenta personas mientras dieciséis millones duermen tranquilas porque tienen trabajo y encuentran respeto. Cuando las colas se formaban no para tomar un ómnibus o comprar un pollo o depositar en la caja de ahorro, como ahora, sino para pedir angustiosamente un pedazo de carne en aquella vergonzante olla popular, o un empleo en una agencia de colocaciones que nunca lo daba, entonces vos veías pasar el desfile de los desesperados y no se te movía un pelo, no. Es ahora cuando te parás a mirar el desfile de tus hermanos que se ríen, que están contentos... pero eso no te alegra porque, para que ellos alcanzaran esa felicidad, ¡ha sido necesario que escasease el queso!

No importa que tu patria haya tenido problemas de gigantes, y que esos problemas los hayan resuelto personas. Vos seguís con el problema chiquito, vos seguís buscándole la hipotenusa al teorema de la cucaracha, ¡vos, el mismo que está pre-

ocupado porque no puede tomar té de Ceilán! ¡Y durante toda tu vida tomaste mate!
¿Y a quién se la querés contar? ¿A mí, que tengo esta memoria de elefante? ¡No, a
mí no me la vas a contar!”.

Actividades:

- ¿Con quién está discutiendo Discépolo?
- ¿Qué cuestiones de la política y la gestión del peronismo son relevadas en este monólogo?
- ¿Por qué te parece que el autor utiliza un sentido irónico para dar esta discusión política?

BIBLIOGRAFÍA

- Barry, C. *Evita Capitana. El partido peronista femenino 1949-1955*. Buenos Aires, Eduntref, 2006.
- (Comp.), *Sufragio Femenino*, Buenos Aires, Eduntref, 2011.
- Cattaruzza, Alejandro, *Historia de la Argentina 1916-1955*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2009.
- Cichero, Daniel. *Bombas sobre Buenos Aires*, Buenos Aires, Vergara, 2005.
- Chávez, Gonzalo L., *La masacre de Plaza de Mayo*, Buenos Aires, Editorial de la Campana, 2005.
- Chávez, Fermín, *Evita hay una sola*, Buenos Aires, Corregidor, 1999.
- Del Campo, Hugo, *Sindicalismo y peronismo. Comienzos de un vínculo perdurable*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2005.
- Galasso, Norberto, *Perón Tomo I: Formación, ascenso y caída 1893-1955*, Buenos Aires, Colihue, 2005.
- Godio, Julio, *La caída de Perón*, Buenos Aires, Granica Editor, 1973.
- González, Horacio, *Perón. Reflejos de una vida*, Buenos Aires, Colihue, 2007.
- Luna, Félix, *El 45*, Buenos Aires, Sudamericana, 1971.
- Mackinnon, Moira, *Los años formativos del partido peronista*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2002.
- Murmis, M y Portantiero, J. C, *Estudios sobre los orígenes del peronismo*, Buenos Aires, Siglo XXI, 1971.
- Navarro, Marysa, *Evita*. Buenos Aires, Edhasa, 2007.
- Plotkin, Mariano, *Mañana es San Perón*, Buenos Aires, Eduntref, 2007.
- Potash, R., *El ejército y la política argentina II*, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986.
- *„Perón y el GOU - Los documentos de una logia-“*, Buenos Aires, Sudamericana, 1984.
- Romero, Luis Alberto, *Historia contemporánea de la Argentina*, Buenos Aires, Sudamericana, 1998.
- Rouquié, Alain, *Poder militar y sociedad política en la Argentina*, Buenos Aires, Emecé, 1981.

Sidicaro, Ricardo, *Los tres peronismos. Estado y poder económico 1946-1955/1973-1976/1989-1999*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2005.

Torre, Juan Carlos (dir.), *Los años peronistas 1943-1955*, tomo VIII, Buenos Aires, Sudamericana, 2005.

CAPÍTULO 4: *Golpes militares y salidas democráticas: movilización y resistencia frente al autoritarismo. 1955-1976*

El 16 de septiembre de 1955 el general Eduardo Lonardi encabezó, desde Córdoba, una sublevación militar que desembocó en un nuevo golpe de Estado: nuevamente se interrumpía de manera violenta la continuidad institucional y se ponía fin a un Gobierno que había sido elegido democráticamente. Si bien no fueron muchas las unidades del Ejército que acompañaron a Lonardi, sí contó con un fuerte apoyo de parte de la Marina, que incluso amenazó con bombardear las ciudades portuarias. Además, diversos sectores civiles también se sumaron de una u otra manera al golpe: partidos políticos opositores al peronismo, corporaciones económicas como la Sociedad Rural y, por cierto, también la Iglesia Católica.

El golpe dio inicio a una de las etapas más conflictivas de la historia nacional. Por un lado, durante casi tres décadas, a partir del 55, no existió continuidad institucional y los sistemas de representación y las prácticas democráticas fueron vulneradas una y otra vez. Cada uno de los gobiernos electos por voluntad popular, más allá de las fortalezas o debilidades que tuviera, fue condicionado y luego derribado por un golpe militar que lo suplantó con un gobierno de facto. Pero los gobiernos de facto, por distintos motivos, tampoco lograron sostenerse. La secuencia cronológica del período considerado en este capítulo, muestra la constante sucesión de golpes militares y salidas electorales que se frustran a poco de llegar al poder.

Por otro lado, con el golpe del 55 se inicia una etapa de varios años de proscripción y persecución política para el peronismo. Esta situación generó un fuerte movimiento de resistencia y de lucha, no solo en términos políticos, sino también para la defensa de los derechos sociales y laborales obtenidos a partir de 1945. Por otro lado, y como parte de esta dinámica también, el movimiento obrero se diversificó en sus filiaciones y adscripciones políticas y también presionó en defensa de sus intereses.

El trasfondo de esa institucionalidad espasmódica y de esa intensa conflictividad en relación con la proscripción y resistencia del peronismo fue una profundización de la movilización social y política que incluyó la emergencia de organizaciones políticas armadas.

A su vez, algunos acontecimientos políticos internacionales, como la Revolución Cubana, los procesos de descolonización en África, el Mayo Francés de 1968, entre otros, potenciaron y radicalizaron aún más a los movimientos políticos y sociales que se oponían tanto al autoritarismo de los gobiernos militares como a la debilidad de los gobiernos democráticos que se sucedían. Consecuentemente, ese clima parecía dar también argumentos para el ejercicio del autoritarismo y de la represión: se combatía al peronismo, pero también al comunismo y a cualquier tipo de organización e ideología que pusiera en cuestión el supuesto orden establecido.

La economía de estas décadas también estuvo cruzada por tensiones y ciclos diversos: la política desarrollista, iniciada con el gobierno de Frondizi, promovió intentos de industrialización pero que se combinaron con la llegada de los organismos internacionales de financiamiento, la generación de deuda externa y la vuelta, finalmente, a políticas liberales. También esta sucesión de crisis económicas fue parte de las causas de la movilización y la conflictividad.

En este capítulo se busca dar cuenta de los movimientos pendulares que marcaron la sucesión entre gobiernos autoritarios y gobiernos con un sistema democrático débil, siempre cuestionados por los grupos dominantes de la sociedad, siempre tutelados y jaqueados por las fuerzas armadas. En parte, la dinámica del recambio entre esos dos tipos de gobiernos estuvo marcada por los movimientos sociales y políticos que se organizaron para resistir al autoritarismo y para reclamar por sus derechos frente a los nuevos planes económicos que se pretendían implementar. Por otro lado, gran parte de los conflictos y tensiones que caracterizaron a estas décadas remitían a un problema nodal: qué hacer con el peronismo. Eso implicó que los sucesivos gobiernos oscilaran entre la represión, la proscripción, la negociación, etc. y que, en definitiva, quedaran, constantemente en medio de la tensión entre la legalidad y la legitimidad.

El esquema de este capítulo se organiza a partir de tres períodos: 1955-1966; 1966-1973; 1973-1976.



Asunción de Lonardi.

I- 1955-1966: BAJO EL SIGNO DE LA “REVOLUCIÓN LIBERTADORA”: REPRESIÓN, RESISTENCIA Y LAS FALLIDAS DEMOCRACIAS DE FRONDIZI E ILLIA

Entre la consigna “ni vencedores ni vencidos” y el inicio de la resistencia peronista

Perón fue derrocado en septiembre de 1955 por un movimiento militar que se autodenominó Revolución Libertadora. El Poder Ejecutivo fue ocupado por el general Eduardo Lonardi, líder militar del golpe.

Lonardi era un militar nacionalista, católico, con una fuerte impronta entre los sectores del Ejército que simpatizaban con Perón pero también con diálogo fluido con otros sectores políticos y económicos que se oponían al peronismo. En medio de un clima enrarecido y de tensión, el nuevo mandatario buscó posicionar a su gobierno a partir de la idea de “ni vencedores, ni vencidos”. El lema, en realidad, buscaba interpelar a quienes eran los “vencidos” luego de los acontecimientos de septiembre: el movimiento peronista. En algún sentido, Lonardi esperaba conseguir su apoyo, como un modo de dotar de cierta legitimidad a su gobierno. Por eso, también, evitó la inter-

vención a la CGT y permitió que se llamara a elecciones en esa organización.

Pero estas concesiones al peronismo alejaban a otros sectores políticos y económicos que habían apoyado vehementemente el golpe. En efecto, el acercamiento al sindicalismo no era bien visto por la Marina, sector militar claramente antiperonista, por ejemplo. Desde allí se impulsó, entonces, la creación de una Junta Consultiva Nacional de partidos políticos la cual buscaba, por un lado, poner un límite a la política de Lonardi y, a su vez, impulsar la incorporación de los partidos tradicionales a la discusión política para así contener el reposicionamiento del peronismo. En algún sentido, esta Junta apuntaba a reestablecer el vínculo entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas políticas, más allá de la figura del presidente.

Una vez puesta en marcha, la Junta se ocupó de exigir y controlar que los pactos previos al golpe fuesen cumplidos: básicamente, que los cargos ministeriales se repartieran entre todo el arco opositor para organizar un gobierno de equilibrios que pudiera borrar las marcas de la experiencia peronista. Los conflictos y tensiones se desataron rápidamente entre la Junta y el presidente, y finalmente Lonardi tuvo que renunciar en noviembre de 1955. Fue una especie de “golpe dentro del golpe” que apuntaba a terminar con la postura negociadora de Lonardi e iniciar una nueva situación en la que el objetivo principal sería “desperonizar” a la sociedad.



Tapa del diario *Ahora* (26 de septiembre de 1955).

Aramburu y la “reeducación del peronismo”

La nueva etapa estuvo a cargo de otro militar, el general Pedro Aramburu. En los sectores políticos y militares vinculados con el gobierno se hablaba de “reeducar al peronismo” con medidas persuasivas pero también directamente represivas. A través de diversos decretos, el presidente Aramburu intervino, tal como los sectores antiperonistas reclamaban, a la CGT, disolvió el Partido Justicialista, inhabilitó a sus miembros para ser empleados del Estado y suspendió a los delegados gremiales nombrados luego de 1952. A su vez, se suprimieron todos los símbolos peronistas que habían sido incorporados al Estado, se cambiaron aquellos nombres de calles e instituciones que remitieran al peronismo o a su política y se llegó a prohibir la mención del propio nombre de Perón. La prensa, por ejemplo, hablaba de él como “el tirano prófugo” o “el expresidente en el exilio”.



Aramburu y Rojas.

En medio de la violencia y los conflictos, el gobierno militar dio respuesta a reclamos de intelectuales y artistas antiperonistas: creó el Fondo Nacional de las Artes, reabrió instituciones culturales que habían sido cerradas por el peronismo (como la Sociedad Luz y el Colegio Libre de Segunda Enseñanza) y promovió cambios en el funcionamiento de las universidades.

Pero la respuesta de quienes debían ser “reeducados”, los peronistas, fue exactamente la contraria a la esperada: organizaron huelgas y sabotajes, se mantuvieron de una u otra manera en contacto con Perón, quien permanecía en el exilio, y comenzaron a proyectar su retorno. En junio de 1956 se produjo un levantamiento de militares retirados y civiles, liderado por el general Valle, que buscaba derrocar el gobierno de Aramburu y permitir el regreso de Perón. Pero el movimiento fracasó y produjo una violenta represión: el gobierno estableció la ley marcial y fusiló a más de 20 militares y 18 civiles sublevados.

También fue fusilado un grupo de obreros en José León Suárez, que nada tuvieron que ver con el alzamiento. Este último hecho fue narrado por Rodolfo Walsh en la obra literaria *“Operación Masacre”*.

Lejos de ser borrada, la identidad peronista se veía ratificada en esa dinámica de oposición y conflicto. Se iniciaba así lo que se ha llamado la “Resistencia Peronista”.

La reforma de la Constitución y la campaña presidencial

Uno de los pilares sobre los que se asentaba la llamada “Revolución Libertadora” era la puesta en marcha de un proceso que reordenara a la sociedad argentina según el modelo previo a 1945. Para conseguir esto necesitaba no solo “reeducar” al peronismo, sino también reformar la Constitución Nacional, “La Constitución peronista”, que estaba en vigencia desde 1949. El 27 de abril de 1957, el presidente Aramburu, a través de una proclama militar, derogó esa Constitución y convocó a una Convención Constituyente para que legalizara dicha supresión. Esta situación dejaba sin efecto, también, todos los derechos y garantías que la Constitución del 49 había establecido en relación con el progreso social y económico de la sociedad argentina: el derecho de reunión, la prohibición de discriminar por raza, los derechos del trabajador, la igualdad jurídica de hombre y mujer en el matrimonio, el bien de familia, la patria potestad compartida, los derechos de la ancianidad, la estatización del comercio exterior, la nacionalización de los recursos mineros y energéticos, la estatización de los servicios públicos, el voto directo, entre otros.

Por otro lado, la campaña para la elección de constituyentes quedaba planteada como una especie de prueba en tanto permitiría evaluar cómo funcionaba el sistema político: el juego se abrió a todos los partidos políticos excepto al peronismo, que seguía proscripto. De hecho, la convocatoria a elecciones provocó también realineamientos en los otros partidos políticos.

El partido radical, por ejemplo, enfrentaba rupturas internas diversas que mostraban distintas tendencias: por un lado, los grupos más renovadores del partido, nucleados en la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI) y liderados por Arturo Frondizi y por otro los sectores más conservadores reunidos en la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP).

El desarrollo de la campaña mostró el reposicionamiento de los distintos actores políticos. Por un lado, la UCRI estaba en desacuerdo con la convocatoria para reformar la Constitución, porque sostenía que el gobierno no tenía legitimidad suficiente para hacerlo. De todos modos, se sumó a la campaña interpelando a los radicales pero también a ciertos sectores del peronismo. El líder de la UCRI, Arturo Frondizi, se apoyó en una importante revista de la época, la revista *Que*, dirigida por Frigerio y que contaba con participaciones editoriales de algunos peronistas para transmitir sus opiniones sobre la campaña y la próxima reforma constitucional. Por otro lado, la UCRP, liderada por Ricardo Balbín, había logrado unificar tras de sí a distintas corrientes del radicalismo. Se presentaban a las elecciones con una propuesta de reforma constitucional que incluía 21 puntos centrales, entre los cuales se mencionaba la defensa de los derechos sociales y la enajenabilidad del petróleo.



Arturo Frondizi.

La campaña excluía explícitamente a Perón y al peronismo. Sin embargo, aún desde el exilio, Perón seguía en estrecho contacto con militantes y dirigentes sindicales y decidió participar, en algún sentido, a través de ellos. Así, envió la orden de concurrir a la elección pero “votar en blanco”, como modo de expresar la opinión del peronismo sobre la convocatoria en cuestión.

Las elecciones se realizaron el 28 de julio de 1957 y el triunfador fue, de alguna manera, el voto en blanco: obtuvo el 24%. Este resultado era clara muestra de que el proceso de “desideologización” no había tenido los efectos esperados y que el voto peronista seguía siendo muy fuerte. A su vez, evidenciaba que el exilio tampoco había logrado interrumpir la comunicación entre Perón y los peronistas ni evitar que Perón siguiera participando de la vida política nacional.

La Constituyente se reunió, finalmente, en la ciudad de Santa Fe entre el 30 de agosto y el 23 de septiembre de 1957, pero resultó un fracaso: el alto porcentaje de voto en blanco le quitaba legitimidad y, por otro lado, la imposibilidad de llegar a acuerdos entre los participantes implicó que solo pudiera decidir algunas enmiendas. El balance era sombrío para el gobierno y para el arco antiperonista: sin el peronismo era difícil construir y sostenerse en el poder. Por eso, de cara a la convocatoria a elecciones presidenciales, Arturo Frondizi, de la UCRI decidió una estrategia ambiciosa aunque, por cierto, riesgosa: ganar, de alguna manera, el voto peronista. Para esto se encargó a Rogelio Frigerio que iniciara un diálogo con el representante de Perón, John William Cooke.

John William Cooke era abogado y fue uno de los diputados más jóvenes en 1946. Entre 1955 y 1959 fue representante y apoderado de Perón y máximo líder de la resistencia peronista.

¿Era posible un acuerdo entre dos que no eran aliados naturales? La UCRI buscaba el apoyo del movimiento justicialista de cara a la contienda electoral y prometía, si resultaba ganadora, que se levantaría la proscripción al peronismo. Para Perón el acuerdo significaba otro modo de seguir participando, aún desde el exilio y la proscripción, de la vida política nacional. La leyenda que entonces apareció pintada en las calles fue “La orden es: Frondizi el 23”, en alusión directa a lo que debían hacer los peronistas el 23 de febrero de 1958. Aún con reticencias, gran parte de los votos peronistas fueron para el candidato de la UCRI: Frondizi obtuvo algo más de 4 millones de sufragios, contra dos millones y medio obtenidos por Ricardo Balbín.

El gobierno de Frondizi

Arturo Frondizi asumió como presidente constitucional el 1° de mayo de 1958. Su gestión estuvo marcada por dos ejes: la implementación de un proyecto económico desarrollista y la necesidad de encontrar respuestas políticas frente al heterogéneo arco de alianzas que, en principio, apoyaban su gobierno.

El proyecto desarrollista

El desarrollismo era una teoría económica de matriz latinoamericana. Partía de considerar que los términos del intercambio internacional habían delineado y profundizado un esquema de países centro-industriales y países periferia-agrícolas, que reproducía el subdesarrollo y ampliaba la brecha entre países desarrollados y países subdesarrollados. Frente a esa situación, el desarrollismo defendía la necesidad de lograr, para los países latinoamericanos, un desarrollo sustentable basado en el progreso de la industria pesada (petroquímica, siderurgia, tecnificación, etc.). Estas ideas, por otra parte, mostraban el agotamiento de la propuesta económica que defendía y promovía las industrias livianas y el mercado interno.

En este sentido, Frondizi apuntaba a crear una infraestructura industrial distinta a la existente en el país para lo cual necesitaba muchas y grandes inversiones. Por eso, apostó por la radicación de empresas multinacionales, antes que a la intervención del Estado como actor para las inversiones, para impulsar el desarrollo industrial.



Torre Petrolera, en la provincia de Salta.



Destilería de YPF, en Salta.

Los acuerdos y los conflictos políticos

La realización del proyecto desarrollista requería, por cierto, de una sociedad pacificada y relativamente dispuesta a aceptar los cambios implicados. Durante los primeros momentos de su gobierno, Frondizi buscó concretar parte de los acuerdos realizados con las fuerzas que lo habían apoyado. Por un lado, cumplió con los compromisos electorales asumidos con el peronismo: anuló el decreto de prohibición de los símbolos justicialistas, ratificó y fortaleció la primacía peronista en los sindicatos y en la CGT, les garantizó el control de las obras sociales y dio un aumento salarial del 60%. Estas medidas garantizaron cierta tranquilidad entre los sectores peronistas. Por otro lado, también buscó dar respuesta a las demandas de otros actores que también lo habían apoyado. De esta manera envió un proyecto de ley al Parlamento para permitir y reglamentar el funcionamiento de las universidades privadas, que estaban bajo la órbita de la Iglesia Católica.

Un tema clave del gobierno frondizista fue “la política del petróleo”. El gobierno, con el argumento sobre la necesidad de garantizar el autoabastecimiento energético para ayudar a la modernización del país, permitió la exploración y la explotación de las reservas de este hidrocarburo por parte de empresas extranjeras. Además, y como parte de una política que buscaba asegurar inversiones, les otorgó beneficios impositivos y permitió la repatriación de capitales y ganancias.

En algún punto cada una de estas medidas conformaba a un determinado sector, pero generaba tensiones en las relaciones con los demás. El fin de la proscripción al peronismo ponía en jaque el apoyo de la Iglesia y de los sectores antiperonistas que habían participado de la campaña a favor de la UCRI. A su vez, la habilitación para que la Iglesia controlara parte de la educación universitaria ponía en cuestión los principios de la formación laica defendidos y consagrados desde la Reforma Universitaria de 1918. Y, por otro lado, la relación con las empresas de capital extranjero y el permiso para que explotaran recursos naturales corrió hacia la oposición a otros tantos actores que habían sido parte de la alianza inicial del frondizismo.

La autorización para el funcionamiento de las universidades privadas generó un conflicto en el mundo universitario. La medida activó a sectores de la cultura y del movimiento estudiantil impulsados por la Federación Universitaria Argentina junto con docentes, encabezados por el rector de la Universidad de Buenos Aires, que era a su vez el hermano del presidente de la Nación. Los universitarios levantaron pancartas con la leyenda: “Los curas a los templos, la escuela con Sarmiento”.



Marchas y protestas en defensa de la educación laica.

En medio de esas tensiones cruzadas y como parte de los cambios económicos implementados, se produjo un ajuste económico que buscaba estabilizar la economía y reducir el gasto público. A partir de aquí se mostró claramente cuál

les eran los límites a las políticas de integración intentadas por la UCRI y, a su vez, los límites del proyecto económico propuesto. Los sectores dentro del gobierno que buscaban lograr una pacificación política fueron perdiendo espacios de poder y la figura presidencial se fue debilitando. Las principales alianzas del gobierno cambiaron, los sectores partidarios de la política de exclusión hacia el peronismo avanzaron y consiguieron que en vista de los próximos comicios para renovar parte de las distintas legislaturas, nacional y provinciales, se volviera a proscribir al peronismo. Para junio de 1959, Perón denunció la traición del pacto por parte de Frondizi.

Todas estas adversas circunstancias políticas y económicas y la exclusión definitiva del peronismo desembocaron en un ciclo de protestas obreras. El clima era de mucha inseguridad, porque los conflictos se volvían cada vez más violentos, las huelgas fueron declaradas ilegales y hubo despedidos y suspensiones.

El Plan Conintes y el avance del poder de las Fuerzas Armadas

Para controlar esas movilizaciones sociales nacidas al calor de los reclamos de libertad política y sindical, el gobierno instrumentó el Plan Conintes (Conmoción Interna del Estado), un conjunto de acciones de control y represión aplicadas también en otros países de América Latina. El Plan Conintes preveía el otorgamiento de funciones judiciales al Poder Ejecutivo y autorizaba a las FF. AA. a participar de la represión interna, lo cual habilitaba al gobierno a detener a opositores en función de su militancia peronista, sindical o de izquierda. Por otro lado, este Plan habilitó a las FF. AA. a recrear en el contexto nacional el clima de Guerra Fría que se vivía en el mundo.

A partir de 1959 la idea de que la guerra fría también tenía lugar en América Latina parecía un hecho: la Revolución Cubana, ocurrida ese año y liderada por Fidel Castro, se convertiría en puntal de una serie de movimientos y revoluciones que se multiplicarían por todo el continente.

Así el enemigo interno no fueron solamente los militantes peronistas, sino también los activistas de los partidos de izquierda (de hecho el Partido Comunista también fue proscrito), pero también las bibliotecas barriales, las cooperativas, los grupos de teatro, las revistas literarias, etc. Todo aquel espacio o forma de participación a través de la cual la sociedad pudiera organizar algún tipo de resistencia u oposición.

La debilidad del gobierno de Frondizi iba en relación con el avance y reposicionamiento de las Fuerzas Armadas. La tensión era cada vez más explícita y se tradujo en diversos planteos militares. Entre 1958 y 1962 se desarrollaron 32 planteos, lo cual mostraba la fragilidad de la democracia y el poder de los militares. A su vez, a medida que las FF. AA se volvían más importantes, comenzaron a surgir divisiones internas que derivaron en el surgimiento de fracciones militares y que daban cuenta de distintos modos de intervenir políticamente. La división interna tenía dos grandes grupos: por un lado, los “legalistas”, que buscaban presionar al gobierno a través de los planteos pero respetando la legalidad constitucional del gobierno; por otro lado, se agrupaban los “antiintegracionistas”, quienes apostaban a la erosión del gobierno y desarrollaban alianzas estratégicas con los sectores antiperonistas de la sociedad civil.

La campaña electoral para renovar legislaturas y gobernadores, iniciada en marzo de 1962, provocó un nuevo giro en la política de Frondizi: autorizó al peronismo a presentarse como partido. Se creó entonces el Frente Justicialista, el cual a través de una eficaz organización de la estructura sindical, en particular de la Unión Obrera Metalúrgica y de su líder, Augusto Vandor, logró imponerse en casi todos los distritos, con la excepción de Córdoba, Mendoza y Capital Federal. Ante la contundente victoria del peronismo en las elecciones, las FF. AA. volvieron a presionar a Frondizi, quien finalmente intervino las provincias en donde había ganado el peronismo. El 29 de marzo Frondizi fue arrestado y recluso en la isla Martín García.



Frondizi recibe a jefes militares en la Casa Rosada.

El frágil gobierno de José María Guido y el enfrentamiento entre Azules y Colorados

Esta vez los militares no tomaron el poder directamente, sino que permitieron que el presidente del Senado, José María Guido, se hiciera cargo del Ejecutivo. No obstante, quienes controlaban en verdad el gobierno eran los militares que habían promovido la caída de Frondizi. Se mantuvo la línea económica del último tramo del gobierno anterior y en poco tiempo se pasó a pagar parte de los salarios de trabajadores estatales y de jubilados con bonos. También se creó un nuevo estatuto de los partidos políticos y se impusieron una serie de restricciones para la participación política (se prohibían declaraciones, documentos o discursos en los que se hablara de lucha de clases, por ejemplo) además de renovarse la prohibición a la propaganda peronista. El Ministerio de Trabajo comunicó que la CGT ya no contaba con existencia legal por no haber llevado adelante la renovación de sus autoridades.

Para el invierno de 1962 la sociedad se encontraba en un estado de total indefensión: el peronismo estaba proscrito, los partidos políticos limitados en su accionar, el Congreso había sido suprimido y las garantías legales no significaban mucho. La impunidad era un denominador común.

En agosto de 1962 la sociedad se enteró de la “desaparición” de un delegado de la UOM y dirigente de la Juventud Peronista, Felipe Vallese de 22 años, a manos de la policía de la provincia de Buenos Aires. El escritor Paco Urondo relata el hecho en su novela *Los pasos previos*. La aparición con vida de Vallese fue parte de las reivindicaciones de distintos sectores que cantaban “Un grito que estremece / queremos a Vallese”.

En este enrarecido clima, estalló la disputa interna en el seno de las Fuerzas Armadas entre los sectores legalistas y los antiintegracionistas, conocidos también como Azules y Colorados, respectivamente. Y si bien ambos seguían sosteniendo la idea de que el gobierno de Guido debía continuar para llamar a elecciones y mantener una cierta legalidad constitucional, diferían en relación con qué posición tomar con respecto al peronismo: los Azules eran partidarios de buscar una manera de integrarlos a la vida política del país mientras que los Colorados seguían manteniendo los postulados antiperonistas.

En los últimos meses de 1962, los enfrentamientos entre ambos grupos se profundizaron y provocaron la movilización de tropas de unos y otros. Finalmente, los Azules consiguieron imponerse tanto en el plano militar como en

la opinión pública; el general Onganía, uno de los líderes de los Azules, fue entonces designado comandante en jefe del Ejército. El paso siguiente fue la organización de las elecciones presidenciales para 1963.

Los Azules contaban con un grupo de asesores civiles que lograron articular una serie de discursos sobre la necesidad de defender la legalidad constitucional, incluso bajo la tutela militar. Como parte de esa estrategia de difusión de las ideas de los Azules, se creó la revista *Primera Plana*.

El sector ganador en el Ejército, a través del ministro del Interior, mantuvo a principios de 1963 conversaciones con sectores peronistas para que pudieran participar en las próximas elecciones. Frente a esa estrategia, los Colorados, junto con la UCRP y el Partido Socialista comenzaron a denunciar nuevamente un pacto entre el gobierno y Perón.

Para abril de 1963, los Colorados se levantaron nuevamente en armas: el movimiento se sintió en todo el país pero luego de duros combates los Azules logran imponerse nuevamente. Hubo un saldo de 24 muertos y casi 100 heridos. Sin embargo, el gobierno de Guido tuvo que hacer lugar a los reclamos de los rebeldes y reforzó su costado autoritario y represivo: se amplió la proscripción al peronismo, se prohibió la presentación de candidatos peronistas y se profundizó la persecución a artistas e intelectuales opositores.

En las elecciones presidenciales realizadas el 7 de julio de 1963 ganó la fórmula de la UCRP, que llevaba a Arturo Illia como candidato. El voto en blanco, en parte expresión del voto peronista, decreció con respecto a la elección de 1957 (que había sido de un 24%) y llegó al 19%. No obstante, el porcentaje fue significativo y dejó en evidencia que los líderes de las distintas fuerzas políticas seguían sin resolver cómo integrar al peronismo en la política.

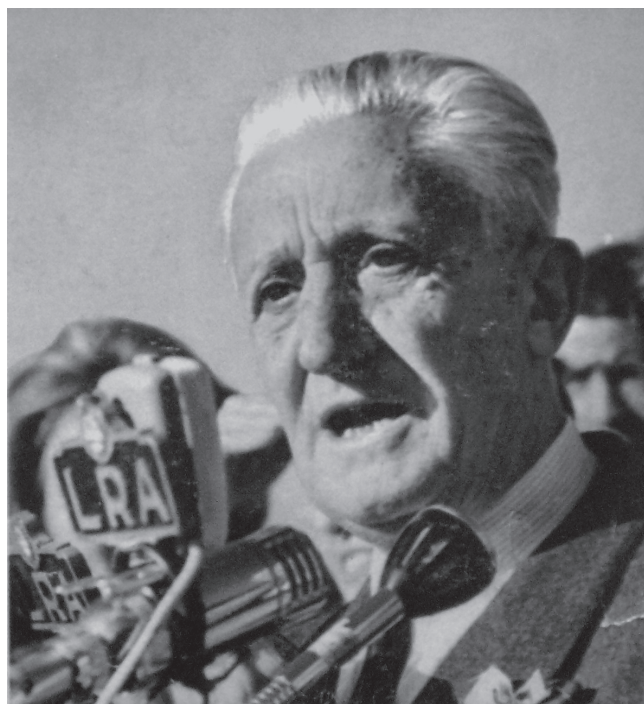
La UCRI que llevaba como candidato a Oscar Allende, quedó en tercer lugar. Los militares también se encontraban representados a través del partido Unión del Pueblo Argentino (UDEPA), su candidato era Aramburu y quedaron en cuarto lugar.

El gobierno de Illia

Illia era un político radical, oriundo de Cruz del Eje, Provincia de Córdoba. Era médico y había ejercido distintos cargos. En 1962 había ganado las elecciones para gobernador de Córdoba, aunque no pudo asumir dado que el golpe que derrocó a Frondizi anuló el resultado de todas las elecciones.

Desde el inicio, el gobierno de Illia se encontró jaqueado tanto por el escenario político como por el contexto económico en el que asumía. Por un lado, asumió con pocos apoyos y con poco margen e intención de generar nuevas alianzas. A su vez, no contaba con quórum propio en el Congreso Nacional y la mayoría de las gobernaciones provinciales estaba en manos de otras fuerzas políticas. Por otro lado, desde el punto de vista económico, Illia buscaba articular componentes de políticas keynesianas y retomar la idea de lograr una equitativa distribución y un mercado interno fuerte. Pero no contaba con respaldos suficientes y los empresarios pronto comenzaron a quejarse de la política intervencionista que llevaba adelante al fijar precios límites sobre los productos de la canasta familiar.

Al descontento de los empresarios se sumaron las protestas de los inversionistas extranjeros, luego de que, por decreto, Illia suprimiera los contratos petroleros. Para 1964 otro actor económico se enemistó con el gobierno: la corporación de laboratorios farmacéuticos presentó sus protestas frente al proyecto de ley enviado al Congreso por el cual se proponía congelar el precio de los medicamentos, dado que éstos pasarían a ser considerados bienes sociales.



Arturo Illia.

El avance del sindicalismo y “el peronismo sin Perón”. 1966-1973

Pero el foco más vulnerable siguió siendo la cuestión sindical, no solo porque Illia no contaba con apoyos allí sino porque, además, el gobierno mandó un proyecto de ley para modificar la ya existente Ley de Asociaciones Profesionales, con el objetivo de romper el monopolio peronista sobre los sindicatos. La respuesta no se hizo esperar y en poco tiempo se organizó un plan de lucha que incluyó la toma de fábricas, lo cual consecuentemente provocó más tensión entre los empresarios y el gobierno.

Por otro lado, el sindicalismo seguía creciendo aún incluso con consignas que tomaban distancia del propio Perón. Para algunos dirigentes había llegado el momento del “peronismo sin Perón”. Se trataba de sectores que habían crecido dentro del sindicalismo y que luego de años de luchas y resistencia se sentían maduros para hacerse cargo de la conducción del movimiento y reemplazar al líder en el exilio. La cara visible de estos sectores fue la de Augusto Vandor, líder de los metalúrgicos.

Si bien los números de la macroeconomía no eran negativos (las exportaciones habían crecido y el desempleo había bajado, por ejemplo), cada frente de conflicto que surgía parecía agravar todo el cuadro. Y la impresión que se iba construyendo era que el gobierno no solo no podía dar respuestas sino que, además, cuando lo hacía, ya era tarde. Los diversos sectores políticos y económicos asociaron el gobierno de Illia con la lentitud y la ineficiencia. A su vez, las diversas tensiones que cruzaban al gobierno daban cuenta de que el mayor problema no era solo el peronismo sino que todo se había complejizado más: la proscripción del peronismo había terminado afectando al resto de los partidos políticos, a la dinámica política y a los mecanismos de representación.

En ese contexto, nuevamente las Fuerzas Armadas se proyectaban como la institución que podía asegurar una vuelta al orden y a la estabilidad. A fines de 1965, el general Onganía, líder de los Azules y excomandante en jefe del Ejército, fue pasado a retiro. A partir de allí se inició una larga campaña golpista que finalizó el 28 de junio de 1966 con el derrocamiento del gobierno de Illia por los comandantes de las Fuerzas Armadas.



Illia abandona la Casa de Gobierno, luego del golpe de Onganía.

II- 1966-1973: DE LA REVOLUCIÓN ARGENTINA AL REGRESO DEL PERONISMO AL GOBIERNO

La Revolución Argentina: autoritarismo y represión

El golpe, autoproclamado como Revolución Argentina, clausuró la vida republicana: se destituyó al presidente, al Parlamento y a la Corte Suprema de Justicia y se ordenó la disolución de todos los partidos políticos. Se creó un Estatuto para regir la nueva etapa política y reemplazar a la Constitución. El general (RE) Juan Carlos Onganía asumió como presidente; contaba con el apoyo de la corporación militar, la Iglesia y los sectores más conservadores de la sociedad: todos estaban dispuestos a iniciar una transformación profunda que devolviera a la Nación el “orden” que, según estos grupos, había perdido.

El gobierno que asumía no era una estructura monolítica, aunque había una cuestión que los unificaba: la idea de construir un Estado que apoyado en la técnica y la racionalidad resultara eficaz y moderno a la hora de la gestión.



Juan Carlos Onganía.

En las diversas agencias estatales, los “técnicos” pasaron a cumplir un papel central como nexos entre el gobierno y las empresas, los bancos y los organismos multilaterales de crédito. Esto no fue un proceso original de la Argentina, muchos de los países sudamericanos, en su afán de hacer crecer sus economías, siguieron los mismos caminos, lo cual los llevó, al igual que a nuestro país, a un desarrollo exorbitante de las deudas externas.

Como parte de las medidas para construir un Estado de esas características, se redujo el personal de la administración pública, se congelaron salarios y se suspendieron negociaciones colectivas de trabajo. Junto con esto, el gobierno tomó créditos en el exterior y facilitó el ingreso de más capitales extranjeros para financiar obras de infraestructura. Los sectores más poderosos de la economía se vieron beneficiados; las economías regionales, los pequeños empresarios y comerciantes y, fundamentalmente, los trabajadores industriales fueron los principales perjudicados.



Onganía consagró la Nación Argentina al Inmaculado Corazón de María.
El acto se realizó en Luján.

Juventud y cultura

Uno de los compromisos que tomó el gobierno de Onganía fue el de velar “por los valores espirituales y morales de la civilización occidental y cristiana”. Estas ideas cobraban particular significación en un momento en el cual, tanto en la Argentina como en otros países, existían diversos movimientos de cuestionamiento al orden capitalista y liberal y en los cuales los jóvenes pasaban a tener un rol central. Se trataba de una especie de revolución cultural a través de la cual se ponían en cuestión valores y modos de vida considerados tradicionales.

La juventud argentina también fue parte de este proceso de rebelión al orden establecido, más aún en un contexto en el cual el gobierno buscaba precisamente reforzar los valores más tradicionales e imponer la idea de “un” orden. Las universidades, los sindicatos, los espacios barriales y distintos centros culturales fueron los espacios en los cuales la juventud expresó su rechazo al autoritarismo de Onganía.

Hacia fines de los años 60 diversos acontecimientos mundiales mostraban los límites y las contradicciones del sistema capitalista y liberal. Vietnam aún resistía a las fuerzas norteamericanas. Los estudiantes franceses se manifestaron en las calles proclamando “la imaginación al poder”. Los movimientos de descolonización, en África, se encontraban en pleno desarrollo. Y América Latina se conmovió luego del asesinato de “Che” Guevara en Bolivia. En la región además, se desarrolló la Conferencia Episcopal de Medellín llevada adelante por una Iglesia renovada después del Concilio Vaticano II y que proponía un compromiso más cercano y cotidiano con los problemas sociales.

En la Argentina, al igual que en otros países del mundo, los nuevos comportamientos, las nuevas formas de vestir y de relacionarse entre sí, eran manifestaciones de la emergencia de una cultura distinta, rebelde y fundamentalmente asociada a la juventud: las minifaldas, el pelo largo para los varones, la liberalización de las relaciones entre varones y mujeres, etcétera, eran modos de cuestionamiento al orden establecido. La música también se convirtió en un símbolo de las transformaciones culturales de esos años. Bajo el influjo de la música de The Beatles, comenzó a difundirse el rock nacional, con canciones cuyos mensajes también hablaban de la necesidad de libertad y de cambio.

Frente a estas diversas manifestaciones, el gobierno reaccionó aplicando la violencia y la represión. En junio de 1966, estudiantes, docentes y autoridades tomaron las universidades en protesta por el avasallamiento de la autonomía universitaria. La toma desencadenó una brutal represión por parte del gobierno, conocida como La Noche de los Bastones Largos. En los meses siguientes cientos de profesores fueron despedidos, renunciaron a sus cátedras o debieron abandonar el país.



La noche de los bastones largos.



La intervención a la universidad.



Primeras minifaldas.

El Cordobazo y el fin del gobierno de Onganía

Las tensiones y conflictos culturales no hacían sino dar cuenta y profundizar el clima de oposición al gobierno que en general se vivía en la sociedad. Frente a la dureza del plan económico, que incluía recortes salariales, despidos, etc., los reclamos sindicales no se hicieron esperar, aunque esta vez no fueron los dirigentes más tradicionales los que tomaron la voz de la protesta. En el transcurso de la década del 60, y como consecuencia del desarrollo industrial, había aparecido una camada de nuevos dirigentes que acusaba a la CGT de haberse burocratizado y anquilosado. Frente a la tradicional CGT nació entonces la CGT de los Argentinos, liderada por el obrero de la gráfica Raimundo Ongaro, con un planteo que denunciaba a la dictadura de Onganía como causa de la crisis que envolvía a la sociedad.

Durante 1967, varios sindicatos perdieron su personería gremial, entre ellos la Unión Obrera Metalúrgica y la Unión Ferroviaria entre otros. Para 1968, el ministro de Economía Krieger Vasena, miembro de varios directorios de grandes empresas, congeló salarios y suspendió las negociaciones colectivas hasta fin de año. En mayo de 1969 estalló una protesta en Córdoba que unió a un amplio espectro de actores, desde obreros en huelga y organizaciones estudiantiles hasta sectores de clase media. La ciudad fue tomada por varios días y fue necesaria la intervención del Ejército para aplacar lo que se llamó el Cordobazo. Y si bien el movimiento fue reprimido, el orden y la racionalidad propugnado por Onganía comenzaban a mostrar su fracaso.

Pero el Cordobazo era la punta de un *iceberg* de movilizaciones sociales y sindicales que se oponían de distinta manera a la dictadura. En los meses siguientes siguieron produciéndose conflictos y enfrentamientos en otras ciudades del país, que mostraban cada vez más los límites del proyecto de orden impulsado por Onganía.



Autos incendiados, luego de las movilizaciones en Córdoba.

Por otro lado, y más allá de las causas del Cordobazo, un aspecto central de las movilizaciones y de la radicalización de las formas de protesta y resistencia al autoritarismo fue la emergencia de organizaciones políticas armadas, las cuales entrarían prontamente a la escena de la política nacional, tal el caso del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL) y las organizaciones militares peronistas Montoneros y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

Para 1970, al cumplirse el 1º aniversario del Cordobazo el 29 de mayo, los Montoneros realizaron su aparición pública: secuestraron y fusilaron al general (RE) Aramburu, acusado de ser el primer “verdugo” de la resistencia peronista al haber ordenado el fusilamiento del general Valle.

La intervención a las universidades, la represión a las manifestaciones culturales, la movilización social y sindical, el Cordobazo y el fusilamiento del exgeneral Aramburu terminaron por sellar el destino del gobierno de Onganía, quien finalmente renunció a mediados de 1970.

“La hora de los pueblos” y el “GAN”

Onganía fue reemplazado por el general Levingston. Durante los pocos meses que duró su gobierno, buscó concretar dos objetivos que, sin embargo, condicionaron su estabilidad: por un lado, intentó evitar que se siga desnacionalizando la economía para lo cual se instrumentaron medidas proteccionistas frente a las importaciones y se favorecieron los créditos orientados a la producción nacional. El lema era “compre argentino”, lo cual generó rápidamente el encono de los sectores concentrados que se favorecían con la política de apertura de la economía. Por otro lado, intentó recuperar la “política” propiamente dicha, para lo cual convocó a representantes del viejo frondizismo. A raíz de esto último, también los partidos tradicionales comenzaron a activarse y aceptaron firmar un documento, “La hora de los pueblos”, a través del cual se comprometían a poner fin a las proscripciones y a respetar la norma constitucional. De manera particular, radicales y peronistas acordaban iniciar una convivencia pacífica.

Pero un importante sector militar desconfiaba de Levingston y de su capacidad para conducir el proceso de reapertura electoral que se planeaba. Hacia marzo de 1971 un nuevo levantamiento lo destituyó y nombró a un nuevo presidente de facto: Alejandro Agustín Lanusse. Aun en un contexto de incertidumbre e inestabilidad,

se suponía que el nuevo gobierno debería lograr una transición ordenada en la cual pudieran llevarse a cabo elecciones.

En efecto, luego de asumir, Lanusse anunció el restablecimiento de la actividad política y el llamado a elecciones a partir de un nuevo documento, el Gran Acuerdo Nacional, GAN, que nuevamente apostaba a un compromiso previo a las elecciones entre los partidos políticos y las FF. AA. El compromiso implicaba, por un lado, el repudio explícito a la subversión y, por otro, el reconocimiento de la posición de poder y tutela de las FF. AA. A su vez, se buscaba garantizar la participación militar en el nuevo armado institucional y obtener un consenso sobre las candidaturas presidenciales.

Aún con este proyecto puesto en marcha, durante todo el año 71 así como en el 72 la movilización de organizaciones políticas, sindicales y armadas no cesó y se fue radicalizando cada vez más. Los episodios de violencia se sucedían y nadie parecía poder contenerlos. Al compás de la crisis política, la economía también comenzó un ciclo de crisis y desajustes: inflación, fuga de divisas, caída del salario real y desempleo. Todo esto no hacía sino agravar la movilización y los reclamos.

La credibilidad del gobierno y la posibilidad de un acuerdo que dejará bien parados a los militares de cara a la transición democrática se desmoronó el 22 de agosto de 1972 con la ejecución de 16 presos políticos en el penal de Rawson. Este hecho, “La masacre de Trelew”, fue en verdad una represalia de los militares a la fuga que del Penal de Rawson habían protagonizado los máximos líderes de diferentes organizaciones armadas detenidos allí.

Montoneros fue un grupo armado que se alineó con el peronismo revolucionario, de neto perfil antiimperialista y con amplia llegada fundamentalmente entre la juventud. Durante 1972 y 1973 realizaron una militancia constante que se tradujo en una campaña de afiliación al Partido Justicialista, la apertura de unidades básicas, y de fuertes movilizaciones barriales y villeras. Al igual que otras agrupaciones juveniles peronistas participaron aleatoriamente de un frente que tomó el nombre de Tendencia Revolucionaria.



Detenidos en Trelew, luego del frustrado intento de liberación.

Mientras tanto, Lanusse seguía negociando con los participantes del GAN, y fundamentalmente con Perón, la salida electoral. Se acordó que el peronismo podría participar, pero que Perón no podría ser candidato; Balbín, líder del radicalismo, también aceptaba los términos de la negociación. Así es que las agrupaciones peronistas organizaron el Frente Justicialista de Liberación, una alianza que incluía a una serie de partidos menores y que llevaba como candidatos a Héctor Cámpora y Vicente Solano Lima.

III- 1973-1976: EL TERCER GOBIERNO PERONISTA

El peronismo, nuevamente en el gobierno

La Argentina que encaraba un nuevo proceso electoral no era un país pacificado y su futuro, seguía siendo incierto. Amplios sectores de la sociedad estaban esperanzados en que la llegada del peronismo al poder trajera consigo transformaciones importantes que permitieran implementar con éxito un modelo de “pacto social” y consecuentemente que se iniciara una etapa de paz. Pero esas esperanzas se entremezclaban con una amplia movilización social y política que incluía la activa presencia de grupos armados de distintas tendencias. El período que corre entre 1973

—cuando asume Cámpora— y 1976 —al producirse un nuevo golpe de Estado— tuvo tres momentos diferentes: en primer lugar, la presidencia de Héctor Cámpora. Luego, el regreso de Perón y el inicio de su tercer mandato. Finalmente, a partir de la muerte de Perón, el gobierno de María Estela Martínez de Perón.

La breve presidencia de Cámpora

Las elecciones se realizaron en marzo de 1973 y ratificaron por un 49,5% de los votos al candidato del peronismo. Lejos en los porcentajes, quedó segundo el radicalismo, con Balbín, una vez más, de candidato.

Cámpora asumió la presidencia el 25 de mayo de 1973. Durante su gobierno se vivió una movilización generalizada y triunfalista que pregonaba el regreso de Perón y lo asociaba con la posibilidad de volver a comenzar una etapa de profundos cambios sociales. En efecto, se trataba de una sociedad marcada por la idea del cambio, cuyos principales protagonistas eran la juventud, el sindicalismo combativo y un grupo de intelectuales ligados a la modernización desarrollista. Los apoyos al gobierno, por otra parte, eran diversos e incluían a los distintos sectores del peronismo (los sindicatos, las agrupaciones de la Juventud Peronista —conducidas por Montoneros—) y a diversos sectores empresariales.

|| El ministro de Economía era miembro de la Confederación General Económica, José Ber Gelbard, y representaba a las pequeñas empresas privadas.

A poco de iniciarse la gestión, quedó claro que esas diversas agrupaciones impulsaban proyectos propios e ideas particulares sobre cuál debiera ser el rumbo del gobierno. Las agrupaciones juveniles reclamaban un giro más hacia la izquierda, tanto en lo económico como en lo social. Por su parte, el ministro de Economía buscaba implementar un “pacto social”, es decir, un acuerdo sobre la manera de distribuir el ingreso nacional entre los trabajadores, representados por los sindicatos, y los sectores empresarios, con una fuerte participación del Estado. Pero este programa exigía un fuerte compromiso entre las partes y cierta postergación de respuesta para las demandas de los trabajadores. Perón, a través de la figura del secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci, pidió lealtad absoluta a los sindicalistas, lo cual significaba básicamente aceptar la suspensión de las negociaciones colectivas de trabajo. Pero los trabajadores leyeron este proyecto como una concesión a los sectores medios y a los empresarios. Y los sectores armados también declararon su oposición al “pacto”.

En algún sentido, la discusión económica traducía las tensiones que se sumaban en el arco político. El enfrentamiento entre los distintos sectores del peronismo era cada vez más fuerte y se manifestó trágicamente el día del regreso de Perón.



Héctor Cámpora.

El regreso de Perón

Con el peronismo en el gobierno, el operativo para el retorno definitivo de Perón estaba en marcha. La organización fue confiada a una comisión especial donde estaban representados los diversos sectores del peronismo. No obstante, quedaba claro que más allá de las intenciones de cada una de las agrupaciones había una figura que concentraba todas las decisiones: se trataba de José López Rega, un oscuro integrante de la Policía Federal, que se había ganado la confianza de Isabel –nueva esposa de Perón– y luego de Perón. Su presencia y accionar provocó realineamientos entre los distintos sectores del peronismo y agudizó las tensiones. La Juventud Peronista (JP) y las agrupaciones armadas peronistas, todas reunidas en la Tendencia, fueron finalmente marginadas de la organización del acto de recibimiento que se realizaría en Ezeiza.

El 20 de junio de 1973 más de dos millones de personas marcharon hacia Ezeiza para recibir a su líder: fue la mayor concentración de la historia política argentina. Pero el encuentro no pudo ocurrir. Mientras se desarrollaba un espectáculo –previo al arribo del avión–, grupos armados dirigidos por líderes sindicales y por sectores del ala derecha del peronismo comenzaron a disparar sobre la multi-

tud intentando mostrar su preeminencia con respecto a los sectores de la Juventud Peronista. Pronto se desató la tragedia y la gente en medio del terror comenzó a dispersarse y a retroceder. Hubo 13 muertos y casi 400 heridos. Al día siguiente, Perón emitió un contundente discurso en el cual realizaba un llamado a “volver al orden legal y constitucional, como única garantía de libertad y de justicia”.

El gobierno de Cámpora quedó entonces jaqueado, los grupos armados volvieron a protagonizar acciones violentas y el conflicto entre la derecha peronista y los sectores de la Juventud Peronista se radicalizó. Por otro lado, con Perón ya en el país, los tiempos se aceleraron: en julio, Cámpora junto a su vicepresidente presentaron la renuncia y convocaron a nuevas elecciones para septiembre de ese mismo año. Si no había dudas de que el candidato presidencial sería Perón, el nombre de quien lo acompañaría en la fórmula fue el centro de todas las disputas y conflictos entre los diversos sectores del peronismo. Los grupos de la Tendencia proponían que fuera Cámpora; los sindicatos querían a Rucci e incluso algunos sostenían la necesidad de una alianza con el radicalismo para recrear un acuerdo interpartidario y, por lo tanto, proponían que el vicepresidente fuera Balbín. Las disputas fueron tan fuertes que impidieron llegar a un consenso y finalmente triunfó la posición de José López Rega: María Estela Martínez, ya conocida en ese momento como Isabelita, acompañaría a Perón.



Los grupos ligados a López Rega ocuparon el palco desde el cual iba a hablar Perón.



Enfrentamientos entre los sectores de derecha y de la izquierda peronista, en Ezeiza, al momento de la llegada de Perón.

“Perón-Perón”

La fórmula Perón-Perón triunfó entonces por el 62% de los votos: Perón volvía a la presidencia contando con un masivo respaldo electoral. Quedaba por delante traducir ese apoyo en la construcción de consensos, en primer lugar, entre los distintos sectores del peronismo y, a su vez, en relación con el resto de los actores sociales.

No obstante, incluso antes de las elecciones comenzaba a quedar claro que Perón se apoyaba cada vez en los grupos sindicales y, más aún, en la figura de López Rega, lo cual indefectiblemente significaba un alejamiento de los sectores vinculados a la Tendencia. Pocos días después de los comicios, José Ignacio Rucci, líder de la CGT, fue asesinado. Ese acontecimiento abrió un nuevo ciclo de enfrentamientos y violencia entre los grupos de la derecha peronista, organizados en la Alianza Anticomunista Argentina (la Triple A), liderados por el entonces secretario de Bienestar Social López Rega, y Montoneros. Y a ellos se sumaron también acciones de otros grupos armados, algunos también provenientes del peronismo y otros de filiación marxista.



José Ignacio Rucci.



Perón con Isabel y José López Rega.

En ese clima de conflictividad, los funcionarios y gobernadores vinculados a la Tendencia y a Montoneros fueron poco a poco desplazados de sus cargos. Además Perón envió al Congreso un proyecto de reforma del Código Penal en el cual se establecían penas mucho más duras para las “actividades subversivas”. Y junto con esto, aplicó procedimientos cada vez más autoritarios para intentar controlar la movilización social, cerró publicaciones políticas y culturales de izquierda y aplicó la censura en los medios de comunicación. Esta vez, Perón parecía resuelto a defender un determinado sistema que poco tenía que ver con la “patria socialista” que reclamaban los sectores de izquierda.

En este sentido, la ruptura entre Perón y la Tendencia parecía inevitable y apareció, finalmente, escenificada en el acto del 1° de mayo de 1974, en conmemoración del Día del Trabajador. Las consignas coreadas por Montoneros, que reclamaban un giro hacia la izquierda en las políticas de gobierno y un alejamiento de los sectores más conservadores, provocaron una reacción de Perón que terminó respondiéndoles violentamente. Los militantes interpelados por Perón se retiraron de la plaza y la dejaron semivacía. Luego, Perón terminó de separar a los funcionarios de la Tendencia que aún quedaban en el gobierno y disolvió la rama juvenil del Partido Justicialista. La ruptura quedaba consumada.

En la Plaza de Mayo, las agrupaciones de Montoneros llevaban banderas que reclamaban “qué pasa General, que está lleno de gorilas el gobierno popular”.

El conflicto político se veía, además, agravado por una crisis económica cada vez más profunda que repercutía en toda la sociedad. El pacto social que se había promovido, entre trabajadores, empresarios y Estado duró muy poco y la defensa de los intereses sectoriales volvió a imponerse. Frente a una inflación cada vez más alta, los salarios comenzaban a quedar cada vez más retrasados. Los trabajadores exponían sus demandas pero ya no encontraban la misma respuesta que en otros momentos. En varios casos se dictó la conciliación obligatoria.

La muerte de Perón y el gobierno de Isabel



Multitudinaria despedida a Perón.

El 1° de julio de 1974 murió Perón y con su desaparición todos los problemas enumerados redoblaron su gravedad: el vacío de poder profundizó las disputas, la economía quedó más sumergida en la crisis y la violencia tiñó toda la escena política. Por otro lado, desaparecía el único interlocutor válido entre todos los actores en pugna y el único que aseguraba que cada uno de esos actores tuviera (o no) comunicación y participación en las decisiones del Estado. El gobierno quedaba en manos de la vicepresidenta, Isabelita, sin capacidad ni legitimidad suficiente para hacerse cargo del dramático contexto.

Los primeros respaldos para Isabelita vinieron de parte de los sindicatos y de los grupos vinculados a López Rega. Los Montoneros salieron nuevamente a disputar la conducción del movimiento y acusaron a Isabel de estar traicionando el legado de Perón. Pasaron a la clandestinidad y reanudaron la lucha armada. La cadena de violencia seguía entonces prologándose.

Por otro lado, en poco tiempo, Isabel abandonó también a los sindicatos y construyó un nuevo marco de alianzas que daba clara cuenta del final del modelo de pacto social. Se trataba de un rotundo giro a la derecha, que reordenaba las fuerzas,

relegaba a sindicatos y pequeños empresarios y apostaba por los sectores empresarios más poderosos.

El nuevo programa político y económico constaba de cinco puntos fundamentales: en primer lugar, un compromiso decidido de lucha contra la subversión y, consecuentemente, la eliminación de la infiltración marxista en la educación en general (y en la Universidad de Buenos Aires en particular). Luego, la finalización de las políticas económicas consideradas antiempresariales en pos de reconquistar la confianza de los capitales privados y extranjeros como fuente de inversiones y desarrollo. En cuarto lugar, se buscaba el control de los dirigentes sindicales para impedir reacciones frente a las políticas empresariales. Finalmente, se pedía a los militares que abandonen su posición de neutralidad política, mantenida desde la vuelta de la democracia, y que tomaran una actitud de apoyo tácito al gobierno. En este contexto, entre los últimos meses de 1974 y los primeros de 1975, se abrió una nueva interna entre los sectores del gobierno, los sindicatos, por un lado, y, por el otro, el ala derecha encabezada por la presidenta.

Pero ni las medidas políticas ni las económicas lograban pacificar la situación. Por el contrario, los conflictos y la violencia se multiplicaban día a día y la economía se encaminaba nuevamente hacia el vacío. En marzo de 1975 se produjo una fuerte devaluación que superó el 100% y que precipitó demandas salariales y una nueva lucha de los sectores sindicales. En junio de ese año los gremios salieron a la calle para protestar por las medidas económicas, pero también para mostrar su poder y capacidad de movilización.

El encadenamiento de los problemas enunciados fue desgastando la poca autoridad con la que Isabel había asumido la presidencia. El vacío de poder activaba diversos proyectos políticos que tenían un punto común: la caída del gobierno. El golpe del 24 de marzo de 1976 fue el resultado de esas múltiples tensiones y vacíos. Los militares se presentaban, en ese sentido, como los únicos capaces de restablecer el orden y luchar eficazmente contra la subversión. Por eso, el golpe de 1976 venía a cerrar el proceso abierto con la caída del gobierno de Perón en 1955.

Selección de fuentes y actividades sugeridas

1- Documentos políticos

a- Carta de Juan Perón a John William Cooke

“Al Dr. John William Cooke

Por la presente autorizo al compañero doctor Don John William Cooke, actualmente preso por cumplir con su deber de peronista, para que asuma mi representación en todo acto o acción política. En este concepto su decisión será mi decisión y su palabra la mía.

En él reconozco al único jefe que tiene mi mandato para presidir a la totalidad de las fuerzas peronistas organizadas en el país y en el extranjero y sus decisiones tienen el mismo valor que las mías.

En caso de fallecimiento, delego en el doctor Don John William Cooke el mando del movimiento.”

“En Caracas, a 2 días de noviembre de 1956.”

Juan Perón”.

Actividades:

-¿Cuál es el motivo de la carta enviada a Cooke?

-¿Qué relación establece Perón con Cooke?

b- Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 3855/55, noviembre 1955.

Presidencia del General Aramburu.

“El Presidente Provisional de la Nación Argentina

En ejercicio del Poder Legislativo

Decreta con fuerza de ley:

Artículo 1º. - Declarar disueltos los Partidos Peronistas Masculino y Femenino en todo el territorio de la República.

Artículo 2º. - Ordenar se haga cargo de sus bienes, provisionalmente, el Ministerio del Interior en el orden nacional y las intervenciones Federales en el orden provincial, hasta tanto se resuelva en definitiva sobre su situación y destino.

Artículo 3º. - El presente decreto será refrendado por el excelentísimo señor Vicepresidente de la Nación y los señores Ministros Secretarios de Estado en Acuerdo General.

Artículo 4º. - Deróguese toda disposición que se oponga al presente”.

Actividades:

- ¿Cuáles son las implicancias de este decreto?
- ¿En qué contexto es puesto en vigencia?
- Realiza una pequeña investigación:
- ¿Cómo funcionan los gobiernos durante los golpes de Estado? ¿qué sucede con los derechos políticos?
- ¿Qué sucede con la división de poderes? ¿cómo funciona el Congreso?, ¿cómo se legisla?
- ¿Qué es un Decreto del Poder Ejecutivo Nacional? ¿Quién o quiénes deben firmar los decretos? Teniendo en cuenta que el extracto del decreto que tienen como fuente fue rubricado por todos los ministros, el vicepresidente y el presidente de la Nación, busca en *infoleg.mecon.gov.ar* u otro sitio similar, en los últimos 20 años otros decretos que hayan necesitado la firma de todos los miembros del gabinete Nacional. ¿Cuál es la problemática que aborda?

2- Manual de zonceras argentinas. Arturo Jauretche

Zoncera N° 37: CUARTO PODER

Ahora el *cuarto poder* existe, y yo diría que es el primero, sólo que no tiene nada que ver con la libertad de prensa y sí mucho con la libertad de empresa. (...) El *cuarto poder* está constituido en la actualidad por las grandes empresas periodísticas que son, primero empresas, y después prensa. Se trata de un negocio como cualquier otro que para sostenerse debe ganar dinero vendiendo diarios y recibiendo avisos. Pero el negocio no consiste en la venta del ejemplar, que generalmente da pérdida: consiste en la publicidad. Así, el diario es un medio y no un fin, y la llamada “libertad de prensa”, una manifestación de la libertad de empresa a que aquélla se subordina, porque la prensa es libre sólo en la medida que sirva a la empresa y no contraría sus intereses.

Zoncera N° 38: DICE “LA NACION”... DICE “LA PRENSA”

La Nación afirma expresamente que es “una tribuna de doctrina” y “*La Prensa* es la doctrina misma” (...) Los dos diarios se leían minuciosamente, de punta a punta, con editorial y todo (...) A la caída de la tarde bastaba aproximarse a las ruedas para oír “Dice *La Nación*”, “Dice *La Prensa*”. Y las opiniones caían como sentencias.

Ahora sucede todo lo contrario. Y cuando alguno expresa una opinión se apresura a defenderse si el interlocutor le arguye: “Pero eso lo dice *La Nación*...” o “Lo dice *La Prensa*...”, y para defenderse se remite a fuentes privadas e insospechables,

como la prima de una mucama de un general. Fuentes que no están mejor informadas pero que no contienen doctrina, salvo cuando el mucamo es “gaita”.

Actividades:

- ¿Qué plantea Jauretche en la primera zoncera que nos muestra el texto?
- ¿Con qué tema actual lo podrías relacionar?
- ¿Qué te parece que plantea en la otra zoncera cuando habla de dar doctrina?
- ¿Qué sabés sobre la nueva Ley de Medios Audiovisuales? ¿cómo la asociás con lo planteado por Jauretche en el año 1968?

3- Música y política*Hombres de hierro*

Larga muchacho tu voz
joven como larga la luz
el sol

que aunque tenga que
estrellarse contra un paredón

que aunque tenga que
estrellarse se dividirá en
dos.

Suelta muchacho tus
pensamientos como anda
suelto el viento

sos la esperanza y la voz que
vendrá a florecer en la nueva
tierra.

Hombres de hierro que no escuchan la voz

hombres de hierro que no escuchan el
grito hombres de hierro que no
escuchan el llanto. Gente que avanza
se puede matar

pero los pensamientos
quedarán. Puntas agudas
ensucian el cielo como la
sangre en la tierra

dile a esos hombres que traten de
usar a cambio de las armas su
cabeza. Hombres de hierro que no
escuchan la voz

hombres de hierro que no escuchan
el grito hombres de hierro que no
escuchan el llanto. Gente que avanza
se puede matar

pero los pensamientos
quedarán.

León Gieco. Disco *León Gieco*. 1973

Actividades:

- ¿Qué fue el BArock (Buenos Aires Rock)?
- ¿Cuándo se desarrolló?
- ¿Qué artistas participaron? ¿conocés a alguno?
- ¿Quién es León Gieco?, investiga brevemente su biografía.
- ¿Por qué su canción “Hombres de hierro” está en relación y expresa el sentimiento del momento? (Marquen en la canción algunas líneas que muestren esto y fundamenten su respuesta).
- ¿Qué otros músicos y cantantes se asocian al inicio del rock nacional, busquen otras canciones del período?

4- Selección de imágenes

a- Breves historietas de Rico Tipo. Imágenes I y II

-¿Qué actor es el que se encuentra representado y es el protagonista? ¿qué período y qué problemas nos está mostrando?



Imagen I.



Imagen II.

b- Imágenes III, IV, V, VI de la revista *Primera Plana* en 1969, sobre el Cordobazo y sobre la venida del enviado norteamericano Rockefeller.

(Revista *Primera Plana*, 1969).

-¿Qué nos muestran las imágenes III y V? ¿cómo las relacionás con la imagen IV? ¿Por qué el graffiti interpela a los soldados?

-¿Qué plantea el editorial de la revista *Primera Plana* con respecto a la llegada del enviado norteamericano (imagen VI)? ¿Qué nos muestran los carteles (imágenes VI y VII)?



Imagen III.

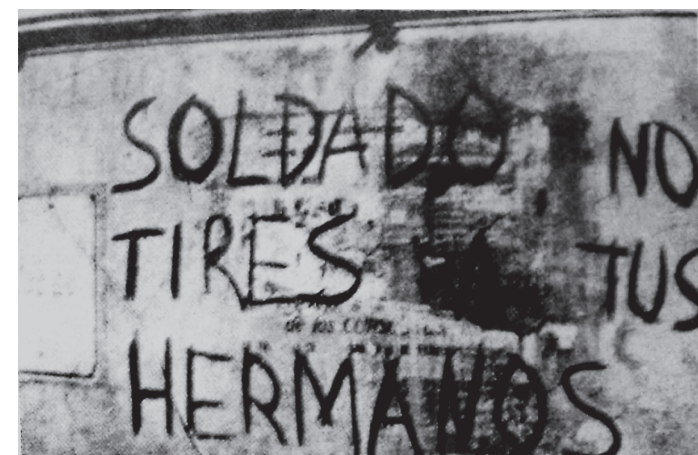


Imagen IV.



Imagen V.



Imagen VII.



Imagen VI.

BIBLIOGRAFÍA

- De Riz, Liliana, *Retorno y derrumbe. El último gobierno peronista*, Buenos Aires, Hyspamerica, 1987.
- Gillespie, Richard, *Los soldados de Perón*, Buenos Aires, Grijalbo, 1987.
- Hobsbawm, Eric, *Historia del siglo XX*, Capítulos XI y XII, Barcelona, Crítica, 1997.
- James, Daniel (dir.), *Violencia, Proscripción y Autoritarismo (1955-1976)*, Buenos Aires, Sudamericana, 2007.
- , *Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora Argentina 1946-1976*, Buenos Aires, Sudamericana, 1990.
- Melón Pirro, Julio César, *El peronismo después del peronismo. Resistencia, sindicalismo y política luego del '55*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2009.

CAPÍTULO 5: *Dictadura y terrorismo de Estado. 1976-1983*

Massera, Videla y Agosti. Integrantes de la Junta de Comandantes que tomaron el poder en 1976.

El 24 de marzo de 1976 se inició el capítulo más violento y doloroso de la historia argentina: una junta de comandantes militares puso fin al gobierno de María Estela Martínez de Perón, se hizo cargo del gobierno y designó al general Jorge Rafael Videla como presidente. Los militares estuvieron en el poder hasta 1983: Videla gobernó entre 1976 y 1981, cuando fue sucedido por Roberto Viola; a fines de ese mismo año, Viola fue reemplazado por Leopoldo Galtieri. La derrota en la guerra de Malvinas en 1982 precipitó la salida de Galtieri y su reemplazo por Bignone, el último presidente militar. En 1983 la Argentina volvió a elegir democráticamente a un presidente.

Según declaraba la propia Junta en 1976, las nuevas autoridades pondrían en marcha un Proceso de Reorganización Nacional. Su objetivo era refundar las bases de la sociedad, recuperar el supuesto orden perdido y modificar el perfil económi-

co del país. Pero para llevar a cabo estos planes era necesario, ante todo, terminar con cualquier foco de “subversión” que pudiera poner en juego la estabilidad que se quería conseguir. Por otro lado, era imprescindible controlar y silenciar a una sociedad que, pese a la poca reacción manifestada ante el golpe, poseía una importante experiencia de movilización. A su vez, la aplicación de los planes económicos previstos, que consistían básicamente en una reducción de las funciones del Estado y una apertura de la economía, no dejaría de generar reacciones por parte de trabajadores y sindicatos, las cuales también debían ser acalladas.

Estos puntos de partida significaron que junto al Estado que se proponía construir un orden nuevo, se edificó un Estado clandestino que aplicó un plan sistemático de represión para asegurarse el control y el silenciamiento de cualquier tipo de oposición. Si el objetivo declarado eran los miembros de las organizaciones armadas, en realidad muchos otros sectores eran parte de la lista de “sospechosos”. En cierta forma, ese listado parecía no tener límites, por lo que todos podían quedar bajo sospecha y ser susceptibles de ser detenidos. Esto generó un clima de temor generalizado que profundizó la fragmentación y el aislamiento entre la población.

La represión planificada y ejecutada por el gobierno militar ha dejado marcas indelebles en la historia argentina: 30 mil personas desaparecidas, otras tantas detenidas y torturadas, 500 bebés robados y miles de testimonios dan cuenta de la sistemática violación de derechos humanos ocurrida entre 1976 y 1983 llevada adelante por este “Estado terrorista”.

Los derechos humanos constituyen un conjunto de libertades que deben respetarse en todas las personas, más allá de su situación jurídica, política o personal, porque se consideran inherentes a la condición humana. Una de las razones de ser del Estado es proteger estos derechos, lo que hace particularmente aberrante el hecho de que sean violados por las fuerzas de seguridad estatales.

Por otro lado, los planes económicos que impulsó la dictadura también dejaron un saldo por demás negativo para las décadas siguientes: la apertura de la economía significó la desestructuración de la industria nacional. La preeminencia del capital financiero cambió las coordenadas de la economía y todos los actores económicos pasaron a buscar un rédito en el juego bancario de los depósitos y los intereses. La deuda externa, tomada por el gobierno militar para encarar obras públicas pero sobre todo para inyectar capitales en el mercado, creció de manera descomunal en estos años.

Hacia comienzos de la década del 80, la economía parecía estar fuera de control. Además, el clima político, luego de años de silenciamiento producto de la represión, comenzó a agitarse: diversas organizaciones sociales y políticas se volvieron más visibles, el movimiento obrero consiguió reordenarse y poco a poco las denuncias contra el autoritarismo y la represión del gobierno militar cobraron mayor relevancia. A su vez, la Junta Militar mostraba claros síntomas de tensiones y disputas internas que volvían su situación mucho más precaria.

En ese contexto, se decidió la invasión a las islas Malvinas que condujo a la guerra contra Gran Bretaña. El estrepitoso fracaso de la aventura militar, la crisis económica y las presiones políticas terminaron por apresurar la transición a la democracia.

Este capítulo se organiza en cinco apartados: en el primero se retoman las causas del golpe de Estado; el segundo y tercero se refieren a la economía y la política durante los primeros años del Proceso; y los dos últimos a los hechos que llevaron a la crisis final de la dictadura y el inicio de la transición democrática.

I- CRISIS Y GOLPE DE ESTADO

De la crisis al golpe

Luego de la muerte de Perón, el 1° de julio de 1974, todos los conflictos que atravesaban la sociedad se profundizaron. Si bien institucionalmente la presidencia fue ocupada por su vicepresidenta, Isabel Martínez de Perón, ninguna figura o sector político podía contener los enfrentamientos entre los distintos sectores, tanto dentro como fuera del peronismo.

La Triple A, organización armada clandestina dirigida por José López Rega desde el Ministerio de Bienestar Social, cobró mayor protagonismo, y salió al cruce de los diversos grupos de izquierda. Por su parte, las organizaciones guerrilleras reforzaron sus acciones armadas, que se traducían en atentados con explosivos, secuestros extorsivos, asesinatos políticos y copamientos de destacamentos militares y policiales. En 1975, la presidenta dio órdenes a las Fuerzas Armadas para intervenir en Tucumán y “aniquilar” al ERP, grupo guerrillero con fuerte presencia en la provincia; para ello, el Ejército utilizó métodos ilegales, como el secuestro de personas y la tortura para obtener información. Esto, sumado al accionar de la Triple A, implicaba que la violencia ilícita era ejercida no sólo desde las organizaciones clandestinas, sino también desde el propio Estado.

Para comienzos de 1976 los grupos armados habían perdido prácticamente

toda su capacidad militar; además, el militarismo de Montoneros le había hecho perder gran parte de las simpatías de las que gozara hasta 1974. Sin embargo, el gobierno de Isabel era cada vez más débil, al tiempo que la escena política seguía desgarrándose: el movimiento obrero estaba a la defensiva, particularmente después del plan económico de ajuste de 1975, los partidos políticos seguían discutiendo internamente, la economía continuaba en crisis y todo confluía para erosionar no solo la autoridad presidencial, sino la confianza misma en las instituciones democráticas. Consciente de su debilidad, en diciembre Isabel resolvió adelantar las elecciones presidenciales para octubre de 1976.

El único actor que parecía conservar poder y voluntad de ejercerlo eran las Fuerzas Armadas. La expectativa sobre el rol que podían jugar los militares podía leerse en los titulares de la prensa: semanas antes del golpe, la mayoría de los diarios refería a la inminencia de la intervención militar, que era vista por muchos como un desenlace inevitable. Las ediciones posteriores al 24 de marzo comentaron con optimismo la conformación del nuevo gobierno.

El mismo día del golpe, los diarios saludaron la novedad: “Nuevo gobierno” (*Clarín*); “Las Fuerzas Armadas han asumido hoy el ejercicio del poder” (*La Razón*); “Nuevo gobierno. Comienza una etapa decisiva. Expectativas en lo económico” (*La Tarde de Buenos Aires*). Al día siguiente, *Clarín* tituló: “Total normalidad. Las Fuerzas Armadas Ejercen el gobierno”.

Claro que las opiniones vertidas en los diarios no solo expresaban lo que los propios editorialistas creían sobre la nueva etapa, sino que también reflejaban a un sector de la sociedad, que veía con buenos ojos una intervención que restaurara el “orden” político y social.



Operativo Independencia: las FF.AA. intervinieron en la provincia de Tucumán para reprimir un foco del ERP.



Videla, Isabel y Massera. Los militares se encontraban muy cerca de Isabel Perón. La foto corresponde a septiembre de 1975.

El golpe y el Proceso de Reorganización Nacional

El 24 de marzo, Isabel Perón fue detenida y trasladada al sur. Una Junta de Comandantes en Jefe se hizo cargo del gobierno. Jorge Rafael Videla, integrante de esa Junta, fue nombrado presidente.

Según la Junta, se iniciaba de esta manera un “Proceso de Reorganización Nacional” que buscaría construir un orden nuevo. Visto en una perspectiva de mediano y largo plazo, ese orden del que hablaban los militares implicaba una reorganización política e institucional que, al tiempo que desarticularía a los viejos partidos políticos aseguraría para las Fuerzas Armadas un rol central y decisivo en el sistema político. Pero en el corto plazo, el objetivo del Proceso era implementar un nuevo plan económico, puesto que parte del diagnóstico de la crisis remitía a las características básicas de la relación entre el Estado y la economía hasta entonces (intervencionismo, proteccionismo, regulación). En este sentido, el orden que se promovía tenía que ver con garantizar el poder político de las Fuerzas Armadas, como rectoras de la vida política nacional y, a su vez, con asegurar la posición de los sectores económicos concentrados, vinculados con el sistema financiero internacional.

El estatuto y el acta de la Junta

Para iniciar esta nueva etapa, la Junta Militar buscó ordenar su propio poder a partir de una serie de instrumentos institucionales. A través de un Estatuto se establecía que la Junta, como cuerpo colegiado, integrado por los jefes de cada una de las armas, era el órgano supremo del Estado. A su vez, la Junta elegiría un presidente, encargado de llevar adelante la gestión y las políticas establecidas.

La primera Junta de Comandantes en Jefe que asumió estaba integrada por los jefes de cada una de las armas: el teniente general Jorge Rafael Videla, por el Ejército; el almirante Emilio Massera, por la Marina; y el brigadier general Orlando Agosti, por la Aeronáutica.

Este modo de organización buscaba evitar los conflictos y tensiones entre las tres armas (Ejército, Marina, Aeronáutica), construir equilibrios de poder y evitar la personalización del mando en la figura del presidente. Se trataba de un armado político en el que el poder quedaba repartido en partes iguales: representantes de cada fuerza colocaban funcionarios y asesores respetando esa proporcionalidad. Sin embargo, al poco tiempo de iniciarse el Proceso, quedó claro

que esa organización no podía contener las disputas internas entre los propios militares; los conflictos entre los representantes de las distintas armas fueron una constante durante todos los años que duró la dictadura.

La organización del poder en las provincias no logró construirse en función de esa repartición tripartita y más bien predominó el mayor o menor peso de cada arma para quedarse con más o menos provincias. El Ejército fue el más beneficiado.

Más allá de las tensiones entre las tres armas, al interior del nuevo gobierno coexistían distintas posturas, tanto en cuanto al modelo económico a seguir (“liberales” vs. “nacionalistas”) como en cuanto a los plazos que debía darse el Proceso para dejar el poder y la relación con las principales fuerzas políticas (“duros” contra “blandos”). Pero por sobre estas diferencias existía un conjunto de coincidencias, que pueden apreciarse en el Acta sancionada el mismo día del golpe, donde se declaraban “el propósito y los objetivos básicos para el proceso de reorganización nacional”:

“Restituir los valores esenciales que sirven de fundamento a la conducción integral del Estado, enfatizando el sentido de moralidad, idoneidad y eficiencia, imprescindibles para reconstituir el contenido y la imagen de la Nación, erradicar la subversión y promover el desarrollo económico de la vida nacional (...) a fin de asegurar la posterior instauración de una democracia republicana, representativa y federal, adecuada a la realidad y exigencias de solución y progreso del Pueblo Argentino”.

De este modo, el gobierno militar inició sus tareas con un propósito declarado: implementar un nuevo plan económico para transformar al país, y controlar, silenciar y aniquilar cualquier foco de resistencia a esta transformación.

II- EL PLAN ECONÓMICO

Diagnóstico y solución

Más allá de los planes políticos y las tensiones entre las distintas armas y sectores, la Junta Militar coincidía en que la crisis económica era en parte la causa de la crisis política: atacando la primera, la segunda comenzaría a resolverse. Videla designó entonces al frente de la economía nacional a José Martínez de Hoz; este nombramiento reflejaba el predominio del sector “liberal” del Proceso sobre el “nacionalista”, que prefería una salida industrialista.

José Alfredo Martínez de Hoz era un economista ultraliberal, estrechamente vinculado con los grandes grupos económicos internacionales y a los empresarios y corporaciones nacionales. Bisnieto del fundador de la Sociedad Rural Argentina, exfuncionario durante la Revolución Libertadora, y con buenos lazos con los industriales, terratenientes y banqueros, Martínez de Hoz fue el gran ideólogo del plan económico de la dictadura.

El diagnóstico de Martínez de Hoz indicaba que el problema central de la economía radicaba en la excesiva regulación estatal. Desde 1930, el Estado había intervenido en la economía aplicando políticas proteccionistas, otorgando subsidios y distribuyendo estímulos. Esto “distorsionaba” la vida económica, volviéndola ineficiente y anquilosada, y al mismo tiempo generaba un Estado paquidérmico e inoperante, atrapado por las disputas entre los sectores que competían por su protección y sus beneficios.

Dado ese diagnóstico, la solución parecía sencilla: reducir el volumen del aparato estatal, “abrir” la economía y dejar que el mercado se encargara del resto. Este propósito quedó fijado en un lema de la publicidad de la época: “achicar el Estado es agrandar la Nación”. Se suponía que, de ese modo, se reducirían aquellas áreas de la economía que no fueran competitivas, y que solo podían funcionar gracias a la ayuda estatal, lo cual permitiría que aquellas otras con potencial propio lideraran el proceso de crecimiento económico.



El ministro de economía Martínez de Hoz y Videla.

La apertura de la economía y el achicamiento del Estado

La batería de medidas que buscaba aplicar este modelo fue variada: reducción de aranceles proteccionistas, disminución o eliminación de subsidios y privilegios fiscales, apertura financiera y eliminación de controles al movimiento de capitales, reducción del personal estatal, cierre de diversas dependencias del Estado. De este modo el Estado dejaba de ejercer una serie de controles e intervenciones puntuales para dar lugar a que las fuerzas del mercado operaran libremente.

El principal sector afectado fue la pequeña y mediana industria, ya que la apertura de la economía implicaba la competencia con productos importados frente a los cuales la industria nacional poco podía hacer. El cierre de fábricas que producían bienes para el mercado interno fue el resultado más visible y su consecuencia directa el aumento de la desocupación de trabajadores. Los principales beneficiarios de estas nuevas políticas fueron los sectores más concentrados de la economía, que absorbieron a los que no podían competir sin el paraguas estatal. Entre estos “ganadores” deben contarse los sectores orientados hacia la exportación –particularmente de materias primas e hidrocarburos– y aquellos vinculados con el sistema financiero.

A mediados de 1977 el plan se completó con una reforma financiera que desregulaba la entrada y salida de capitales, dejaba libradas las tasas de interés a la oferta y la demanda y flexibilizaba las condiciones para la creación de entidades bancarias y financieras. La importancia que adquiría el mercado financiero seducía tanto a quienes tenían grandes capitales como a pequeños ahorristas, que veían cómo en solo siete días las sumas depositadas se multiplicaban. Esto a su vez generaba inflación y una progresiva pérdida del poder adquisitivo de los asalariados, en tanto sus ingresos no se incrementaban en la misma medida. Complementariamente, creció la oferta de dinero, en un contexto internacional en el que todos los países de la región se vieron inundados por la entrada de capitales extranjeros. A diferencia de lo que ocurría en el pasado, estos capitales no ingresaban para invertir en el desarrollo productivo, sino que se dedicaban principalmente a la especulación financiera. Este proceso terminaría produciendo el endeudamiento generalizado a gran parte de las economías latinoamericanas; en el caso argentino, la deuda externa se multiplicó por 5, pasando de menos de 10 mil millones de dólares en 1976 a más de 45 mil en 1983.

Estos años suelen ser recordados como los de la “la plata dulce”: dado que los intereses que se pagaban eran tan altos, que a cualquier ahorrista le convenía colocar su dinero en un banco a la espera de que en pocos días, y sin hacer nada, su dinero se viera multiplicado. Desde luego, esto desalentaba la inversión productiva.

La economía poco a poco iba cambiando su centro: se estaba abandonando un modelo apoyado en la industria y las exportaciones agropecuarias para pasar a uno que giraba en torno al sistema financiero. Esta euforia especulativa se mantuvo por varios años, hasta que en 1981 las quiebras de bancos y entidades financieras y los enfrentamientos entre los distintos sectores internos del Proceso, llevaron a la remoción de Martínez de Hoz. Para entonces, la economía argentina ya había cambiado irreversiblemente.

La corrupción del Estado

Los discursos sobre el orden y la reorganización, el achicamiento del Estado y la eficiencia económica no deben hacer olvidar que durante la dictadura el Estado siguió funcionando con altísimos niveles de corrupción. Si bien se pretendía eliminar el “intervencionismo”, fue el propio Estado el que encaró una serie de obras públicas de magnitud: para hacerlo tomó deuda externa con altísimos intereses y adjudicó su realización a empresas vinculadas con el gobierno, lo que contribuyó a la consolidación de los grandes grupos económicos. La supresión de privilegios fiscales y subsidios también funcionó de manera absolutamente discrecional: los sectores económicos o empresariales con lazos con el gobierno disfrutaron de grandes beneficios.

El Estado clandestino y la represión

Para llevar adelante tanto el objetivo de largo plazo como los planes económicos ideados por Martínez de Hoz era necesario controlar a una sociedad que, pese a la incertidumbre y cierta pasividad con la que había recibido al nuevo gobierno, acumulaba una serie de conflictos y tensiones y una importante experiencia de movilización y resistencia frente a planes políticos y económicos. En paralelo al Estado que se ocupaba de modificar las bases económicas y que sostenía la necesidad de reconstruir un nuevo orden social, se organizó un Estado clandestino que se encargó de aplicar un plan sistemático de represión y terror.

El plan buscaba la eliminación de las personas consideradas sospechosas o responsables de la subversión, por eso, en principio, las acciones represivas se

dirigieron hacia quienes estaban vinculadas de una u otra manera con las organizaciones políticas armadas. Pero desde un comienzo quedó en claro que el blanco del accionar represivo era mucho más amplio, abarcando a dirigentes de otras agrupaciones políticas y sobre todo a los militantes de organizaciones gremiales, estudiantiles y hasta religiosas. Era una especie de espiral que incorporaba siempre a un nuevo sector de la sociedad como sospechoso de movilizar u organizar acciones subversivas. En este sentido, el plan de represión era la eliminación física de las personas, pero también la generación de desconfianza y sospecha entre familiares, amigos y conocidos. La posibilidad de que cualquiera pudiera ser finalmente detenido también provocó el silenciamiento y la autocensura de muchas personas y organizaciones.

La represión al movimiento obrero tenía que ver no solo con desarticular cualquier sospecha de vinculación con organizaciones subversivas, sino principalmente con aplicar un “disciplinamiento laboral” en un momento en el cual comenzaban a aplicarse los nuevos planes económicos. Algunas fábricas fueron ocupadas por representantes militares y cientos de dirigentes gremiales fueron detenidos y desaparecidos.

Fueron las propias Fuerzas Armadas junto con grupos parapoliciales los que, organizados en “grupos de tareas”, se ocuparon de la implementación de las acciones. Los “sospechosos” eran secuestrados en operaciones planificadas y trasladados a “centros de detención”. A su vez, dado que todo era secreto y arbitrario, esas operaciones represivas implicaron también el robo y la destrucción de los bienes de los secuestrados. Esto incluyó uno de los crímenes más aberrantes de la dictadura: el robo de bebés, hijos de los detenidos-desaparecidos.

A medida que el plan represivo avanzaba y se ampliaba, los centros de detención se multiplicaron. Algunos funcionaban en los cuarteles militares; otros operaban directamente en instalaciones que se encontraban en medio de las distintas ciudades, prácticamente a la vista de todos, en dependencias policiales, en clubes o fábricas ocupadas, en casas abandonadas. Si bien eran clandestinos, dadas las dimensiones que la represión adquiría, tuvieron que desarrollar sistemas de administración y contar con personal a cargo.

Cuadros que indican porcentaje de desaparecidos por profesión/ocupación y por edad:

AÑOS	%
0 a 5	0.82
6 a 10	0.25
11 a 15	0.58
16 a 20	10.61
21 a 25	32.62
26 a 30	25.90
31 a 35	12.26
36 a 40	3.76
41 a 45	3.40
45 a 50	5.38
51 a 55	1.84
56 a 60	1.17
61 a 65	0.75
61 a 65	0.75
66 a 70	0.41
Más de 70	0.25
Total	100

Cuadro de desaparecidos, por edad.

Fuente: *Nunca Más*, Informe de la CONADEP, Eudeba, 1984.

PROFESIÓN / OCUPACIÓN	%
Obreros	30.2
Estudiantes	21
Empleados	17.9
Profesionales	10.7
Docentes	5.7
Autónomos y varios	5
Amas de casa	3.8
Conscriptos y personal de Fuerzas de Seguridad	2.5
Periodistas	1.6
Actores/artistas	1.3
Religiosos	0.3
Total	100

Cuadro de desaparecidos, por profesión/ocupación.

Fuente: *Nunca Más*, Informe de la CONADEP, Eudeba, 1984.

Mucha de la documentación de los centros de detención fue destruida como parte de la estrategia militar de borrar cualquier huella de su actuación. No obstante, luego de un tiempo, se han logrado recuperar varios archivos que han sido de fundamental importancia para saber sobre el destino de desaparecidos, de bebés apropiados y como prueba en los juicios que finalmente se llevaron a cabo para condenar a los militares responsables de la represión.

En los centros de detención, quienes habían sido secuestrados quedaban a disposición de sus captores, sometidos a la tortura y la intimidación física y psicológica. El destino de las personas “chupadas”, como se las llamaba en la jerga de sus captores, podía ser quedar “a disposición del poder ejecutivo” (esto es, detenidos con reconocimiento estatal), ser liberados o, más frecuentemente, su muerte. En este último caso, uno de los métodos utilizados fue el de los llamados “vuelos de la muerte”, por el cual se arrojaban los cuerpos (aún con vida) de los detenidos desde aviones que sobrevolaban el Río de La Plata o el Océano Atlántico.

Se estima que durante los años de la dictadura funcionaron en el país más de 500 centros clandestinos de detención. En la ciudad de Buenos Aires, existieron más de 60 y otros tantos más en la zona del Gran Buenos Aires. La Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) estaba en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, El Olimpo y Automotores Orletti en la zona oeste de la ciudad, y el Club Atlético en el bajo porteño. El Vesubio se encontraba en La Tablada, en el partido de La Matanza; La Mansión Seré en Morón; El Campito en San Miguel. En Córdoba funcionaba el centro La Perla, también conocido como La Universidad, y en Tucumán otro, La Escuelita.

Dado que se trataba de operaciones clandestinas, el gobierno militar se negaba a reconocer que tuviera alguna responsabilidad sobre aquellas personas que habían desaparecido. Miles de personas parecían no estar en ningún lado: sus familiares denunciaban su ausencia, pero tampoco eran considerados muertos, ya que ante la ausencia de sus cuerpos el Estado negaba que hubieran sido detenidos o asesinados. En una conferencia de prensa ante periodistas extranjeros, el propio Videla reconoció explícitamente la finalidad de este perverso mecanismo de negación estatal: al ser preguntado por esas personas, respondió que un desaparecido “no tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo”.

El sistema represivo instrumentado por los militares constituyó una flagrante violación de los derechos humanos que aún hoy, a más de treinta años, sigue pesando con su huella de dolor e injusticia. Aunque es difícil precisarlo, se calcula que han

sido cerca de 30 mil las personas asesinadas/desaparecidas; a esto deben agregarse delitos menores como la apropiación de bienes materiales de detenidos y desaparecidos mediante la extorsión o la violencia física.

|| Las Abuelas de Plaza de Mayo siguen buscando a sus nietos, esos bebés hijos de sus hijos, nacidos en cautiverio y apropiados por los militares.



Detenciones en plena calle y a la luz del día.

Las dictaduras en América Latina

La represión que tuvo lugar en Argentina no fue una excepción. En los años 70 la mayoría de los países sudamericanos fue escenario de golpes de estado

y dictaduras. Los gobiernos militares que aplicaron sistemáticos planes de represión fueron apoyados por Estados Unidos; muchos de los cuadros militares fueron capacitados en la escuela militar norteamericana de West Point y en la Escuela de las Américas.

Al mismo tiempo, entre los regímenes militares de los países de la región se estableció una política coordinada de asistencia recíproca para las tareas represivas, que contó con la colaboración de organismos de inteligencia del gobierno de EEUU. Mediante este plan, conocido como “Plan Cóndor” y vigente desde 1975, los servicios de inteligencia de los gobiernos militares de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Bolivia y Paraguay trabajaron coordinada y clandestinamente para desarrollar sus políticas de terrorismo de Estado contra sus ciudadanos, aun cuando estos no se encontraran en su país de origen.

La construcción de consensos y sentidos de la realidad

Si bien la principal responsabilidad por la aplicación de este sistemático plan de represión corresponde a las Fuerzas Armadas, también es cierto que contó con apoyos concretos y con silencios cómplices que ayudaron a desplegar las acciones represivas. Hubo cuadros y dirigentes políticos que aceptaron participar de ministerios e instancias de gestión, recreando de ese modo la idea de que se trataba de un gobierno cívico-militar. Diversas organizaciones empresariales y corporativas también se sumaron al gobierno y prestaron su consenso; la jerarquía de la Iglesia católica también colaboró, al punto de que algunos sacerdotes participaron en sesiones de torturas e interrogatorios a detenidos.

La participación de los medios masivos de comunicación también fue crucial en este intento de buscar consenso y crear sentidos sobre la realidad que justificaran lo actuado por el gobierno militar, tanto en lo que se hacía visiblemente como lo que tenía que ver con las acciones clandestinas. En algunos programas televisivos y radiales y en las publicidades solía enfatizarse la importancia del cambio económico que se estaba implementando: se hablaba, por ejemplo, de la buena calidad de los productos importados frente a la precariedad de aquellos provenientes de la industria nacional. También se fueron construyendo imágenes que asociaban toda crítica al régimen militar con simpatías con lo que se denominaba genéricamente “la subversión”. A su vez, todo lo que no cuadrara dentro de lo estipulado por el gobierno militar o que pudiera ser sospechoso de expresar algún tipo de mensaje crítico fue censurado: programas televisivos, libros –incluso infantiles–, canciones, películas, así como también artistas, escritores o intelectuales.

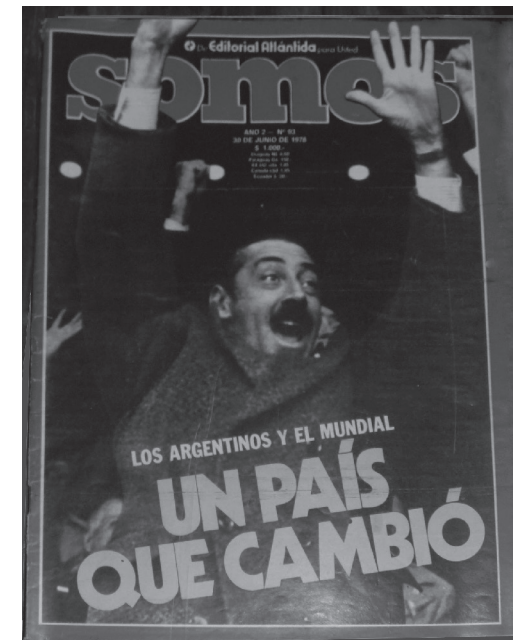
En ese clima de sospecha y desconfianza que se instalaba, se fueron difundiendo frases e ideas del estilo “no te metás”, “por algo será”, “algo habrá hecho”, o “¿sabe usted dónde está su hijo en este momento?”, que reflejaban la fragmentación del tejido social y la indiferencia por la suerte de las víctimas. En 1979, mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA visitaba el país y recibía denuncias sobre los crímenes cometidos por la dictadura, el gobierno distribuyó calcomanías que decían “los argentinos somos derechos y humanos”.

En este sentido, la organización del Mundial de Fútbol de 1978 fue particularmente importante para crear consensos y mostrar una supuesta aceptación de la sociedad hacia el gobierno militar. Se trataba de un evento no solo deportivo, sino fundamentalmente político; el gobierno gastó altísimas sumas de dinero y se ocupó de cada detalle. Los medios de comunicación contribuyeron con titulares e informaciones que buscaban construir esa imagen de un país pacificado y feliz. Sin embargo, mientras por las calles se celebraba el triunfo mundial de la selección argentina, el Estado seguía secuestrando y torturando en los centros clandestinos de detención. A pocas cuadras del estadio de River Plate, en Buenos Aires, sede de muchos partidos del campeonato –incluida la final– muchos detenidos-desaparecidos sufrían torturas físicas y psicológicas en la Escuela de Mecánica de la Armada.

En la semana en que se iniciaba el Mundial, la revista *Somos* publicó en una de sus tapas la foto de un jubiloso Videla, sonriendo y alzando los brazos en señal de triunfo. El título era “Un país que cambió”. Y en copete que seguía al título se decía: “El 1º de julio, en la inauguración del Campeonato Mundial, la Junta Militar se hacía presente por primera vez en un acto popular y masivo. El aplauso fue general. (...) Hubo una sola bandera y un solo grito: Argentina (...) La campaña desatada en el exterior preocupó a los argentinos, que se encargaron de desmentirla con hechos”.



Tapa de la revista *Gente*, 24 de marzo de 1976.



Tapa de la revista *Somos*.

III- LAS RESISTENCIAS DE LA SOCIEDAD

Los “años de plomo”, 1976-1978

Los dos primeros años de la dictadura fueron los más duros: la relativa pasividad con que la sociedad había recibido la intervención militar parecía prolongarse, sin que se encontraran los modos de reaccionar ante el progresivo avance de la represión. Ello facilitó que el gobierno pudiera avanzar no solo con las medidas económicas previstas, sino también con su sistemático plan de secuestro y desaparición. El temor generalizado, combinado con el éxito relativo de las políticas económicas de Martínez de Hoz para un sector de la sociedad (la “plata dulce”) y el recuerdo de los turbulentos meses que marcaron el final del gobierno de Isabel Perón, contribuyeron a generar este consenso pasivo.

La sociedad quedó en silencio: algunos porque tenían miedo; otros porque de una u otra manera justificaban lo que el gobierno militar estaba haciendo. Otros marcharon al exilio en el exterior y otros optaron por un exilio interno, un apartamiento de la vida pública. Los empresarios reaccionaron a favor o en contra según se hubieran beneficiado o perjudicado con las medidas económicas. Los sindicatos, luego de algunos intentos de reclamo frente a la desestructuración de la industria, también quedaron silenciados por la represión. La dirigencia política se mantuvo en una posición ambigua, por momentos denunciando la situación y por momentos confiando en que los militares cumplirían en algún momento lo pautado en el acta: la restauración de la democracia. Como sea, parecía no quedar ninguna vía para la canalización de demandas, quejas o denuncias.

Las organizaciones de Derechos Humanos

En este contexto, los familiares de las víctimas directas del terrorismo de Estado y los Organismos de Derechos Humanos conformaron un aislado sector de protesta contra la violencia estatal. En abril de 1977 un grupo de madres de desaparecidos se organizan para reclamar a las autoridades por el paradero de sus hijos; ante la falta de respuesta, las Madres de Plaza de Mayo, como pasan a ser conocidas, comenzaron sus rondas alrededor de la pirámide de la plaza, reclamando en silencio. Algunas de las fundadoras de la organización fueron secuestradas y desaparecidas, como Azucena Villaflor; sin embargo, su tenacidad les permitió conseguir apoyos, para convertirse en el puntal de lucha contra la dictadura y superar su aislamiento inicial.

La lucha de las Madres, a las que se sumaron otras organizaciones de Derechos Humanos, halló eco en el exterior, donde las denuncias por los crímenes cometidos por el estado argentino iban siendo cada vez más numerosas. Las presiones interna-

cionales fueron particularmente notorias en ocasión de la celebración del Mundial 78, cuando muchos países llamaron a un boicot contra el evento, para no legitimar la tortura y la represión. La dictadura intentó defenderse presentando en revistas y programas televisivos estas denuncias como parte de una “campaña antiargentina” conducida por simpatizantes de los movimientos guerrilleros.

Sin embargo, las presiones eran tan fuertes que el gobierno no pudo evitar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la OEA, visitara al país en 1979, recogiendo infinidad de testimonios de las prácticas terroristas del régimen. Este revés se sumó al hecho de que Adolfo Pérez Esquivel, un destacado integrante del movimiento de Derechos Humanos, fuera reconocido internacionalmente con el Nobel de la Paz en 1980.

El movimiento sindical

El otro polo de resistencia que pudo constituirse en esos años fue protagonizado por el movimiento obrero, una de las principales víctimas de la represión del Proceso, así como de sus políticas económicas. La CGT, que había sido disuelta por la intervención militar días después del golpe, comenzó lentamente a reconstituirse, alrededor de dos grandes sectores de las organizaciones sindicales, uno más propicio al diálogo y la negociación con las autoridades, y otro más confrontativo, que ya en 1979 lanzó un primer paro general contra la dictadura. En 1980 el sector dialoguista se reorganizó en la llamada CGT “Azopardo” (por la calle en la que tenía su sede), mientras que el segundo conformó la CGT “Brasil”, donde empezó a cobrar importancia un dirigente hasta entonces poco conocido, Saúl Ubaldini.

A partir de 1981, los sindicatos más combativos comenzaron a desarrollar un plan de lucha que incluyó paros generales en julio y noviembre y una marcha, en agosto, a la iglesia de San Cayetano reclamando por “paz, pan y trabajo”: esa movilización convocó a 10 mil personas. Al año siguiente, el 30 de marzo de 1982 (tres días antes del desembarco en Malvinas), una multitudinaria manifestación fue violentamente reprimida por el gobierno en la Plaza de Mayo, con un saldo de casi 3 mil detenidos.

El despertar de las voces

Hacia fines de 1978 el corsé que acallaba cualquier crítica comenzó a aflojarse. Por un lado, empezaron a circular algunos documentos en los que se denunciaba el autoritarismo y la represión ejercida por el gobierno. Por otro lado, los planes económicos mostraban sus límites y su imposibilidad de recuperar cualquier tipo de estabilidad económica.

Los sectores más progresistas de la Iglesia también comenzaron a expresar sus críticas al gobierno militar, en muchos casos en vinculación con el movimiento sindical, al cual lo unía la preocupación por los efectos de la política económica llevada adelante por el Proceso. En 1981 se realizó la Conferencia Episcopal, cuyo documento final apelaba a la necesidad de retomar el camino institucional.

Para los años 80 las organizaciones de derechos humanos tenían cada vez más visibilidad. También reaparecieron los partidos políticos; si bien con estructuras precarias, en 1981 confluyeron en una estructura plural, la Multipartidaria, que reunía a los principales partidos alrededor del objetivo coincidente de presionar al gobierno militar por una salida electoral.

El recambio de Videla por Viola

Como estaba previsto, Videla terminó su mandato en 1981. Los años de su gobierno habían mostrado la cara más dura de la dictadura y de la aplicación del nuevo plan económico. Hacia 1981 la sociedad ya había comenzado a despertar y a expresar sus críticas; al mismo tiempo, el sistema de reparto del poder y las “cuotas” de espacios que correspondían a cada sector ya no podía contener las tensiones y disputas entre los integrantes de la Junta. Los conflictos internos habían ido en aumento. En ese contexto, el general Viola, fue designado presidente, en marzo de 1981. Su mandato enfrentó desde el comienzo la oposición de distintos sectores del Proceso, lo que limitó en gran medida su autoridad.

En principio, el gobierno de Viola parecía encaminarse hacia la salida electoral, y muchos apostaron a que el nuevo presidente abriría una discusión sobre la posible transición democrática. Algunas medidas distendieron un poco el clima político: se permitió cierto grado de movilización política y se relajaron las rígidas medidas de censura vigentes desde 1976. Viola entabló una ronda de diálogo con la Multipartidaria, liberó a la expresidenta Isabel Perón, y desplazó del Ministerio de Economía a Martínez de Hoz, una de las figuras más impopulares del gobierno militar, y cuyas políticas liberales eran resistidas por el sector “nacionalista” del Proceso, como Massera. Sin embargo, estas mismas medidas tensionaron la relación con los sectores más “duros” de la corporación militar, quienes rápidamente se pronunciaron en contra de cualquier normalización institucional en el corto plazo. Las tensiones terminaron de resolverse cuando a fines de ese mismo año Viola fue desplazado de la presidencia, con la excusa de un agravamiento de la enfermedad cardíaca que padecía, a solo ocho meses de haber asumido. La presidencia fue ocupada entonces por el general Galtieri.

IV- EL GOBIERNO DE GALTIERI, MALVINAS Y EL FINAL DE LA DICTADURA

Galtieri asumió la presidencia con el firme objetivo de retomar los principios del golpe, en cuanto a sus planes políticos y económicos. A su vez, frente a la multiplicación de críticas y oposiciones, se había propuesto crear un clima de consenso y legitimidad para con el nuevo gobierno.

El nuevo presidente, quien a diferencia de Viola no tuvo que enfrentar divisiones internas entre las principales facciones del Proceso, quiso cumplir un viejo anhelo de Massera: crear un partido político que, en el caso de una supuesta salida electoral, representara los intereses políticos y económicos que continuaran la línea inaugurada en el Proceso. En febrero de 1982 Galtieri lanzó su proyecto político, el “Movimiento de Opinión Nacional” con un gigantesco asado en la provincia de La Pampa, al que concurrieron políticos, gobernadores, sindicalistas y empresarios. Por otro lado, nombró como Ministro de Economía a Roberto Alemann, que proponía básicamente un ajuste monetario y fiscal, es decir, una vuelta al enfoque liberal ortodoxo de Martínez de Hoz.

Pero a poco de comenzar quedaba claro que ninguno de los objetivos era de sencilla realización. Alemann no contaba con demasiados respaldos y la economía seguía sin rumbo. Además, la oposición activa de diversos sectores políticos, gremiales y culturales a la dictadura hacía que la intención de crear un partido político militar careciera de sustento.

Malvinas

La creciente movilización social y las repercusiones que comenzaban a tener las denuncias por las violaciones a los derechos humanos podrían considerarse la causa de la decisión de Galtieri de recuperar las islas Malvinas, ocupadas desde hacía un siglo y medio por Gran Bretaña. Por otro lado, la invasión de Malvinas era un antiguo proyecto de la Marina, ya desde comienzos del Proceso. Unos años antes, el gobierno militar había intentado también el inicio de un conflicto bélico con Chile, en torno de la cuestión del canal de Beagle. En ese momento, la negociación y la intervención del Papa lograron evitar la guerra. Pero levantar las banderas del nacionalismo a partir de una guerra seguía siendo una posibilidad real de lograr unificar a la población en relación con un tema concreto, oponerlo a un enemigo exterior y estimular un respaldo en función de conseguir una victoria nacional.

Al mismo tiempo, el contexto internacional parecía favorable para la aventura. Des-

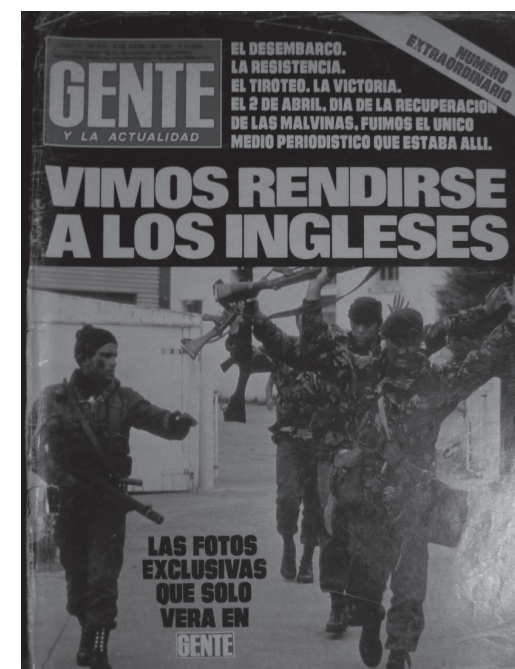
de el año anterior gobernaba en EEUU Ronald Reagan, convencido de la importancia de las dictaduras del Cono Sur en la “guerra” que debía librarse contra el comunismo en el continente. Reagan reforzó los vínculos de su país con los gobiernos militares de la región, en particular con el argentino, que envió asesores militares a colaborar con los norteamericanos en su combate contra la guerrilla de izquierda en países de América Central. De algún modo, Galtieri esperaba que esta “relación especial” entre ambos países se tradujera en un apoyo activo en ocasión del conflicto bélico.

El 2 de abril de 1982 cerca de cinco mil soldados argentinos desembarcaron en las islas Malvinas: se iniciaba de esa manera la guerra contra el Reino Unido. Las primeras reacciones del arco político y de gran parte de la sociedad fueron en el sentido esperado por los militares: parecía que la movilización que tres días antes protestaba en contra de la dictadura había mutado su humor y ahora saludaba con entusiasmo a quienes se presentaban como héroes y promotores de una gesta nacional. A poco de saberse la noticia sobre el desembarco argentino, 10 mil personas se concentraron en la Plaza de Mayo, Galtieri salió al balcón de la Casa Rosada y pronunció un exultante discurso que en tono de desafío a los ingleses concluía con la frase: “si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla”.

Los medios de comunicación rápidamente entraron en el juego: los diarios y revistas llenaron las tapas con titulares que daban cuenta de grandes triunfos militares, mientras que los canales de televisión organizaban programas especiales para recolectar fondos y alimentos y mostrar el apoyo civil a la aventura militar que ocurría en los mares del sur.



Tapa de *Clarín* sobre el desembarco en Malvinas.



Tapa de la revista *Gente* “Vimos rendirse al enemigo”.



Soldados argentinos en Malvinas.

La realidad, lejos de las imágenes

Pero la realidad del conflicto poco tenía que ver con lo que los medios informaban: la expedición había sido enviada sin preparación profesional y sin armamento adecuado. En verdad, la cúpula militar había decidido reclutar y enviar a la guerra a los soldados que estaban realizando el servicio militar. El heroísmo de estos jóvenes de veinte años, sin equipamiento ni preparación, no era suficiente para enfrentar a una de las mayores potencias militares del mundo. En este sentido, se trató de una decisión y una planificación improvisada e irresponsable, en la que únicamente la Fuerza Aérea demostró cierto grado de profesionalismo.

Por otro lado, y como era de esperarse, Estados Unidos no solo no apoyó a Argentina, sino que claramente se decidió a favor de su principal aliado en Europa, es decir, Inglaterra, después de intentar sin éxito disuadir al gobierno argentino de entrar en el conflicto.

Pese al entusiasmo de gran parte de la población, alimentado por la desinformación sobre la real situación de los enfrentamientos bélicos, el resultado fue la derrota argentina: después de 72 días de enfrentamientos, la guerra concluyó con la rendición argentina, el 14 de junio de 1982. El saldo de la desastrosa aventura fue la muerte de 649 soldados argentinos, así como las terribles secuelas que sufrieron y siguen sufriendo quienes sobrevivieron al conflicto, que han llevado al suicidio a más de 350 excombatientes.

La suerte del Proceso de Reorganización Nacional estaba sellada: el último plan de los militares para recuperar algo de legitimidad que les permitiera seguir gobernando se había agotado. Galtieri abandonó rápidamente la presidencia y la Junta Militar entró en crisis. La Fuerza Aérea y la Marina abandonaron el órgano tripartito; el Ejército, que quedaba solo y a cargo del gobierno, designó al general Reynaldo Bignone como presidente. Todo indicaba que su mandato sería limitado y que el camino a seguir era el de entablar un diálogo con los partidos y dirigentes políticos para iniciar una transición.

Hacia la transición democrática

Mientras el gobierno militar buscaba una fórmula posible para transitar el cambio que sobreviniera, el humor social que entre fines de marzo y comienzos de abril de 1982 se había transformado tan rápidamente de la protesta contra la dictadura al apoyo por la invasión a Malvinas, volvía a girar para acusar a los militares por la derrota bélica. Todos los reclamos que durante las semanas que duró el conflicto ha-

bían quedado en segundo plano, volvieron a surgir con más vehemencia: denuncias por violación a los derechos humanos, testimonios diversos de torturas y represión, denuncias por la existencia de centros clandestinos de detención, etcétera.

De igual modo, los mismos medios de comunicación que poco antes habían contribuido a la manipulación de la opinión pública durante la guerra, y que en los años anteriores habían catalogado “campana antiargentina” a las denuncias internacionales contra nuestro país, viraron abruptamente su enfoque y pasaron a acompañar estas denuncias con informes espectaculares sobre la represión.

El reclamo por la salida democrática era masivo; en diciembre de 1982 la Multi-partidaria, la CGT de Ubaldini, organizaciones de Derechos Humanos, estudiantes y demás fuerzas políticas confluyen en una gigantesca manifestación de cien mil personas en Plaza de Mayo. La represión policial fue brutal: un manifestante muerto y muchos otros heridos.

El movimiento de derechos humanos se configuró como un actor central de los años finales de la dictadura. Los gobiernos democráticos no pudieron excluir de sus agendas políticas aquella problemática, y desplegaron un conjunto de estrategias que buscaban dar respuestas y/o clausurar esta pesada herencia.

La retirada negociada que intentó Bignone

El gobierno de Bignone consiguió alinear al resto de los jefes militares para pausar la retirada. El interés principal era definir las condiciones en que se traspasaría el poder y conseguir un compromiso por parte de las próximas autoridades democráticas de que no se revisaría lo actuado por las Fuerzas Armadas en lo que llamaban “guerra contra la subversión”.

Dos medidas puntuales del gobierno apuntaban en esta dirección: la destrucción de toda la documentación respecto a la política represiva llevada adelante por el gobierno desde 1976, ordenada en abril de 1983, y la “Ley de Pacificación”, de septiembre del mismo año, que impedía la apertura de juicios contra el personal militar y civil involucrado en la represión.

Si bien los dirigentes de los principales partidos políticos se negaron a aceptar estas condiciones, las negociaciones continuaron por varios meses más. Al definirse el calendario electoral, el gobierno buscó ganar más tiempo y programó un período relativamente extenso entre la fecha de las elecciones y la entrega del mando. En su especulación, esto permitiría volver a negociar directamente con quien fuera a ser el futuro presidente y no con una serie de dirigentes, candidatos y partidos diversos.

Finalmente, el importantísimo triunfo conseguido por Raúl Alfonsín, candidato del radicalismo –quien consiguió un 52% de los votos– acotó todo espacio de negociación. Era el fin de la etapa más violenta y más dolorosa de la historia argentina.

La dictadura de los años 70, por sus formas, modalidades, objetivos y consecuencias, fue absolutamente distinta a las experiencias autoritarias vividas anteriormente en el país.

Selección de fuentes y actividades sugeridas

Periodismo y política

Carta Abierta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar, 24 de marzo de 1977

“La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos, son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi treinta años.

(...)

El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva, y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para nueve meses más tarde. En esa perspectiva lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediara males que ustedes continuaron y agravaron.

(...)

Quince mil desaparecidos, diez mil presos, cuatro mil muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio.

(...)

En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada.

En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales.

Congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9% prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos, han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial, y cuando los trabajadores han querido protestar los han calificados de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos, y en otros no aparecieron.

(...)

Basta andar unas horas por el Gran Buenos Aires para comprobar la rapidez con que semejante política la convirtió en una villa miseria de diez millones de habitantes. Ciudades a media luz, barrios enteros sin agua porque las industrias monopólicas saquean las napas subterráneas, millares de cuadras convertidas en un solo bache porque ustedes sólo pavimentan los barrios militares y adornan la Plaza de Mayo, el río más grande del mundo contaminado en todas sus playas porque los socios del ministro Martínez de Hoz arrojan en él sus residuos industriales, y la única medida de gobierno que ustedes han tomado es prohibir a la gente que se bañe.

(...)

Tampoco en las metas abstractas de la economía, a las que suelen llamar “el país”, han sido ustedes más afortunados. Un descenso del producto bruto que orilla el 3%, una deuda exterior que alcanza a 600 dólares por habitante, una inflación anual del 400%, un aumento del circulante que en solo una semana de diciembre llegó al 9%, una baja del 13% en la inversión externa constituyen también marcas mundiales, raro fruto de la fría deliberación y la cruda ineptia.

Dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política económica de esa Junta sólo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales encabezados por la ITT, la Esso, las automotrices, la U.S.Steel, la Siemens, al que están ligados personalmente el ministro Martínez de Hoz y todos los miembros de su gabinete”

(...)

Actividades:

- ¿Quién era Rodolfo Walsh?
- ¿Cuál es el contexto en el que publica esta carta?
- ¿Qué es lo más delicado que la Junta Militar liquidó con el Golpe de 1976?
- ¿Qué medidas económicas llevó adelante la dictadura militar de 1976, según denuncia Rodolfo Walsh?
- ¿Cómo podrías relacionar la represión política y social con esas medidas económicas del Gobierno militar?
- ¿Cuáles son las consecuencias sociales de la política económica?

2- Medios y dictadura

-Explore el siguiente vínculo para acceder y analizar algunas publicidades de la dictadura militar 1976-83.

<http://publicidadpolitica.com.ar/1976f/1976.htm>

3 -Rock y dictadura

-Explore el siguiente vínculo en el que se explicitan las canciones prohibidas durante la dictadura:

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1158511

- ¿Qué canciones conocés?
- ¿De qué hablan las canciones censuradas? ¿por qué te parecen que fueron prohibidas? ¿en qué año y en qué contexto fueron prohibidas?
- ¿Qué artistas fueron censurados?

BIBLIOGRAFÍA

- Andújar Andrea et al. (comp.), *De minifaldas, militancias y revoluciones. Exploraciones sobre los '70 en la Argentina*, Buenos Aires, Ediciones Luxemburg, 2009.
- Cavarozzi, Marcelo, *Autoritarismo y democracia, 1955-2006*, Buenos Aires, Aries, 2006.
- Gerchunoff Pablo y Lucas Llacht, *El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un siglo de políticas económicas argentinas*, Buenos Aires, Ariel, 1998.
- Novaro, Marcos y Vicente Palermo, *La dictadura militar, 1976-1983*, Buenos Aires, Paidós, 2009.
- Novaro, Marcos, *Historia de la Argentina, 1955-2010*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2009.
- Oslak, Oscar, *Proceso, crisis y transición democrática 1 y 2*, Buenos Aires, Ceal. Biblioteca política argentina, 1984.
- Romero, Luis Alberto et al., *Breve Historia contemporánea de la Argentina*, Buenos Aires FCE, 2001.
- Schwarzer, Jorge, *La política económica de Martínez de Hoz*, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986.
- Suriano Juan (dir.), *Dictadura y Democracia (1976-2001)*, Tomo IX, Buenos Aires, Sudamericana, 2003.
- Troncoso, Oscar, *El proceso de reorganización nacional / 1*, Buenos Aires, Ceal. Biblioteca política argentina, 1984.

CAPÍTULO 6: *De la recuperación de la democracia, al imperio del neoliberalismo y la crisis del 2001*

En este capítulo se estudian dos décadas de la historia argentina: el tramo que corre entre 1983 hasta el 2003. Durante estos veinte años acontecieron importantes cambios en la sociedad argentina que sin duda han contribuido a definir nuestro presente y cuyos efectos sobre la actualidad se manifiestan de una u otra manera. En las páginas que siguen se analizan algunos de los más significativos sucesos de ese *pasado que no deja de pasar*. Tal como se ha venido trabajando en los capítulos anteriores, se propone un abordaje que pone de relieve la dimensión política de la vida social y que busca dar cuenta de los nudos más importantes del reciente pasado argentino, en los que están atadas cuestiones políticas, sociales y económicas. Interesa sobre todo mostrar las distintas alternativas que recorrió la democracia argentina en esos años: los principales obstáculos que debió sortear y los desafíos que tuvo que enfrentar; las políticas que los gobiernos constitucionales pusieron en juego y los modelos de sociedad que estas portaban; el papel de la sociedad civil y sus acciones frente a las propuestas emanadas del Estado democrático.

El capítulo se organiza cronológicamente, siguiendo la sucesión de las presidencias: los gobiernos constitucionales de Raúl Alfonsín (1983-1989), Carlos Menem (1989-1999), Fernando De la Rúa (1999-2001) y la seguidilla de gobiernos provisionales hasta las elecciones que tuvieron lugar en abril de 2003. En esos comicios, Carlos Menem obtuvo el primer lugar con el 24,5% de los votos mientras el santacruceño Néstor Kirchner quedó en segundo lugar con el 22,2% de los sufragios. Por disposición constitucional debía realizarse una segunda vuelta electoral entre ambos candidatos. Sin embargo, Menem desistió de presentarse y Kirchner asumió la presidencia en mayo de 2003.



Presidentes del período (de izquierda a derecha): Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando De la Rúa, Adolfo Rodríguez Saá, (arriba) Eduardo Duhalde, (abajo) Néstor Kirchner.

I- DE ILUSIONES Y DESENCANTOS: EL GOBIERNO DE ALFONSÍN, 1983-1989

El 30 de octubre de 1983 se llevaron a cabo las primeras elecciones generales luego de siete años de dictadura militar. La fórmula de la Unión Cívica Radical (UCR) compuesta por Raúl Alfonsín y Víctor Martínez obtuvo el 51,75% de los votos (sobre un total de 15.350.186 votantes) seguida por la que integraron Ítalo Luder y Deolindo F. Bittel, del Partido Justicialista, que alcanzó el 40,16% de los sufragios emitidos.

Alfonsín asumió la primera magistratura el 10 de diciembre de ese año en un contexto económico, social y político muy complejo. Eran muchos los conflictos que el Proceso de Reorganización Nacional (PRN) le legaba a la recuperada democracia argentina. A pesar de ello, existía una fuerte convicción social en que el sistema democrático habría de resolver todos los problemas que aquejaban al país. De hecho, fue el flamante presidente radical quien había fomentado e insistido en esa idea durante su campaña electoral: “Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura”, había señalado en uno de sus

discursos de 1983. Sin embargo, la intrincada situación en la que se hallaba el país demostraría a la sociedad y al propio gobierno que esa democracia antes que declamarla había que construirla.

Como ya se adelantó en la presentación, no se detallarán exhaustivamente las vicisitudes de los gobiernos del período, sino que se expondrán algunos de los aspectos más significativos que acontecieron en cada etapa presidencial. En el caso de la presidencia de Alfonsín se destacarán tres ejes problemáticos: la cuestión militar y la política de derechos humanos, las relaciones con la corporación sindical y la política económica.



Alfonsín habla desde el Cabildo, frente a una multitud que celebra su asunción el 10 de diciembre de 1983.

La cuestión militar y la política de derechos humanos

El juzgamiento a los militares que violaron los derechos humanos durante el Proceso de Reorganización Nacional fue uno de los dos principales temas que ocuparon la agenda del flamante gobierno democrático. La reforma sindical resultó ser el otro gran tópico que habría de ocupar, de igual manera, la atención oficial.

Previamente a su asunción, Alfonsín ya había diseñado su estrategia para abordar tan delicado asunto. Esta apuntaba a juzgar a las juntas militares que habían detentado el poder entre 1976 y 1983 y que eran las responsables últimas

de la tortura, desaparición y muerte de miles de personas. También serían sometidos a juicio algunos otros altos miembros de las FF. AA. igualmente comprometidos con el aparato represivo ilegal montado en aquellos años. Con este acto se pretendía dar un escarmiento a los sectores autoritarios de la sociedad argentina, aunque limitando las responsabilidades: quienes solo hubieran actuado “obedeciendo órdenes” serían exceptuados de culpa. Dicha fórmula no sería compartida por los organismos de Derechos humanos, que se inclinaban por la formación de una comisión bicameral con amplias facultades para investigar los crímenes cometidos por los represores.

Guiado por esa estrategia, el 12 de diciembre de 1983, Alfonsín –ya presidente– envió al Congreso un proyecto de ley para derogar la autoamnistía que el dictador Bignone había impuesto (mediante la Ley N° 22.924 del PRN) en marzo de ese año y que declaraba la caducidad de toda acción penal motivada por delitos generados desde el Estado y las FF. AA. vinculados con la lucha “librada contra la subversión”. El 22 de diciembre la anulación de la autoamnistía se convirtió en ley. Se trató de un hecho ejemplar en tanto impugnaba las leyes dictadas durante los regímenes de facto y no reconocía continuidad entre el gobierno militar y el gobierno democrático.

Asimismo firmó dos decretos que ordenaban el enjuiciamiento de las juntas militares y otros represores paradigmáticos (el general Camps y el contraalmirante Chamorro, por citar a dos de ellos) y de los dirigentes máximos de las organizaciones guerrilleras por la responsabilidad que les cupo, se argumentaba, en la violencia que asoló al país en el período anterior. Finalmente, y antes de que concluyera el año, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento otro proyecto de ley de vital importancia para concretar los juicios. Se trataba de una reforma del Código de Justicia Militar. Dicho proyecto, además de consagrar la obediencia debida, definía como delitos militares solo a aquellos que no estaban tipificados en el Código Penal, mantenía el juzgamiento de los delitos “no militares” cometidos con anterioridad a la reforma propuesta (como los vinculados a la represión ilegal) a cargo del Consejo Supremo de las FF. AA. mas establecía la apelación de sus sentencias ante la Cámara Federal (un fuero de la justicia civil). Si bien el proyecto sufrió modificaciones en ambas cámaras legislativas, su disposición más importante –la posibilidad de que los militares fueran juzgados por la Justicia civil– quedó establecida en la norma sancionada.



2 de abril de 1985 comienza el Juicio a las Juntas Militares.

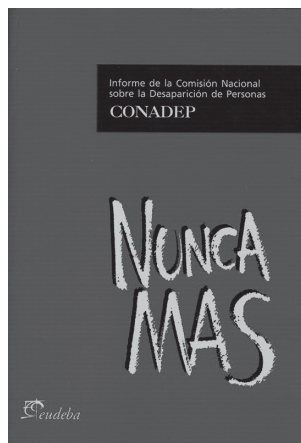
La CONADEP y el juicio a los militares

Paralelamente a todas estas medidas tendientes a llevar adelante los juicios, el presidente ordenó la creación de la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas (CONADEP), una entidad dependiente del Ministerio del Interior e integrada por personalidades destacadas del ámbito político, religioso y de la cultura y la ciencia argentinas, cuya misión fue la recopilación de información sobre el destino de los desaparecidos. La CONADEP trabajó arduamente durante nueve meses para finalmente dar a conocer, en septiembre de 1984, su documento final cuyo título *Nunca más* habría de convertirse en símbolo y consigna de lo que no se podía volver a permitir en la Argentina. Ese duro y conmovedor informe se convirtió, además, en un elemento fundamental de prueba en los juicios venideros.

Los fiscales que participaron del juicio a los militares fueron Julio César Strassera y Luis Gabriel Moreno Ocampo. La sentencia indicaba condena perpetua para Jorge Rafael Videla y para Eduardo Massera, y 17 años de prisión para Roberto Viola.

Tras el fallo de diciembre de 1985, la Justicia continuó enjuiciando a oficiales de menor graduación, mayoritariamente miembros del Ejército. Esta situación provocó una fuerte reacción de la corporación militar, que entendía que estos uniformados citados no eran responsables de los delitos que se les achacaban, sino ejecutores de lo imputado ya que actuaron bajo la obediencia debida. Las causas aumentaban y el malestar castrense también. Ante esta situación, el Poder Ejecutivo decidió enviar un proyecto de ley que fijaba un límite de 60 días (a partir de la sanción de la norma) para la presentación de nuevas causas judiciales y establecía la caducidad de aquellas en las que en ese mismo lapso no se hubieran registrado avances. Sancionada el

23 de diciembre de 1986, la Ley de Punto Final no resolvió el problema que pretendía atacar, ya que la presentación de causas se incrementó notablemente y lesionó de consideración la confianza en el gobierno radical.



Tapa del libro *Nunca Más*

La primavera de la democracia: renovación cultural y “destape”

En medio de la movilización en torno de la cuestión de los derechos humanos y aún sin llegar a la profunda crisis económica que sobrevendría después, durante los primeros años del gobierno alfonsinista el campo de la cultura experimentó una etapa de renovación y apertura. Los medios de comunicación hacían uso de la libertad de expresión y renovaban sus programaciones, sus líneas editoriales, su música y sus imágenes. Las universidades poco a poco normalizaban su vida política e institucional y el campo científico comenzaba también a reactivarse con la vuelta de científicos e investigadores.

La música popular también vivió una etapa de renovación y efervescencia. En 1984 se creó la radio Rock & Pop, por ejemplo. Por otra parte, la Municipalidad de Buenos Aires organizó una serie de recitales gratuitos que convocaron a miles de jóvenes. Y nuevas bandas como Sumo o Los Redonditos de Ricota comenzaron a imponer un nuevo estilo tanto en el tipo de música como en su estética, sus recitales y los modos de comercializar sus discos.

Por otro parte, en 1986 la película *La Historia Oficial* ganó el Oscar a la mejor película en habla no inglesa. El film narra la historia de una mujer que, a raíz del contacto con una amiga que vuelve del exilio, descubre que su hija adoptiva en verdad había sido robada a detenidos-desaparecidos con la complicidad de su marido.

|| Pese a las resistencias de la Iglesia, en 1987 se aprobó en el Congreso la Ley de Divorcio Vincular y la Patria Potestad Compartida.

Semana Santa y los levantamientos carapintadas

No obstante ese clima de renovación cultural, la situación política se volvía más compleja y se agravó en la Semana Santa de 1987, cuando un grupo de oficiales liderados por el teniente coronel Aldo Rico se amotinó en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo para exigir, fundamentalmente, el cese de los juicios. La sociedad se movilizó rápidamente en defensa del orden democrático. En varias ciudades del país la ciudadanía se reunió en las plazas y mantuvo un estado de vigilia los cuatro días que duro el conflicto. Este se resolvió cuando Alfonsín se entrevistó con los rebeldes “carapintadas”, llamados así porque tenían sus rostros pintados a la manera de un típico camuflaje militar.

|| Durante varios días se mantuvo la tensión y la incertidumbre sobre cuál sería el resultado de la negociación entre el gobierno y los militares. Finalmente Alfonsín volvió a la Plaza de Mayo y ante una multitud que lo esperaba declaró que la democracia estaba asegurada. Sus palabras pasarían a ser símbolo de las contradicciones que se vivían en ese momento: “La casa está en orden. Felices Pascuas” dijo.

Pero el orden al que hacía alusión Alfonsín no era otro que la decisión de promover algo que en verdad ya estaba en sus planes: la futura Ley de Obediencia Debida, la cual excluía de las responsabilidades a los militares de rango inferior a coronel. Si bien en lo inmediato la rebelión fue controlada, el resultado fue el fin de la ilusión de que la democracia lograría encuadrar a los militares; por otra parte, también significó el fracaso del gobierno por conducir y resolver las tensiones vigentes que seguían enfrentando a las FF. AA. con la sociedad. Finalmente, en mayo de 1987, el Congreso sancionó la Ley de Obediencia Debida por la cual los militares de menor graduación que hubiera cometido delitos durante la dictadura serían exculpados en virtud de haberse limitado a obedecer las órdenes emanadas de sus superiores.

Los conflictos con la corporación militar reaparecieron en 1988, en un contexto de máxima debilidad del gobierno radical. Con demandas que exigían ahora el indulto de los condenados y la reivindicación del “combate a la subversión”, además de reclamos salariales, estos nuevos episodios de sublevación militar demostraban las dificultades del gobierno democrático de someter a las FF. AA. a las reglas del estado de derecho. El primero de ellos, acontecido en enero de 1988, lo protagonizó, una vez más, Aldo Rico,

quien luego de huir de prisión se sublevó en una guarnición militar de Monte Caseros, provincia de Corrientes. El segundo, a fines de ese mismo año, lo encabezó el coronel Seineldín, quien se declaró en rebeldía en los cuarteles bonaerenses de Villa Martelli.



Alfonsín y los carapintadas.

La reforma sindical que no fue

La democratización de la actividad sindical fue otro de los temas que concitó la atención del gobierno de Alfonsín. La misma celeridad observada en la cuestión militar se repitió en las cuestiones vinculadas con el ámbito sindical. El 17 de diciembre de 1983 el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley de reordenamiento sindical que en parte recuperaba varios puntos de la reforma gremial que había intentado concretar, décadas atrás, otro presidente radical, el doctor Arturo H. Illia. La propuesta incluía el voto secreto, directo y obligatorio de los afiliados, la introducción de un sistema de lista incompleta que permitiese la representación de las minorías, límites a la reelección y la fiscalización de los comicios por el Estado.

En marzo de 1984, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto; sin embargo en el Senado fue rechazado por un único voto. A pesar de lo ajustado de la votación, el presidente no insistió en su intento de reforma y dispuso la negociación con las dirigencias sindicales peronistas las que, a partir de este fracaso del radicalismo, recuperaron la iniciativa política y ganaron en fortaleza a la hora de entablar el diálogo con el gobierno. El proceso de normalización de los sindicatos se realizó sin la pretendida reforma y, para mediados de 1985, quedaron confirmadas en la mayoría de los casos las viejas conducciones sindicales peronistas.

La conducción de la CGT, entre 1984 y 1988, quedó bajo la responsabilidad de Saúl Ubaldini, dirigente del modesto gremio de los cerveceros. Aun cuando la CGT supo participar de las instancias de concertación propiciadas por el Poder Ejecutivo, no dudó en apelar a la dura medida del paro general. Así durante la gestión radical se llevaron adelante 13 medidas de esas características.

A pesar de sus intentos por debilitar a la CGT, alentando al Grupo de los 15, que reunía a importantes gremios distanciados de Ubaldini o designando, luego, al dirigente sindical Carlos Alderete (Luz y Fuerza) como ministro de Trabajo, el presidente Alfonsín nunca alcanzó sus objetivos en materia sindical.



Saúl Ubaldini.

El ciclo de la crisis económica: El Plan Austral

Aunque en una primera etapa los problemas económicos no fueron considerados en toda su dimensión, el gobierno radical debió hacerles un lugar en su apretada agenda política. La inflación desatada a mediados de 1984 la consecuente profundización de las maniobras especulativas practicadas por un amplio espectro de la sociedad argentina, la deuda externa—que aumentó exponencialmente durante la última dictadura militar— y el déficit fiscal fueron las manifestaciones más categóricas de una crisis que ameritaba una mayor atención presidencial.

Durante 1984, el ministro de Economía, Bernardo Grinspun, aplicó una serie de medidas destinadas a reactivar el mercado interno. Aumentos salariales, créditos a los empresarios, control estatal sobre el mercado de cambios y los precios fueron alguna de las acciones aplicadas para alcanzar tal fin. Sin embargo, distintos sectores

del empresariado y los sindicatos rechazaron tales propuestas. Los primeros exigían el fin del intervencionismo estatal y bregaban por el accionar del mercado; los segundos sustentaron su negativa en razones de políticas y no económicas.

A comienzos de 1985, en un contexto signado por una inflación difícil de controlar y las agobiantes presiones del organismo de crédito internacional, Alfonsín designó un nuevo responsable en la cartera de Economía: Juan Sourrouille. En mayo de ese año, el nuevo ministro dio a conocer su programa económico conocido como el Plan Austral. El primer objetivo era frenar la inflación para luego llevar adelante una serie de cambios importantes en la economía argentina que habrían de garantizar su crecimiento y desarrollo. Las primeras medidas fueron el congelamiento de precios, salarios y tarifas de servicios públicos, el establecimiento del control de cambios y de la tasa de interés, la supresión de la emisión monetaria (con el fin de combatir el déficit fiscal) y la indexación. Por último, estableció el cambio del peso por una nueva moneda: el austral.

Durante los primeros meses, las señales de la economía daban cuenta de la eficacia del Plan Austral: la inflación retrocedía y los gastos del Estado se habían reducido sin provocar un impacto adverso sobre la población. En noviembre de 1985, se celebraron elecciones en las que el radicalismo obtuvo un claro triunfo, la población parecía expresar su aprobación a la nueva política económica. A partir de entonces se introducía un cambio importante: las cuestiones económicas se convirtieron en el eje fundamental para calificar la situación del gobierno.

Los auspiciosos datos, sin embargo, se diluyeron al año siguiente al asomar nuevamente la inflación en la vida económica argentina. Circunstancias externas como la caída de los precios mundiales de granos (que afectaban directamente la importantísima exportación argentina, generadora de divisas) e internas, como la negativa de empresarios y trabajadores a mantener sus compromisos (la aceptación del congelamiento de salarios y precios) hicieron que aquella volviera a desatar sus vendavales. Así, el Plan Austral demostraba sus límites.



Billete de un austral, la nueva moneda.

El Plan Primavera

El fracaso del Plan Austral y sus reajustes llevó al gobierno a modificar su estrategia. Para 1987, el objetivo estaba centrado en obtener el beneplácito de los organismos de crédito internacional y conciliar las necesidades de ajuste fiscal con los intereses de los grandes empresarios. En agosto de 1988, finalmente se anunció el Plan Primavera: por un lado, se congelaron precios, salarios y tarifas; por otro lado, se declaró abiertamente la intención de reducir el déficit fiscal, a través de una profunda reforma, de la privatización de algunas empresas estatales y de la cancelación de algunos mecanismos de regulación. Estas medidas buscaban reactivar la inversión extranjera (sobre todo en el área petrolera) y recuperar el apoyo de los organismos internacionales de crédito. Alfonsín abandonaba la heterodoxia económica para ensayar medidas más cercanas a la ortodoxia liberal y que, por cierto, eran las exigidas por el FMI.

1987 y después

El año 1987 marcó un antes y un después en la presidencia de Alfonsín. Los acontecimientos de Semana Santa y la posterior sanción de la Ley de Obediencia Debida, el fracaso del Plan Austral y el fortalecimiento del liderazgo sindical de Ubaldo y su éxito en combatir las medidas económicas lanzadas por el gobierno (así como la CGT repudió al Austral, también lo haría con el Plan Primavera) daban cuenta del profundo deterioro de la gestión alfonsinista que a partir de ese año comenzaría a transitar un desgaste angustioso.

A comienzos de 1989, la situación era realmente delicada. No pudo empezar peor. El 23 de enero medio centenar de hombres y mujeres del Movimiento Todos por La Patria, liderado por el exdirigente del PRT-ERP Enrique Gorriarán Merlo, coparon el Regimiento de La Tablada argumentando que ese lugar sería el epicentro de un futuro golpe de Estado. Por otro lado, la economía se hallaba en estado crítico. Las dificultades acumuladas durante la gestión radical hicieron eclosión y de la peor manera: incremento monstruoso de la deuda externa, hiperinflación, sueldos depreciados y violencia social.

Ante este panorama y sin margen de acción, el presidente Alfonsín se vio obligado a adelantar las elecciones. El 14 de mayo de 1989 salió triunfador el candidato del Partido Justicialista, Carlos Saúl Menem, gobernador de la provincia de La Rioja. El nuevo gobierno entraría en funciones el 8 de julio de 1989, cinco meses antes de lo previsto.

II- EL NEOLIBERALISMO AL PODER: EL GOBIERNO DE MENEM, 1989-1999

Carlos Menem gobernó la Argentina durante dos ejercicios presidenciales consecutivos: 1989-1995 y 1995-1999. Pudo hacerlo porque en 1994 logró el consenso necesario para llevar adelante la reforma de la Constitución que introdujo, entre otras disposiciones, la posibilidad de una reelección presidencial. Bajo su gobierno se produjo una fuerte transformación de la sociedad y de la economía argentinas, consecuencia de la implementación de decisivas reformas inspiradas en la propuesta neoliberal tan en boga por aquellos años y a la que adherían los organismos de créditos internacionales. Este modelo de reforma, por otra parte, habría de completar el proyecto que trece años atrás comenzara a desarrollar la última dictadura militar y sus aliados civiles.

Al momento de asumir, en su mensaje ante la Asamblea Legislativa, Menem declaró: “desde el Estado Nacional vamos a dar el ejemplo a través de una cirugía mayor que va a extirpar males que son ancestrales e intolerables”.

En este apartado dedicado a los gobiernos menemistas se focalizará en los modos en que se llevó adelante ese agudo proceso de transformación y sus consecuencias sobre la sociedad argentina.



Traspaso de mando de Raúl Alfonsín a Carlos Saúl Menem.

La “gran transformación” se pone en marcha

Menem asumió la presidencia en medio de una espectacular crisis económica y social. Para superarla, el flamante gobernante aplicaría una reforma sustentada en los preceptos neoliberales que incluía entre sus principales objetivos suspender la tutela y participación del Estado en la economía nacional y lograr que esta última

se abriera sin mayores reservas a los requerimientos de los mercados externos. Esta radical propuesta habría de implementarse exitosamente a pesar de la dureza de las medidas tomadas para su concreción. Los especialistas en el período sostienen que la aceptación de la ciudadanía argentina a dicha propuesta se explica por la agudeza de la crisis y el profundo estado de conmoción social existente.

La Ley de Emergencia Económica y la Ley de Reforma del Estado

A poco de asumir, Menem logró la aprobación de dos importantes leyes que habrían de inaugurar el desarrollo de su política de gobierno. La primera de ellas fue la Ley de Emergencia Económica, que anulaba los subsidios y regímenes de promoción económica sostenidos hasta entonces por el aparato estatal y autorizaba el despido de empleados públicos. La segunda, la Ley de Reforma del Estado, que permitió la privatización de las empresas estatales y le dio carta blanca al Poder Ejecutivo para decidir el modo de llevarlas a cabo. Para asegurarse la viabilidad de su proyecto y con el fin de evitar cualquier fallo adverso en causas judiciales relacionadas con las reformas que pretendía llevar a cabo, el presidente obtuvo del Congreso otro respaldo más: la ampliación de la Corte Suprema de Justicia; esto le permitió contar con una mayoría automática que, desde su puesta en funciones, siempre actuó en favor del gobierno. Estas primeras medidas lograron, además, cierto beneplácito en las instituciones internacionales de crédito, acreedoras, a su vez, de la Argentina.

Las primeras privatizaciones

Las primeras empresas privatizadas fueron ENTel (teléfonos) y Aerolíneas Argentinas. Luego se sumarían a la lista los canales de televisión, la red vial y buena parte de los ferrocarriles. Las nuevas empresas privatizadas pudieron aumentar sustancialmente el precio de sus tarifas, gozaron de las mieles del monopolio y de los escasos controles por parte del Estado. Además el negocio de las privatizaciones permitió que los acreedores externos compraran activos de las empresas con títulos de deuda argentinas, los cuales fueron tomados a su valor nominal y no a los depreciados precios que fijaba el mercado.

La privatización de los servicios ponía en cuestión el rol tradicional que se suponía tenía el Estado. Muchas de las empresas que Menem decidía privatizar habían sido nacionalizadas por Perón y otras habían sido directamente creadas por el propio Estado.

El déficit fiscal fue otro de los flancos que el gobierno debió atender. Si bien en breve las privatizaciones habrían de engrosar las arcas del Estado, no dudó en aumentar la recaudación a través de la suba del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto al Valor Agregado (IVA), una tributación que grava al consumo y favorece un sistema impositivo regresivo. A fines de 1989 y ante un nuevo episodio hiperinflacionario, el entonces ministro de Economía Erman González lanzó el Plan Bonex: el Estado tomó todos los depósitos a plazo fijo y los cambió por bonos de largo plazo en dólares. Quedaba claro que el gobierno estaba dispuesto a aplicar las medidas más drásticas en pos de sus objetivos.

Cavallo, ministro de Economía: la profundización del modelo neoliberal

El proceso de transformación se ahondaría de la mano de Domingo F. Cavallo, quien se hizo cargo de la cartera de Economía a principios de 1991. Fue él quien ideó el plan de convertibilidad, piedra angular de la economía argentina durante más de una década. El ministro logró que la paridad cambiaria fija —a partir de entonces un dólar valdría un peso— se convirtiera en ley. Por esa misma norma, además, el Poder Ejecutivo quedó impedido de modificar dicha paridad y de emitir moneda por encima de las reservas. Cavallo también dispuso una reducción drástica y general de los aranceles aduaneros. Así, la dependencia del país a los vaivenes de los mercados internacionales se volvió en un dato más de la realidad argentina. Estas medidas colmaron de satisfacción a los acreedores externos para quienes la Argentina volvió a ser un país confiable. Gracias a ellas, Argentina ingresó al Plan Brady, que le permitió reestructurar su deuda externa y recibir más créditos.

Si bien el ingreso de masa de dólares disimuló los costos del ajuste, es importante señalar que los capitales que arribaron al país lejos de dedicarse a la inversión en el sector productivo se volcaron a la búsqueda del alto rendimiento financiero. Se trataba de capitales que dependían de fondos de inversión que, día a día, recorrían los sistemas financieros del mundo buscando el mayor rendimiento sin interesarse en absoluto por ninguna política de largo plazo.

Cavallo ahondó la reforma del Estado: se privatizaron las empresas de electricidad, gas y agua. También la empresa petrolera YPF (aunque el Estado conservó una importante cantidad de acciones que luego serían vendidas). El brazo privatizador alcanzó también al sistema previsional, se permitió que los trabajadores contaran con cuentas de ahorro personales gestionadas por Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones y avanzó sobre las desregulaciones de las obras sociales.

Fijó nuevas reglas del juego entre la Nación y las provincias, a través de un Pacto Fiscal que redujo de manera considerable los ingresos provinciales.



Domingo Cavallo.

Los costos del ajuste

Por debajo de ciertos indicadores positivos como la caída drástica de la inflación, el superávit fiscal (debido en buena parte por las ventas de las empresas del Estado), el crecimiento del PBI, cierto incremento del consumo (gracias a la expansión del crédito en cuotas dolarizadas) se desarrollaban los efectos más duros del ajuste neoliberal. En principio, bien disimulados en las “virtudes de la convertibilidad” que por cierto no eran usufructuadas por toda la población, los costos sociales se harían visibles a pesar de todo.

Sin lugar a dudas su consecuencia más nociva fue el desempleo y consecuentemente la pobreza y la indigencia. La desocupación se vio incrementada por los despidos que acompañaron a las privatizaciones. Luego deben considerarse las medidas de racionalización de los procesos productivos que las grandes empresas aplicaron para volverse más competitivas en un contexto de apertura económica y convertibilidad. Otro efecto pernicioso fue la quiebra de muchas pequeñas y medianas empresas industriales que no contaron con las herramientas necesarias para enfrentar la ola de productos importados que inundaron el mercado local gracias a la inexistencia de aranceles aduaneros protectores de las mercaderías nacionales.

Por otra parte, áreas tan sensibles para el desarrollo social como la educación y la salud públicas se vieron duramente afectadas por el ajuste fiscal y la descentralización política que hizo que escuelas y hospitales de la órbita nacional pasaran a la administración de las provincias que no contaban, muchas de ellas, con los recursos necesarios para solventarlos. Los sectores que lograron conservar sus trabajos se vieron perjudicados por el congelamiento de salarios (empleados estatales y docentes por citar ejemplos paradigmáticos; también los jubilados y pensionados) y el encarecimiento de los servicios públicos en general. Pocos fueron los esfuerzos del gobierno de Menem en atender los dolorosos costos sociales de su modelo económico e igual de imprudente se mostró a la hora de, luego de destruir la vieja economía, diseñar una nueva estructura que permitiese un genuino desarrollo económico.

Las razones de su éxito

¿Cómo fue posible tan aguda transformación en la Argentina? ¿Hubo sectores que se opusieron a ella? Durante su primera presidencia, período donde se tomaron las medidas más importantes, Menem actuó casi sin objeciones. No se escucharon voces opositoras; estas se harían oír durante su segundo mandato y estarían a cargo, en su mayoría, de actores sociales que no provenían de los habituales canales de mediación política como los sindicatos y los partidos tradicionales. En primer lugar, las medidas más potentes fueron leyes aprobadas por el Congreso Nacional. Esas mismas leyes, por otra parte, le brindaron al presidente variadas atribuciones que éste supo utilizar con destacado y desprejuiciado talento. De igual manera aplicó vetos y emitió Decretos de Necesidad y Urgencia, contando con que en toda situación discutida judicialmente contaría con una Corte Suprema que fallaría a favor del Poder Ejecutivo. Asimismo eliminó o debilitó varios mecanismos de control.

En su inmensa mayoría, las conducciones sindicales, otrora furibundas opositoras a las distintas iniciativas económicas de Alfonsín, aceptaron sin demasiadas críticas la reforma neoliberal menemista. Por un lado, en tanto la corrupción fue una parte importante del modelo, los favores personales se multiplicaron; por otro lado, muchos participaron también del negocio de las privatizaciones, obtuvieron acciones y terminaron convirtiéndose en empresarios.

Menem logró además los decisivos apoyos de los militares, la Iglesia y de los Estados Unidos. Las FF. AA., a pesar de que vieron recortado fuertemente

su presupuesto (a ellas también las alcanzó el ajuste) y se suprimió el Servicio Militar Obligatorio, aceptaron la política de reconciliación propuesta por el presidente, cuya medida más determinante fue el indulto, decretado en diciembre de 1990, a los excomandantes condenados durante el gobierno anterior. Menem supo ratificar su liderazgo sobre los uniformados cuando logró aplastar un nuevo levantamiento del coronel Seineldín acontecido a fines de 1990. En ese caso, las fuerzas militares actuaron rápidamente respondiendo en todo a las órdenes emanadas de la autoridad presidencial.

El 3 de marzo de 1994, Omar Carrasco, un joven de 18 años, desapareció de la guarnición de Zapala, en donde había sido reclutado para realizar el Servicio Militar Obligatorio. Las autoridades militares decían no tener respuesta sobre el paradero del joven y lo declararon desertor. Sus padres y toda la comunidad neuquina comenzaron entonces a presionar por la aparición del muchacho. Tiempo después su cuerpo fue encontrado sin vida en el fondo del cuartel, con marcas de haber sido golpeado y maltratado. Aún con retraso y sin llegar a fondo con la investigación, se inició juicio a los algunos de los responsables de la muerte del soldado. El caso Carrasco dejó consecuencias importantes: denunció la arbitrariedad de los tratos que recibían los conscriptos y la complicidad de las autoridades y terminó de impulsar la decisión de suprimir la obligatoriedad del servicio militar, lo cual ocurrió finalmente en agosto de 1994.

El respaldo de la Iglesia se cimentó a partir de la defensa que Menem hizo de las posturas más tradicionales del Vaticano. Así fue portavoz de la condena del aborto y en 1998 decretó al 25 de marzo (en honor a la Fiesta de la Anunciación que celebra el credo católico) como Día del Niño por Nacer.

Finalmente, la propuesta neoliberal de Menem contó con el decisivo respaldo de los Estados Unidos. El presidente argentino supo construir muy buenos vínculos con las administraciones de George Bush, primero, y Bill Clinton, después. Varios hechos contribuyeron a establecer tan amables relaciones con el país norteamericano –definidas como “carnales” por el canciller argentino Guido Di Tella– tales como el abandono de la Argentina del Movimiento de Países No Alineados, la interrupción del Proyecto Cóndor de construcción de misiles, el respaldo a la política internacional de los Estados Unidos incluida la desarrollada en Medio Oriente.

Los atentados terroristas

Este acercamiento con los Estados Unidos sin duda favoreció el entendimiento de la Argentina con los acreedores mundiales, cuyo respaldo resultaba decisivo para la viabilidad del modelo. No obstante, ese alineamiento también provocó que la Argentina sufriera dos atentados terroristas: el 17 de marzo de 1992 una explosión destruyó la embajada de Israel con un saldo de 29 muertos y 242 heridos. La poca reacción del gobierno y la Justicia ante el atentado no hicieron más que habilitar la posibilidad de un nuevo atentado: el 18 de julio de 1994, otro coche bomba destruyó la sede la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), y dejó 85 muertos y 300 heridos.



Atentado a la embajada de Israel.



Atentado a la AMIA.

La reforma constitucional

En noviembre de 1993, Alfonsín y Menem acordaron, en una reunión a solas, la reforma de la Constitución: en tanto dirigentes de las principales fuerzas políticas, ambos se comprometían a que sus bloques y sus partidos impulsaran ciertas modificaciones de la Carta Magna entre las cuales figuraba la reelección del presidente, la reducción del período presidencial a cuatro años, el voto directo con sistema de doble vuelta, la creación de la figura de jefe de Gabinete y del Consejo de la Magistratura. También, en el futuro texto se incorporaría la autonomía de la ciudad de Buenos Aires y la elección de su jefe de Gobierno por parte de los ciudadanos porteños (hasta ese momento, el intendente de Buenos Aires era designado por el Poder Ejecutivo Nacional).

Entre junio y agosto, los constituyentes, reunidos en la ciudad de Paraná y en Santa Fe, discutieron los artículos a reformar. La nueva Constitución fue jurada en agosto de 1994 en Concepción del Uruguay.



Jura de la nueva Carta Magna.

La segunda presidencia de Menem: del cenit al ocaso

La reforma constitucional permitió la reelección de Menem. En los comicios de 1995, la fórmula Menem-Carlos Ruckauf se impuso con 50% de los votos. Este respaldo tan contundente, sin embargo, comenzó a desvanecerse rápidamente. En efecto, durante la primera presidencia la sociedad parecía no expresar discrepancias frente a las reformas impulsadas: la agudeza de la crisis de 1989 y la dureza del golpe que supuso la transformación pareció dejarla enmudecida. Y las primeras mieles de la convertibilidad –la ilusión de “un peso, un dólar”– pareció adormecerla. Sin embargo, a poco de asumir Menem el segundo mandato, y pese a haber ganado en forma contundente, comenzó a enfrentar críticas, cuestionamientos y una creciente movilización social en contra de sus políticas.

Los indicadores económicos dejaron de ser alentadores. A comienzos de 1996, la deuda externa había alcanzado los 100 mil millones de dólares (40 mil millones más que en 1992) y la desocupación trepó al 15%. Por otra parte las condiciones internacionales tampoco favorecían a la economía argentina. Debido a su alto grado de dependencia, las distintas crisis económicas acontecidas en países como México, Tailandia, Corea o Brasil afectaron negativamente a la economía del país: menos capitales externos, aumento de la tasa de interés, reducción de los ingresos fiscales, recesión económica. Ante ello, el gobierno respondió con más ajuste.

A mediados de 1996, Cavallo se retiró de manera escandalosa del gobierno y fue reemplazado por Roque Fernández. Este no se alejó un ápice de los lineamientos neoliberales. No dudó en apelar al aumento de precios de los combustibles y del IVA, que a partir de entonces se elevó al 21%.

Determinó el despido de empleados públicos, llevó adelante nuevas privatizaciones, como el correo y los aeropuertos, y la venta de las acciones de YPF que todavía estaban en manos del Estado.

En 1995 se sancionó una nueva Ley de Educación Superior (LES) que establecía un nuevo tipo de relación entre el Estado y las instituciones superiores: sin dejar de financiarlas, habilitaba una serie de mecanismos para evaluarlas en función de sus resultados. Las opiniones sobre la LES y sus resultados siguen siendo tema de controversia: para algunos, esta Ley ha significado una clara violación a la autonomía universitaria; para otros, ha permitido mejorar el nivel universitario a partir de la implementación de mecanismos de evaluación y acreditación.

Al calor del ajuste, aumentaba la deuda externa y el desempleo. En ese contexto extremo, comenzaron a manifestarse oposiciones sociales más decididas. Manifesta-

ciones violentas tuvieron como protagonistas a empleados públicos de las provincias que cobraban sus salarios en bonos, a trabajadores afectados por el cierre de los ingenios de Tucumán o de las empresas electrónicas de Tierra del Fuego. Los maestros llevaron adelante una huelga de hambre rotativa en demanda de un aumento de los fondos para la educación. A principios de 1997 colocaron “La carpa blanca” en frente del Congreso Nacional donde ayunaron durante más de dos años. La carpa blanca fue uno de los símbolos más elocuentes de los efectos más terribles del achicamiento del Estado. Por otro lado, los cortes de ruta y los piquetes, llevados adelante sobre todo por trabajadores desocupados inauguraron también nuevas modalidades para la protesta social.

La protesta social: el surgimiento del movimiento de trabajadores desocupados

En la Argentina a diferencia de otros países latinoamericanos la llamada sociedad salarial tuvo un fuerte desarrollo producto de las políticas mercado internistas y sustitutivas. Las transformaciones de esa sociedad producto de las políticas neoliberales reconfiguraron por completo las bases de la sociedad. Este proceso de reformas implicó el desmantelamiento de la estructura salarial fondista caracterizada por los derechos sociales, la protección social y la estabilidad laboral.

Esta transformación estructural generó la resistencia de distintos sectores entre los cuales cobró suma importancia el movimiento de desocupados. Como señalan numerosos trabajos el movimiento piquetero traza una continuidad con distintas tradiciones organizativas ligadas en muchos casos a vertientes del movimiento obrero.

En este sentido, el movimiento piquetero reconoce dos afluentes fundamentales: por un lado, reenvía a las acciones disruptivas de los piquetes y puebladas del interior, resultado de una nueva experiencia comunitaria vinculada al colapso de las economías regionales y a la privatización acelerada de las empresas del Estado realizada en los 90; por otro lado, remite a la acción territorial y organizativa gestada en el conurbano bonaerense y ligada a las lentas y profundas transformaciones del mundo popular, producto del proceso de desindustrialización iniciado en la década del 70.

En junio de 1996 y abril de 1997 se produjeron dos puebladas en Cutral C6 y Plaza Huincul hechos que marcaron el nacimiento del movimiento. A partir de allí los cortes de ruta comenzaron a reproducirse a lo largo y a lo ancho del país. Es también a partir de 1996 y 1997 cuando se constata la intervención de aquellos actores sociales que constituyen el segundo afluente, y que inscriben su acción en la línea de

continuidad, a saber, dentro de una tradición contestataria más ligada al trabajo en el espacio barrial y la gestión de necesidades básicas.

El movimiento piquetero surge entonces desde dos procesos: por un lado, la vertiente que pone al descubierto la brusca separación de los marcos sociales y laborales que configuraron la vida cotidiana de generaciones y pueblos enteros en el interior del país, y por otro, la vertiente que señala la importancia de la matriz específicamente territorial de la acción colectiva y da cuenta de una distancia mayor en relación con el mundo del trabajo formal.

Este conjunto de organizaciones no constituyeron un movimiento homogéneo, más bien diferían en el diagnóstico de la situación argentina, en la caracterización de los gobiernos de turno y los planes de lucha. Algunos analistas agruparon a las diversas organizaciones en tres líneas: la sindical, la política y la territorial.

La línea sindical se desarrolló en los distritos populosos del conurbano sometidos a un fuerte proceso de desindustrialización y de descolectivización masiva de la clase trabajadora. Los orígenes de los referentes así como de las bases sociales de ambos movimientos son comunes: extrabajadores industriales, desocupados de larga data, mujeres con escasa participación en el mercado laboral formal. La línea política estaba compuesta por aquellas organizaciones ligadas a partidos trotskistas y otros grupos del conurbano bonaerense. Por último la línea territorial ofrecía también varias perspectivas entre las cuales se destacaban el autonomismo y las corrientes guevaristas.

No obstante la heterogeneidad, en las etapas de resistencia fueron configurando una identidad asociada a la adopción de metodologías de acción directa como el piquete y el corte de ruta, la construcción de formas de democracia directa cuestionadoras de las representaciones políticas partidarias, y la demanda frente al Estado de planes sociales y realización de trabajos comunitarios.

A pesar del deterioro de su gestión, Menem, ya sin ningún tipo de iniciativa y sumido el país en una crisis profunda, logró cumplir con su mandato y el 10 de diciembre de 1999 entregó los atributos presidenciales al radical Fernando De la Rúa.

III- CONVERTIBILIDAD, DEBILIDAD POLÍTICA Y ESTALLIDO

SOCIAL: LA PRESIDENCIA DE FERNANDO DE LA RÚA, 1999-2001

El 24 de octubre de 1999 las elecciones presidenciales dieron como ganadora a la fórmula Fernando De la Rúa y Carlos “Chacho” Álvarez de la Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación, un conglomerado de fuerzas políticas formado

en 1997 y que encabezaban la UCR y el Frente País Solidario (Frepasso). El Frepasso se había constituido en 1994 y aglutinaba a fracciones de distintas fuerzas políticas (peronismo, UCR, Partido Intransigente) desencantadas por el accionar de sus respectivos partidos y a militantes del Movimiento de Derechos Humanos, como el caso de Graciela Fernández Meijide. Su prédica opositora a las políticas de Menem fue creciendo poco a poco y en las elecciones presidenciales de 1995, su fórmula presidencial, José Octavio Bordón y Chacho Álvarez, obtuvo el segundo lugar con el 29% de los votos desplazando a la UCR a un lejano tercer puesto.

Pero el gobierno de la Alianza lejos de revertir los lineamientos del modelo implementado en los 90 mantuvo un apego incondicional a la convertibilidad. Durante su primer año de gestión, poco pudo hacer para correrse de los lineamientos neoliberales habida cuenta de su decisión de no modificar la paridad cambiaria. De igual modo, la única alternativa para intentar equilibrar las cuentas fiscales parecía ser bajar el gasto. Así, en mayo de 2000 se dispuso un recorte salarial de entre un 12% y 15% de los salarios públicos nacionales, tomó medidas diversas para reducir el costo de los servicios y se propuso instrumentar un recorte en el llamado gasto político, esto es, el presupuesto de las Cámaras del Congreso, por ejemplo. Pero ninguna medida tuvo éxito: la economía seguía dando tumbos sin encontrar rumbo y la movilización social y la protesta comenzaron a emerger en las calles.

Además de su incapacidad para revertir la recesión económica, el gobierno de la Alianza mostraba otro flanco débil que tendría graves consecuencias en su desenvolvimiento político: a medida que avanzaba el tiempo, se hacían cada vez más evidentes las diferencias entre el sector del radicalismo que respondía al presidente y el Frepasso. Estas diferencias se expusieron de manera contundente en el terreno donde ambas corrientes había mostrado en su inicio puntos de acuerdo: la lucha contra la corrupción. El ya delicado equilibrio entre las fuerzas aliadas estalló con el escándalo de las coimas en el Senado.

Se sospechaba que varios senadores opositores habían recibido dinero a cambio de votar afirmativamente por el proyecto de reforma laboral. El vicepresidente Álvarez pretendió llevar adelante una exhaustiva investigación sobre el asunto, pero De la Rúa desestimó los dichos de su compañero de fórmula y optó por cambiar su gabinete, desplazando a frepassistas y radicales alfonsinistas. El 6 de octubre de 2000, Álvarez renunció a su cargo. Si bien la salida del vicepresidente no fue lamentada por el núcleo presidencial, sí resultó demoledora para la imagen de De la Rúa; la confianza en el presidente ya no se podría recuperar.

Ante la crisis que era tanto económica como política, De la Rúa decidió convocar nuevamente al exministro Cavallo. Si bien Chacho Álvarez ya no estaba en el gobierno, antes de su renuncia la posibilidad de que Cavallo volviera a la cartera de economía era una posibilidad que se discutía seriamente en el gobierno. Álvarez entendía que su incorporación permitiría ampliar el marco de las alianzas políticas posibles (en las últimas elecciones Cavallo había obtenido un porcentaje notable de votos); para De la Rúa, por el contrario, la llegada de Cavallo significaba la posibilidad de sumar el apoyo de los empresarios. A comienzos de 2001, el exministro Cavallo fue designado nuevamente para dirigir la economía del país. Y todas las miradas, tanto de la opinión pública como de la dirigencia política y del propio presidente, se concentraron en los planes que el nuevo ministro pudiera implementar. Claramente la economía le había ganado la política.



Menem y De la Rúa en el traspaso de mando.



Renuncia de Chacho Álvarez.

El regreso de Cavallo

Cavallo se hizo cargo del Ministerio de Economía en marzo de 2001 (ya sin Chacho Álvarez en el gobierno) y De la Rúa pareció delegar en él la capacidad de mando. Si al comienzo de su gestión económica se propuso alcanzar un crecimiento anual del 5%, rebajar los impuestos y reanimar la actividad industrial, en julio –al no contar con el respaldo necesario de los organismos de crédito internacional– abandonó el intento para volver a las viejas recetas de ajuste. Logró que el Congreso aprobase la Ley de Déficit Cero, que posibilitó nuevas rebajas de sueldos y jubilaciones, además de permitir al Estado el pago con bonos de deudas y contratos. El ajuste también se hizo sentir en las administraciones provinciales, ya que la Nación congeló las transferencias a sus arcas. Para paliar la grave situación financiera, los gobiernos provinciales empezaron a emitir sus propios bonos para pagar deudas, salarios y demás gastos. Este paquete de medidas permitió que en noviembre de ese año la Argentina reestructurara su deuda externa a través del Megacanje, un plan que permitió que los pagos a los acreedores externos que debían hacerse entre 2001 y 2005 se postergaran al período 2006-2013 a cambio de un significativo aumento de los intereses.

Diciembre de 2001

La situación era insostenible y la desconfianza generalizada sobre las maniobras del gobierno hizo que comenzara una importante fuga de depósitos bancarios. Los primeros días de diciembre y en medio de un fuerte malestar social (los piquetes y manifestaciones de los grupos de desocupados eran habituales), el ministro Cavallo dispuso un corralito bancario con el fin de frenar la salida de dinero depositada en las entidades bancarias. Por esta disposición, los fondos fueron congelados y sus dueños estaban autorizados a retirar solamente \$250 por semana, se prohibió el envío de dinero al exterior y se obligó realizar la mayoría de las operaciones a través de cheques. Entonces, la rebeldía alcanzó a los sectores medios y a muchos empresarios afectados por la medida. Tras el anuncio se produjeron saqueos a comercios en distintas ciudades del país, y el conurbano bonaerense se convirtió en el epicentro del estallido social. En busca de lograr cierta paz social, el jueves 19 de diciembre de 2001 el presidente decretó el estado de sitio. Lejos de apaciguar los ánimos, dicha medida los encendió: entonces estalló una rebelión popular. Espontáneamente, amplios sectores de la ciudadanía se movilizaron en contra del gobierno. En Buenos Aires, nutridas columnas

de gente se movilizaron a la Plaza de Mayo a manifestar su repudio a la gestión de De la Rúa-Cavallo. El 20 de diciembre de 2001, en medio de una sangrienta represión que causó muertos y heridos, De la Rúa renunció a su cargo.



Diciembre de 2001.

IV- ARGENTINA EN RETAZOS, 2001-2003

En diciembre de 2001, la Argentina estaba sumida en una crisis política sin precedentes y sin avistar una salida a la recesión económica.

En las calles y en todas las movilizaciones que se realizaban la gente no se cansaba de corear su rechazo a los políticos a través del cántico “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”.

Luego de producida la renuncia de De la Rúa y hasta la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia –acontecida el 25 de mayo de 2003– sucesivas asambleas legislativas designaron a cuatro presidentes provisionales, todos ellos peronistas. El primero, siguiendo lo establecido en la Ley de Acefalía, fue Ramón Puerta, presidente provisional del Senado. A los pocos días renunció y fue Adolfo Rodríguez Saá, gobernador de la provincia de San Luis, el designado para ejercer la primera magistratura. Bajo su gestión, el Estado argentino se declaró (unilateralmente) en moratoria en el pago de la deuda externa, aunque

no abandonó la convertibilidad. Sus ambiciones políticas hicieron que los dirigentes peronistas más importantes le quitaran su apoyo y Rodríguez Saá optó por renunciar al cargo. Fue reemplazado por Eduardo Camaño, presidente de la Cámara de Diputados, quien en breve tiempo fue sucedido por Eduardo Duhalde, exvicepresidente de la Nación durante la primera presidencia de Menem y gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1995-1999.

Duhalde derogó la convertibilidad y amplió las disposiciones del corralito. La salida de la paridad cambiaria no resultó sencilla y las presiones internacionales no cedieron. La designación de Roberto Lavagna a cargo del Ministerio de Economía, en abril de 2002, resultó acertada ya que el nuevo ministro logró una importante reactivación de la economía argentina. Los logros en materia económica no fueron acompañados por otros en el terreno de la política, y la protesta social cedió muy poco. El 26 de junio de 2002 Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, dos jóvenes militantes piqueteros, fueron asesinados por la Policía Bonaerense en el marco de la represión contra una movilización que mantenía cortado el Puente Pueyrredón, en la localidad de Avellaneda, un importante acceso a la ciudad de Buenos Aires. Ante la posibilidad que se volviera a repetir una situación similar a la acontecida en diciembre de 2001, Duhalde –quien había aceptado la presidencia hasta fines del 2003– adelantó las elecciones para el 27 de abril de ese año. El 25 de mayo de 2003, Néstor Kirchner, quien obtuvo el 22,2% de los votos, asumió la presidencia.



Asunción Nestor Kirchner.

Selección de fuentes y actividades sugeridas

1-La democracia.

“Nada hay más fácil que establecer libertades y garantía (...) nada hay más difícil que establecer la democracia”.

Rodolfo E. Fogwill, escritor argentino.

Actividades:

-¿Qué discusiones están inscriptas en la frase del mencionado escritor?

-¿Qué valores construyen la democracia?

2-Los derechos humanos.

“Durante la década del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda (...) a los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor al combatido, porque desde el 24 de marzo de 1976 contaron con el poderío y la impunidad del Estado absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a miles de seres humanos”.

“Nuestra Comisión no fue instituida para juzgar, pues para eso están los jueces constitucionales, sino para indagar la suerte de los desaparecidos en el curso de estos años aciagos de la vida nacional. (...) De la enorme documentación recogida por nosotros se infiere que los derechos humanos fueron violados en forma orgánica y estatal por la represión de las Fuerzas Armadas. Y no violados de manera esporádica sino sistemática, de manera siempre la misma, con similares secuestros e idénticos tormentos en toda la extensión del territorio. ¿Cómo no atribuirlo a una metodología de terror planificada por los altos mandos? ¿Cómo podrían haber sido cometido por perversos que actuaban por su sola cuenta bajo un régimen rigurosamente militar, con todos los poderes y medios de información que esto supone? ¿Cómo puede hablarse de excesos individuales? (...)”.

“En el curso de nuestras indagaciones fuimos insultados y amenazados (...) Y nos acusan de no propiciar la reconciliación nacional, de activar los odios y resentimientos, de impedir el olvido. Pero no es así: no estamos movidos por el resentimiento ni por el espíritu de venganza, sólo pedimos verdad y justicia (...). Únicamente así podremos estar seguros de que NUNCA MÁS en nuestra patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado.”

“Prólogo”, *Nunca más*, Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, Buenos Aires, Eudeba, 1984, pp. 7-11.

Actividades:

-Discutir con los alumnos los alcances de la política de derechos humanos del gobierno de Alfonsín. Poner en relación la versión de la teoría de los dos demonios con el prólogo del *Nunca más*.

3-La política económica.

“Las políticas del FMI no son responsables del descontento social en América Latina. Es probable un regreso a las dictaduras como consecuencia de las concesiones populistas y demagógicas que pueden hacer los gobiernos acosados por las crisis sociales y económicas. Nuestras políticas no afectan la soberanía. No son arbitrarias. Buscan el crecimiento con estabilidad y sin inflación”.

Declaraciones de Michel Camdessus, director general del FMI emitidas en febrero de 1992 en ocasión del intento de golpe de Estado contra el presidente de Venezuela Carlos Andrés Pérez.

Citado por Sonntag, H. R. y Maingón, T., *Venezuela 4-F 1992*, Caracas, Nueva Sociedad, 1992, p. 55.

Actividades:

-Discutir hasta qué punto las palabras del director general del FMI se corresponden con los efectos que la política del organismo internacional desplegó en el país entre 1983-2003. ¿Es posible el crecimiento sin inflación?

4-El problema del empleo en los 90.

Ver mapa sobre la ocupación en la Argentina en la década del 90, en la página siguiente.

Actividades:

-¿Qué tipo de información ofrece el mapa? ¿qué conclusiones podrían extraerse?



Mapa sobre la ocupación en la Argentina en la década del 90.

BIBLIOGRAFÍA

- Cavarozzi, Marcelo, *Autoritarismo y democracia, 1955-2006*, Buenos Aires, Ariel, 2006.
- Historia argentina*, T. III, Buenos Aires, Página/12-Colegio Nacional de Buenos Aires, 2000.
- Novaro, Marcos, Argentina en el fin de siglo. *Democracia, mercado y nación (1983-2001)*, Buenos Aires, Paidós, 2009.
- Novaro, Marcos, *Historia de la Argentina, 1955-2010*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2010.
- Romero, Luis Alberto, *Breve historia contemporánea de la Argentina*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001.
- Schuster, Federico, “Las protestas sociales y el estudio de la acción colectiva”, en Schuster y otros (comps.) *Tomar la palabra. Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea*, Buenos Aires, Prometeo, 2005.
- Svampa, Maristella y Sebastián Pereyra, *Entre la ruta y el barrio: la experiencia de las organizaciones piqueteras*, Buenos Aires, Biblos, 2004.
- Suriano, Juan (dir.), *Dictadura y democracia (1976-2001)*, Sudamericana, Buenos Aires, 2005.

CAPÍTULO 7: *La Argentina reciente. Transformaciones políticas, económicas y sociales en el período 2003-2011.*

Luego de los años neoliberales y como consecuencia de ellos, se operó en la sociedad argentina –y latinoamericana– una reconfiguración de fuerzas sociales y políticas que este capítulo intentará poner en escena para marcar algunos posibles ejes de interpretación. El período se inicia con la crisis de 2001 y con la posterior evolución del proceso de recomposición política. Estos hechos marcaron el fin de una etapa de predominio de una forma de concebir el orden económico y político de la sociedad que había generado pobreza, concentración e inequidad y dieron lugar a un nuevo modelo de desarrollo en el cual el mercado interno y la recuperación de la industria han pasado a ocupar un lugar central. A su vez, estas transformaciones locales han ido al compás de la constitución de un bloque de países latinoamericanos que fue ganando en autonomía frente a los Estados Unidos y las grandes corporaciones globales y que ha servido como contrapunto y estímulo para los procesos vividos en la Argentina.

De esta forma, el capítulo concentrará su atención en las cuestiones económicas y políticas de las presidencias de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2011). Durante esos años los principales problemas estuvieron vinculados, en principio, a cómo reconstruir una legitimidad política en un escenario de fragmentación producto de la crisis del modelo neoliberal en 2001. Asimismo, el rol del Estado volvió a ser el centro de los debates en cuanto a la posibilidad de regular los distintos espacios económicos y políticos, cuestión nodal en la regeneración del tejido social fuertemente dañado por las políticas económicas seguidas desde la dictadura. El relato que se presenta, incluye una reflexión, también, sobre la situación regional de América Latina y la revalorización del MERCOSUR.

I- DE LA CRISIS DE 2001 A LA PRESIDENCIA DE KIRCHNER

Tal como se adelantó al final del capítulo anterior, la crisis de 2001 se constituyó, indudablemente, en un punto de inflexión en la historia más reciente de la Argentina. Por un lado, los acontecimientos de fines de 2001 condensaron un período previo de cuestionamiento al sistema político por parte de diversos actores políticos, ya que al menos desde mediados de los años 90 las protestas iban en aumento. Por otro lado, la respuesta represora de carácter brutal (26 muertos en la semana del 19 de diciembre del 2001) dada por el gobierno de De la Rúa a la movilización impactó fuertemente sobre las instituciones y la credibilidad de la clase política lo cual terminó provocando una situación de extrema inestabilidad política e institucional. A partir de ese momento poco a poco el sistema político fue recomponiéndose, siempre dentro del marco institucional: si bien el año 2002 mostró una nueva fase de movilización y radicalización en los modos de protestas e impugnación, ese ciclo fue dando paso a un proceso de recomposición gradual de la autoridad estatal, de “pacificación” del conflicto a partir de la estabilización económica, la asistencia social implementada a través de algunos Planes Sociales –como el Plan Jefas y Jefes– y la solución progresiva del problema que afectaba a los sectores medios en relación a los depósitos bancarios.

Esta recuperación y relegitimación de la política tuvo una condición básica: el Estado, a través de sus instituciones, aseguró la continuidad democrática. La sucesión presidencial de fines de diciembre de 2001 y principios de 2002 se hizo siguiendo lo establecido por la Constitución. El Congreso Nacional, a pesar de haber estado fuertemente cuestionado a fines de 2001 continuó funcionando. Incluso en las sangrientas y difíciles jornadas de diciembre de 2001 y enero de 2002, hubo una apuesta generalizada a que la crisis debía encauzarse a través de las instituciones existentes. Lo central de ese momento fue que ninguno de los sectores implicados en el conflicto apeló o intentó una salida no institucional de la crisis. El “que se vayan todos” –frase que se convirtió en símbolo de la protesta generalizada y la impugnación a toda la clase política– cuestionó al sistema político, pero no anuló el orden institucional.

Por otro lado, fue también en el Estado en donde comenzaron a procesarse las tensiones políticas, en primer lugar las del propio peronismo, actor clave del proceso que se iniciaba. A partir de la asunción de Eduardo Duhalde –senador peronista de la provincia de Buenos Aires, electo por la Asamblea Legislativa–, la conformación del gabinete y las mesas de negociación que se fueron abriendo fueron las llaves con las que el flamante presidente intentó ordenar al peronismo, apelar a las fuerzas de la oposición y crear consensos mínimos para gobernar.

Duhalde asumió en enero de 2002: los problemas de la crisis económica y financiera, la inestabilidad política y la movilización de amplios sectores sociales eran los principales problemas que debía enfrentar. Desde el inicio de su gestión implementó una estrategia diferenciada y selectiva para con las organizaciones de desocupados basada en lo que diversos analistas llamaron “planes y palos”, que consistía, en términos generales, en dar un lugar a la negociación con algunos sectores del arco piquetero y de represión hacia las organizaciones más cuestionadoras.

No obstante las medidas económicas tomadas y las negociaciones iniciadas con la oposición y con algunos movimientos sociales, el gobierno de Duhalde no logró contener la protesta social, la cual terminó en episodios, nuevamente, de violencia. El 26 de junio de 2002, fueron asesinados, a causa de la represión policial, Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, dos jóvenes militantes. Ese día, en la estación Avellaneda –cercana al Puente Pueyrredón– efectivos bonaerenses acribillaron a Darío Santillán mientras asistía a Maximiliano Kosteki, quien había sido herido a pocos metros. Las dos muertes terminaron de desestabilizar al gobierno de Duhalde que debió adelantar el llamado a elecciones presidenciales. En la foto que le sigue se observa la “histórica” tapa del diario *Clarín* y cómo reflejó dicha represión.



Tapa de *Clarín*, dando cuenta de los acontecimientos de Puente Pueyrredón.

El llamado a elecciones presidenciales fue para el 27 de abril de 2003. En esa ocasión se impuso la fórmula Carlos Menem-Juan Carlos Romero con el 24,45 %, mientras que Néstor Kirchner-Daniel Scioli obtuvieron el 22,24 %. Ambas fórmulas del peronismo, pasaron a la segunda ronda al no obtener el 45% de los votos válidos. La segunda vuelta debía celebrarse el 18 de mayo pero al vislumbrar una derrota ante Kirchner, Menem retiró su candidatura con el fin de quitarle legitimidad a su adversario y debilitarlo de cara a la difícil tarea que le esperaba.

II- LA PRESIDENCIA DE KIRCHNER. LA RECUPERACIÓN DEL ROL DEL ESTADO

La característica distintiva de la etapa que se abre en 2003 con la presidencia de Kirchner es la de la recuperación del Estado como actor clave dotado de legitimidad para dialogar y negociar con actores sociales con intereses sectoriales muchas veces enfrentados entre sí. En general, el kirchnerismo aplicó un modelo flexible de intervención en cada uno de los diferentes ámbitos económicos aplicando en cada caso concreto la política que interpretaban como más conveniente.

Así, el Estado Nacional (considerando tanto la presidencia de Kirchner como la de Cristina Fernández) recuperó el control del agua a través de la creación de una nueva empresa Aguas Argentinas, los servicios de correo a través de Correo Argentino, diferentes líneas ferroviarias como el Belgrano Cargas, la línea aérea de bandera, Aerolíneas Argentinas, y la transmisión de los eventos deportivos y culturales de interés general. Además de los fondos de los trabajadores que fueron recuperados vía ANSES.

Las causas de la intervención del Estado en cada uno de estos casos responde a causas y situaciones diversas. La recuperación de los servicios del correo, por ejemplo, presenta algunas particulares: el Estado, luego de que los administradores privados declararan que no contaba con recursos para seguir adelante, se hizo cargo del servicio correspondiente. Lo interesante fue que la administración estatal fue positiva y arrojó un superávit operativo de \$70 millones en el primer año, y \$60 millones en 2005. Esto echaba por tierra uno de los más recurrentes argumentos del neoliberalismo que sostenía la ineficacia estatal y la corrupción intrínseca del mismo.

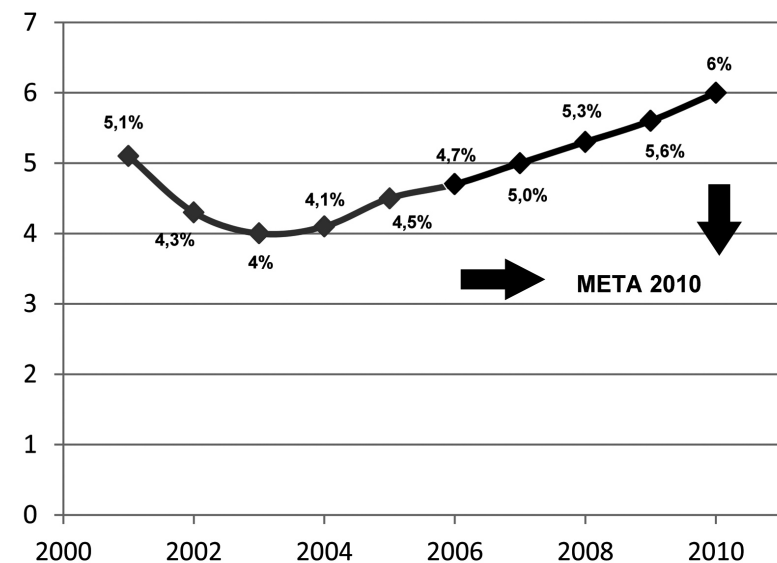
Asimismo, en marzo de 2006, luego de una larga negociación (que incluía la discusión de un aumento de tarifas, inversiones, etc.) entre el Poder Ejecutivo y el grupo francés Suez –concesionario del servicio de Aguas– el contrato fue finalmente rescindido de común acuerdo. El Estado creó entonces una empresa para hacerse cargo del servicio. Otros casos fueron encontrados diversas definiciones en las cuales el Estado recuperaba un rol clave como administrador, accionista o supervisor: el

ferrocarril General San Martín, Yacimientos Carboníferos Fiscales de Río Turbio, el espacio radioeléctrico, Aeropuertos Argentina 2000. En este último, el Estado ha recuperado mayor presencia dentro del grupo accionista y ciertos derechos para apoyar o vetar decisiones de la empresa.

Con estos cambios el Estado recuperó rápidamente un margen de autonomía respecto de las peleas corporativas locales recobrando así legitimidad para hacerse cargo de los conflictos intersectoriales. A su vez, también comenzó a sentar una nueva posición frente a las presiones internacionales. Por ejemplo, a un mes de haber asumido inició una firme negociación con el FMI y comenzó a apostar a una posición latinoamericanista en cuanto a las relaciones internacionales abandonando la alineación incondicional con los Estados Unidos de la década del 90.

La inversión en educación, ciencia y cultural

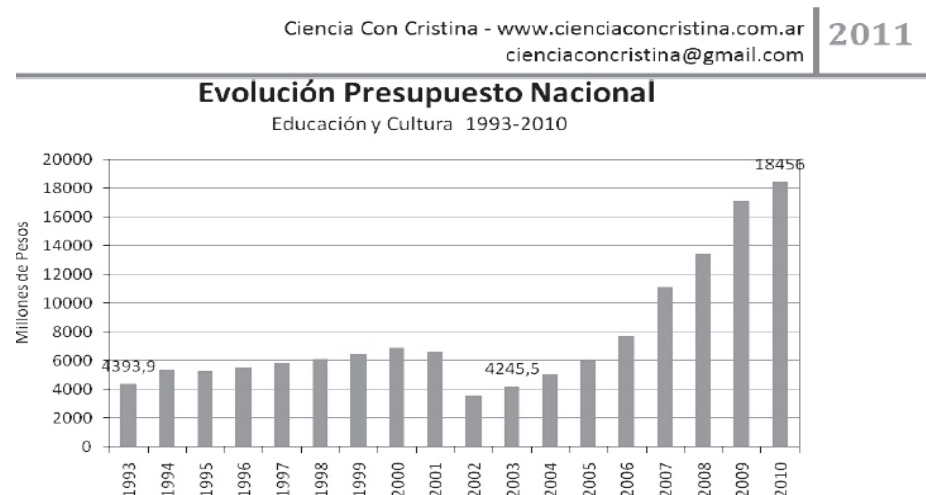
Otro aspecto significativo fue la inversión estatal en materia educativa y en política científica. En el siguiente cuadro puede observarse la evolución del porcentaje del PBI (Producto Bruto Interno) destinado a educación. De la misma forma, las instituciones científicas se vieron fuertemente apuntaladas con la posibilidad de incorporar científicos a las carreras e incluso repatriar a muchos de los que estaban fuera del país.



Fuente: CIPPEC, *Proyecto de Monitoreo de la Ley de Financiamiento Educativo* en base a información suministrada por la Coordinación de Estudios de Costos del Sistema Educativo, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, la Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales, Ministerio de Economía y Producción y el INDEC. Citado en Rivas, Axel (2007).

En materia educativa, una medida clave fue la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo que garantizó un aumento del porcentaje del PBI destinado a la educación: el porcentaje indicado para la educación se llevó al 6% y fue luego tomado como piso básico con la sanción de la Ley de Educación Nacional en 2006. Los contenidos y orientaciones estratégicas de esta nueva ley, además, posicionan a la educación como un bien público, provisto y garantizado por el Estado.

Además, tanto el gobierno de Néstor Kirchner como el de Cristina Fernández comenzaron con una fuerte política de incremento presupuestario para la educación universitaria, llegando a quintuplicar los fondos asignados desde 2003, fecha a partir de la cual se crearon diez nuevas universidades, entre ellas la Universidad Nacional Arturo Jauretche. En el siguiente cuadro se observa la evolución del Presupuesto Nacional reservado a Educación y Cultura. El gráfico marca la evolución del mismo.



Los Derechos Humanos, nuevamente en el centro de la política

La política de Derechos Humanos llevada adelante desde el 2003 también ha significado un cambio trascendente, en relación a lo actuado por los gobiernos democráticos anteriores. Este era un tema que, desde la recuperación democrática en 1983, había movilizó al conjunto de la sociedad civil y a una multiplicidad de organizaciones sociales, políticas y culturales. Como se ha explicado en los capítulos anteriores, durante los primeros años de la democracia, el Estado tuvo actitudes contradictorias al respecto. En primer término, promovió un juicio a los militares que durante la dictadura de 1976

ejercieron la represión; pero poco después, y en medio de diversas presiones castrenses, impulsó otras acciones que contradecían aquellos reclamos de justicia, como las leyes de Punto Final, Obediencia Debida y, finalmente, Indultos a los militares.

El 24 de marzo de 2004 el presidente Kirchner formuló un discurso en cual expresó “Vengo a pedir perdón de parte del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia tantas atrocidades (...) No es rencor ni odio lo que nos guía. Los que hicieron este hecho tenebroso y macabro tienen un solo nombre: son asesinos repudiados por el pueblo argentino”. En ese mismo evento el presidente ordenó retirar, en pleno acto de conmemoración del aniversario del golpe de Estado de 1976, los retratos de los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone de las paredes del Patio de Honor del Colegio Militar de la Nación, en un gesto que marcó un cambio de actitud de parte del Estado en relación a los derechos humanos.

Esto significó una ruptura con las políticas anteriores que, además, colaboró para crear un clima de opinión favorable a la revisión de las llamadas Leyes del Perdón y los indultos. En cuanto a las primeras, finalmente en junio de 2007, la Corte Suprema las declaró inconstitucionales, y habilitó de esta manera la posibilidad de condenar a muchos militares que actuaron durante los años 70; se trata de casos que ya habían sido analizados durante el juicio a las Juntas Militares en los años 80 pero que luego habían sido “perdonados” gracias a las mencionadas leyes.

Esta política de búsqueda de justicia visibilizó además la continuidad en democracia del accionar de los grupos represivos. El 18 de septiembre de 2006 fue secuestrado y desaparecido de su casa en la ciudad de La Plata, Jorge Julio López, un albañil de 77 años que había prestado declaración en el juicio al represor Miguel Etchecolatz, colaborador del entonces jefe de Policía Ramón Camps.

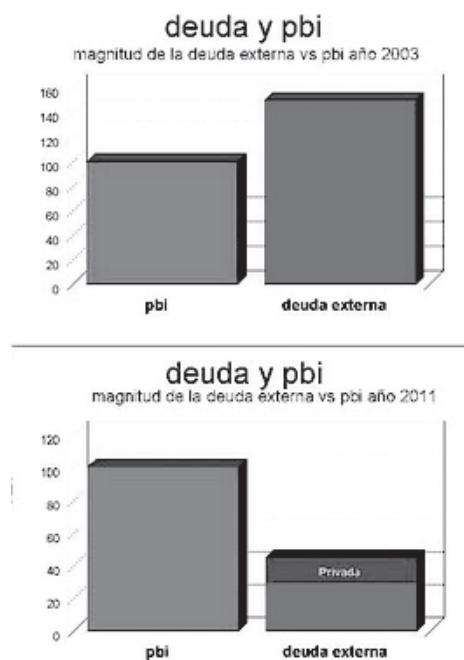


Momento en que el presidente Kirchner ordena descolgar los cuadros de los represores de la dictadura.

El modelo de desarrollo económico

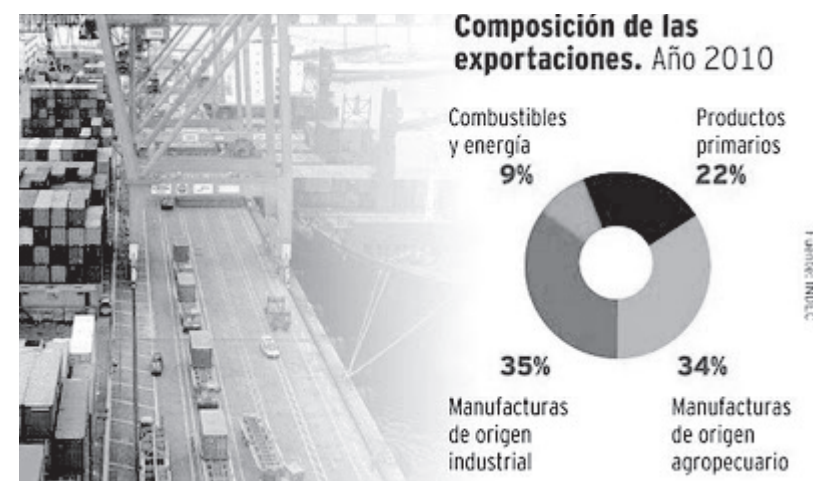
Desde el año 2003 se dieron una serie de transformaciones económicas y sociales de suma importancia a partir de ubicar al Estado como planificador, orientador y garante de los derechos sociales y del fomento de políticas económicas que impulsaron el mercado interno. Uno de los hechos más salientes, indudablemente, es la creación de más de 5 millones de puestos nuevos de trabajo entre 2003 y 2011 lo que trajo aparejado la reducción de los índices de pobreza e indigencia. En el plano laboral es de destacar el lugar que recobraron las negociaciones colectivas como dinámica de discusión salarial. En este plano el sector asalariado incrementó progresivamente en estos años su participación en el producto generado por la economía, que había caído notablemente en el 2002, pasando desde el 34,6% a casi el 44%. Esto quiere decir que los trabajadores aumentaron, en seis años, 10 puntos porcentuales su participación en el producto. Además se produjo en este período un crecimiento económico promedio del 7,8%, un proceso de desendeudamiento que llevó la relación de la deuda con el PBI de 156% al 36,5%. Este crecimiento sostenido sumado a la quita de deuda conseguida por la Argentina, disminuyó en términos relativos el peso de esta, dejando así importantes recursos para volcar en inversión y gasto público.

El siguiente cuadro muestra la relación entre deuda externa y producto bruto interno. Allí se observa el proceso de desendeudamiento operado desde 2003.



La estrategia del nuevo modelo de desarrollo económico se basó en el sostenimiento de un tipo de cambio real competitivo que estimuló las exportaciones y desincentivó las importaciones propiciando la recuperación de la industria y el empleo, revirtiendo el proceso de desindustrialización iniciado con la última dictadura militar y acentuado en los años 90.

El siguiente cuadro muestra la composición de las exportaciones en donde sobresale el peso relativo de las manufacturas de origen industrial. En estos últimos años la industria nacional ha entrado en una fase de crecimiento en donde el sector de minerales no metálicos creció el 156%, el complejo metalmeccánico y la industria textil un 145% cada uno; la industria del calzado un 130% y la industria del *software* tuvo un crecimiento anual promedio del 23,5%.



Composición de las exportaciones, año 2010. Fuente: Indec, citado en *Tres banderas. Una gran Argentina*. Instituto de Estudios y Formación Política GESTAR, 2011.

Las políticas sociales

Otro eje del desarrollo estuvo dado en el sostenimiento y ampliación de políticas sociales con el objetivo de ampliar la cobertura social y el poder adquisitivo de los sectores populares de forma de afianzar el mercado interno. Las políticas en materia de seguridad social, los aumentos de jubilaciones, la Asignación Universal por Hijo –a la que se hará referencia en el apartado sobre el gobierno de Cristina Fernández–, las negociaciones colectivas de salarios, y los subsidios a ciertos

productos y servicios apuntaron a impulsar el consumo interno como motor del desarrollo y recuperación del tejido productivo.

En materia de programas sociales se implementó el Plan Argentina Trabaja, cuyo objetivo era la generación de trabajo genuino para aquellos sectores que continúan al margen del mercado de trabajo formal. En esa dirección se crearon más de 1.600 cooperativas y 150.000 nuevos empleos en las localidades y barrios más vulnerables.

A continuación se observa la evolución de los índices de pobreza e indigencia. Cabe acotar que la línea de indigencia es más baja y define la pobreza extrema. Su valor es el requerido para que un hogar atienda sus necesidades básicas alimentarias, mientras que la línea de pobreza, se calcula mediante el monto de ingresos que precisa un hogar para satisfacer, por medio de la compra de bienes y servicios, un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas básicas.



La recuperación de la iniciativa política

Kirchner llegó al Gobierno en medio de un proceso de fragmentación política, de crisis de representación y legitimidad de los partidos políticos “tradicionales”

que habían estructurado un sistema bipartidario durante gran parte del siglo XX. El desafío que afrontaba era el de atenuar el antagonismo que había surgido del pueblo contra la clase política ¿Cómo romper con ese antagonismo para desplazarlo, transformarlo y articularlo en beneficio de la construcción política propia? En ese marco, los actores sociales surgidos o potenciados a partir de las jornadas de diciembre de 2001 habían tenido en común una alta preocupación por la autonomía frente al Estado, las patronales y los partidos políticos tradicionales. Esa preocupación se enarbolaba a menudo como bandera, vinculándola con el rechazo generalizado a la dirigencia política, que en su versión más simplista se expresaba como “antipolítica”.

En los primeros pasos de la gestión el nuevo gobierno comenzó a absorber y a dar respuesta a un importante conjunto de demandas circulantes en el entramado social. De esta manera, su política de control de las corporaciones y las empresas de servicios públicos privatizados, el impulso a los juicios a los militares acusados de crímenes en la última dictadura, la renovación de la Corte Suprema de Justicia y la defensa de los intereses nacionales frente al FMI, fueron construyendo un consenso en torno a un conjunto de elementos que la sociedad había exigido históricamente. El gobierno construyó rápidamente su legitimidad de ejercicio en oposición al modelo neoliberal a través de políticas intervencionistas que recuperaban buena parte de las cuestiones que habían permitido la articulación de la protesta.

Mientras Duhalde se había apoyado en la dirigencia tradicional, Kirchner comenzó un acercamiento con distintas corrientes del movimiento piquetero y otros sectores sociales que habían participado de la resistencia al modelo neoliberal también como un modo de ampliar las bases de sustentación de la gestión presidencial. En efecto, el gobierno se mostraba decidido a construir alianzas con parte de los nuevos actores, a condición de que moderaran la modalidad y frecuencia de sus protestas, y asumieran un grado de compromiso con la gestión pública. De esta forma, la expansión de la oferta oficial de recursos a través de múltiples programas sociales incentivaba la búsqueda de vinculación con las nuevas autoridades, no sobre la base de la protesta, sino sobre la base de entendimientos políticos y lealtades. Esto contribuyó no solo a reducir el caudal disruptivo del accionar de estas organizaciones sino también a que las mismas aumentaran de manera muy importante sus recursos, su capacidad de reclutamiento y su tamaño. Como consecuencia, a los variados ejes de debate ya existentes entre

las organizaciones populares, y al interior de cada una de ellas, vino a sumarse una más referido a qué actitud tomar frente al gobierno y sus medidas: de un lado quedaron los movimientos que se sumaron de manera entusiasta a apoyar al nuevo gobierno y del otro un arco opositor. Como fuere, todos estos cambios configuraron un nuevo contexto para la organización y la acción colectiva.

Del mismo modo, entre 2002 y 2007 los cortes de ruta, por ejemplo, fueron progresivamente reemplazados por las marchas, los acampes, etc., lo cual evidenciaba también la emergencia de otras formas de protesta. Otro elemento que contribuyó a frenar la protesta fue la judicialización de la misma a la vez que se impulsaba el acercamiento y la negociación con varios movimientos. También, la normalización de los procesos electorarios incidió en la situación de las organizaciones piqueteras, dado que en los comicios en los que se presentaron no obtuvieron resultados alentadores.

¿La “desmovilización” de la clase media?

Por otro lado, el relativo crecimiento económico, la estabilidad política e institucional ratificada con la llegada del nuevo presidente Kirchner, el realineamiento del Partido Justicialista, modificaron la percepción de importantes sectores de la población sobre la situación y condujeron a un proceso más generalizado de desmovilización, que incluyó también a la clase media.

En efecto, hacia mediados de 2004 la efervescencia social y la efímera movilización generadas tanto por el problema del corralito como por la impugnación a la clase política habían cedido. En ese contexto, los sectores medios de la sociedad –definidos de manera muy general en este caso– se fueron alejando de las calles y abandonando aquellas banderas que durante un tiempo los habían acercado a los movimientos sociales y a algunos otros movimientos piqueteros.. Esto implicó, a su vez, que las organizaciones piqueteras se encontraron en las calles con un importante nivel de aislamiento social, pero en un marco político bien diferente al de los años anteriores.

Un hecho que ilustra el cambio en las demandas y causas de la movilización de la clase media, se dio el 1 de abril de 2004, cuando una gran marcha reunió a más de 150 mil personas en el Congreso Nacional tras la demanda de seguridad. Allí el empresario Blumberg –cuyo hijo había sido secuestrado y asesinado por delincuentes– presentó un petitorio para la aprobación de proyectos de endurecimiento de penas: baja en la edad de

imputabilidad y juicio por jurados. Este petitorio fue respaldado por más de 5 millones de firmas de ciudadanos de todo el país. Lejos quedaban las antiguas demandas de inclusión social o de impugnación de la clase política.

Algún tiempo después, la revista *Barcelona* volvía a retomar el tema del quiebre de la efímera alianza social entre sectores medios y trabajadores desocupados luego de furor del “que se vayan todos” de fines de 2001. Y de manera puntual, su tapa ironizaba sobre el corrimiento de la clase media hacia posiciones más de derecha, calificándola directamente como “fascista”.

La revista *Barcelona* comenzó a salir el 15 de abril de 2003 y se posicionó como una sátira irónica de los temas de actualidad. Utiliza este recurso para marcar y ridiculizar el discurso de la derecha como así también cuestionar el rol de los medios de comunicación en la construcción de imaginarios.

Otro proceso de importancia fue el corrimiento de los conflictos sociales hacia la matriz sindical que recuperó un lugar importante como institución representativa de los intereses del movimiento obrero y la explosión de conflictos socioambientales. Estos últimos también organizaban a partir de consignas e identidades distintas a las propuestas por las organizaciones piqueteras, por ejemplo.



Tapa de la revista *Barcelona*, de febrero de 2007, en la que se ironiza sobre la ruptura de la efímera alianza entre desocupados y sectores medios.

La oposición, entre la fragmentación y la denuncia

Asimismo, el espacio de la oposición política al Gobierno continuó fuertemente fragmentado. De cara a las elecciones de 2007 el principal partido opositor era la Coalición Cívica, la cual aglutinaba a antiguos dirigentes de diversos partidos con un discurso que le reclamaba al Gobierno “transparencia” en sus actos y decisiones y obediencia a una institucionalidad que, interpretaban, el kirchnerismo lesionaba constantemente. A ello le sumaban una demanda “republicana” en el sentido del respeto a la división de poderes que, en la lectura de esta fuerza, “el populismo kirchnerista” dejaba de lado.

Desde las agrupaciones de izquierda, al gobierno se le cuestionaba una suerte de disociación entre las acciones y el discurso. En ese sentido, se apuntaba a que la presidencia de Kirchner había retomado algunas banderas del campo popular solo como una forma de “frenar” el proceso “real de transformación” que se había iniciado a partir de los acontecimientos de 2001. Desde esta visión, las medidas tomadas por el kirchnerismo solo apuntaban a responder demandas puntuales pero en ningún caso a un verdadero cambio en el sistema. Las cuestiones denunciadas eran diversas: desde el escaso control que el estado ejercía, por ejemplo, sobre las empresas mineras, hasta la persistencia de la desigualdad económica y social y las alianzas que se seguían sosteniendo con lo que denominaban “la vieja política”.

III- LA PRESIDENCIA DE CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER

Las elecciones del año 2007 llegaban en medio de altos niveles de popularidad para el entonces presidente Kirchner. La estrategia fue impulsar la candidatura de Cristina Fernández acompañada por el radical mendocino, Julio Cleto Cobos en lo que se denominó la “concertación plural”. Cabe destacar que aceptar formar parte de la fórmula oficial le costó al dirigente radical la “expulsión de por vida” del partido, cuestión revocada por el Tribunal de Ética de dicho partido en 2009, luego de su “voto no positivo” que se explicará más abajo. La fórmula Cristina Fernández-Cobos se impuso con un 45,3% de los votos seguidos por la Coalición Cívica que impulsaba a Elisa Carrió-Guistiniani con el 23%.

El conflicto con el campo

A poco de que el gobierno asumiera, estalló el denominado “conflicto con el campo”, cuando el 11 de marzo de 2008 la administración nacional intentó

establecer un nuevo régimen de retenciones móviles mediante el dictado de la Resolución N° 125 del Ministerio de Economía que establecía el aumento en una relación directamente proporcional a los precios de dichos productos en el mercado internacional. La implementación de esta medida apuntaba a recaudar más fondos, producto del alto precio de la soja y a la vez controlar el crecimiento de la producción de la misma en desmedro de otras producciones tradicionales como trigo, maíz, etc.

Como respuesta todas las entidades que nucleaban a la producción agraria se juntaron en la denominada Mesa de Enlace: allí estaban la Sociedad Rural Argentina, la Federación Agraria Argentina, Confederación Rural Argentina y Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro). Desde esa Mesa se lanzaron distintas protestas que incluyeron cortes de ruta, movilizaciones, etc., y que, en algunos casos, provocaron el desabastecimiento de las ciudades.

Por otro lado, la CGT y numerosos movimientos sociales marcharon en varias ocasiones a Plaza de Mayo para respaldar la iniciativa gubernamental. La situación de tensión fue en aumento e incluso poco tiempo antes de la votación en la Cámara de Senadores se realizaron dos manifestaciones masivas: una en Plaza de Mayo en apoyo al gobierno y otra, también multitudinaria, en el Monumento a los Españoles de la ciudad de Buenos Aires, de oposición a la medida.

Finalmente el gobierno tuvo que derogar la medida el 18 de julio de 2008, luego de perder la votación en el Senado a partir del desempate del vicepresidente Cobos. Su voto “no positivo” dio marcha atrás a la iniciativa impulsada y marcó también un hecho institucional grave puesto que el vicepresidente votó en contra del gobierno del que él mismo formaba parte.

De la crisis internacional al revés electoral: reconstrucción y relanzamiento del gobierno

A ese primer gran conflicto en 2008, se sumaron a partir de 2009 los efectos de la crisis financiera internacional que estalló en los Estados Unidos. No obstante, el impacto de la crisis, para la Argentina, fue menor al que experimentaron otros países puesto que la salida de la misma se basó no en el ajuste sino en el sostenimiento del consumo interno que apuntaló el crecimiento de la economía, evitando una recesión.

En ese contexto de crisis, el Gobierno avanzó en la recuperación de los fondos previsionales por parte del Estado. Los fondos que antes eran administrados por

las AFJP privadas –legado del menemismo– pasaron a manos del Estado lo que permitió volcar una importante cantidad de ahorro nacional a actividades productivas y programas de diversa índole, a la vez que aumentó sustancialmente el ingreso de los jubilados y la cobertura previsional.

Sin embargo, el conflicto con el campo y la crisis económica habían debilitado al oficialismo de cara a las elecciones legislativas de 2009. El gobierno fue derrotado electoralmente en algunos distritos; en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, Francisco de Narváez (Unión-PRO) triunfó con un 34% sobre Néstor Kirchner, que obtuvo un 32%. Más allá del impacto de haber perdido en uno de los principales distritos electorales del país, el gobierno perdía también mayoría en ambas Cámaras.

Sin embargo, luego del revés electoral, el gobierno de Cristina Fernández pudo relanzar en algún sentido su gobierno. Algunas importantes leyes sancionadas durante 2009 fueron parte de esas herramientas a partir de las cuales el gobierno pudo reconstruir su capital político. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue una de ellas: si bien fue duramente resistida por las grandes corporaciones mediáticas y puso en evidencia la disputa de intereses, finalmente consiguió ser sancionada por amplia mayoría. En la tapa de *Clarín* del 28 de Agosto de 2009, la ley de democratización del espacio mediático es presentada como ley de control y disciplinamiento de la “prensa independiente”.

La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisuales cambia el concepto de radiodifusión, que antes era comercial, y ahora define a la comunicación como un derecho humano. Se destaca la posibilidad de que el 33% de las licencias de señales de televisión y radio estén destinadas a organizaciones de la comunidad sin fines de lucro, otro 33% al Estado y otro 33% a los privados. Además considera a las cooperativas, iglesias, mutuales, fundaciones y sindicatos como posibles licenciatarios de medios. También, favorece la promoción de la industria nacional ya que prevé que el 70% de la producción local tenga un espacio radial y el 60% en televisión. Cada emisora deberá tener un 50% de producción propia, al tiempo que las radios emitirán un 30% de música nacional. En esa línea, la propuesta designa una cuota de pantalla para el cine argentino. Otro eje de la Ley apunta a evitar la consolidación de los monopolios mediáticos que se habían desarrollado fuertemente en los últimos años. Un licenciatario podrá tener como máximo 10 licencias radiales y de TV. Esta regulación del mercado constituye un avance en la posibilidad que los distintos sectores sociales puedan hacer escuchar sus voces en el espacio público.

Sobre finales de 2009 por decreto presidencial se lanzó la “Asignación Universal

por Hijo” (AUH), un programa social que beneficia a trabajadores informales, desocupados y servicio doméstico que tengan hijos menores de 18 años y a embarazadas. La implementación de la AUH apuntó a reducir los índices de indigencia, que cayeron a partir de su ejecución en un 50% a partir de prestar cobertura a alrededor de 4,5 millones de niños de todo el país. La única contraprestación para cobrar es cumplir con el plan de vacunación obligatorio hasta los 4 años, y a partir de los 5 años, comprobar la concurrencia a establecimientos educativos públicos. La AUH se plantea como un derecho para todos los niños y establece un piso mínimo sin estigmatización e intermediarios que “faciliten” esos derechos.

En línea con las anteriores normativas, el 15 julio de 2010 la Argentina se convirtió en el primer país de Latinoamérica en permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. La presidenta Cristina Fernández, en su discurso de apertura de las 129° Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación Argentina, defendió esta medida señalando que el matrimonio igualitario permitía devolver derechos a algunos argentinos que no los tenían y que nadie debía sentirse molesto dado que la ley no obligaba a nadie a casarse con quien no quisiera y que por el contrario ratificaba que cada uno pudiera elegir con quién hacerlo.

Por otro lado, en 2010 se dieron los festejos por el Bicentenario de la Revolución de Mayo que incluyeron muchos y diversos espectáculos artísticos, de carácter público y masivo. No obstante, en ese contexto comenzaron a darse fuertes discusiones políticas que incluyeron no solo a la dirigencia de los partidos sino también a intelectuales, periodistas y profesionales diversos que fueron tomando abiertas posiciones a favor y en contra del Gobierno. En 2008 se había creado un espacio denominado Carta Abierta, que nucleaba a intelectuales afines al kirchnerismo; tiempo después surgió la llamada Asamblea de Intelectuales, que terminó apoyando al Frente de Izquierda (FIT).

El 27 de octubre de 2010 murió el expresidente Néstor Kirchner: una multitud se acercó a Plaza de Mayo a despedir sus restos desde el Salón de los Patriotas Latinoamericanos

El año 2011 fue año de elecciones presidenciales. En un clima favorable al gobierno y con una legitimidad fuertemente reconstruida en el ejercicio de su mandato, Cristina Fernández de Kirchner se impuso en las internas abiertas y luego en los comicios de octubre fue reelegida con el 54% de los votos con una distancia considerable con respecto a la fórmula del Frente Amplio Progresista, integrada por Binner- Morandini, que quedó en segundo lugar.



Tapa del diario *Clarín* del 28 de agosto de 2009.



La avenida 9 de julio en Buenos Aires durante los festejos por el Bicentenario de la Revolución de Mayo.



La muerte de Néstor Kircher.



Asunción de Cristina Fernández, diciembre de 2011.

IV- SOBRE EL CONTEXTO INTERNACIONAL: LA BÚSQUEDA DE AUTONOMÍA

Durante los años 90 América Latina había funcionado, en algún sentido, como laboratorio para la aplicación de medidas de corte neoliberal. La crisis argentina de 2001 como así también la ocurrida en otros países de la región, mostró el agotamiento de esas experiencias y dio inicio a una etapa en la cual el rechazo al modelo neoliberal se combinó con el planteo de nuevos rumbos para la política y la economía. Así en el transcurso de pocos años se dieron conjuntamente la sustitución de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera por Hugo Chávez en Venezuela, de Fernando Henrique Cardoso por Lula en Brasil, de los gobiernos colorados y blancos por Tabaré Vázquez en Uruguay, de Sánchez de Losada por Evo Morales en Bolivia, de Lucio Gutiérrez por Rafael Correa en Ecuador, de Nicanor Duarte y el Partido Colorado por Fernando Lugo en Paraguay.

Estos nuevos gobiernos lograron, además, marcar un límite a la hegemonía norteamericana sobre América Latina, la cual intentaba ejercerse a través de la implementación en toda la región del Tratado de Libre Comercio, ALCA. Dicho proyecto, que se venía negociando desde los años 90, buscaba la conformación de un área de libre circulación de mercancías y capital en todo el continente, estipulaba además la eliminación progresiva de las barreras aduaneras al comercio, la inversión y los servicios, y la protección de la seguridad jurídica de los capitales.

Esta iniciativa, que había nacido en la etapa neoliberal, reducía en gran forma la capacidad regulatoria de los Estados nacionales en el comercio con Estados Unidos –potencia mundial desde ya– y dejaba sin efecto la posibilidad de defender las industrias locales y regionales. El Área de Libre Comercio de las Américas buscaba imponer, en ese sentido, la “libertad de los mercados” entre una de las economías más poderosas y las economías subdesarrolladas y endeudadas de América Latina.

No obstante, la llegada al poder de los gobiernos mencionados anteriormente, junto al declive de la influencia económica de Estados Unidos y el crecimiento político y económico de Brasil y China, comenzaron a modificar el escenario regional. En estos años se vinieron desarrollando dos procesos que contribuyeron al crecimiento y desarrollo de la región. En primer lugar el surgimiento del mercado de China impactó fuertemente en las economías latinoamericanas que dejaron de depender exclusivamente de otros mercados. Y en segundo lugar, las políticas expansivas que aplicaron los distintos países produjeron un aumento del mercado interno fortaleciendo el MERCOSUR.

En ese contexto de búsqueda de autonomía frente a los Estados Unidos se realizó en el 2005 la Cumbre de las Américas en Mar del Plata. En ese acontecimiento, los países latinoamericanos lograron sentar una posición común de rechazo frente a la pretensión norteamericana de imponer el ALCA. “Hemos venido con una pala, porque en Mar del Plata está la tumba del ALCA (...) tenemos que ser no solo los enterradores del ALCA, sino los enterradores del modelo capitalista neoliberal que desde Washington amenaza a nuestro pueblo desde hace tanto tiempo. Debemos ser las parteras del nuevo tiempo, de la nueva historia, del ALBA. Vamos a enterrar el capitalismo para crear el socialismo del siglo XXI”. Esas fueron las palabras del presidente venezolano Hugo Chávez: quedaba así clara la nueva dirección que el bloque regional tomaría en el futuro.

En esa Cumbre de las Américas de 2005, el entonces presidente Néstor Kirchner expresó la posición de la Argentina: “Crear trabajo para enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática. Para el desarrollo que buscamos, nuestra pertenencia al MERCOSUR, como el mercado regional que nos es propio, como el mercado regional que nos es propio, y a la nación de comunidades suramericanas es primordial. Por eso, seguimos pensando que no nos servirá cualquier integración. Simplemente firmar un convenio no será un camino fácil y directo a la prosperidad. La integración posible será aquella que reconozca las diversidades y permita los beneficios mutuos. Un acuerdo no puede ser un camino de una sola vía de prosperidad en una sola dirección”.

El fuerte respaldo al MERCOSUR que dieron los principales países de la región dio como resultado la creación de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) en la Reunión Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno, que se llevó a cabo en Brasilia el 23 de mayo de 2008. En ese espacio político aparecieron distintos proyectos de desarrollo regional, como el Banco del Sur, que aspira a ser un dinamizador de la economía de las naciones y una protección frente a los clásicos organismos internacionales de crédito como el Banco Mundial y el FMI. Asimismo, la fortaleza del bloque regional y de las flamantes instituciones que se han ido creando, quedó demostrada frente al intento de golpe en Ecuador en 2010. En esa circunstancia, Kirchner facilitó un encuentro de presidentes en la madrugada del 31 de setiembre en Buenos Aires. Fue entonces que se dio el primer paso para establecer un acuerdo de defensa democrática conjunta que se concretó en la aprobación de una cláusula democrática para responder de forma conjunta y contundente ante cualquier intento golpista en la región.

Otra acción destacada del período fue la reafirmación de la soberanía política en Malvinas que contó con el apoyo de los 33 presidentes que integran la Cumbre de América Latina y el Caribe (CALC), quienes rechazaron las intenciones del Reino Unido de concretar la exploración de hidrocarburos en las islas.



Hugo Chávez, Dilma Rouseff, Pepe Mujica, Cristina Fernández
en la Cumbre de Presidentes en Brasilia, año 2012.

V- A MANERA DE REFLEXIÓN FINAL

Como cierre, este capítulo tiene una complejidad adicional, que es que justamente su final está abierto: aunque sea una contradicción en sus términos, se trata de nuestra historia en presente. Son los sujetos sociales, las organizaciones, los partidos políticos, el movimiento obrero, los trabajadores, los estudiantes, los jóvenes, somos nosotros mismos en tanto actores de la realidad los que con nuestra acción y compromiso seguimos haciendo la historia, viviendo en el presente y construyendo el futuro. De nosotros depende la realización de una sociedad más justa y más solidaria, con independencia económica y autonomía política.

Selección de Fuentes y Actividades

1- Discursos políticos: “El kirchnerismo en el ‘campo popular’”

A partir de las siguientes entrevistas realizadas a referentes políticos de distintas organizaciones, debatir en torno a qué concepciones acerca del Estado expresan y cómo caracterizan al “kirchnerismo”.

¿Cuál es la tradición histórica que construye el movimiento Evita y con qué momentos de la historia relacionan el presente? ¿Qué implica para la organización la etapa abierta en 2003?

Comparar las críticas que realizan desde el Frente Popular Darío Santillán con las del economista Cachanosky (Actividad N° 2). ¿En qué difieren? ¿Cómo caracterizan “el populismo” unos y otros?

a- Emilio Pérsico, Secretario General del movimiento Evita, Militancia para el proyecto nacional, Revista Evita, N° 12, enero de 2007.

“Hay que regenerar la refundación del movimiento nacional. La reforma política necesaria en la Argentina no pasa simplemente por ver cómo se vota, con listas sabanas, de colores, con botones o lo que sea. La verdadera reforma política, que es la de Kirchner, es integrar, toda la conflictividad social, integrarla en un proyecto nacional, darle respuesta desde el Estado, y de esa manera, ir metiendo las contradicciones hacia adentro. Esa es la tarea de reconstrucción del movimiento nacional. Esa tarea que hizo Perón en el 45, lo mismo que hizo Cámpora, que es meter a los nuevos emergentes sociales, a los nuevos emergentes políticos, a las nuevas organizaciones sociales y políticas, meterlas hacia adentro del movimiento y darles una participación en el programa, en la respuesta concreta”.

b- Entrevista con Referente del Movimiento Evita, 2007

“Dar el salto político o quedarnos como movimiento social esta es la disyuntiva que se dio con Kirchner, porque ese Gobierno avanzó en políticas sociales, en gasto público, generó esperanza de los sectores más humildes al punto que el movimiento social como se lo conoce ya no sirve, porque hasta los sectores más humildes esperan otra cosa que el plan o el bolsón de comida o el comedor porque la situación ha generado otras expectativas porque hay más trabajo. Eso hace que el movimiento social como lo conocemos, como espacio de lucha para el desocupado no existe más”.

c-Entrevista del año 2008 con militante del Frente Popular Darío Santillán

“Nosotros lo que pensamos es que el Gobierno es todo el mismo, porque el Gobierno cumple la función de dirigir y oprimir al pueblo. O sea, es la función “gobierno”, esté quién esté, el Gobierno se encargar de eso. El Estado nunca va a poder dar una respuesta popular porque ya de por sí en la base tiene otra tarea.

Se implementó una estrategia de cooptación con el fin de fragmentar a los sectores populares. El Gobierno de Kirchner apostó a cooptar a las organizaciones populares para dividir al campo popular. El modo de cooptación que hubo fue este mismo discurso de todos los DD. HH., todo este discurso mucho más mediático, o sea como que era un Gobierno con el cual se podía avanzar en algunas cosas”.

d- Editorial: El desafío de la “nueva izquierda político-social independiente”, Frente Popular Darío Santillán, 2010

“Por aquellos años, el movimiento popular cobró un vigor y una radicalidad en el cuestionamiento al sistema, con planteos anticapitalistas e impugnadores del sistema político representativo burgués (“que se vayan todos”), ambos aspectos retraídos con el advenimiento del kirchnerismo pero aún presentes en el ideario de las organizaciones populares.

El kirchnerismo vino a “encausar” la potencia popular a la vía muerta del estatismo burocratizante, la cooptación y la desmovilización. Fue una etapa de reflujo para el campo popular, de retraimiento, de desacumulación. El proyecto K no avanzó en transformaciones de fondo y fue un factor retardatario para el desarrollo de la fuerza popular.

El modelo K más allá de la prédica “setentista”, en los hechos Kirchner les había servido para aplacar la radicalidad social y desmovilizar o subordinar a las organizaciones populares (...) Ante esto, el kirchnerismo intentó construir un imaginario de confrontación contra “los poderosos”, que tuvo batallas justas en la lucha por las retenciones, en la estatización de Aerolíneas, las AFJP o el impulso a la ley de medios. Aún así, el objetivo de esas disputas fue y es la acumulación de poder político para la subsistencia del proyecto K y no la acumulación de poder y el desarrollo de organización en el seno de nuestro pueblo”.

2- Discursos políticos: El kirchnerismo visto por la “derecha”

Leer y discutir acerca de las críticas que desde el paradigma neoliberal se le hacen al gobierno de Kirchner. ¿Cuál debería ser el rol del Estado para este economista y qué debería hacerse en el plano político?

¿Escucharon alguna vez hablar de la teoría “del derrame”? ¿En qué consistiría ese planteo y qué críticas le podrían formular?

a- Roberto Cachanosky: ¿Vale la pena invertir en la Argentina?

Fuente: Editorial de Infobae del 23/5/2004.

“Las políticas populistas han provocado que el hecho de generar negocios o adquirir bienes en el país se haya convertido casi en un delito: si lo hace, usted será perseguido por el Estado y será señalado como el culpable de la pobreza de otros compatriotas. El resultado: fuga de capitales. ¿Vale la pena tener cosas en la Argentina? Construir una casa en un *country* o en un lugar de veraneo, comprar un auto nuevo o invertir en una empresa que resulte ser exitosa puede transformarse en una pesadilla gracias a los Gobiernos populistas que vienen asolando la Argentina desde hace décadas.

Si usted construye una casa en un *country*, automáticamente pasa a ser objeto de persecución fiscal porque los funcionarios populistas consideran que cobrarle impuestos confiscatorios constituye un acto de solidaridad social. Si tiene un auto nuevo le puede ocurrir lo mismo, además de considerarse un insulto a la pobreza existente y, por lo tanto, si le roban y lo matan, usted se las buscó por mostrar su progreso. Si invierte en una empresa y le va bien, el Estado no solo lo va a decapitar con el impuesto a las ganancias, sino que, además, le inventará impuestos nuevos porque considerará que si usted ganó plata no se debe a su esfuerzo personal, iniciativa y riesgo, sino que le debe a la sociedad lo que ganó.

Si, por ejemplo, como decía antes, usted construye una casa en un *country* y le da trabajo al arquitecto, a los obreros de la construcción, al plomero, al pintor, al electricista, al jardinero, al que limpia la pileta, al personal de mantenimiento, entre otros, no está creando puestos de trabajo según el credo populista y demagógico que nos domina, sino que, de acuerdo al pensamiento de los saqueadores que se apoderan del Estado, usted es el enemigo. ¿Por qué? Porque los populistas están dominados por un resentimiento feroz hacia todo aquel que logra progresar y hace progresar a sus semejantes proporcionándoles trabajo, para que, con dignidad, puedan mantener a su familia. Usted es el enemigo número uno del populismo de izquierda o de derecha porque le quita clientela a los políticos.

Si la gente progresa gracias a que usted invierte, asume riesgos y genera ingresos para el resto de la población, le está quitando clientela a los políticos que necesitan manejar abundantes planes sociales para controlar los votos y el poder. Necesitan de la dádiva que ellos otorgan con la plata de los que producen, para que la gente pueda sobrevivir y, de paso, tienen la ocasión de pegarle una buena tajada a los millones de pesos que manejan para incrementar su patrimonio personal.

Si usted observa el comportamiento de los populistas demagogos, va a encontrar que siempre buscan a un culpable o enemigo para explicar la pobreza. Para ellos es necesario crear resentimiento social haciéndole creer a la gente que la pobreza de unos es producida por la riqueza de otros. La pobreza no es causa de los dislates que hacen en materia económica e institucional. Ellos no tienen la culpa de la miseria en que sumergen a la población. La culpa la tienen los que invierten y ganan, los fondos buitres, el establishment, el Fondo Monetario Internacional, Wall Street, las privatizadas, el que cambia el auto o cualquiera que ponga su plata en Argentina.

Si invertir en Argentina implica ser perseguido por el Estado y ser señalado como el responsable de la pobreza de la gente, quienes logran ahorrar terminan preguntándose: ¿vale la pena invertir los ahorros en mi país mientras gobiernen los populistas?.

3- Discursos políticos: Néstor Kirchner

1) A partir de este fragmento del discurso presidencial, discutir en torno al lugar que le asigna al Estado. ¿Qué críticas le realiza a otros períodos históricos? Relacionar el discurso con el contenido del capítulo y discutir acerca de los avances y limitaciones de la etapa posneoliberal.

DISCURSO DE ASUNCIÓN DEL PRESIDENTE NÉSTOR KIRCHNER EL 25 DE MAYO DE 2003.

“A comienzos de los 80 se puso el acento en el mantenimiento de las reglas de la democracia y los objetivos planteados no iban más allá del aseguramiento de la subordinación real de las fuerzas armadas al poder político. La medida del éxito de aquella etapa histórica no exigía ir más allá de la preservación del estado de derecho, la continuidad de las autoridades elegidas por el pueblo. Así se destacaba como avance significativo y prueba de mayor eficacia, la simple alternancia de distintos partidos en el poder. En la década de los noventa, la exigencia sumó la necesidad de la obtención de avances en materia económica, en particular en materia de control de la inflación. Se intentó reducir la política a la sola obtención de resultados electorales; el Gobierno, a la mera administración de las decisiones de los núcleos de poder económico con amplio eco mediático, al punto que algunas fuerzas políticas en 1999 se plantearon el cambio en términos de una gestión más prolija pero siempre en sintonía con aquellos mismos intereses”. El resultado no podía ser otro que el incremento del desprestigio de la política y el derrumbe del país.

Queremos recuperar los valores de la solidaridad y la justicia social que nos permitan cambiar nuestra realidad actual para avanzar hacia la construcción de una sociedad más

equilibrada, más madura y más justa. Sabemos que el mercado organiza económicamente pero no articula socialmente, debemos hacer que el Estado ponga igualdad allí donde el mercado excluye y abandona.

Es el Estado el que debe actuar como el gran reparador de las desigualdades sociales en un trabajo permanente de inclusión y creando oportunidades a partir del fortalecimiento de la posibilidad de acceso a la educación, la salud, y la vivienda, promoviendo el progreso social basado en el esfuerzo y el trabajo de cada uno.

Es el Estado el que debe viabilizar los derechos constitucionales, protegiendo a los sectores más vulnerables de la sociedad, es decir, los trabajadores, los jubilados, los pensionados, los usuarios y los consumidores. Queremos ser la generación de argentinos que reinstale la movilidad social ascendente, pero que también promueva el cambio cultural y moral que implica el respeto a las normas y a las leyes.

En el plano de la economía es donde más se necesita que el Estado se reconcilie con la sociedad. No puede ser una carga que termine agobiando a todas las actividades, ni igualándolas hacia abajo con políticas de ajuste permanente a los que menos tienen. El objetivo básico de la política económica será el de asegurar un crecimiento estable, que permita una expansión de la actividad y del empleo constante, sin las muy fuertes y bruscas oscilaciones de los últimos años.

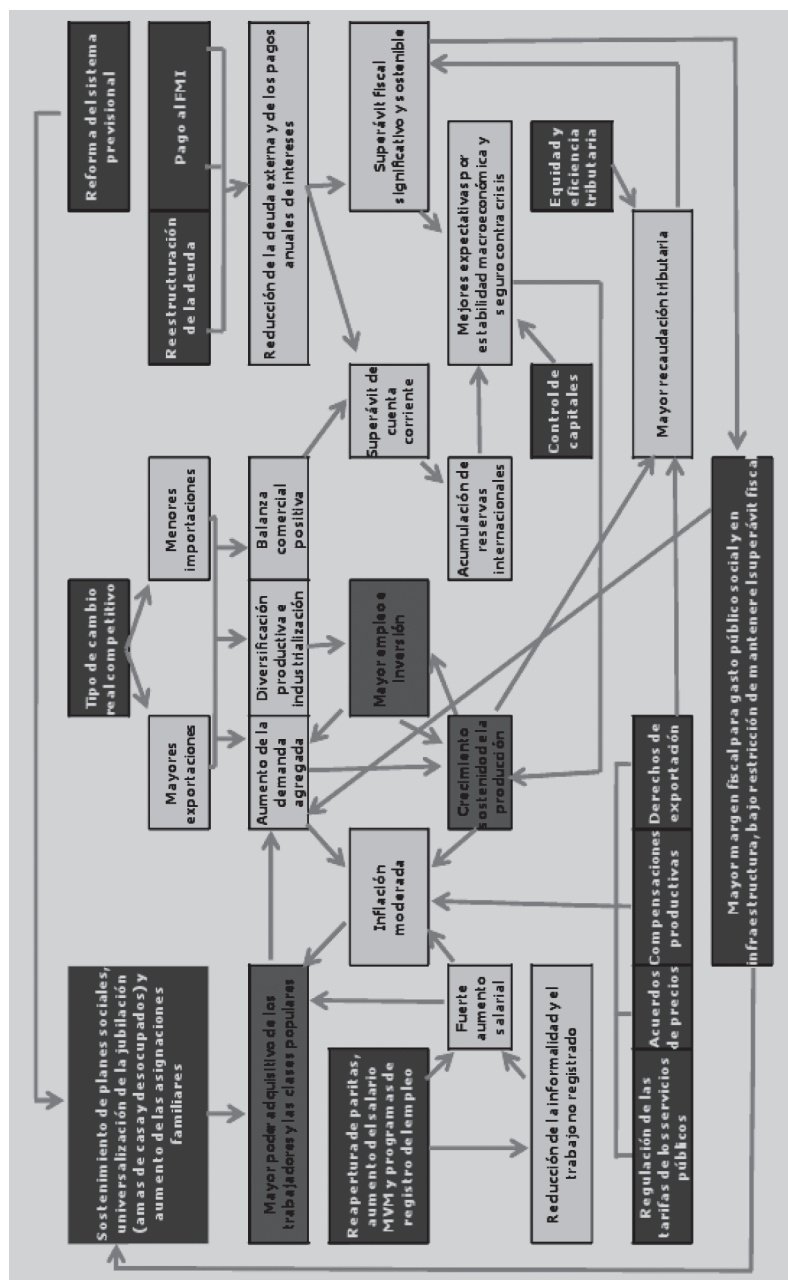
Nuestra prioridad en política exterior será la construcción de una América Latina políticamente estable, próspera y unida con base en los ideales de democracia y justicia social.

Fomo parte de una generación diezmada. Castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a los que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada

Vengo en cambio a proponerles un sueño. Reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como Nación. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, el de volver a tener una Argentina con todos y para todos”.

4- EL modelo económico del kirchnerismo

-El siguiente esquema (Panigo y Neffa, 2009) intenta resumir los principales aspectos del modelo económico impulsado por el kirchnerismo. Allí se puede apreciar los tres pilares básicos: el aumento del gasto público en materia social, el sostenimiento de las exportaciones y el proceso de desendeudamiento externo. A partir del análisis de ese cuadro: qué relación puede establecerse entre esas variables económicas?



Esquema del modelo económico impulsado por el kirchnerismo

BIBLIOGRAFÍA

Aboy Carlés, Gerardo, “La democratización beligerante del populismo”, en *Historia política. Com Debate*, Revista de la Asamblea Nacional de Panamá, N° 12, pp. 47-58, 2007.

Battistini, Osvaldo, “Luchas sociales en crisis y estabilidad”, en Villanueva, Ernesto y Massetti, Astor (comp.), *Movimientos sociales en la Argentina de hoy*, Buenos Aires, Prometeo, 2007.

Biglieri, Paula y Perelló, Gloria, *En el nombre del Pueblo. La emergencia del populismo kirchnerista*, Buenos Aires, Editorial de la Universidad de San Martín, 2007.

Campione, Daniel y Rajland, Beatriz, “Piqueteros y trabajadores ocupados en la Argentina de 2001 en adelante. Novedades y continuidades en su participación y organización en los conflictos”, en Gerardo Caetano (comp.), *Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina*, Buenos Aires, CLACSO, pp. 297-327, 2006.

Camou, Antonio, “¿Más allá del bipartidismo? El peronismo kirchnerista como problema y solución en la Argentina actual”, en *Stockholm Review of Latin American Studies*, N° 3, 2008.

Cheresky, Isidoro, “De la crisis de representación al liderazgo presidencialista. Alcances y limitaciones de la salida electoral de 2003”, en Cheresky, Isidoro y Pousadela, Inés (ed.), *El voto liberado. Las elecciones de 1983 en perspectiva histórica y estudios de casos*, Buenos Aires, Biblos, 2004.

Documento *Tres banderas, Una gran Argentina*. Instituto de Estudios y Formación política, GESTAR, 2011.

Gómez, Marcelo y Massetti, Astor, *Los movimientos sociales dicen. Conversaciones con dirigentes piqueteros sobre el proyecto nacional y Latinoamericano*, Buenos Aires, Editorial Nueva Trilce, 2009.

Gómez, Marcelo, “¿Acerca del protagonismo político y la participación estatal de los movimientos sociales populares: falacias, alucinaciones y cegueras del paradigma normal de análisis”, en Massetti, Astor; Villanueva, Ernesto y Gómez, Marcelo (comps.), *Movilizaciones, protestas e identidades colectivas en la Argentina del bicentenario*, Buenos Aires, Nueva Trilce, 2010.

Mocca, Edgardo, “Los partidos políticos: entre el derrumbe y la oportunidad”, en Cheresky, I. y Blanquer, J. M. (comps.), *¿Qué cambió en la política argentina? Eleccio-*

nes, instituciones y ciudadanía en perspectiva comparada, Rosario, Homo Sapiens, 2004.

Muñoz, María Antonia, *Sísifo en Argentina. Orden, conflicto y sujetos políticos*, Villa María, Córdoba, Editorial Universitaria, 2010.

Panigo, Demian y Neffa, Julio César, “El mercado de trabajo argentino en el nuevo modelo de desarrollo”, *Documento de Trabajo de la Dirección Nacional de Programación Macroeconómica*, Dirección de Modelos y Proyecciones, 2009.

Pérez, Germán, “Genealogía del quilombo. Una exploración profana por algunos significados del 2001”, en Pereyra, Sebastián, Pérez, Germán. y Schuster, Federico (comps.), *La huella piquetera. Avatares de las organizaciones de desocupados después de 2001*, La Plata, Al Margen, 2008.

Svampa, Maristella y Pereyra, Sebastián, *Entre la ruta y el barrio: la experiencia de las organizaciones piqueteras*, Buenos Aires, Biblos, 2004

Svampa, Maristella, *Cambio de época. Movimientos sociales y poder político*, Buenos Aires, Siglo XXI/CLACSO, 2008.

Villanueva, Ernesto y Massetti, Astor (comps.), *Movimientos sociales en la Argentina de hoy*, Buenos Aires, Prometeo, 2007.

Villanueva, Ernesto, “Una mirada a los recientes cambios en el estado argentino. ¿Emergencia de un nuevo modelo?”, en *Espacio Abierto Cuaderno Venezolano de Sociología*, Vol. 17, N° 4, 2008.

Wallerstein, Immanuel, *La decadencia del poder norteamericano*, Buenos Aires, Le Monde diplomatique, 2006.

AUTORES

CAROLINA GONZÁLEZ VELASCO (coordinadora de la publicación, y autora de Capítulos 1 y 5)

es Doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, docente e investigadora en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Dirige el Instituto de Estudios Inicial de la UNAJ. Ha publicado diversos artículos sobre historia argentina del siglo XX y ha sido autora de textos para manuales escolares.

KARIN GRAMMÁTICO (autora de Capítulo 6)

es Magister en Historia por la Universidad de San Andrés, docente e investigadora de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y de la Universidad de Buenos Aires

GABRIELA GÓMEZ (autora de Capítulo 4)

es Profesora de Enseñanza Media y Superior de Historia por la Universidad de Buenos Aires, es docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional Arturo Jauretche.

JUAN FERNÁNDEZ (autor de Capítulo 3)

es Profesor de Enseñanza Media y Superior de Historia por la Universidad de Buenos Aires, es docente en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, en los cursos de ingreso del Colegio Carlos Pellegrini y en Institutos de Formación Docente.

MARIANA ROBLES (Autora de Capítulo 2)

es Profesora de Enseñanza Media y Superior de Historia por la Universidad de Buenos Aires, es docente en escuelas medias y en Institutos de Formación Docente y en la Universidad Nacional Arturo Jauretche.

MAURICIO SCHUTTENBERG (autor capítulo 7)

es Doctor en Ciencias Sociales, por FLACSO, docente e investigador de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, de la Universidad Nacional de La Plata y de CONICET.

Esta edición de 6500 ejemplares
se terminó de imprimir en
Al Sur Producciones Gráficas S.R.L.,
Wenceslao Villafañe 468, Buenos Aires, Argentina,
en Marzo de 2014.

